

Revista de ciencias
sociales editada por el
Instituto Argentino para
el Desarrollo Económico
(IADE) Aparece
cada 45 días

realidad económica

272

REALIDAD ECONOMICA 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2012

REALIDAD ECONOMICA



*Una de las zonas de producción de litio en Argentina.
Fuente: Universidad Nacional de La Plata*

Recurso estratégico EL LITIO EN LA ARGENTINA

INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Presidentes honorarios:

Salvador María Lozada
Alejandro Rofman

Presidente:

Sergio Carpenter

Vicepresidente:

Alfredo T. García

Secretario:

José María Cardo

Prosecretaria:

Marisa Duarte

Tesorero:

Eduardo Kanevsky

Protesorera:

Flora Losada

Vocales Titulares:

Juan Carlos Amigo
Mariano Borzel
Roberto Gómez
Enrique Jardel
Daniel Rascovski
Alberto Rosenthal
Horacio Rovelli
Ariel Slipak

Vocales Suplentes:

Roberto Adaro
Ramiro L. Bertoni
Nicolás Dvoskin
Pedro Etchichury
Teresa Herrera
Ricardo Lauragaray

Revisoras de cuentas:

Gabriela Vítola
Norma Penas

Dirección y administración:

Hipólito Yrigoyen 1116 - 4º piso
(C1086AAT) Buenos Aires, Argentina

realidad económica

Revista de ciencias sociales editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)
Hipólito Yrigoyen 1116 - 4º piso (C1086AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfonos
y Fax: (54 11) 4381-7380/9337 - correo electrónico: iade@iade.org.ar,
[realidadeconomica@iade.org.ar](http://www.iade.org.ar) - <http://www.iade.org.ar>

ISSN 0325-1926

 **realidad
económica**

Nº 272

16 de noviembre al
31 de diciembre de 2012

Editor responsable:

Instituto Argentino para el
Desarrollo Económico (IADE)

Director:

Juan Carlos Amigo

Comité Editorial:

Enrique O. Arceo
Eduardo Basualdo
Alfredo Eric Calcagno
Dina Foguelman
Roberto Gómez
Mabel Manzanal
Miguel Teubal

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 133452

Los artículos pueden ser libremente
reproducidos con sólo acreditar a
Realidad Económica como fuente de
origen, salvo indicación en contrario.
La responsabilidad de los artículos
firmados recae de manera exclusiva
sobre sus autores y su contenido no
refleja, necesariamente, el criterio de
la dirección.

Pedido de suscripción Nacional

Valor de la suscripción
8 números/1 año \$360

Consulte por suscripciones y envíos
al exterior

Impreso en Publilprint S.A.,
Cónдор 1785 - Cdad. de Buenos Aires. tel.
4918-2061/2

*Ilustración de tapa: Una de las zonas de producción de litio en Argentina. Foto: Universidad Nacional de la Plata
(<http://www.procesa.com.mx/?p=323047>)*

SUMARIO

Debates

Gobernar con una sonrisa. La semana de Adolfo Rodríguez Saá como presidente de la Nación

9

Julián Zicari

El presente trabajo intentará dar cuenta de los 8 días en los cuales debió gobernar Adolfo Rodríguez Saá como presidente de la nación durante diciembre de 2001. En este sentido, intentaremos desarmar y recorrer detenidamente los fatídicos días que debió afrontar y que lo tuvieron como protagonista, tratando de abordar cómo buscó configurar alianzas, sumar aliados y sus planes políticos. Así, primeramente repasaremos las condiciones sobre las cuales el peronismo debió asumir la presidencia del país luego del colapso del gobierno de la Alianza, tratando de describir las diversas posiciones al interior del mismo como la de los distintos actores en juego. Repasaremos sus apuestas políticas, los aliados ganados, cómo intentó birlar los compromisos previos como también señalar a los poderes de veto con los que se topó, tratando de entender por qué su presidencia acabó abruptamente y cómo se debió llevar adelante otro tipo de sendero institucional de transición por parte del peronismo, esta vez encabezado por Duhalde. Finalmente, cerraremos nuestro trabajo con algunas conclusiones al respecto.

Govern with a smile. The week of Adolfo Rodríguez Saá as president of the nation

Julián Zicari

This paper attempts to account for the 8 days period in which Adolfo Rodríguez Saá took office and became President in December 2001. In this regard, I will analyze and cover thoroughly the dreadful days he had to endure while being the main focus of attention, his political agenda and his attempts to form a coalition and join allies will also be approached in this paper. Firstly, I will review the circumstances under which the Peronist Party took on Presidency right after the political standstill brought by the administration of the "Alianza", by describing the many different stances taken within it, as well as those of the other parties involved. I will remark upon the pacts, terms and conditions that Rodríguez Saá had to comply with during the course of his presidency, in order to eventually put forward a detailed appraisal of his days as President. I will outline Saá's political stakes, the allies he won, the means through which he attempted to evade existing commitments, as well as the powers of veto he came across, in an attempt to understand why he left office so abruptly and how the Peronist Party followed a different institutional path for transition, this time headed by Eduardo Duhalde. Finally, I will conclude this paper by exposing all the conclusions I have come to.

El "cacerolazo" del 8 de noviembre

32

*Norma Giarracca - Miguel Teubal - Tomás Palmisano -
Julieta Godfrid - María de la Paz Acosta*

La especificidad del "cacerolazo" del 8 de noviembre de 2012 es de difícil categorización. Tiene complejas condiciones de contorno que lo diferencia de otras protestas, sobre todo de las ocurridas durante 2001-2002. Después de una elección donde la presidenta Cristina Kirchner logra el 54% de los votos, el gobierno despliega políticas públicas que irritan sobre todo a los sectores medios de la sociedad, asimismo una decisión de la Corte Suprema de Justicia pone en la agenda pública la posibilidad de la aplicación plena de la Ley de Medios Audiovisuales y esto profundiza el enfrentamiento del el grupo mediático y concentrado Clarín con el Gobierno. Los sectores medios muestran disconformidades desde mediado de año hasta que finalmente salen masivamente a comienzos de noviembre. En este trabajo se indagan las razones de esta salida masiva y se busca comprensión de una preocupación institucional que aparece en los manifestantes muy relacionada con los discursos de políticos y medios opositores.

The "cacerolazo" of November 8th

*Norma Giarracca - Miguel Teubal - Tomás Palmisano -
Julieta Godfrid - María de la Paz Acosta*

The "cacerolazo" of November 8th, 2012 is difficult to categorize due to the complex environmental conditions that differentiates it from other protests, in particular those that occurred in 2001/2002. After an election in which Cristina Kirchner obtained 54% of the vote, the government developed a series of policies that particularly irritated middle class sectors of society. Apart from this, a decision made by the Supreme Court of Justice put on the public agenda the possibility that the Ley de Medios Audiovisuales (Law regulating the audio-visual media) be fully applied, a factor that enhanced the confrontation between the Government and the concentrated media group Clarin. Sectors of the middle class showed their disconformities all along the year 2012 until they openly protested massively at the beginning of November. In this paper we investigate the reasons for this massive protest and we try to understand the extent to which the institutional concerns of the protestors appear to be highly related to the political and media discourse of sectors of the opposition.

¿Reconstrucción del Modelo Industrialista Sustitutivo de Importaciones?

Jaime Héctor Saiegh

60

La historia argentina reciente permite identificar, dos grandes estrategias para enfrentar la restricción externa o la escasez “crónica” de dólares. Una, industrialista, mercadointernista y que pretende reemplazar con producción nacional parte de las importaciones. Esta estrategia está asociada con un alto nivel de empleo y salarios y utiliza la regulación estatal de la economía para convivir con la escasez de divisas. La otra es la que cree firmemente en la libertad de los mercados. La falta de dólares se resuelve, finalmente, con endeudamiento externo, privatizaciones de empresas públicas e inversiones extranjeras. Desde los años '30 a la fecha, tanto por necesidad como por elección explícita, se optó por el modelo industrialista sustitutivo de importaciones, excepto claro, los programas del 2 de abril de 1976 y el llamado plan de Convertibilidad o los que al amparo de dicha escasez, fueron impuestos por los organismos internacionales de crédito. Es en este contexto, vinculado con la aludida contradicción, que deben inscribirse las reformas económicas aplicadas desde 2003. Dicho de otra manera, “el modelo”, tiene lógica económica y sustento teórico. Se trata de la Reconstrucción del Modelo Industrialista Sustitutivo de Importaciones, con sustento teórico sobre los argumentos keynesianos y estructuralistas.

Reconstruction of Industrialist Import substitution model?

Jaime Héctor Saiegh

Argentinian recent history let us identify two main strategies to face external restriction or “chronic” scarcity of dollars. One of them, industrialist, regarding internal market, and which intends to replace imports with national production. This strategy is associated with high employment and salary levels, and uses state regulation of economy to live together with currency shortages. The other strategy strongly believes in market freedom. The lack of dollars is eventually solved with external indebtedness, privatization of public enterprises and foreign investment.

From the thirties on, due to need or explicit choice, the Industrialist Import substitution model was predominant, except for the program of 2nd April 1976, the convertibility plan and those imposed by international credit organizations. In this context, related to such contradiction, we must include the economic reforms applied in 2003. In other words, “the model” has economical logic and theoretical support. It is the reconstruction of Industrialist Import substitution model, with theoretical support on Keynesian and structuralist arguments.

Producción avícola primaria en Entre Ríos, Argentina

86

*Rubén A. Pietroboni - Leandro Lepratte - Rafael Blanc -
Daniel Heggin - Walter Cettour - Leonardo Rubl*

El trabajo tiene como principal objetivo relevar y analizar la evolución del sistema complejo de la producción primaria aviar en la provincia de Entre Ríos. Se estudiaron, desde una perspectiva convergente de la economía del conocimiento y la sociología de la tecnología (Thomas, 2008; Dagnino y Thomas, 2010; Lepratte, Thomas y Yoguel, 2012), los cambios producidos en sus estructuras a partir de incentivos internos, y también la habilidad del sistema para producir cambios internos derivados de incentivos externos.

Una de las características de la avicultura es la integración del proceso productivo a partir de empresas núcleo o frigoríficos, figura que en algún momento permitió el afianzamiento de productores en el medio rural. Debido a las escalas productivas que se plantean actualmente y a las cada vez más exigentes especificaciones en las instalaciones de crianza, parte de los productores se ven amenazados con el consecuente impacto negativo en el desarrollo regional. A través del análisis de la trama, tomándola como un sistema complejo, se verifica la debilidad de los integrados y su respectiva vulnerabilidad.

Primary poultry production in Entre Ríos, Argentina

*Rubén A. Pietroboni - Leandro Lepratte - Rafael Blanc -
Daniel Heggin - Walter Cettour - Leonardo Rubl*

This article has as its main purpose to gather information and analyze the evolution of the complex system of poultry industry in the Argentinian state of Entre Ríos. It studies, from the convergent perspective of knowledge economics and the sociology of technology (Thomas, 2008; 2010; Dagnino y Thomas, 2000; Lepratte, Thomas y Yoguel, 2012), the changes which took place in their structures from internal incentives, and the ability of the system to produce internal changes as a result of external incentives.

One of the characteristic of poultry is the integration of the productive process from core industries, which once made possible the consolidation of rural producers. Since the current scales of production and the increasing strict specification in the breeding facilities, some of the producers may feel threatened by the possibility of a negative impact on regional developments. Through an analysis of the scheme, regarded as a complex system, it would be possible to confirm the weaknesses and vulnerabilities of the integrated producers.

En torno del Grito de Alcorta y apuntes sobre la
conflictividad agraria pampeana en el siglo XX

105

Eduardo Azcuzy Ameghino

En este artículo nos proponemos revisar y discutir diferentes aspectos de las líneas interpretativas que se han desplegado en torno del estudio del Grito de Alcorta, en tanto la máxima expresión de la conflictividad chacarera característica del viejo arrendamiento. Sobre esta base, se incorporan posteriormente al análisis otros momentos y desarrollos que jalonan la historia de los antagonismos y disputas que se desplegaron en el agro pampeano durante la segunda mitad del siglo XX, en línea con los cambios socioeconómicos que se sucedieron en la región y el país.

Como producto de ellos se fue consolidando un nuevo escenario, constituido sobre la base estructural de las formas más actuales de la conflictividad chacarera. Entre sus rasgos más destacados se cuentan la superexplotación de los asalariados agrícolas, el mantenimiento de una alta concentración de la propiedad de la tierra y la apropiación vía renta de una parte relevante del plusvalor agrario; el avance de la monopolización del uso del suelo por cada vez menos empresas favorecidas por los beneficios de escala; y la consiguiente concentración del capital, la producción y el ingreso que drena los recursos de la pequeña hacia la gran explotación, reduciendo el espacio económico y social que sostiene la existencia de la producción de base familiar.

Debates and interpretations concerning Alcorta's Yell
and notes on the pampa's agrarian conflict in the
20th century

Eduardo Azcuzy Ameghino

In this article we propose to check and discuss different aspects of the interpretive lines spread concerning to Alcorta's Yell, as the maximum expression of the typical farmer conflict of the old leasing time. On this base, we incorporate to the analysis other moments and developments that mark the history of the antagonisms and disputes in the pampa's agriculture during the second half of the 20th century, in line with the socioeconomic changes that happened in the region and the country.

As a result, a new scene become established, constituted on the structural base of the most current forms of the farmer conflict. Among its more relevant features we can mention the superexploitation of the agricultural employees; the maintenance of a high concentration of the land property and the appropriation in concept of rents of a relevant part of the agrarian plusvalue; the advance of the monopolization of the soil use by less companies favoured by the large scales; and the consequent concentration of capital, production, and incomes that transfers the resources of the small farms towards the great exploitation, reducing the economic and social space that supports the existence of the production of familiar base.

El litio en la Argentina: oportunidades y desafíos de un recurso estratégico

Julio Sevares - Juan Pablo Krzemien

127

El litio se ha convertido en un mineral estratégico porque su utilización permitirá el ingreso de la industria automotriz en la era del vehículo eléctrico, sustituyendo al petróleo.

Las mayores reservas explotables del mineral se encuentran en el denominado “triángulo del litio” del cual la Argentina forma parte, junto con Bolivia y Chile.

En este trabajo se busca demostrar la posibilidad de que nuestro país se convierta no solo en un proveedor primario de este valioso recurso, sino que a partir de su industrialización se generen desarrollos tecnológicos, una producción de mayor valor agregado y una demanda de mano de obra más extensa y calificada.

Con este objetivo se evalúan las reservas del mineral en la Argentina y la región, las políticas de las potencias y de los países latinoamericanos en torno del litio, la necesidad de desarrollar una política científico-tecnológica, la importancia de la sostenibilidad de la industria del litio (el impacto ambiental y la necesidad de integrar a las comunidades en la explotación del recurso) y el marco legal que regula esta actividad.

Lithium in Argentina: opportunities and challenges of an strategic resource

Julio Sevares - Juan Pablo Krzemien

Lithium has become a strategic mineral because its utilization will allow the automotive industry to enter the electric vehicle era, by substituting oil.

The largest exploitable reserves of this mineral are found in the “lithium triangle”, composed by Argentina, Bolivia and Chile.

This paper seeks to demonstrate not only the possibility that our country could become a primary supplier of this valuable resource, but also that its industrialization could generate technological development, a higher value-added production and a more extended and skilled labor force.

With this objective, we will evaluate the mineral reserves in Argentina and South American region, the policies of the main powers and Latin American countries around lithium, the need to develop a science and technological policy, the importance of the sustainability of lithium industry (environmental impact and integration of the communities), and the legal framework of this activity.

Galera de corrección

Daniel Azpiazu, siempre así
RICARDO ARONSKIND, ROBERTO DOMECCQ,
KARINA FORCINITO Y MARTÍN SCHORR

Marisa Duarte

158

Capitalismo cognitivo: renta, saber y valor en la
época posfordista

CARLO VERCELLONE

Pablo Míguez



IADE

Actividades

173

2013

Canto I

Roberto García

176

Gobernar con una sonrisa

La semana de Adolfo Rodríguez Saá como presidente de la Nación

*Julián Zicari**

El presente trabajo intentará dar cuenta de los 8 días en los cuales debió gobernar Adolfo Rodríguez Saá como presidente de la nación durante diciembre de 2001. En este sentido, intentaremos desarmar y recorrer detenidamente los fatídicos días que debió afrontar y que lo tuvieron como protagonista, tratando de abordar cómo buscó configurar alianzas, sumar aliados y sus planes políticos. Así, primeramente repasaremos las condiciones sobre las cuales el peronismo debió asumir la presidencia del país luego del colapso del gobierno de la Alianza, tratando de describir las diversas posiciones al interior del mismo como la de los distintos actores en juego. Señalando por qué la estrategia inicial peronista del “Frente Federal”, que llevó como cabeza a Ramón Puerta, fracasó debiendo estipular otro tipo de vía institucional para recorrer la salida a la crisis. De esta manera, intentaremos dar cuenta de los pactos, plazos y condiciones sobre los cuales debía llevar a cabo su presidencia Rodríguez Saá para luego proponer un detenido análisis de los días que lo tuvieron como presidente de la Nación. Así, repasaremos sus apuestas políticas, los aliados ganados, cómo intentó birlar los compromisos previos como también señalar a los poderes de veto con los que se topó, tratando de entender por qué su presidencia acabó abruptamente y cómo se debió llevar adelante otro tipo de sendero institucional de transición por parte del peronismo, esta vez encabezado por Duhalde. Finalmente, cerraremos nuestro trabajo con algunas conclusiones al respecto.

Palabras clave: Frente Federal – Peronismo – Default – Convertibilidad – Crisis 2001

* Historiador y Economista (UBA).

Govern with a smile. The week of Adolfo Rodríguez Saá as president of the nation

This paper attempts to account for the 8 days period in which Adolfo Rodríguez Saá took office and became President in December 2001. In this regard, I will analyze and cover thoroughly the dreadful days he had to endure while being the main focus of attention. his political agenda and his attempts to form a coalition and join allies will also be approached in this paper.

Firstly, I will review the circumstances under which the Peronist Party took on Presidency right after the political standstill brought by the administration of the “Alianza”, by describing the many different stances taken within it, as well as those of the other parties involved.

Secondly, I will also address the reasons why the initial peronist strategy of the “Frente Federal” –which made Ramón Puerta head of state– failed; thus introducing the need for a different institutional solution to the crisis. Accordingly, I will remark upon the pacts, terms and conditions that Rodríguez Saá had to comply with during the course of his presidency, in order to eventually put forward a detailed appraisal of his days as President.

I will outline Saá’s political stakes, the allies he won, the means through which he attempted to evade existing commitments, as well as the powers of veto he came across, in an attempt to understand why he left office so abruptly and how the Peronist Party followed a different institutional path for transition, this time headed by Eduardo Duhalde.

Finally, I will conclude this paper by exposing all the conclusions I have come to.

Keywords: Frente Federal – Peronism – Default – Correny Bord – Crisis 2001

Fecha de recepción: noviembre de 2012

Fecha de aceptación: noviembre de 2012

Yo fui presidente durante una semana difícilísima. Y siempre sonreía no porque estuviera contento con el momento trágico del país sino porque en esos momentos que nadie, nadie se animaba a subir, yo sí.

Adolfo Rodríguez Saá

El interregno de Ramón Puerta y las estrategias del “Frente Federal”

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001 marcaron el final del gobierno de la Alianza, dejando al peronismo como el principal partido político del país en condiciones de asumir el gobierno y conducir el interregno que quedó abierto. La Alianza fue una coalición concertada entre la UCR y el Frepaso que había asumido a fines de 1999 en la Argentina con la promesa de mantener la convertibilidad y transparentar la política. Sin embargo, en poco tiempo dilapidó todo su capital político y el apoyo mayoritario que había logrado conseguir tras exacerbar los esquemas neoliberales y aplicar la lógica del ajuste permanente. Así, a los 10 meses de asumir el vicepresidente renunció debido a las sospechas vinculadas a sobornos en el Senado de la Nación. Se realizaron podas reiteradas al gasto estatal, reduciendo las erogaciones en salud, educación y asistencia social; bajando los sueldos de los empleados públicos y las jubilaciones. Se aplicaron constantemente las recetas reclamadas por el FMI y demás organismos de crédito internacional en condiciones de servilismo con el solo fin de “tranquilizar a los mercados”, implicando planes de ajustes aún más duros, reducciones de presupuesto, despidos y privatizaciones, defendiendo los esquemas básicos del neoliberalismo. Bajo estas condiciones se conformó un ciclo recesivo cada vez más agudo y el modelo económico de la convertibilidad comenzó a dar muestras de su inexorable final. Así, durante el año 2001, se produjeron 3 corridas bancarias (marzo, julio y noviembre), desplomándose los depósitos bancarios, produciéndose una fuga de capitales y bajas de las reservas del Banco Central, mientras que el indicador “riesgo-país” subió sin encontrar techo, llevando pánico a toda la economía. Para octubre de 2001, cuando se produjeron las elecciones legislativas, el gobierno de la Alianza sufrió una fuerte derrota electoral, la cual no pudo ser capitalizada por ningún partido tradicional, imponiéndose el “voto bronca” y sólo ganando la clase política el repudio generalizado de la ciudadanía. Finalmente, a fin de noviembre, el Gobierno en un intento desesperado por salvar los restos de la convertibilidad intervino el mercado bancario decretando “el corralito”, con lo cual limitó el retiro de dinero de los bancos, dando un golpe mortal a la economía informal y a la paciencia de la población. A partir de allí durante todo diciembre se producirían estallidos sociales (en concordancia con algunos saqueos y episodios de violencia orquestados por el peronismo bonaerense) que pusieron fin al gobierno de la Alianza, dejando al PJ como principal partido de gobierno.

De este modo, el peronismo se convirtió en el partido con mayor viabilidad institucional por ése entonces. Por un lado, si bien el PJ había perdido las elecciones presidenciales en 1999 y en las elecciones de octubre de 2001 también fue uno de los destinatarios del “voto bronca” resultó igualmente la fuerza con

mayor número de votos en esas elecciones, en las cuales pudo adueñarse de las cámaras del Congreso Nacional, por otro lado, contaba a su vez con el control de 14 gobernaciones en el país. Es decir, contenía muy buenos elementos como para poder capitalizar la situación a su favor. El desmoronamiento del gobierno de la Alianza dejó a los principales socios que la constituyeron, el Frepaso y la UCR, bajo estragos disolventes. El primero quedó transitando una fuerte crisis de disolución y el radicalismo sólo estaba dispuesto a replegarse luego del fracaso de una nueva gestión radical, esta vez en manos de Fernando de la Rúa. Es por eso que el único partido político que estaba en condiciones de imponer el curso a seguir era el peronismo. Así, los destinos (y mecanismos) por los cuales tendría que marchar el país en su futuro dependían de las negociaciones internas que se produjeran allí.

Sin embargo, a pesar de su aparente fortaleza institucional el peronismo no era un bloque homogéneo. Al contrario, estaba bajo un fuerte proceso de lucha interna. Todavía el partido se debatía entre la guerra interna que dominó la segunda mitad de la década de 1990 entre duhaldismo y menemismo, dos grandes facciones que convivían en él. A este enfrentamiento le debemos sumar la constitución a principios del año 2000 del "Frente Federal y Solidario" formado por las provincias `chicas` del interior del país que no querían quedar presas de aquella puja interna. En este sentido, el `Frente Federal` no sólo no deseaba la dicotomía menemismo/duhaldismo sino tampoco que el peronismo quedara en manos de alguna de las provincias denominadas `grandes`. Es decir, no quería que el partido sea sólo una plataforma de los gobernadores peronistas de las provincias más populosas: Carlos Ruckauf (Buenos Aires), Juan Manuel de la Sota (Córdoba) ni Carlos Reutemann (Santa Fe). De esta manera, el Frente Federal durante casi dos años fue creciendo en autonomía y organicidad. La unión de las 11 provincias `chicas` del partido les permitía ganar viabilidad institucional y convertirse así en el espacio más representativo y amplio al interior del peronismo.

En efecto, el *Frente Federal* para fines de 2001 había logrado que el peronismo se reuniera detrás de sí para consensuar quién sería nombrado como presidente del Senado, convirtiéndolo además en vicepresidente del país. Dada la distribución federal de los votos del Senado (3 senadores por cada provincia) quien lograra reunir el mayor consenso en las provincias podría volcar los números a su favor. De este modo, el Frente Federal le impuso su candidato al peronismo. Resultó elegido el misionero Ramón Puerta para el cargo. En diputados no se logró hacer lo mismo, dado que aquí rige un criterio de representación proporcional de la población. En este caso, quién impuso a su hombre fue Eduardo Duhalde -ya que éste era el peronista que controlaba la populosa provincia de Buenos Aires y que contaba con mayor número de diputados-, designando así a Eduardo Camaño como presidente de la cámara baja. En conclusión, con la renuncia de De la Rúa el jueves 20 de diciembre, el peronismo tenía sus fichas en orden y estaba listo para asumir nuevamente el poder.

Así, un día después de la renuncia, el *viernes 21 de diciembre*, cuando se reunió la Asamblea Legislativa (Asamblea excepcional conformada por la totalidad

de los diputados y senadores nacionales) la dimisión oficial de De la Rúa fue aceptada sin demoras ni inconvenientes. La presidencia interina de la Nación recayó sobre el peronista Ramón Puerta.

Según lo establecido por la ley de acefalía, quién tuviera que reemplazar a un Presidente luego de su dimisión, no podría ejercer su cargo por más de 48 horas. Durante ese período la Asamblea Legislativa debería escoger a alguien para completar el mandato inconcluso o convocar a nuevas elecciones presidenciales a realizarse en un plazo no mayor a 90 días.

La postura que contaba con mayor consenso al interior del PJ era la de que Puerta continuara como Presidente de la Nación hasta que se realizaran nuevos comicios presidenciales dentro de los 3 meses que dictaban las normas. A su vez, se esperaba lograr imponer en el Parlamento la instauración de la ley de Lemas para esas elecciones. Esto es, se buscó que fuera válido que varios candidatos del mismo partido pudieran competir en una misma elección, siendo la fórmula más votada la que se quedara con la totalidad de los votos de su partido. Así, el peronismo tendría asegurado el triunfo, ya que ningún otro partido contaba con la posibilidad de sumar tantos votos como todos aquellos que el PJ podría contar con sus diferentes fórmulas y candidatos. Además, la ley de lemas otorgaba otra importante ventaja para el disperso mundo justicialista: sería posible nacionalizar el proceso interno de disputas y competencias que atravesaban los hombres del PJ, con lo cual no sería necesario realizar elecciones internas ni tampoco el desgastante proceso de peleas para imponer un candidato de unidad. La elección presidencial de marzo se volvería así “la interna nacional” del peronismo y la vía más transparente y fácil para todas sus facciones.

Sin embargo, los planes de los hombres del PJ no iban a resultar: Ramón Puerta no estaba dispuesto a ser el “chivo expiatorio” del partido. Puerta comprendía demasiado bien las desventajas que implicaba aceptar gobernar por tan sólo 90 días. En primer lugar, de hacerlo, tendría que comprometerse frente al peronismo a no competir en las elecciones de las cuales saldría el sucesor de De la Rúa, así el camino eleccionario para convertirse en Presidente le quedaba vedado. En segundo lugar, esos 90 días sobre los cuales debía gobernar no serían para nada sencillos. Puerta sabía que quién estuviera a cargo de la Presidencia tendría que enfrentar “el trabajo sucio”: declarar el *default* del país como también devaluar, asumiendo las consecuencias sociales que esto implicaba. De llevar a cabo estas tareas, Puerta pasaría a convertirse únicamente en la figura histórica que puso fin a la convertibilidad y que dejó de pagar la deuda. Toda su carrera política (su pasado y su futuro) pasarían a leerse como la del simple hombre que tuvo que suspender la convertibilidad.

En efecto, el país ya no contaba con créditos externos ni forma alguna de hacer frente a los próximos vencimientos de la deuda pública. Tampoco existían reservas en el Banco Central para sostener caprichosamente la convertibilidad.

En paralelo, los procesos económicos que implicaban ambas medidas (la devaluación y la declaración de *default*) sólo podrían traer en un primer momento caos, descontrol y bajas en los salarios, efectos que sólo podrían comenzar a revertirse más allá del plazo de 90 días de interinato presidencial. Es decir, realizaría medidas de suma trascendencia que sólo traerían consecuencias

negativas para quién las adoptara. Mientras quien recibiera los primeros frutos (crecimiento económico y mayores recursos presupuestarios) sería otro.

En tercer lugar, Puerta contaba con otra excelente excusa para no aceptar un interinato de 3 meses. Aun con la gran fragmentación al interior del peronismo su figura había sido el único punto de consenso entre las distintas facciones. Al haber flotado entre todas las corrientes internas y mantenido buenas relaciones con todas ellas, Puerta consideró que nadie más que él podría volverse un hombre de verdadero consenso interno. Cualquier otro despertaría suspicacias, combates partidarios y luchas de poder. Él había sido el único -por lo menos hasta ese momento- en funcionar como bisagra entre el menemismo, el duhalidismo y los hombres del Frente Federal. Por lo cual, según su análisis, para mantener la `Pax` en el peronismo, el partido debía respaldar a su figura como única persona de consenso.

De este modo, Puerta buscó presionar para que sus compañeros lo escogieran para que retuviera la Presidencia de la Nación hasta completar el período trunco de De la Rúa. Si desde el PJ no se lo escogía a él, todo el partido debería buscar un nuevo hombre de consenso que estuviera dispuesto a hacer el "trabajo sucio", renunciando además éste a cualquier aspiración política para el futuro y gobernando bajo condiciones sociales y económicas de caos y conflicto.

Más allá de sus esfuerzos, su apuesta no resultó. La postura que logró imponerse fue la contraria: el hombre elegido por la Asamblea Legislativa no comandaría la Presidencia hasta finales del año 2003, sino tan sólo una breve transición de tres meses. Los que forzaron esto último fueron los 3 gobernadores de las provincias *grandes*. Al estar en los primeros lugares de las encuestas los hacía acariciar la posibilidad de volverse Presidentes en poco tiempo, acentuando su capacidad de presión de manera intensa. Los tres hombres fuertes del PJ contaban con muy buenas chances de imponerse en marzo en elecciones presidenciales bajo la ley de lemas. Ruckauf, Reutemann y De la Sota eran los candidatos favoritos en todas las encuestas. Por otra parte, sostenían que tras la crisis en la que estaba sumergido el país sólo un Presidente fuerte y legítimo (respaldado por el voto popular) era la opción más conveniente para enfrentar los problemas.

Así, ante la opción vacante para el cargo presidencial fue otra figura del Frente Federal, el gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, la que afloró como posibilidad. Éste se había autopropuesto para el cargo. Rápidamente, con el consenso que terminó por obtener Rodríguez Saá, los pasos próximos se terminaron por resolver.

El acuerdo entre las facciones del PJ fue claro: el 3 de marzo de 2002 se celebrarían elecciones presidenciales bajo la modalidad de la ley de lemas. Rodríguez Saá gobernaría hasta el 5 de abril de ese año, fecha en la cual debería trasladarle la banda presidencial a quién hubiera salido elegido en las elecciones de marzo. A su vez, Rodríguez Saá se comprometía a no participar de esas elecciones y realizar el "trabajo sucio" (declarar la cesación de pagos y devaluar). Su única ventaja sería poder utilizar los 90 días que contaría como Presidente como una inmensa vidriera nacional para su persona y "mostrar" sus cualidades de *administrador* y líder.

De esta forma, las principales facciones del peronismo concretaron un acuerdo que las dejaba satisfechas. El Frente Federal realizaba un excelente negocio. Por un lado, lograba imponer una vez más a un hombre propio (Rodríguez Saá) en un puesto clave. Por otro, tras la gran fragmentación partidaria y el poco tiempo que restaba para las elecciones, todos los gobernadores “chicos” ampliarían sus horizontes políticos. Dado que los gobernadores “grandes” tendrían que considerarlos seriamente como aliados y virtuales compañeros de fórmulas si deseaban contar con estructuras partidarias provinciales para sus planes electorales.

Desde el lado de los gobernadores “grandes” se había logrado obtener el resultado ansiado. En poco tiempo habría elecciones y todos estaban en perfectas condiciones de imponerse en ellas. Sólo restaba que cada uno hiciera sus apuestas y eligiera cuidadosamente sus estrategias electorales. Únicamente la facción menemista había salido con las manos vacías. La imposibilidad legal de su líder para poder competir en los comicios de marzo la dejaba sin chances de ejercer influjo suficiente sobre las decisiones de relevancia. El menemismo así debía resignarse a ser un mero espectador de los sucesos futuros.

Para el resto de los protagonistas, la carrera presidencial hacia las elecciones de marzo comenzaría el mismo día de la asunción de Rodríguez Saá como Presidente. A partir de allí, todos estarían expectantes sobre cómo comenzar a construir sus pasos siguientes.

Rodríguez Saá y sus primeros pasos como presidente: entre los pactos incumplidos, la construcción de aliados y la lucha interna del peronismo

Cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal

Juan Domingo Perón

Con el acuerdo articulado por los hombres del PJ, los senderos del país parecían marchar por un camino claro y ordenado. La elección negociada de Rodríguez Saá como Presidente por 90 días y el sistema de ley de lemas impuesto por mayoría en la Asamblea legislativa eran las marcas más patentes sobre el consenso general que se había logrado. Sin embargo, el sendero de paz y acuerdo que se había establecido comenzó a encontrarse con algunos escollos.

Tras haberse logrado un “feliz acuerdo” entre las distintas fuerzas del PJ, una larga serie de “pequeños sucesos” *sherlockholmeanos* empezaron a aflorar. Es decir, algunos “extraños sucesos” que podrían dar la pauta que “otra realidad” podría estar operando por detrás de todos. Las piezas no estaban encajando según se suponía que lo hicieran.

La primera señal fue llamativa: Rodríguez Saá no había pedido licencia en su provincia como gobernador para hacerse cargo de un interinato que, se suponía, duraría tan sólo un par de meses. Directamente renunció a su cargo como gobernador. Fue un “extraño suceso”. Dado que muchos se empezaron a

preguntar sobre las verdaderas intenciones del sonriente puntano, ya una vez que terminara su gobierno de transición en apenas 90 días, ¿a qué función retornaría? El gesto de su renuncia a la gobernación hacía parecer que el nuevo Presidente estaba llegando con ambiciones de quedarse en su puesto y que no tomaría a la presidencia de la nación tan sólo como un cargo “temporal”.

El segundo “extraño suceso” que alertó a algunos fue el extraordinario discurso (y el modo) de la asunción de Rodríguez Saá, un presidente que se suponía que era tan sólo “transitorio”. En efecto, el discurso de asunción de Rodríguez Saá desbordó por todos sus poros mensajes épicos y (re)fundacionales. Por un lado, se rindió un exacerbado homenaje a la lucha popular que representaron las jornadas de los días 19 y 20 de diciembre. Allí, se ensalzó la gesta de la calle, se levantaron elogios a la lucha popular y saludos de deferencia hacia los caídos durante esos días, proponiendo una indemnización para ellos. Por otro lado, se deploró la represión *inexplicable* contra las Madres de Plaza de Mayo a manos de “las fuerzas de la democracia”. A su vez, se fustigó a “los políticos” y se los acusó de “corruptos”.

Con su discurso de asunción se estableció que el sueldo máximo de la nación sería el del Presidente, el cual no superaría los tres mil pesos. De ese número para abajo deberían ajustarse el resto de los salarios de la administración pública. Por otra parte, sumó otra actitud que caería en suma gracia a gran parte de la ciudadanía en sus gritos de guerra contra “los políticos” y sus *exuberantes* privilegios: se venderían los bienes de *lujo* con los que contara el Estado, tales como su parque automotor y el avión presidencial para darles “pan a los más necesitados” e iniciar un vasto programa de austeridad.

También se realizó, de manera espectacular, la declaración de la cesación de pagos a modo de hazaña libertadora en una clave nacional y popular: según Rodríguez Saá, el Estado no negociaría más a espaldas del “pueblo” ni en *oficinas a puertas cerradas*, como tampoco se priorizaría la “deuda externa” por sobre “las propias necesidades de los argentinos”. La deuda pública, en ese discurso, dejó de ser concebida como una “obligación” irrenunciable como constantemente era referida por las proclamas de la Alianza para ser considerada como “el más grande negociado de la historia argentina”, un hecho inescrupuloso a espaldas del bienestar general.

Además, el nuevo Presidente se encargó de dejar en claro en su discurso que no sería el responsable de abandonar la convertibilidad. Al contrario, ratificó que él sería el encargado de sostenerla apoyándose en la creación de una tercera moneda entre el peso y el dólar: el Argentino. Un bono estatal con el cual el Estado pagaría sus deudas, sería de curso obligatorio y cotizaría libremente en el *mercado*. Lo cual permitiría lubricar la economía y revertir el ciclo recesivo, posibilitando que el Estado aumentara sus niveles de gasto y darle fluidez, según el nuevo Presidente, “al consumo popular”. En una palabra, Rodríguez Saá no devaluaría “para, según él, no disminuir el salario de los trabajadores”. La convertibilidad, al contrario de lo pactado, permanecería en vigencia.

Por último, el discurso presidencial estuvo plagado de poderosas frases grandilocuentes para instaurar un clima fundacional y emancipatorio en una nueva era, prometiendo la creación de un “millón de empleos”, la “defensa de los dere-

chos de los trabajadores, `austeridad`, un majestuoso `plan de asistencia alimentaria` y “poner a la Argentina en orden”. Según Rodríguez Saá, con él comenzaba a gobernar una nueva generación. La Argentina abriría una nueva etapa en su vida.

Las reacciones mientras se estaban escuchando las efusivas palabras de Rodríguez Saá en el Congreso fueron claras e inmediatas:

Alfonsín fue el primero en sorprenderse tras los nuevos anuncios: “Pero si esto no lo hemos hablado. Nosotros habíamos elegido a un Guido”¹, dijo mientras hacía alusión al presidente radical José María Guido que se encargó de transitar de manera parca el interregno entre las presidencias de Frondizi e Illia a principios de la década de 1960.

El senador Eduardo Menem fue más lejos aún, rcayendo en una sospecha que se develaba como cada vez más evidente: “Éste no es un discurso para [gobernar por] noventa días; es un discurso para dos años”². Su vecina de banca, la senadora Cristina Kirchner, le retrucó sin tapujos entre carcajadas: “Se equivocaba Senador, es un discurso para diez años”³.

Durante la misma tarde de su asunción, Rodríguez Saá se reunió con los máximos líderes de ambas CGT. Allí, prometió un programa *mercadointernista, nacional y popular*, con el cual defendería los intereses del país y generaría millones de puestos de trabajo. También les prometió un mar de anuncios optimistas que inundaron las tapas de los diarios durante toda la semana. Se derogarían los recortes salariales impuestos por la ley de Déficit Cero⁴, se aumentaría por decreto el salario mínimo, vital y móvil⁵ como también se crearía una inmensa red de contención social. A su vez, se derogaría la sospechada ley de Reforma laboral aprobada en el año 2000 y que fue la semilla de la renuncia de Álvarez a la vicepresidencia⁶. Según el nuevo Presidente, “los derechos de los trabajadores estarían por sobre todo”. Por último, los hombres de la CGT contarían con un lugar en el nuevo gabinete nacional. El diputado Oraldo Britos, quien contaba con una excelente relación y cercanías con los “gordos”, sería designado ministro de Trabajo.

Los sindicalistas, atónitos, no podían creer lo que estaban escuchando. Todas sus demandas parecían ser satisfechas por arte de magia. Los conflictos existentes en ese momento entre las 2 CGT parecieron quedar de lado. Tanto Daer, Barrionuevo como Moyano le dieron un fuerte respaldo a Rodríguez Saá y concertaron un acto masivo en la sede central de la CGT en la calle Azopardo a realizarse durante la semana. En dicho acto estaría todo el sindicalismo unido y encolumnado para avalar el nuevo programa económico y social del mandatario puntano, como si ambas CGT estuvieran dispuestas a reunificarse gracias al nuevo Presidente.

¹ Bonasso, Miguel (2002). *El palacio y la calle. Crónicas de insurgentes y conspiradores*. Planeta, Bs. As., pág. 250.

² Ib., pág. 251.

³ Ib.

⁴ *Clarín* (24/12/2001), *La Nación* (26/12/2001).

⁵ *La Nación* (23/12/2001), *Clarín* (24/12/2001).

⁶ *La Nación* (26/12/2001).

La noche del día de su asunción, Rodríguez Saá anunció la creación de otro majestuoso plan de obras públicas. Esta vez, serían obras públicas de infraestructura, las cuales servirían para reactivar la economía, crear empleos y darles nuevos aires a las economías regionales⁷. A su vez, se conformó una multifacética agenda de reuniones para el día lunes y terminó de conformar el gabinete nacional.

Esto último aportó nuevos y “extraños presagios” sobre los planes de Rodríguez Saá. Dado que para la conformación del gabinete de ministros no se buscó acuerdos o el ofrecimiento de cargos con ningún gobernador (ni siquiera la de los hombres del Frente Federal, los cuales fueron el apoyo fundamental para que Rodríguez Saá se convirtiera en presidente). Las elecciones de los ministros quedaron bajo la exclusiva decisión del nuevo mandatario. No hubo consultas ni llamados telefónicos. No se intentó en ningún momento consensuar figuras o distribuir cargos de manera equilibrada entre socios políticos. Nunca se buscó reflejar el peso de los hombres peronistas del interior del país. Sólo hubo dos excepciones. Por un lado, el poder bonaerense (Duhalde y Ruckauf) quedó representado por Juan José Álvarez, quien era secretario de Seguridad en la provincia y estuvo a cargo del ‘control’ de la policía bonaerense durante las jornadas de los saqueos. Este hombre clave pasó a ocupar el mismo puesto que tenía en la provincia, pero ahora en un nivel nacional. De allí en adelante, el control de la Policía Federal quedaría a cargo de un *bonaerense*. La otra excepción la marcó Daniel Scioli, quien fue designado secretario de Turismo y Deportes. Se supondría que representaría al menemismo en el Gabinete. Aunque diversas fuentes señalan que su jefe político nunca dio la conformidad de tal hecho⁸. El resto del gabinete estaría conformado exclusivamente por personas de estrecha confianza de Rodríguez Saá⁹.

A su vez, si con todos estos gestos los mandatarios provinciales sintieron que el hombre que ellos habían convertido en presidente les daba la espalda, otro hecho más pondría al descubierto las ambiciones de Rodríguez Saá. Ya que si ningún gobernador se sintió representado en el gabinete nacional, fue también inconcebible para éstos que se ofreciera un Ministerio a un periodista (Horacio Verbitsky, quién rechazó la oferta) sólo con el afán de que el puntano pudiera ganar mayor notoriedad pública. Era evidente que Rodríguez Saá buscaba más que apoyo del peronismo, repercusión mediática.

Por otro lado, el ritmo acelerado e hiperkinético que mostraba Rodríguez Saá era otra evidencia que señalaba sus fuertes ambiciones. Era alguien que buscaba generar una imagen de claro contraste con el ‘estilo de gestión’ de De la Rúa. El nuevo presidente estaba decidido a convertir a la agenda presidencial en un poderoso instrumento para ganar apoyos. Dándole entrevistas a grupos que nunca habían visitado la Casa Rosada (como los piqueteros), a aquellos que llevaban un largo rato sin hacerlo (como las Madres de Plaza de Mayo) u otorgándoles un lugar de privilegio a quiénes realizaban mayores presiones

⁷ *La Nación* (23/12/2001).

⁸ *La Nación* (24/12/2001).

⁹ *Clarín* (24/12/2001).

económicas (como el Grupo Productivo)¹⁰. Así, en un mismo día, Adolfo Rodríguez Saá fue capaz de tener encuentros con el Grupo Productivo, las Madres de Plaza de Mayo, el embajador del Brasil y el de Cuba, Piqueteros, Aníbal Ibarra, Eduardo Duhalde, ONGs, estar presente en la asunción del nuevo gabinete y tener el suficiente tiempo como para partir, a mitad de la tarde, a San Luis para descansar allí durante la noche.

De todas esas reuniones que tuvo Rodríguez Saá durante el segundo día en su nuevo cargo creemos que es importante destacar una. Aquella que mantuvo con los hombres de la UIA y el Grupo Productivo ya que consideramos que fue un suceso que el nuevo mandatario no supo aprovechar: en ella desperdició la posibilidad de sumar a éstos como aliados estratégicos en sus planes de permanencia en la presidencia más allá de los 90 días, ya que los industriales también eran firmes partidarios de que hubiera un gobierno que completara el mandato trunco de De la Rúa. Para los empresarios era fundamental darle previsibilidad y garantías al capital, algo que un gobierno transitorio y el llamado a elecciones en un clima de suma agitación social no permitían¹¹.

Sin embargo, Rodríguez Saá, a pesar de hablar sin parar sobre un plan de protección para la *industria nacional*, *reactivador* y de recuperación del salario interno no estaba dispuesto a llevar a cabo el programa que el Grupo Productivo (GP) tenía previsto. Las diferencias que los separaban eran importantes y bien profundas. Los *productivistas* -como se denominaban a sí mismos los miembros del Grupo Productivo- pretendían como primer objetivo inmediato el abandono de la convertibilidad, algo que el nuevo presidente estaba muy lejos de querer conceder. En segundo lugar, los planes del GP suponían la pesificación de todos los contratos, tarifas y deudas. A su vez, proponían renegociar la totalidad de la deuda pública -la cual ya estaba en *default*- junto con la de los empresarios privados que hubieran contraído créditos en el exterior. Por otro lado, aunque sí estaban dispuestos a apoyar la recomposición de los ingresos del Estado a través de reimplantar las cargas patronales a las principales empresas privatizadas como también a promover que se les cobrara impuestos a las rentas financieras, no compartían la postura de generalizar estas medidas a todo el sector empresarial; ellos pretendían quedar exentos. Además, proponían -de producirse grandes reclamos por parte de los bancos- que éstos fueran compensados con bonos estatales, asumiendo el Estado las deudas y la devolución de los depósitos privados como *solución* al 'corralito' todavía vigente¹².

Era evidente que el programa que tenía trazado el Grupo Productivo chocaba en varios aspectos con el proyecto diseñado por Rodríguez Saá. Dado que de ninguna manera el nuevo presidente estaba dispuesto a introducir reformas estructurales como las que presuponían los *productivistas*. Hacer algo así implicaría enajenarse importantes apoyos, como así también ganar fuertes dolores

¹⁰ El Grupo Productivo estaba conformado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Rural Argentina (CRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

¹¹ *Página 12* (22/12/2001) y (23/12/2001).

¹² *Página 12* (22/12/2001), *La Nación* (22/12/2001) y (24/12/2001).

de cabeza por parte de quienes saldrían perjudicados de asumirse medidas de ese tipo. Devaluar era una medida muy rupturista que, al fin y al cabo, generaría muchos conflictos. Las intenciones de Saá, más que apuntar a hacerse nuevos enemigos, tenían como meta ganar todos los apoyos posibles. No sumar adversarios. A su vez, de ninguna manera estaba dispuesto a llevar adelante -o por lo menos para el corto plazo- el principal objetivo empresarial de éstos: la devaluación de la moneda. Ya que hacerlo conllevaba necesariamente a un clima de tensiones sociales, suba de precios y presiones sectoriales en una desesperada búsqueda por lograr nuevos equilibrios económicos. El apoyo que pretendía obtener de gran parte de la ciudadanía sería imposible en un clima de caos, pujas distributivas y espirales inflacionarias.

Rodríguez Saá minimizó el rol de los productivistas y descontó que las medidas económicas anunciadas de corte “nacional y popular” serían suficientes para dejarlos satisfechos. Una apreciación grandemente errónea. Porque éstos, luego de una segunda reunión, comprendieron que Rodríguez Saá no era el hombre indicado para llevar a cabo el programa económico que ambicionaban, pasando a considerar al nuevo Presidente como un nuevo escollo para sus planes¹³.

Sin embargo, Rodríguez Saá continuó en su aventura de permanecer frente a la Presidencia más allá del período pactado. Las bases de apoyo que pudo conseguir en sus intrépidas acciones fueron variadas y de contundencia.

Por empezar, Rodríguez Saá contó de manera rápida con el apoyo explícito de Carlos Menem. Éste, al bregar más que nadie por evitar los comicios de marzo, no dudó en respaldar el sueño de Rodríguez Saá¹⁴. Un escenario similar al que encontró el mandatario puntano en los hombres del radicalismo. También para el radicalismo no había nada mejor que el hecho de postergar las elecciones presidenciales el mayor tiempo posible. El horrendo recuerdo del gobierno de De la Rúa apabullaría a todos sus votantes, dejando al centenario partido frente a la peor elección de toda su historia, por lo cual, el radicalismo debía apostar por todos los medios a evitar que se realizaran nuevos comicios¹⁵. Desde Alfonsín hasta Ángel Rozas, los principales dirigentes radicales dieron su respaldo a la permanencia de Rodríguez Saá hasta 2003¹⁶.

El gobierno español, tras obtener la garantía de Rodríguez Saá de que no devaluaría y garantizaría los contratos con las empresas privatizadas, dio tam-

¹³ En el juzgado que lleva adelante la causa sobre “complot” contra De la Rúa, figura una interesante declaración de Rodríguez Saá sobre sus días como presidente señalando las presiones recibidas por parte del Grupo Productivo y Clarín. Ver Bonasso, Miguel (2002). *Op. Cit.*, págs. 281-285. Otras fuentes avalan los hechos y conversaciones narrados por Rodríguez Saá. Ver por ejemplo Arisó, G. y Jacobo, G. (2002). *El Golpe SA. La guerra de intereses que estalló en 2001*. Grupo Editorial Norma, Bs. As., págs. 220 y 221. Ver también Clarín (26/12/2001). Sobre todo ver “Duhalde hizo un golpe contra De la Rúa y conspiró contra mí porque con Clarín querían la devaluación” en Fontevecchia, Jorge (2007). *Reportajes*. Editorial Planeta, Bs. As., passim.

¹⁴ *La Nación* (27/12/2001), *Página 12* (28/12/2001), *Clarín* (28/12/2001).

¹⁵ *Página 12* (26/12/2001) y (29/12/2001), *La Nación* (28/12/2001), *Clarín* (28/12/2001).

¹⁶ *Clarín* (26/12/2001), *Página 12* (28/12/2001).

bién su apoyo al nuevo Gobierno. A su vez, los emisarios españoles se comprometieron a gestionar préstamos en los organismos financieros internacionales para que la convertibilidad pudiera continuar siendo sostenida¹⁷.

El *miércoles 26*, el sonriente Presidente realizó un nuevo encuentro con los líderes de la CGT. El acto se realizó en la sede central en la calle Azopardo y estuvo colmado de punta a punta. En él se hicieron públicas todas las promesas realizadas durante la primera reunión: la derogación de la sospechada ley de Reforma laboral, duplicar el salario mínimo, vital y móvil, crear un millón de puestos de trabajo, convocar al Consejo Nacional del Salario, crear un programa masivo de seguros de desempleos, anular los recortes salariales del Déficit Cero, entre otras cosas. A su vez, en un fervoroso discurso, Rodríguez Saá se encargó de dejar en claro que la nueva moneda (el Argentino), con la cual cobrarían los empleados públicos y jubilados, sería una moneda sólida y respaldada con “todos los bienes inmuebles y tierras fiscales del Estado, con el Congreso, con la Casa Rosada, con todas las embajadas, para evitar una devaluación del salario de los trabajadores, que -como Presidente- no [iba] a tolerar”¹⁸, tras lo cual recibió una fuerte ovación de todo el movimiento sindical. Los máximos líderes sindicales le respondieron al nuevo presidente de manera contundente, señalándole: “Sr. Presidente; el movimiento obrero está a su disposición” porque sus prioridades son “las prioridades de los trabajadores”¹⁹. Por otra parte, los sindicalistas se encargaron de dejar en claro su total respaldo al nuevo Gobierno. Para Moyano era vital “rodear y defender al Presidente” de todas las presiones que podría recibir²⁰. Luis Barrionuevo señaló que a partir de esos anuncios, el sindicalismo respaldaría a Rodríguez Saá “a muerte”²¹. Los líderes gremiales explicaron ante un inusitado entusiasmo: “cómo no lo vamos a apoyar si dijo todo lo que esperábamos”²². Así, Rodríguez Saá cerró el acto tras el grito de “Vivan los trabajadores, viva la CGT”²³.

Por otra parte, para sumar nuevos aliados, desde el Gobierno se comenzaron a repartir miles de planes sociales en distintas provincias, con los cuales se esperaba ganar el apoyo de los gobernadores y referentes políticos regionales tras el reparto de la siempre bien rentable ayuda social²⁴. Con estos anuncios, Rodríguez Saá ya había comenzado a obtener sus primeros respaldos en los gobernadores del interior del país. Jorge Sobisch, gobernador neuquino, fue el primero en dar el apoyo a la continuidad del Gobierno hasta 2003 luego de recibir los primeros desembolsos para crear 20.000 puestos de trabajo en su provincia²⁵.

A su vez, en pleno raíd mediático en búsqueda de popularidad y mayor prota-

¹⁷ *Clarín* (27/12/2001) y (28/12/2001), *La Nación* (27/12/2001), *Página 12* (28/12/2001).

¹⁸ *La Nación* (27/12/2001).

¹⁹ *Ib.*

²⁰ *Ib.*

²¹ *Ib.*

²² *Ib.*

²³ *Clarín* (27/12/2001).

²⁴ *Clarín* (26/12/2001) y (27/12/2001), *La Nación* (26/12/2001), *Página 12* (28/12/2001).

²⁵ *Página 12* (29/12/2001).

gonismo, el Gobierno ordenó por decreto la reducción del 40% de los `cargos políticos'²⁶. Para luego comenzar a vender los autos oficiales y dar las altisonantes señales de austeridad²⁷. Estos gestos, se confiaba, agradarían a los sectores medios intransigentes con los *elevados* niveles de gasto de "los políticos". Mientras tanto, apeló a buscar apoyos en el sector rural tras ratificar varias veces que no se implementarían retenciones agrícolas²⁸.

Así, tras reunirse con la mayor cantidad de sectores y referentes posibles y decirles a cada uno lo que deseaba escuchar, el Gobierno empezó a ver los primeros resultados de sus acciones. Las primeras encuestas lo empezaron a favorecer de forma instantánea mientras su imagen comenzaba a crecer a toda velocidad²⁹. El apoyo de cada vez más sectores recargaba el entusiasmo y los planes de "el Adolfo" -como empezó a buscar que se lo conociera popularmente-. Hasta el mismísimo Domingo Cavallo decidió romper el silencio y darle su apoyo tras considerarlo "un valiente"³⁰. La virtual permanencia de Rodríguez Saá hasta 2003 incluso estaba dividiendo al peronismo. La antinomia Menem/Duhalde que había hegemonizado al partido durante años parecía empezar a quedar en el pasado tras el nuevo dilema interno con vistas a 2003: "Adolfo sí / Adolfo no"³¹.

De esta forma, tras ascender en una ola creciente en los niveles de respaldo se sintió lo suficientemente fuerte como para dejar al descubierto su juego de permanecer por 2 años en la presidencia, algo que ya para todos era algo inocultable. Primero, dejó trascender sus posibles estrategias legales para impedir la convocatoria a elecciones en marzo. Las cuales abarcaban desde buscar una rectificatoria de la Asamblea Legislativa que extendiera su mandato, hasta la posibilidad de convocar a un plebiscito nacional que respaldara su gestión³², pasando por la posibilidad de realizar comicios en marzo sin la vigencia de la ley de lemas, lo cual restaría apoyos al acto eleccionario -incluso desde el peronismo-³³. Luego, hizo circular rumores sobre que los comicios deberían suspenderse por *falta de presupuesto*³⁴, para por fin, sobre el final de la semana, presentar directamente recursos de amparo en la justicia contra la convocatoria a elecciones en marzo³⁵. Sus deseos ya eran oficiales: Adolfo Rodríguez Saá buscaba permanecer en la Presidencia hasta 2003 a cualquier costo.

Día a día, lentamente, las principales ciudades del país habían ido amaneciendo con afiches que ponían al descubierto las intenciones de Saá. La búsqueda constante de aliados, apoyos, su estilo hiperactivo, sonriente y la manera de mostrarse en público a modo de estar en plena campaña electoral, no

²⁶ *La Nación* (28/12/2001).

²⁷ *La Nación* (29/12/2001).

²⁸ *Clarín* (28/12/2001), *La Nación* (28/12/2001).

²⁹ *Página 12* (26/12/2001).

³⁰ Ver reportaje en *Clarín* (27/12/2001).

³¹ *Página 12* (27/12/2001) y (28/12/2001), *Clarín* (27/12/2001).

³² *Página 12* (27/12/2001), *La Nación* (27/12/2001).

³³ *Clarín* (27/12/2001), *Página 12* (27/12/2001).

³⁴ *Página 12* (29/12/2001), Arsió, G. y J., Gabriel (2002). Op. Cit., pág. 224.

³⁵ *La Nación* (28/12/2001).

dejan ninguna duda sobre los planes que ambicionaba. Ante la consulta permanente por parte del periodismo sobre cuáles eran los verdaderos planes (permanecer o no en la presidencia hasta 2003), la respuesta oficial solía ser siempre la misma: “El Gobierno recién largó, no hablemos de cuándo termina”³⁶.

El nuevo Gobierno sabía que para lograr su objetivo debía moverse rápido. No podía dejar que un pronto clima electoral se adueñase de la situación. Si la campaña presidencial con vistas a marzo, junto con los competidores, plazos legales y diversos apoyos se instalaban en la sociedad, sería cada vez más difícil dar de baja las elecciones. Con los comicios ya instalados en la agenda política, no se podrían anular. Hacerlo haría ver tal acto como un grosero gesto antidemocrático. Rodríguez Saá pasaría a la historia como un presidente sin votos y con ánimos golpistas contra las instituciones. Todo su sueño imperial se desvanecería para siempre, por lo cual, los apoyos y acciones para imponer su proyecto debían sucederse de inmediato.

El viernes 28 de enero, Adolfo Rodríguez Saá se creía en la cima del mundo. En sólo 5 días había provocado toda una revolución en la política argentina. Tras ser un personaje prácticamente desconocido por fuera de su provincia, terminaba su primera semana como Presidente bajo el rótulo de ser un hombre providencial. Según su propio parecer, nunca antes alguien había hecho tanto en tan poco tiempo³⁷. Todo para el puntano era una gloria. Su sonrisa lucía cada vez más resplandeciente.

Sin embargo, Rodríguez Saá atisbaba dos frentes de tormenta en sus ambiciones. El primero, fue la fuerte resistencia que le oponían los hombres de las finanzas a sus propuestas económicas que no dejaban de denostar como “populistas” y presas de un nacionalismo trasnochado que se estaba imponiendo en el país a base de demagogia y del más puro clientelismo político. Sólo pensar en que con su declaración de *default*, Rodríguez Saá les había generado a los bancos miles de millones de dólares en pérdidas les ponía a éstos los pelos de punta. La imagen del nuevo Presidente para la banca era un calco de mal gusto, una réplica del venezolano Hugo Chávez y su programa *popular*. Los principales banqueros no apostaban a que Rodríguez Saá jugaría a favor de ellos. Al contrario, se suponían como los principales perjudicados con la introducción de una tercera moneda en la economía y con el nuevo programa de tinte “nacional y popular”³⁸.

³⁶ *Clarín* (27/12/2001), *Página 12* (27/12/2001).

³⁷ Ver por ejemplo su discurso de renuncia realizado por televisión.

³⁸ Ver las presiones de los bancos sobre Rodríguez Saá en “El Gobierno quedó en otro corralito” *Página 12* (29/12/2001). Remes Lenicov, en agosto de 2002 realizó confesiones similares a las que Rodríguez Saá encontró por parte de los grandes bancos. Allí, Remes destacaba: “El Presidente Duhalde y yo sufrimos fuertes presiones de los bancos internacionales y de algunos empresarios para conseguir la pesificación asimétrica y compensaciones con bonos del Estado”. En sus declaraciones mencionó a Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río-Santander), Emilio Cárdenas (HSBC), Manuel Sacerdote (Boston) y Héctor Massuh (UIA). Arsió y Jacobo (2002). Op. Cit., págs. 224 y 225. También ver *Clarín* (23/12/2001) y (28/12/2001), *Página 12* (26/12/2001).

Por otro lado, Rodríguez Saá también sabía que tenía que detener las fuertes presiones que estaban llevando contra su persona los miembros de su propio partido, dado que en el peronismo las aguas estaban claramente muy agitadas. Como vimos, Menem estaba resuelto a dar su apoyo al nuevo presidente en su ambicioso proyecto. La mayoría de los gobernadores del Frente Federal también lo había hecho. Sólo Néstor Kirchner era un firme partidario por parte de las provincias *chicas* de no apoyar el sueño puntano³⁹. A su vez, el binomio bonaerense Duhalde-Ruckauf era inmovible al respecto. Para ellos las elecciones debían realizarse en marzo a cualquier precio⁴⁰. Por último, el principal opositor al proyecto de continuidad adolfista fue el gobernador cordobés, quien se mantenía inamovible en ese punto. Según De la Sota, la posibilidad de suspender las elecciones no era una prenda de negociación⁴¹.

Rodríguez Saá consideró que todos estos frentes de tormenta eran un problema a considerar, aunque sin embargo los pensaba como *solucionables*. Uno a uno, cada uno de ellos serían enfrentados a su debido tiempo y resueltos sin problemas, según se pensaba. Ninguno de ellos se consideró que tenía el peso suficiente como para detener el sueño puntano. Así su sonrisa no dejó de multiplicarse a cada momento, aunque no duraría mucho más.

El principio del fin: la presión bonaerense y su fábrica del caos

La llegada a la presidencia de Rodríguez Saá a pocos días de producirse causó una revolución en la política argentina, que estaba reconfigurando en todo el arco político, económico e institucional alianzas, apoyos y algunas resistencias. Tras considerar tener una seguidilla inquebrantable de éxitos y aciertos, Rodríguez Saá sólo reconoció haber cometido un error durante su semana como Presidente: la designación de Carlos Grosso como funcionario. Este *“ligero error”* de cálculo, le había costado tener que soportar una enardecida protesta contra aquél. En efecto, en la agitada ciudad de Buenos Aires -epicentro de las protestas y de los cacerolazos contra De la Rúa-, varios de sus pobladores todavía recordaban el gran número de denuncias de corrupción que habían recaído sobre quien fue intendente porteño durante el primer tiempo de la presidencia de Menem. A su vez, los provocadores comentarios de Grosso ante la prensa (*“El presidente no me eligió por prontuario, sino por mi inteligencia”*) terminaron por provocar una fuerte manifestación en el distrito más convulsionado del país y que tenía como su principal blanco de odio a *“los políticos”*⁴². Carlos Grosso era uno de los más altos exponentes del estereotipo de *“político corrupto”* que tanto enfurecía por esos días a gran parte de la pobla-

³⁹ *Página 12* (28/12/2001).

⁴⁰ *La Nación* (28/12/2001).

⁴¹ *Clarín* (28/12/2001).

⁴² Rodríguez Saá justificó, entre otros motivos, la designación de Grosso como su asesor como un gesto hacia los sectores cercanos a la Iglesia Católica (cita, por ejemplo, al director del diario *La Nación*, Claudio Escribano). Ver Fontevecchia, Jorge (2007). Op. Cit., pág. 332.

ción. En la Capital Federal no fue tolerado que “un político” de tal especie ocupara un cargo público. La furia popular había encontrado en la figura de Carlos Grosso una excelente excusa para continuar con su ciclo de protestas y movilizaciones.

De esta manera, a la noche del *viernes 28 de diciembre* comenzaron a movilizarse miles de personas al ruido de las cacerolas contra la designación de Carlos Grosso. Los barrios de Belgrano, Palermo, Almagro, Villa Crespo, Barracas, Caballito y Congreso reanudaron el ciclo de protestas que una semana antes habían sido el fin del gobierno de De la Rúa. Los puntos de concentración de la protesta fueron nuevamente la Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación. A su vez, varios manifestantes se unieron a los restos de las movilizaciones que se habían sucedido por la tarde frente al Palacio de Tribunales en protesta contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (allí varios reclamaban “Que se vayan / Que se vayan”, “Corruptos, Corruptos”, “Ya se fueron De la Rúa y Cavallo, ahora que se vaya la Corte”, “Ahora la Argentina necesita Justicia”⁴³). Los cacerolazos, bocinazos, gritos y cánticos de protesta habían retornado a los principales centros políticos del país⁴⁴.

Sin embargo, las protestas de esa noche no quedarán registradas por la masividad de sus participantes. Sino por la existencia de sucesos inauditos en la historia argentina. Mientras que los manifestantes gritaban en la Plaza de los Dos Congresos consignas de protesta (“Chorros”, “Váyanse”, “Argentina, Argentina”), los policías que custodiaban las inmediaciones se retiraron del lugar. Un hecho por demás curioso, dado que a 3 cuadras de allí se encuentra ubicado el Departamento Central de la Policía Federal. A su vez, en días tan convulsionados como los de diciembre de 2001, era imposible considerar dejar desprotegido al edificio del Congreso Nacional, símbolo de la democracia y de las instituciones del país.

Desde ese momento, ya sin protección y mientras los canales de televisión transmitían en vivo las protestas, un grupo de manifestantes -que según algunas fuentes habían llegado en un micro y que luego los recogió cerca del lugar- saltó las vallas de seguridad y se aproximó a golpear las puertas principales del Congreso. Las mismas, luego de unos instantes, se abrieron, permitiendo el paso de decenas de personas a su interior. Mientras tanto, frente a la Plaza del Congreso, los manifestantes que allí protestaban se quedaron congelados mirando los sucesos como si estuvieran frente a una pantalla de televisión.

A los pocos minutos, los hombres que habían logrado entrar al Congreso comenzaron a prender fuego todas las instalaciones que encontraron a su paso, así como a sacar las bancas de los legisladores a la calle como botines de su accionar. Las muestras de su total impunidad fue evidente: bustos de expresidentes rodando por las calles, incendios, saqueos a los negocios de las inmediaciones y destrozos por doquier en el mobiliario del Congreso. Más de media hora más tarde los manifestantes que entraron al Congreso se retiraron, para que poco tiempo *después* -una vez que los responsables se hubieran ido- arribara la Policía Federal a “restablecer el orden”.

⁴³ *La Nación* (28/12/2001), *Clarín* (30/12/2001), *Página 12* (29/12/2001),

⁴⁴ *La Nación* (28/12/2001), *Clarín* (29/12/2001).

En forma simultánea, casi sincronizando el horario, en la Plaza de Mayo se comenzaron a registrar hechos similares. Un grupo de personas logró saltar las vallas de contención de la Casa Rosada para luego intentar entrar allí. Sin embargo, en este caso, a pesar de reiteradas insistencias y de tratar por varios minutos, los manifestantes no pudieron ingresar a la Casa de Gobierno. A su vez, aquí también se notó otra diferencia con lo ocurrido en el Congreso: en este caso, la policía actuó en forma más rápida. No demoró casi 40 minutos en actuar como en los hechos del Congreso, sino un poco menos de la mitad de tiempo (unos 15 minutos).

En ninguno de los 2 episodios (tanto en el caso del Congreso como en el de la Casa Rosada) se registraron detenidos ni sospechosos, a pesar de que quienes los realizaron actuaron a la vista de cientos de testigos. Tampoco los registros de la televisión (que transmitió todos los incidentes en directo) o las cámaras de seguridad internas que funcionaban por circuito cerrado fueron utilizados como elementos para iniciar investigaciones judiciales. A pesar de estas innegables evidencias, nunca se registró un solo arresto.

En ambos lugares funcionó la misma lógica: fueron lugares públicos, de suma trascendencia política y mientras se realizaban protestas *espontáneas*, se dejaron *zonas liberadas*. La policía se retiró de esos lugares centrales (y sumamente simbólicos) y regresó con demora (entre 15 y 40 minutos después de los hechos) y cuando los responsables ya se habían retirado.

Los dos sucesos “históricos” fueron más que elocuentes por sí mismos. No porque alguno de ellos haya producido destrozos irreparables. Su verdadero valor estuvo en el impacto simbólico que representaron. Sus indudables destinatarios supieron leer con suma claridad lo que significaban: esos sucesos eran tan sólo una *pequeña prueba* de cómo se podría actuar si no se respetaban los pactos establecidos.

El mensaje enviado fue mafioso y representó una clara presión política por parte de profesionales en fabricar caos. Gracias a esto fue, precisamente, que los hechos pudieron guardar gran parte de su poder de impacto. Fueron hechos de violencia, en lugares de gran peso político y a la vista de todo el mundo, incluso -como ya dijimos- los canales de televisión se pudieron dar el lujo de transmitirlos en directo. La clave de lectura sobre su significado fue indudable para quienes debían recibirlo: el poder bonaerense no podía ser desoído con facilidad.

Los indicios sobre un “operativo apriete” parecen señalar fuertemente a un principal responsable político: Eduardo Duhalde.⁴⁵ Cuatro fueron los grandes indicios que se encargaron de mostrarlo como responsable de los sucesos de esa noche. En primer lugar, la persona a cargo del muy sospechoso “control” de la Policía Federal, Juan José Álvarez, era (casualmente) el único representante bonaerense en el gobierno nacional. A su vez, fue la misma persona que tuvo a cargo los operativos de “seguridad” de la provincia de Buenos Aires durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Es decir, la “seguridad” estaba en manos

⁴⁵ Ver los comentarios de Rodríguez Saá acerca del “complot” contra él en Fontevecchia, Jorge (2007), Op. Cit., págs. 326-333.

de Álvarez, quién ya era un `experto´ en generar hechos de violencia, orquestados y políticamente efectivos. Su paso como agente de inteligencia durante años no habían sido en vano.

En segundo lugar, existen evidencias en los sucesos ocurridos en el Congreso que también se hallan directamente vinculados con el duhaldismo. Dado que los grupos que pudieron ingresar al Congreso lo hicieron porque -según las pericias realizadas- se les abrió la puerta *desde adentro*. En efecto, las puertas por donde pasaron los manifestantes nunca fueron violentadas. Además, el lugar por donde entraron era el sitio de mayor dificultad para ingresar. O sea, los manifestantes contaron con un fuerte *apoyo interno* para realizar sus tareas. Es decir, complicidades al interior del propio recinto. Es aquí donde surge la evidencia contra Duhalde y otra *gran casualidad* de esas jornadas: los ámbitos de uso exclusivo de la Cámara de Diputados (por ejemplo el Salón de los Pasos Perdidos) fueron los únicos en quedar intactos, siendo éstos los de más fácil acceso dado el lugar por donde ingresaron los manifestantes. La vinculación duhaldista es ésta: el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, era uno de los hombres de máxima confianza de Eduardo Duhalde. Además, Camaño contaba con excelentes vinculaciones con los comisarios y responsables de la seguridad del predio⁴⁶.

En tercer lugar, los manifestantes que ingresaron esa noche al Congreso, según la declaración que realizó Rodríguez Saá en un expediente judicial, fueron viejos conocidos de las patotas bonaerenses utilizadas por el duhaldismo. Varias de las personas identificadas extraoficialmente fueron ligados con el personal político duhaldista⁴⁷.

Por último, el hecho más evidente de todos que nos permite vincular a Duhalde con los incidentes de esa noche fueron las consecuencias políticas que produjo: luego de producirse los sucesos de la noche del *viernes 28*, todo el gabinete de Rodríguez Saá renunció. El presidente puntano debió sucumbir ante la soledad en la cual había quedado luego de tratar de romper los pactos realizados. Los gobernadores del PJ, a quienes días atrás les había dado la espalda e intentado birlar, reclamaron que fueran escuchados. Sin su apoyo, "el sueño imperial" de Rodríguez Saá no podría prosperar, apagando su resplandeciente sonrisa.

Las amenazas latentes de saqueos masivos o de nuevas operaciones de inteligencia contra él le hacían erizar la piel. Las declaraciones de Duhalde del día después de los incidentes que terminaron con el incendio del Congreso, alertando sobre la posibilidad de situaciones de caos mayores y hasta la virtualidad de la instauración de "*una especie de guerra civil (sic)*" si el gobierno de Rodríguez Saá se seguía equivocando y no rectificaba sus políticas, fue el *sutil* mensaje enviado por Duhalde para éste como para el resto de los líderes peronistas⁴⁸.

⁴⁶ Bonasso, Miguel (2002). Op. Cit., págs. 298 y 299.

⁴⁷ Ib., pág. 301.

⁴⁸ "Yo vengo sosteniendo -decía Duhalde- desde hace mucho tiempo que la última estación después de la recesión y la depresión era la anarquía y el caos. Yo temo a hechos muy violentos, a una especie de guerra civil en la Argentina. Yo fui criticado porque

De esta manera, Rodríguez Saá, desesperado por salvar los restos de su gobierno -el cual comenzaba a escurrírsele entre los dedos- debió capitular ante los gobernadores peronistas. Para eso pidió la renuncia a todos sus ministros y funcionarios. Estaba dispuesto, ahora sí, a hacer el “trabajo sucio” que anteriormente se había negado a realizar: principalmente devaluar, pero también detener la impresión de la nueva moneda (el Argentino)⁴⁹, convocar a elecciones en marzo y a rearmar todo su gabinete con los hombres que los gobernadores dispusiesen. Rodríguez Saá ahora sólo pedía a cambio el apoyo suficiente para continuar como Presidente.

Durante la tarde del sábado, Rodríguez Saá recibió respuestas dubitativas por parte de algunos, el apoyo de otros y la falta de respaldo de otro tanto. Por lo cual, para forzar las definiciones y dejar en evidencia quiénes estaban dispuestos a apoyar su continuidad y quiénes no, decidió convocar a una cumbre para el día domingo. A ella deberían concurrir quiénes estuvieran decididos a darle su firme respaldo para continuar gobernando. Las ausencias, en cambio, marcarían de manera pública quiénes le habían soltado la mano y querían ver caer el sueño puntano⁵⁰.

Tras el pedido de varios gobernadores, la reunión no se realizaría ni en la Casa de Gobierno, ni en la Quinta Presidencial de Olivos, sino en el complejo vacacional presidencial de Chapadmalal (provincia de Bs. As.). El temor de algunos gobernadores a tener que enfrentarse a manifestaciones populares contra “los políticos” en una cumbre en la cual se hallarían los principales líderes institucionales del país fue el principal motivo que justificó el lugar del encuentro.

Tras llegar al chalet presidencial de Chapadmalal con las primeras horas del *domingo 30 de diciembre*, tras la intención de salvar su gobierno, Rodríguez Saá se encontró con 2 sugerentes novedades. La luz del complejo presidencial había sido cortada (la cual no se reestableció durante toda la noche) y los partes policiales de los servicios de inteligencia se habían interrumpido durante varias horas⁵¹.

Pasado el mediodía del domingo comenzaron a arribar los primeros gobernadores peronistas dispuestos a apoyar la continuidad del puntano. Para desgracia de Rodríguez Saá sólo asistieron 3 de los 14 mandatarios provinciales del PJ para darle un apoyo *genuino* (Ángel Mazza -de La Rioja-, Carlos Rovira -Misiones- y Gildo Insfrán -Formosa-). Los otros dos que concurren no podían

desde hace tiempo vengo diciendo que de la depresión es fácil saber cómo se sale, de la recesión es mucho más fácil, pero del caos ya no sabemos cómo se sale. Es imperioso hacer que los espíritus se vayan cambiando, que los gobiernos no se equivoquen, no se puede hacer cualquier cosa. Creo que el Presidente [Adolfo Rodríguez Saá] va a escuchar y estoy convencido de que va a rectificar políticas”. “Duhalde teme que se produzca una guerra civil” *La Nación* (29/12/2001) edición online, *Página 12* (30/12/2001).

⁴⁹ *Clarín* (29/12/2001).

⁵⁰ *Clarín* (30/12/2001), *La Nación* (30/12/2001), *Página 12* (30/12/2001).

⁵¹ Bonasso, Miguel (2002). Op. Cit., pág. 305. Ver también la copia del expediente judicial en la cual declaró Rodríguez Saá en la pág. 334.

otorgar un certero respaldo político para Rodríguez Saá, dado que uno de ellos era Alicia Lemme (recién asumida) proveniente de San Luis (la propia provincia de Rodríguez Saá), mientras que el otro fue Carlos Ruckauf, quien asistió sólo para evitar suspicacias (era evidente para todos que no prestaba su verdadero apoyo al puntano, ya que los peronistas bonaerense querían a Rodríguez Saá fuera de la presidencia). Existió además un sexto respaldo provincial, aunque también espurio. Se trató de Sergio Acevedo, representante del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Aun en el mejor de los casos, Rodríguez Saá sólo logró el respaldo de 6 de los 14 gobernadores peronistas⁵². Como era de esperar, tampoco asistieron gobernadores radicales. Esto era un evidente fracaso y la muestra más clara de su debilidad política.

La ausencia inocultable de las mayores figuras del PJ hizo patente el abandono y aislamiento con los cuales contó Rodríguez Saá. Ni Reutemann, Menem, De la Sota, Romero, Duhalde, Kirchner o Rubén Marín habían asistido al encuentro⁵³.

Tras comprender su soledad y falta de respaldo para proseguir como Presidente, Rodríguez Saá decidió renunciar y regresar a San Luis -el único lugar donde verdaderamente se sentía seguro- a transmitir su decisión por televisión. Sin un apoyo fuerte del peronismo, Rodríguez Saá debió ponerle fin a su proyecto de perdurar hasta 2003 o -siquiera- hasta marzo de 2002.

Sin embargo, no todo terminó allí. Al intentar abandonar el complejo de Chapadmalal la tarde de ese domingo, la custodia presidencial le advirtió al renunciante presidente que debido a una protesta que se estaba realizando en la puerta del complejo su seguridad no podría ser garantizada y que la evacuación del chalet debía ser inmediata. Por lo cual, Rodríguez Saá debía retirarse en helicóptero, tal como había hecho De la Rúa 10 días antes. Rumores sobre posibles nuevos saqueos en la provincia de Buenos Aires habían más que asustado al puntano.

Tras sobrevolar el complejo presidencial en el helicóptero en el cual era trasladado, Rodríguez Saá pudo verificar que la “peligrosa manifestación” que le impedía a su custodia darle las garantías necesarias era tan sólo un pequeño grupo de no más de 30 personas. Esto le sirvió para caer en la cuenta de lo que sucedía, así les gritó a los gobernadores que todavía no habían partido de regreso a sus provincias: “Si los de Buenos Aires quieren tanto el poder, que se lo queden. Yo me voy a San Luis a *cacerolear*. Vean cómo se arreglan ustedes”.

Con su llegada a San Luis, dio un discurso en televisión como si fuera transmitido por un canal de cable de mala calidad. Allí, recapituló los principales logros de su corta gestión como presidente. De la cuál se enorgullecía de decir que se habían hecho más cosas en 7 días que durante los últimos 30 años. Luego de comentarios autoelogiosos, se dedicó a hablar de sus compañeros de partido: “Salvo los gobernadores peronistas de Formosa, Salta, San Luis, Buenos Aires, Misiones y La Rioja, los demás me han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba, quien priorizó la interna partidaria a los intereses de la Patria”.

⁵² *Clarín* (31/12/2001).

⁵³ *Página 12* (29/12/2001) y, (30/12/2001), *La Nación* (30/12/2001) y (31/12/2001).

Con la emisión de éste mensaje final, Rodríguez Saá sepultó sus días como Presidente de la Nación, de la misma manera en que el Frente Federal fue sepultado como actor político de relevancia al interior del peronismo.

Tras estar el menemismo invalidado para asumir el cargo presidencial, el camino quedó totalmente despejado para que la tercera gran fracción del peronismo tomara las riendas de la situación, llevando a su jefe a la máxima magistratura de la nación: Duhalde por fin sería designado como Presidente.

Conclusión: el final de las sonrisas y del Frente Federal

El final de Rodríguez Saá fue tan rápido como su ascenso a la presidencia del país. Una vez presentada su renuncia ésta fue aceptada de forma inmediata por la Asamblea Legislativa. Los métodos que lo forzaron a poner fin a su presidencia fueron leídos por todo el arco político argentino que comprendió perfectamente cómo se hallaban estructuradas las relaciones de poder bajo esas circunstancias, quedándose sin más armas en la mano para imponer o negociar condiciones. Todo el peso de la estructura bonaerense, como tantas veces había ocurrido en la historia argentina, había vuelto a derrotar a los gobernadores del interior del país.

Así, tras la renuncia de Rodríguez Saá, el Frente Federal se desvaneció para siempre como polo de poder al interior del peronismo. La prueba más acabada de esto fue la actitud llevada adelante por uno de sus principales líderes, Ramón Puerta. Éste, que había sido un gran articulador dentro del *Frente* y quien había logrado que las provincias *chicas* lograran imponer sus designios (y, sobre todo, los hombres) sobre los cuales transitaría el sendero político-institucional del país, comprendió mejor que nadie el peso de los condicionamientos frente a los cuales se hallaba. Los márgenes de negociación y de posibilidad de acción se habían extinguido completamente. El mismo Ramón Puerta debió renunciar a su cargo en el Senado, explicando de manera clara lo que había sucedido: “[Con la designación de Rodríguez Saá] no acertamos con la persona adecuada [desde el Frente Federal] [...] Fueron pasando los días y hubo designaciones poco felices, se cortó el diálogo con el Frente Federal y el Senado. No se hablaba de votar el 3 de marzo, sino de cosas que eran para diez años de gobierno [...] Obviamente se paga un costo político por la renuncia de Rodríguez Saá [...] Aunque las provincias grandes se impusieron a las chicas, no le podemos echar la culpa. Tuvimos una serie de desaciertos y se nos fue la mano”.⁵⁴

Con el semblante de los acontecimientos que debió enfrentar Rodríguez Saá, Ramón Puerta no tuvo más opciones que sucumbir frente al poder bonaerense. Su renuncia a la presidencia del Senado de la Nación siguió de manera inmediata a la que presentó Rodríguez Saá la misma tarde del *domingo 30*. Los hombres del Frente Federal estaban acorralados, sin otro camino más que capitular. La buena imagen que había sabido cosechar Rodríguez Saá durante sus

⁵⁴ *La Nación* (04/01/2002). Edición *online*.

primeros días como Presidente también se había comenzado a desmoronar en las encuestas⁵⁵.

Luego de la dimisión de Puerta, la presidencia de la Nación recayó sobre quién era el siguiente nivel en la línea sucesoria, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Un duhaldista acérrimo. Puerta comprendía perfectamente las consecuencias de su acción. Es más, fueron ellas las causantes de su renuncia. Dado que con la asunción de Camaño, la llegada del duhaldismo al Gobierno se volvió un hecho indetenible⁵⁶. Se marcó a partir de aquí una nueva etapa en la historia del país y de la lucha interna del peronismo, que contemplaría el fin de la convertibilidad y el comienzo de un profundo viraje. Se conformó a partir del peronismo un nuevo vértice gubernamental, originando así una nueva coalición de poder.

⁵⁵ *Página 12* (30/12/2001).

⁵⁶ *La Nación* (31/12/2001).

El “cacerolazo” del 8 de noviembre

Norma Giarracca *

Miguel Teubal **

*Tomás Palmisano****

Julieta Godfrid *

María de la Paz Acosta *

La especificidad del "cacerolazo" del 8 de noviembre de 2012 es de difícil categorización. Tiene complejas condiciones de contorno que lo diferencia de otras protestas, sobre todo de las ocurridas durante 2001-2002. Después de una elección donde la presidenta Cristina Kirchner logra el 54% de los votos, el gobierno despliega políticas públicas que irritan sobre todo a los sectores medios de la sociedad. Asimismo una decisión de la Corte Suprema de Justicia pone en la agenda pública la posibilidad de la aplicación plena de la Ley de Medios Audiovisuales y esto profundiza el enfrentamiento del grupo mediático y concentrado Clarín con el Gobierno. Los sectores medios muestran disconformidades desde mediados de año hasta que finalmente salen masivamente a comienzos de noviembre. En este trabajo se indagan las razones de esta salida masiva y se busca comprensión de una preocupación institucional que aparece en los manifestantes muy relacionada con los discursos de políticos y medios opositores.

El anexo pueden consultarse en <http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=4215>

Palabras clave: Protestas - Razones para salir a la calle - Protestas en democracia - Política de calle - Políticas institucionales

* Sociólogas del GER-GEMSAL, Instituto Gino Germani UBA (www.ger-gemsal.org.ar).

** Economista del GER-GEMSAL, Instituto Gino Germani UBA.

***Politólogo del GER-GEMSAL, Instituto Gino Germani UBA.

The "cacerolazo" of November 8th

The "cacerolazo" of November 8th, 2012 is difficult to categorize due to the complex environmental conditions that differentiates it from other protests, in particular those that occurred in 2001/2002. After an election in which Cristina Kirchner obtained 54% of the vote, the government developed a series of policies that particularly irritated middle class sectors of society. Apart from this, a decision made by the Supreme Court of Justice put on the public agenda the possibility that the Ley de Medios Audiovisuales (Law regulating the audio-visual media) be fully applied, a factor that enhanced the confrontation between the Government and the concentrated media group Clarin. Sectors of the middle class showed their disconformities all along the year 2012 until they openly protested massively at the beginning of November. In this paper we investigate the reasons for this massive protest and we try to understand the extent to which the institutional concerns of the protesters appear to be highly related to the political and media discourse of sectors of the opposition.

Key words: Protests - Reasons to go out into street - Protests in democracy - Street politics - Institutional policies

Fecha de recepción: diciembre de 2012

Fecha de aceptación: diciembre de 2012

Introducción

El gobierno de Cristina Kirchner se caracterizó desde sus comienzos en 2007, por girar alrededor de confrontaciones convertidas, con el tiempo, en conflictos con involucramiento de terceros actores. Al poco tiempo de comenzar su mandato, en marzo de 2008, una resolución sobre la posibilidad de las retenciones móviles a las exportaciones, condujo a un enfrentamiento que duró cinco meses con actividad intensa y un resabio que llegó a las elecciones de “medio término” de 2009 (véase Giarracca y Teubal, 2010). Imbricada con esta confrontación comienza una serie de enfrentamientos de mucha exposición pública con los grupos hegemónicos de los medios audiovisuales, sobre todo con el Grupo Clarín, que con la ley de Servicios Audiovisuales (que analizaremos más adelante), llega hasta la actualidad. En estas dos confrontaciones con grupos empresariales nacionales (las corporaciones agrarias y los dueños de medios) la sociedad civil no quedó al margen y tomó partido de uno u otro lado según se fueran desarrollando las circunstancias.

A las marchas y cacerolazos de 2012, débiles al comienzo, excepto los del 13 de septiembre y el 8 de noviembre marcado este último por la significación numérica en todo el país y en otras ciudades del mundo, los incluimos en este ciclo cuyas condiciones de contorno están dadas alrededor de estas confrontaciones del gobierno con grupos empresariales. Con esto no deseamos restarles significación ni autonomía relativa; no obstante, después de elecciones presidenciales con el 47% de los votos en 2007 y 54% en 2011, la masiva e inmediata salida a la calle de poblaciones disconformes con las políticas del gobierno sólo pueden comprenderse en un contexto más amplio que incluya a un conjunto de actores más allá de los sujetos de la protesta civil.

Los sentidos, formatos y reclamos de las protestas de 2008 que acompañaron en importantes ciudades a los cortes de ruta de las entidades agrarias, los hemos analizado en un trabajo que llega hasta las elecciones de 2009, cuando el expresidente Néstor Kirchner, que encabezaba la lista del Frente para la Victoria (FpV), pierde las votaciones en la provincia de Buenos Aires, centro importante del paro agrario (véase Giarracca y Teubal, 2010, particularmente Castro García, Comelli y Palmisano).

Nos proponemos en este trabajo comprender estas nuevas protestas de 2012 que, a nuestro juicio, se relacionan con la confrontación del gobierno con el Grupo Clarín. En efecto, después de sancionada la ley de Servicios Audiovisuales, el grupo empresarial emprendió distintas acciones judiciales cuyos significados y consecuencias explicitamos en una apartado posterior (“Institucionales”). El campo de conflicto Gobierno-grupo mediático se tensiona y recordemos que los que están en el juego son los empresarios de los medios de comunicación que diariamente llegan a gran parte de los hogares del país tratando de formar opinión. No estamos afirmando que la relación con esta situación sea causa directa y unívoca de las protestas pero establece unas condiciones de contorno que no podemos desconocer.

Lo primero que deseamos dejar claro es que tanto las protestas urbanas de 2008 como las de 2012, se diferencian del ciclo de protestas de la década de

1991-2002 y de las protestas socioterritoriales (defendiendo territorios frente a la actividad extractiva) que se han desarrollado significativamente en lo que va de este siglo XXI (Pueblos Indígenas, Poblaciones Cordilleranas). Todas las anteriores conforman un campo conflictual dentro del capitalismo argentino y de su siempre precaria representación política partidaria que involucra pérdida de derechos y búsqueda de salidas para todos desde diversas demandas “universalizables” (no sectoriales). En este sentido, podríamos afirmar que son protestas que contienen lo que algunos politólogos denominan “pueblo” o simplemente un bloque social que de una u otra manera confronta al capitalismo neoliberal/ saqueador/ contaminante/ polarizante. Las protestas de 2008 y las de 2012, expresan malestar de una ancha franja de sectores medios que mantienen solidaridad con determinados grupos empresariales. Tanto la no aceptación de una resolución de impuestos para un grupo agrario como el reclamo de falta de institucionalidad como centro de un discurso de un grupo que puede ver afectado su patrimonio por una ley de la Nación, son demandas sectoriales y ambas cuestiones estuvieron en juego. Esta es una diferencia muy importante y que debe tenerse en cuenta para el análisis.

Para corroborar algunas de las hipótesis que guiaron nuestro acercamiento a estas protestas, emprendimos un trabajo de campo que incluyó una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Tucumán y La Rioja, etnografías realizadas por los mismos profesionales que encuestaron, y material audiovisual de diferentes grupos que decidieron registrar en imágenes y entrevistas esta protesta del 8 de noviembre de 2012.¹ Además presentaremos los distintos contextos que rodearon estas protestas: las medidas económicas tomadas por el Gobierno durante 2012; los cambios institucionales que molestaron a parte de la población y las modificaciones en las condiciones de contorno entre 2008 y 2012 que marcaron un clima donde los grupos y los partidos de centroderecha se sintieron identificados y hasta llegaron a estimular estas protestas.

Condiciones macroeconómicas-institucionales

a) *Económicas*

Cuando estalló la crisis mundial en 2008 en círculos oficiales de nuestro país se insistió en que no debíamos preocuparnos, el caudal de divisas que fue acumulado a lo largo de la década nos permitiría enfrentar la crisis con efectividad. Se pensaba que la Argentina estaba lo suficientemente blindada como para poder abordar con eficacia la coyuntura económica internacional que comenzaba a asomarse precipitadamente en ese año. Asimismo, el precio de la soja y de otros *commodities* -luego de una caída temporal en el año 2008- siguió en alza en los mercados internacionales y reforzó la noción de que ésta sería la

¹ Agradecemos mucho a quienes colaboraron con la encuesta en diferentes lugares del país: Ana Isabel Rivas y su equipo en Tucumán, Carlos Ruiz y Claudia Illanes en La Rioja, Graciela Ferrario en Vicente López, Cristina Giarracca en Ramos Mejía, Isabel Medina en Olivos y la etnografía de Claudia Timoner en Mendoza. Sin la colaboración de todos ellos, nuestro corpus de investigación hubiese sido muy limitado.

garantía para mantener los superávits de la balanza comercial y fiscal sostenidos desde 2003.

Sin embargo, hubo varios factores que no se tomaron en consideración, y que habrían de repercutir significativamente sobre nuestra realidad económica: a) *la fuga de capitales*: si bien este factor fue una constante a lo largo de la década de 2000, en el año 2008 adquiere mayor intensidad. Se trata de un fenómeno no siempre predecible que limita el superávit comercial y fiscal; b) *el aumento de las importaciones de productos petrolíferos*, por una parte, y *las medidas que redujeron nuestras exportaciones al Brasil*, y a otras partes del mundo en general, por la otra.

Este conjunto de factores indujeron al gobierno argentino a tomar una serie de medidas, entre las cuales se destacó el “cepo” al dólar y las diversas restricciones a las importaciones. Lo que primero comenzó a implementarse fueron distintos tipos de controles a las importaciones para desembocar, hacia fines de 2010, en un convenio con 11 compañías automotrices para compensar, uno a uno, esas importaciones con exportaciones equivalentes.

Asimismo, frente a la fuga de divisas que significaba una reducción de las reservas fueron adoptándose diversas medidas. Hacia fines de noviembre 2011 se establece un freno a la salida de capitales con la obligación de las petroleras y mineras de ingresar al mercado local las divisas provenientes de sus exportaciones. Hasta entonces no existía esa normativa, y estas empresas tenían la plena libertad para disponer de ellas.

Pero la medida que más impactó sobre gran parte de la opinión pública fue el control que adopta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la compra de moneda extranjera el 31 de octubre de 2011. Hasta entonces los únicos controles lo constituían la exigencia que se le hacía a empresas y particulares de anunciar 10 días antes toda compra de divisas mayor de US\$ 500.000. Por la Resolución General de la AFIP 3210/11 se estableció una normativa según la cual cada vez que una persona o empresa requería la compra de divisas debía obtener un permiso del organismo recaudador que se basaba sobre su situación patrimonial (aunque no fue explicitado concretamente el mecanismo de evaluación de cada caso). A partir de allí el Banco Central y otras entidades emitieron cerca de 23 normativas que implicaban restricciones para la compra de dólares para atesoramiento, pago de inmuebles y recargos del 15 por ciento para operaciones en el exterior con tarjetas de crédito y débito. En términos generales fueron medidas que más allá de su intención regulatoria tendieron a dar un halo de arbitrariedad a normas cuyo cumplimiento dependían de las resoluciones adoptadas por determinados funcionarios públicos.

Como es sabido, históricamente el dólar operó en nuestro país como refugio para los ahorros de gran parte de la población. Pero esto no ocurría en vano, tenía que ver con el proceso inflacionario y la expectativa de que si los precios internos aumentaban a una tasa mayor que la devaluación del peso, tarde o temprano el gobierno tendrá que devaluar. Esto a su vez, inducía a una mayor demanda de dólares y al aumento de la fuga de capitales. Si bien, mucha gente que manejaba grandes capitales tenía formas diversas para hacer frente a sus requerimientos de divisas extranjeras, esto no ocurría con los pequeños aho-

rristas, para quienes la compra de dólares siempre fue la forma más fácil y accesible para enfrentarse al proceso inflacionario. Según datos oficiales el 45% de los compradores de moneda extranjera demandaban menos de US\$ 10.000 por mes.

La fuga de capitales tiene distintas dimensiones y grados. El economista Alfredo Zaiat publicó datos sobre las 20 personas que más dinero giraron al exterior entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 2011. En promedio estos individuos transfirieron más de diez millones de dólares cada uno. Asimismo, presentó el listado de las 20 empresas que más dólares compraron para atesoramiento por más de 18 millones de dólares cada una (Zaiat, 2012). Esto refleja cómo la fuga de capitales que realizan los grandes compradores supera enormemente a la que realizan los pequeños ahorristas. Es por ello que al aplicarse indiscriminadamente la restricción a la compra de dólares no se tomó en cuenta los perjuicios que pudiera generar entre los pequeños compradores. Esto fue el anclaje al malestar que expresó una parte importante de los participantes de las marchas del 13 de septiembre y el 8 de noviembre.

La fuga de capitales se intensificó en las diversas crisis de los últimos tiempos, tales como la crisis del campo y los escenarios de incertidumbre que normalmente rodean a las elecciones presidenciales. Se pensó que después de las votaciones sobrevendría indefectiblemente un ajuste, en parte debido a la inflación pero fundamentalmente por la fluctuación creada en torno a posibles medidas de gobierno tras la elección. En este punto contribuyeron muchos economistas ortodoxos con acceso fácil a los medios, quienes señalaban que era inevitable que después del acto electoral el gobierno tomara las “medidas de ajuste que correspondían”.

Sin embargo, uno de los elementos importantes que induce esta fuga de capitales, aunque sea en forma indirecta, lo constituye el proceso inflacionario. En su momento el debate en torno a éste fenómeno tuvo que ver con determinar a cuánto ascendía la inflación, si al 10% anual como sostenía el INDEC y el gobierno, o una cifra mucho mayor. Tanto las estimaciones incorporadas al crecimiento del PIB o sea los precios implícitos del crecimiento del PIB como las estimaciones provinciales registraban una cifra del orden del 20%. Por su parte, las paritarias fueron cerrándose con un alza promedio cercana al 25 por ciento.

La coyuntura económica dificultosa indujo una caída del crecimiento del producto y de la actividad económica en general, y una retracción o por lo menos un estancamiento en la creación de empleo. Podríamos también suponer una tendencia similar en lo que respecta al salario real, también afectado por el proceso inflacionario. Las estimaciones oficiales del crecimiento del producto que se realizaron en 2012 registraron tasas mucho menores a las del período 2003-2007 (que habían rondado el 8-9% por año). En los primeros nueve meses de 2012, la expansión del producto fue del 2,1% en comparación con el mismo período del año 2011. Según datos del INDEC, la industria bajó 4% en forma interanual, la construcción un 5,2%, las exportaciones un 12% y las importaciones un 14%. En septiembre, la industria se vio arrastrada por las fuertes caídas del sector automotor (-13,7%) y la siderurgia (-11,6%). No obstante, el sector acumula un crecimiento de 2,3%, y se esperaba terminar el año creciendo 4 y 5 puntos porcentuales. En el sector de la construcción prevalece una situación

preocupante. La caída de septiembre fue de 5,2% y el acumulado del año muestra un retroceso de 2,4 por ciento.

En este contexto, el problema más importante que se manifestaba y que tendía a perpetuarse dentro del marco de la puja sectorial, era el proceso inflacionario. Se intentaron varias explicaciones contrastantes entre sí que responden a determinados intereses. Para los economistas del *establishment* la inflación es producto de la “emisión monetaria” y del “déficit fiscal”. Los que insisten en esta explicación hacen oídos sordos al hecho de que a lo largo de la década del nuevo milenio no hubo déficit sino sistemáticamente superávits fiscales². El gobierno además buscó mantener un alto nivel de la demanda global, mediante subsidios y transferencias de ingresos a sectores de bajos recursos, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. De todos modos la inflación siguió siendo impulsada por factores estructurales, entre los cuáles se destacan: el alza de los precios alimentarios, como consecuencia del aumento de precios de los *commodities* en los mercados internacionales; factores internos vinculados con el alza de los precios orientados a sectores de altos ingresos (las prepagas, colegios privados, etc.) y la creciente monopolización de la economía a causa de la mayor concentración y centralización del capital en el nivel interno, lo que induce al empresariado a aumentar sus precios en vez de aumentar la inversión, a medida que se acerca al nivel de plena ocupación de la capacidad instalada. El factor *económico* no constituye necesariamente el principal agente que habilitó al 8N, no obstante no debe menospreciarse como factor de contorno.

b) Institucionales

Los núcleos de sentido que aparecían en las encuestas, cánticos y reclamos a lo largo de toda la marcha tenían numerosas referencias a variables institucionales que en la mayoría de los casos tenían como horizonte de cumplimiento el corto y el mediano plazos. En otras palabras, más allá de los llamados a recuperar la “república perdida”, los temas que preocupaban a la generalidad de quienes protestaron el 8 de noviembre, se vinculaban con demandas puntuales. En este caso nos interesa destacar tres de ellas: la problemática de la libertad de prensa y su relación con la plena aplicación de la “ley de medios” a partir del 7 de diciembre; la re-reelección y la reforma constitucional necesaria como elemento de extensión de la figura presidencial que encabeza el gobierno frente al que se protesta y por último, la reforma del Código Civil que implica la introducción de ciertas políticas vinculadas con las adopciones, las minorías sexuales, etcétera.

Quizás el primero de los temas (la libertad de expresión, las referencias a la ley de medios y el “7D” como *alter ego* de la marcha de noviembre) sea aquel donde la influencia de los medios masivos de comunicación se notó más profundamente. Desde su sanción en 2009, la ley 26.522 de Servicios de

² También puede observarse la tremenda emisión monetaria generada por los aportes de la Reserva Federal estadounidense y los bancos centrales europeos al sistema bancario internacional para apuntalarlo frente a los embates de la crisis, y sin embargo no hubo inflación en los países centrales.

Comunicación Audiovisual se convirtió en un espacio de disputas entre el Grupo Clarín y el Gobierno nacional, dificultando de alguna manera el reconocimiento de los verdaderos alcances de una ley que venía siendo reclamada y trabajada por distintos sectores desde el retorno de la democracia. El punto crítico para el multimedio más importante de la Argentina es aquel que marca un límite a la concentración del mercado de los medios de comunicación fijando un máximo de 10 licencias de televisión abierta, radios y servicios de suscripción con utilización de espectro y 24 licencias de televisión por suscripción, número muy inferior a la cantidad que posee el Grupo Clarín. Paralelamente el resto de los grupos de medios que también exceden los límites de la normativa tampoco han cumplido con la ley³.

De esta manera, la ley busca moderar dos de los factores más importantes en torno de los cuales gira el sistema de los medios masivos de comunicación: la articulación de la agenda pública y la absorción de la pauta publicitaria. La concentración del mercado pone en evidencia las dificultades de mantener un medio de comunicación en la Argentina dónde sólo los canales líderes logran captar los anunciantes necesarios para obtener amplias ganancias mientras “[...] de las cinco mil estaciones de radio que funcionan en el país, menos del 5% se autofinancia con publicidad” (Becerra, 2009). La puesta en vigencia de la ley obligaría a que varias de las señales que son operadas por el Grupo Clarín y que exceden los límites fijados sean reasignadas, sin embargo una serie de recursos legales han detenido este proceso. A mediados de 2012, la vía judicial llegó a la Corte Suprema de Justicia la cual decidió de manera unánime que el 7 de diciembre del mismo año se vencerían las medidas cautelares solicitadas por el Grupo Clarín para frenar la plena aplicación de la norma y la consecuente adecuación de todos los grupos de medios cuyas licencias excedan la cantidad permitida⁴.

Esta ley de avanzada que amplía las reglas básicas del juego de la comunicación en la Argentina queda tensionada desde múltiples aristas pues no sólo existe la disputa con el Grupo Clarín sino también una reconfiguración de los medios de gestión estatal. Por un lado esta política ha fortalecido la ampliación de contenidos en los medios oficiales enriqueciendo la programación mientras que por el otro, el uso particular que han tenido ciertos espacios en estos medios dista de la pluralidad expresada por la ley. Es en este tipo de tendencias donde parece anclarse el reclamo sobre la libertad de prensa. A pesar que ésta no está evidentemente afectada⁵, es verdad que los Gobiernos, principalmente el nacional pero también el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

³ Según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Grupo Clarín cuenta con 15 licencias del primer tipo y 237 de la segunda categoría. Si bien esta es la situación más extrema muchos otros conglomerados de medios están por fuera de las restricciones de la ley aunque varios de ellos habían presentado su plan de adecuación para su evaluación (ver AFSCA, 2012).

⁴ El día 6 de diciembre la Cámara Civil y Comercial Federal extendió la mencionada medida cautelar.

⁵ Según el experto en comunicación Martín Becerra en la Argentina no existen amenazas directas a la libertad de prensa (como la clausura de medios o la censura) y el enunciado de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podría morigerar los abusos por parte de los Gobiernos de distinto signo y nivel (Becerra, 2012).

las diversas provincias, utilizan gran parte de estos medios para legitimar ciertas políticas públicas. En este contexto es muy difícil encontrar atisbos de crítica frente a medidas y situaciones problemáticas poniendo en evidencia la dificultad de los poderes políticos para reconocer una pluralidad de voces que, aun cuando pudieran formar parte del mismo espacio político, registren la heterogeneidad de posturas e interpretaciones sobre las derivas de nuestra sociedad.

El segundo eje de referencias giraba en torno de la reforma constitucional y la posibilidad de la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Éste tuvo sus primeras resonancias inmediatamente después del triunfo de la Presidenta en octubre de 2011 cuando algunos periodistas la consultaron sobre la posibilidad de disputar un nuevo mandato a lo que Cristina Fernández respondió considerándolo apresurado e inoportuno. En este sentido, es importante destacar en ningún momento la Presidenta ha manifestado estar a favor de llevar adelante un nuevo mandato sino que han sido personalidades de su entorno o políticos de la oposición quienes han acicateado el debate en torno a dicha temática.

Esta dinámica se expande a comienzos de 2012 cuando se inicia una espiral ascendente de referencias al tema instalado desde algunos sectores del Gobierno. El hecho más resonante ocurre a finales de enero cuando en una reunión de dirigentes del FpV donde se discutía una posible reforma de la Constitución nacional se pidió la inclusión de la re-reelección entre los tópicos. A partir de allí los diversos medios de comunicación le dieron espacio a todo aquel que quisiera opinar sobre el tema extendiendo la atención durante varias semanas.

A mitad de 2012, políticos cercanos al FpV lanzan el “Movimiento hacia una Nueva Constitución Emancipadora” y días después la Casa Rosada, a través de la Escuela Nacional de Gobierno (ENG), anuncia una serie de conferencias para debatir la mencionada reforma. Si bien el tema explícito de la re-reelección suele evitarse en estos eventos, con el correr de los días las acusaciones cruzadas se reavivan con declaraciones de algunos gobernadores y la movilización de la oposición en torno a un tema que siempre se plantea como hipotético. Es interesante destacar que al margen de la posibilidad de extender los mandatos presidenciales, los diversos sectores que plantean la reforma constitucional también refieren a otros puntos tales como las nuevas formas de propiedad; la renacionalización de los recursos naturales, hoy en manos de las provincias; el fortalecimiento de la integración regional; la inclusión del tema de los medios de comunicación; etc. (Rodríguez Niell, 2012 y *Carta Abierta* N° 12).

Las repercusiones de la marcha opositora de septiembre parecieron aquietar las aguas hasta que un grupo de intendentes del FpV aprovecharon una reunión pública con la Presidenta para pedirle expresamente que continuara al frente del gobierno por un nuevo período. La respuesta, al igual que en otras ocasiones, fue la elusión del tema en un escenario de clara incomodidad para Cristina Fernández. Esta situación reavivó la discusión y repercutió con gran fuerza en la marcha del 8 de noviembre pues la semana anterior senadores y diputados de todo el arco opositor firmaron un documento donde se comprometían a no apoyar ningún intento de reforma constitucional. La cantidad de legisladores firmantes en ambas cámaras aseguraría que cualquier proyecto al

respecto fuera descartado, al menos hasta las próximas elecciones donde la composición de las mismas puede cambiar.

Finalmente cabe mencionar el tema de la reforma del Código Civil impulsada por el Poder Ejecutivo. A finales de marzo de 2012 se presenta un anteproyecto que unifica el Código Civil y el Comercial tratando de recoger las reformas hechas a lo largo de los años. Este proyecto fue redactado por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por la ex jueza suprema mendocina Aída Kemelmajer y propuesto en su forma acabada al Senado para su tratamiento a inicios de julio.

La voluntad del oficialismo era contar con la aprobación del nuevo código antes de fin de año, sin embargo la expansión del debate a partir de las audiencias públicas en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias mostraron la complejidad de reformar las normas que rigen sobre los más heterogéneos aspectos de la vida de las personas. En estas instancias, la Comisión Bicameral creada para la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial recogió más de mil ponencias en la que se expresaban acuerdos pero también divergencias desde los más diversos puntos del espectro ideológico e institucional⁶. Esta situación pone en evidencia tanto la riqueza de una reflexión amplia como lo problemático de fijar plazos expeditivos para un cambio institucional de tamaño magnitud. Al parecer las numerosas observaciones han logrado hacer carne entre los legisladores de manera que su dictamen ha sido postergado al menos hasta marzo de 2013.

En lo que respecta a las referencias recogidas en las encuestas del 8 de noviembre, la mayoría reenvían a críticas sobre los cambios en las figuras legales vinculadas con la familia, la adopción, el aborto⁷, etc. A pesar que muchos de los cambios propuestos para el Código ya fueron institucionalizados en leyes anteriores, la idea que parece estar por detrás de las expresiones de manifestantes es la de una familia tradicional, fuertemente anclada en la concepción católica. Estas expresiones definitivamente no pueden dar cuenta de la heterogeneidad de vínculos de la sociedad contemporánea y se aferran a la premisa que tiene a la familia tradicional como base y que aún tiene bastante fuerza en vastos sectores de la sociedad.

Raras condiciones de contorno

Las protestas que acompañaron el conflicto “del campo” en 2008 y las de 2012, guardan ciertas semejanzas pero se diferencian significativamente en

⁶ Las objeciones más interesantes y disruptivas estuvieron vinculadas con la problemática del acceso a la vivienda, el agua y otros recursos naturales, como así también la legislación sobre los territorios de los pueblos originarios. En este último punto, los reclamos se vinculaban con la falta de una consulta previa, libre e informada tal y como lo marcan los convenios internacionales; el reconocimiento de las comunidades como personas jurídicas de carácter público y no del derecho privado; el desconocimiento del *status* de pueblos para los indígenas pues el Código sólo refiere a comunidades; la no consideración de la identidad, cosmovisión y tradiciones de los pueblos originarios en el concepto de “propiedad comunitaria indígena”; etcétera.

⁷ Este proyecto, al menos en el estado actual, no modifica sustancialmente la legislación en torno del aborto pues sigue considerando el momento de la concepción en el seno materno como el inicio de la persona humana.

cuanto al cambio de las condiciones de contorno. Sostenemos en este trabajo que después de las rebeliones de 2001-2002, cuando la sociedad se mostró indignada y solidaria con los más damnificados, se lograron neutralizar por algunos años los discursos de tinte neoliberal, conservador y de derecha. Los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) aprovecharon estos climas sociales para desarrollar una de las políticas más importante de su mandato: retomar el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y comenzar un proceso de memoria, verdad y justicia. Pero no sólo la política de derechos humanos caracterizó el período sino que también los movimientos sociales que venían luchando por derechos sociales e identitarios, aprovecharon la coyuntura para demandar políticas públicas y las fueron consiguiendo. Por otro lado, la relación entre el Presidente y el Grupo Clarín no mostraba públicamente fisuras y si bien, el gobierno soportó una multitudinaria marcha convocada por un padre que había sufrido el secuestro y asesinato de su hijo para lograr sanciones más duras a los delitos que involucraban menores (pobres), fue pasajera en cuanto se puso de manifiesto el sectarismo e insolidaridad del sujeto en cuestión⁸.

Si bien el cambio de Presidente en 2007 presagiaba transformaciones institucionales y de gestión, a nuestro juicio el clima del 2003-2007, no se había modificado en lo esencial. Clarín había tomado distancia de la Presidenta pero no se le había enfrentado aún; la corporación militar resentida por los juicios seguía bajo el mando de dos mujeres que no dejaban margen a expresiones de descontento, la Ministra de Defensa, Nilda Garré y la Presidenta. Es cierto que la esposa de un militar acusado de crímenes de lesa humanidad recorría los programas más retrógrados de la televisión (*Hora Clave* de Mariano Grondona) pero no tenía mayores consecuencias. La Iglesia seguía expectante con el gobierno que la amenazaba en algunas creencias (el matrimonio tradicional) pero que le garantizaba un límite con la cuestión del aborto. Mauricio Macri y su partido no pasaban las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires, resentida con el gobierno de los Kirchner. Por último, otro bastión de la derecha recalcitante de este país, la Sociedad Rural Argentina (SRA), convertida en un agente económico subordinado al "agronegocio", no asomaba más allá de sus exposiciones anuales y de su casona de la calle Florida. Luciano Miguens, presidente de la entidad desde 2002, era considerado un hombre de bajo perfil, negociador y que se sentía "perdedor" dentro del modelo sojero.⁹

Durante los cuatro años transcurridos entre 2008 y 2012 ocurrieron un número importante de acontecimientos que, por un lado, facilitaron el aumento de la imagen positiva de la Presidenta y la condujeron a su reelección en 2011 (los festejos del Bicentenario, la muerte de su compañero y expresidente Néstor Kirchner), y por otro generaron condiciones que evaporaron ese clima sin espacios a la expresión de esas derechas recalcitantes que, como síntoma, siempre reaparecen en la historia de nuestro país. La Iglesia de derecha comienza a sentirse francamente amenazada después de los logros de la comunidad

⁸ Se trató del caso de Juan Carlos Blumberg conocido por convertir el asesinato de su hijo en medidas públicas que endurecieron las penas a menores en conflicto con la ley.

⁹ En una clase pública a fines de 2005 frente a la sede en la calle Florida de la SRA, Luciano Miguens en persona salió a dialogar con los alumnos y se caracterizó de ese modo.

homosexual y el avance en el debate sobre el aborto legal; Mauricio Macri en alianzas con otros personajes de la política de centro-derecha logran cierto conocimiento en el nivel nacional; el Grupo Clarín desata una guerra mediática contra el gobierno, la corporación militar comienza a mostrar mayores desacuerdos con el gobierno central frente al cambio del Ministerio de Defensa y la SRA pasa a manos de un hombre de la línea más conservadora y golpista, Hugo Biolcati.

En estas condiciones de contorno entre el 13 de setiembre y la preparación del próximo cacerolazo comienzan a emerger grupos de redes sociales, de blogs que se atribuyen la preparación, consignas, decisión de lugares de encuentro de la manifestación. En efecto, el cacerolazo del 8 de noviembre se preparó desde algunos meses atrás y fue el producto de una serie compleja de coordinaciones que incluyen redes sociales, blogs, fundaciones y medios de comunicación. El primer punto que debe señalarse es que existieron por lo menos tres fechas propuestas para realizar la segunda movilización después del 13 de setiembre y finalmente alrededor de 50 grupos de Facebook y administradores de blogs se pusieron de acuerdo respecto de la fecha 8 de noviembre y de los puntos de encuentro desde donde partiría la movilización. Se propusieron 152 lugares en la Argentina, y 56 en el resto del mundo. Los sitios que más se destacaron respecto de la convocatoria fueron: “Seremos un Millón”, “El Cipayo”, “Movimiento de Argentinos Indignados”, “Yo soy antik”, “Argentina ContraK”, “Yo no vote a la Kretina”, “Jubilados Aportantes”, “Que no te pisen”, “Gorilas antes que planero”, entre otros. Recorriendo dichos espacios encontramos diversas consignas por las que se invita a participar de la movilización, algunas de ellas son: “Basta de Inseguridad, Basta de Corrupción, Basta de Cortar Libertades, Basta de Mentirnos”, “Exigimos una democracia, sin corrupción, sin clientelismo, con seguridad e inclusión real, no a la re-reelección”, “No a la Reforma Constitucional”, “No a la desaparición de opiniones críticas”, “Contra la Impunidad”, “Basta de sembrar odio”, etc. Asimismo se presentan una variedad de diseños de afiches, y se invita a imprimirlos y pegarlos en las calles. Entre algunos de los afiches encontramos consignas como: “La unión es nuestra arma, la paz es nuestra fuerza. 8 N. Todos por una democracia real”; “En todo el país. En todo el mundo. Todos juntos”; “-Basta a la reforma – inseguridad – inflación – impunidad”; “Sin agravios. Sin miedo. En paz”. Cabe resaltar el papel desempeñado por los administradores/as de dichos grupos en las redes sociales y blogs, muchos de los cuales se destacan en la tarea de *marketing*, la comunicación audiovisual, generación de contenidos, organización de eventos, fotógrafos profesionales, diseñadores gráficos que pusieron a disposición su saber hacer experto, su “know how”, que fue imprescindible para lograr la rápida difusión de la convocatoria. Asimismo algunos de estos miembros se destacaron no sólo por el diseño, sino también por el financiamiento de las campañas gráficas que pudieron verse, algunos días antes a la movilización, en la vía pública. Por otro lado, existe una trama de relaciones entre los administradores de estos sitios y una serie de fundaciones, ONGs a las que pertenecen, muy ligadas a la vida empresarial y política del país. Entre las fundaciones cabe mencionar: “Fundación Naumann” de la cual es miembro Patricia Bullrich del espacio político Unión Por Todos, “Fundación Junior Achievement”, “Fundación Libertad y Progreso” de la cual es miembro Ricardo López Murphy, “Fundación

Fragua” presidida por un miembro del espacio político PRO, “Fundación Despertar” que mantiene relación con la SRA, “Fundación Pensar” que es la “usina de ideas PRO” tal cual ellos se definen. Al respecto de los grupos y las ONGs encontramos el “Grupo Político Ceibo”, el “G-25”, y la ONG “Pensando la Argentina” todas referenciadas al espacio político o a personalidades del PRO como la “Solano Lima” -organización dirigida por el legislador Cristian Ritondo quien puso a disposición de la marcha un camión con una gran pantalla que proyectaba videos caricaturizando a personalidades del gabinete nacional-, o el espacio “Argentina Ciudadana” perteneciente a Sergio Bergman, también del PRO. Se distinguen otras ONGs como la Red de Encuentro Ciudadano relacionada con el espacio político de la Coalición Cívica (CC).

Otro de los grupos que pueden destacarse en la convocatoria es el CONASUBAR (Congreso Nacional de Suboficiales Argentinos), que cuenta con la página de internet “bajandolinea” y un canal de televisión *on-line* que se llama “Ligando Cabos” desde los cuales invitaron a participar a la convocatoria con consignas tales como “El 8N salimos a defender nuestra libertad”, “8N Basta de apátridas montoneros terroristas”, “8N, Preparémonos para liberar a nuestros presos políticos” (haciendo referencia a los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar), entre otras. Asimismo forman parte del espacio tanto militares retirados como ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Pero la convocatoria a la movilización del 8 de noviembre no fue sólo difundida por Redes Sociales sino que también contó con la fuerte promoción de grandes medios de comunicación como el Grupo *Clarín* y *La Nación*. Se destacó también una red de agencias de noticias electrónicas como Urgente 24; Seprin, el periódico *Tribuna*, AN54, que son financiados, en parte, con pautas publicitarias otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente las áreas del Instituto de Juegos y Apuestas, el Área de Tránsito, espacio “entérate más” (*twitter* oficial de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires).

La lógica numérica de la manifestación diluyó este entramado pero dos situaciones dan base a la significación que le atribuimos: 1) minutos antes de comenzar la marcha, la cadena internacional mediática más importante del mundo, la CNN, invita “a uno de los organizadores de esta marcha”, Luciano Bugallo, el nombre que más se repite en estas redes, a comentar lo que ocurrirá; 2) unos días después, 30 de estos sujetos se reúnen a evaluar lo sucedido (Eisler, 2012). En definitiva, encontrar muchos sentidos y requerimientos de mayor democracia e institucionalidad en estas marchas no debe borrar este trasfondo que seguramente tiene y tendrá consecuencias en el futuro inmediato.

El día 8N llegó

Después de una semana complicada en la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas que trepaban a 40 grados en eso llamado “sensación térmica” y con cortes de luz en muchos barrios, se presagiaba que ese jueves (día semanal fijado para la marcha) se sumarían nuevos reclamos relacionados con los servicios.

Los medios opositores se cuidaron de no dar de modo insistente el anuncio pero a medida que llegaba la hora, el tema del “cacerolazo” sumaba mayor presencia en ellos. Hemos recogido descripciones de las marchas de varios puntos del país que han realizado los colegas¹⁰ que tuvieron a su cargo las encuestas y que citaremos como si fuesen sus trabajos aunque no respetamos la textualidad por razones de espacio. La excepción son las de la Ciudad de Buenos Aires realizadas por nosotros. Los datos generados por la encuesta ocultan esas sensaciones que recogen los investigadores entrenados que se sumergen en la situación, de allí que estas descripciones complementan los resultados del trabajo cuantitativo.

Uno de los puntos de encuentro más importantes en la **Ciudad de Buenos Aires** fue Santa Fe y Callao. A diferencia de otras concentraciones que en cuanto se sabe que la marcha va a pasar por ahí los comercios cierran sus puertas y bajan las persianas, aquí todos los negocios permanecían abiertos y recibían al público. En las avenidas además de encontrarse la gente que se disponía a manifestar, seguía circulando una masa importante que permanecía en las confiterías, librerías, consumiendo normalmente y sin temores por quienes marcharían.

Algunas personas habían llevado sus carteles contruidos de manera artesanal con papel y marcadores, decían: “Libertad a María Ovando Ya. Cárcel a Boudou”. María Ovando es una mujer de la provincia de Misiones acusada y juzgada por abandono de persona porque su hija murió por desnutrición (sobresaida días después de la marcha). El caso fue recogido por el programa del periodista Jorge Lanata quien llevó su figura como símbolo de la desigual distribución de justicia, de allí la mención al Vicepresidente también procesado. Otro cartel pintado a mano sobre una cartulina color amarillo decía “Jueces resistan, los bancamos” y con la misma estética otro que advertía “Ojo, Ojito 7D cuidadito”. De los cientos de carteles se podía leer: “Con la constitución no se jode”; “No a la inseguridad, corrupción, inflación, re-reelección, presión fiscal excesiva”; “¿Abogada exitosa? ¿Monotributista y pensionada? Jueces federales corruptos tengan pelotas”. Todo esto acompañado de las cacerolas y cucharas a la espera de comenzar a emitir los sonidos. Otra de las cosas que se destacó durante la concentración, fue la presencia de un camión con una pantalla gigante donde se proyectaban videos que ridiculizaban a personalidades del gobierno nacional. El camión estuvo en el lugar alrededor de una hora y luego se movilizó. Con el lento desplazamiento de la marcha también pasaban las horas y alrededor de las diez y media de la noche la movilización comenzaba a desconcentrarse. A lo largo de las cuadras se veía gente de muchas edades, desde muy jóvenes hasta personas mayores, sin embargo por el estilo, la vestimenta, la actitud de cotidianidad en esa parte de la ciudad, todos parecían formar parte de la heterogénea clase media.

Muy diferente y mucho más concentradas fueron las citas en el Conurbano bonaerense. “En **Ramos Mejía Sur** comenzó a juntarse gente en la Plaza Mitre,

¹⁰ Las descripciones fueron realizadas por Ana Isabel Rivas y su equipo en Tucumán; por Carlos Ruiz y Claudia Illanes en La Rioja; por Claudia Timoner en Mendoza; por Cristina Giarracca en Ramos Mejía.

a una cuadra de la Avenida Rivadavia y a cuadra y media de la estación ferroviaria de la línea Sarmiento. Alrededor de las ocho de la noche, cuando se habían concentrado unas cien personas, avisaron que desde el punto de concentración principal, esperaban que fuesen para allá. Ese otro lugar era Rivadavia y Avenida de Mayo, un gran grupo de más de quinientas personas formando una "T" por la Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo y por ésta se concentraron dos cuadras hasta la calle Rosales. Podían observarse muchos jóvenes pero también vecinos de distintas edades, matrimonios con niños, y muchas mujeres solas de alrededor de 60 a 70 años. Como todos más o menos se conocen como viejos vecinos del barrio, se pudieron detectar a los abogados, los escribanos, los comerciantes, los docentes y casi todos los dueños de las inmobiliarias de la zona. Algunos comercios, como precisamente las inmobiliarias, estaban cerrados, pero las tradicionales galerías de esa zona mantuvieron abiertos la mayoría de sus locales. Se registraban muchos carteles: "no re-reelección", "no a la impunidad", "no a la corrupción", "Kristina andate"; algunos insultos a la Presidenta [que se repiten en las encuestas de la zona], carteles alusivos a la tragedia de Once de febrero último. También se visualizaban muchas banderas argentinas, había algunos medios de comunicación como el Canal 26; la radio local; se habló de un periodista de Radio Cooperativa indicando el cuidado que eso requería bajo el supuesto de que es un medio de Luis D'Elía. Se comentaba que en la ciudad de San Justo había otra manifestación y que mucha gente de zonas populares alrededor de la Ruta 3, habían llegado hasta allá. A las 21,30 hs. se cantó el himno" (Giarracca, Cristina, 2012).

Veamos como se describen las marchas en las provincias. "A las ocho de la noche, después de un día de intenso calor, en la intersección de 5 de Mayo y San Martín, pleno centro de la ciudad de **Tucumán**, ya había llegado mucha gente y la marea humana no paraba. Un grupo se reunió en la calle Virgen de la Merced a unas cuadras de la Plaza hacia donde iniciaron su marcha; otro más numeroso se congregó en Plaza Urquiza y marchó hacia Plaza Independencia. Ni el calor detuvo tanta convocatoria, personas empapadas, transpirando, ventilándose con lo que podían, los basureros repletos de botellas vacías, esa era la imagen casi entrada la noche. En la Plaza central, frente a la Casa de Gobierno se podía observar no sólo una enorme cantidad de gente sino carteles con todo tipo de reclamos, desde pedidos por democracia, por seguridad en las calles, por la injusticia, en contra de la "gran corrupción", carteles en reclamo de los jubilados, de la falta de libertad, del avasallamiento del poder judicial, por el respeto a las instituciones educativas, por el respeto a la familia, por la libertad de expresión, en contra de la re-reelección, la reforma del Código Civil y de la Constitución Nacional. Banderas argentinas por todas partes, y no faltaba aquel vendedor ambulante ofreciendo banderines, banderas y demás. Hubo personas de todas las edades, muchas familias con sus hijos; si bien la mayor concurrencia era población joven/adulta, la presencia de ancianos fue bastante importante. Se observaba heterogeneidad social, por ejemplo parejas muy humildes con carteles "con \$13 no comemos", jóvenes de diferentes condiciones y muchos con sus críos o con panzas enormes que dejaban adivinar el advenimiento de otro niño. Mareas humanas por toda la Plaza, por el centro de la ciudad, todo estaba repleto, el centro un poco menos congestionado

do, pero a los alrededores había mucha gente. Un grupo (grande) daba vueltas a la plaza cantando y algunas jovencitas lo hacía saltando y agitando banderas argentinas. El Himno Nacional se entonó al menos 2 ó 3 veces como en todo el país. Casi al final de la marcha se tiraron fuegos artificiales, eran más bien sólo con sonido y algunos con lucécitas. No se vieron grupos políticos salvo un joven que repartía panfletos del Partido Obrero” (Rivas, 2012).

La ciudad de La Rioja tiene una práctica arraigada de protestas y en esta ocasión se calculó una asistencia aproximada de 400 personas, todas o casi todas de sectores medios de la ciudad Capital. Recordemos que en la pequeña ciudad de Famatina se hizo otra. El rango de las edades oscilaba entre los 20 y 60 años, predominando el grupo de 40 a 50 años, comerciantes, profesionales tales como abogados, médicos, dentistas. La convocatoria se efectuó en un ambiente tranquilo, pero de mucha indignación con el gobierno nacional y provincial. Muchos de los autoconvocados relacionaban directamente la marcha con la cuestión de Famatina, es decir los intentos de introducir la megaminería en la provincia. No hubo oradores, sí cánticos en contra del gobierno nacional y provincial, acompañados por el golpeteo de las cacerolas. Los carteles eran de confección casera, escritos a mano. No se observaba identificación partidaria pero en algunos se podía leer “No a las SAPEM”, “No al uranio”, “No a la minería”. Entre los manifestantes había políticos del radicalismo y otros partidos opositores, pero no tomaron protagonismo. La cobertura de los medios gráficos, radiales y televisivos minimizó la marcha. Sólo algunos portales, abiertamente contrarios al gobierno provincial, hablaron de la importancia de la misma (Ruiz e Illanes, 2012).

Mientras tanto, la marcha en **Mendoza** transcurrió con tranquilidad y con contradicciones. Carteles reivindicando a la izquierda y en contra del cepo, pidiendo “libertad”, en contra de la megaminería y colectivos que se oponían al aborto. Algunas personas se acercaban al ritmo y ánimo de quien va a una procesión, otras con pequeños carteles para que leyera quien pasara a su lado, otras simplemente a encontrarse con sus vecinas y/o amigas continuando luego la charla en bares y restaurantes. Algunos mendocinos de la generación de los setenta que hoy son docentes o profesionales con estabilidad y bienestar; aquellos que transcurren sus vidas sin participar de movilizaciones o de los debates públicos; aquellos que incluso participaron en los procesos de privatización de la tierra pública y ferroviaria, allí estaban. Las poblaciones un poco más jóvenes con escasa participación en los debates políticos, pero que sufren precarización laboral, estuvieron muy activas en la convocatoria llevada a cabo por las redes sociales, básicamente Facebook. Entre ellos había buen ánimo hacia el que piensa igual, pero ante el primer intento de debate aparecía una bronca cegadora acotada a los reclamos de “Seguridad” y “Basta de corrupción” que sólo eran trascendidos después de varios minutos de interacción. La cantidad de personas superó los registros históricos de una provincia como Mendoza, donde cuesta movilizar. No obstante en un territorio donde es fácil reconocerse, las personas sin pertenencia a colectivos de lucha pero que acompañan en las movilizaciones contra la megaminería estaban allí; también los vinculados a partidos políticos CC, Radicalismo, Frente Amplio Progresista, Socialismo (Timoner, 2012).

El relevamiento del “cacerolazo”

Aun sabiendo que la marcha congregaría una importante cantidad de gente y no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino en todo el país, decidimos aplicar el cuestionario a un reducido número de personas pero respetando dos criterios: 1) que los encuestados fuesen elegidos absolutamente al azar, 2) tratar de cubrir distintos puntos del país además de la Ciudad. Era imprescindible contar con alguna información de lo que ocurriría en el primer cordón del Conurbano bonaerense y por lo menos en dos o tres provincias. La elección de estas últimas cruzó dos criterios: la posibilidad de que hubiese algún profesional que pudiera hacer el trabajo y que por lo menos alguna de ellas tuviese una tradición de lucha contra la actividad extractiva (minería, agronegocio). Finalmente quedaron dos provincias que conocemos muy bien ya que llevamos muchos años trabajando sobre ellas: Tucumán y La Rioja. Si bien contamos con una descripción de la marcha de Mendoza, no se pudo aplicar la encuesta pero decidimos dejar la breve etnografía en el apartado anterior. El denominado Conurbano bonaerense fue cubierto en tres puntos, uno al oeste, Ramos Mejía, y dos al norte, Olivos y Vicente López.

Los resultados de esta encuesta no tienen pretensiones de caracterizar el fenómeno nacional ni mucho menos, simplemente construir y bucear cuantitativamente un trozo del mismo que junto al material de otro tipo con el que contamos, habilita a que arriesguemos algunas interpretaciones sobre él.

Se llevaron a cabo 168 encuestas, distribuidas con alguna relación por la importancia que estimábamos acerca de las marchas (no de su población real). Por experiencia, sabíamos que la mayor concentración sería en la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, fue allí donde comenzaron los amagos de cacerolazos desde mitad del año 2012; donde está concentrada la mayor proporción de votantes que en las presidenciales de 2011 no eligieron a la Presidenta; donde las redes sociales y los medios de comunicación masiva tienen mayor llegada. De esta forma, la Ciudad representó el 55,95% de los entrevistados. Le siguen en importancia el Conurbano Bonaerense (22,62%), Tucumán (12,50%) y la ciudad de La Rioja (8,93%).

Habíamos indicado que no se eligieran grupos de edades por preferencias sino por el puro azar y efectivamente, las proporciones de edad de la distribución de frecuencia de la muestra, así como los cruces por las regiones guardan significativas relaciones con las descripciones etnográficas y con lo que puede observarse en las miles de imágenes capturadas ese día en todo el país. Así en el total de la muestra, un 40% son mayores de 50 años y el 31% tiene entre 31 y 50 años. Sin embargo, cuando cruzamos la edad por regiones, en La Rioja la población encuestada es más joven y en el Gran Buenos Aires, se observan proporciones semejantes en los dos últimos estratos de mayor edad. Los jóvenes estuvieron en todo el país sin duda pero la imagen de personas ya en una etapa avanzada de su vida -profesionales la mayoría- predominó. Por último, se pudieron observar tanto en las imágenes fotográficas y televisivas como en la muestra, que fueron más las mujeres (54,17%) que los hombres (45,83%).

Las ocupaciones registradas indican una variedad de oficios de los sectores

medios con poca significación de la categoría “artistas”. Pocos desocupados y ninguno se declaró como obrero; en cuanto a la categoría “amas de casa y jubilados” (inactivos), es difícil tener claro a qué sectores sociales pertenecen.

Motivos y razones de la asistencia a la marcha

La variable más importante de nuestras indagaciones fue “razones por las que vino a esta marcha”, la más difícil de registrar además pues el resto del cuestionario supone información que el encuestado tiene sólo que recordar y no reflexionar (edad, estado civil, etc.). Aquí debía tomarse unos minutos y pensar por qué estaba allí. Dejábamos que expusieran hasta 5 ó 6 motivos. Todos los que aparecen en el conjunto de las encuestas se encuentran en el anexo del trabajo, evitando las repeticiones que fueron muchas. La codificación de la variable supuso en primer lugar un análisis y un consenso en la creación de las categorías que englobaban bajo un criterio común distintos modos de expresar razones emparentadas (“institucionales”, “de gestión”, “económicas”, etc.) y finalmente quedó la jerarquización de sólo dos tipos de categorías por encuesta. Así, si el entrevistado (pocos casos) daba 4 motivos muy diferentes, tomábamos los dos primeros que reconocieron suponiendo que este hecho era una jerarquización de los mismos. De este modo tuvimos esta codificación y distribución de razones de la asistencia a la marcha.

En este apartado analizaremos “las razones” cruzadas por otras variables, que por lo menos son anteriores a ella (las demográficas, por ejemplo) bajo el supuesto de que estas características pudieran influir en los motivos elegidos.

Razones por edad

La razón de asistir a la marcha que tuvo mayor frecuencia fue la de tipo “institucional” y cuando se combinaba con otras, aparecía como significativa la relación “institucional y de gestión”¹¹. Más allá de que la tendencia mayoritaria tiene gran fuerza en todos los estratos por edades, entre los más jóvenes la categoría que combina razones “institucionales y económicas” tiene mucha importancia. Esto puede deberse a que es la población que más sensible se manifiesta frente a determinadas cuestiones que afectan directamente el nivel de vida pues se trata de sectores que recién ingresan al mercado laboral y los pequeños cambios que afectan su economía pueden adquirir una significancia notable. Para los dos últimos estratos (todas las personas mayores de 30 años) los argumentos “de gestión y económicas” mantienen valores altos mientras que se observa una mayor dispersión de razones en el resto de las categorías. Asimismo, a medida que la edad aumenta, las referencias directas a las características personales de la Presidenta o de su gabinete crecen al punto que si se suman ambas categorías para las personas mayores de 50 años, el valor supera el 15 por ciento (**cuadro N° 1**).

¹¹ Esta característica se da en el nivel agregado pero al desplegar las razones, “Inseguridad” y “Corrupción” (las cuales fueron incluidas en la categoría “de gestión”) son las que concentran mayor frecuencia.

Cuadro N° 1. Razones por edad, en porcentaje.

Razones	Edad			
	Hasta 20	21 a 30	31 a 50	más de 50
Institucionales y económicas	14,29	15,63	7,41	8,82
Políticas públicas y económicas	0,00	6,25	5,56	4,41
Institucionales y políticas públicas	7,14	3,13	3,70	4,41
Institucionales y de gestión	28,57	31,25	31,48	36,76
Políticas públicas y de gestión	14,29	9,38	11,11	2,94
Institucionales y características personales	0,00	3,13	5,56	7,35
Institucionales y referencias directas a la ley de serv.au.	7,14	0,00	5,56	1,47
Características personales y otras	0,00	3,13	7,41	8,82
De gestión y económicas	21,43	15,63	20,37	23,53
Otras	7,14	12,50	1,85	1,47
Total	100	100	100	100

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

Razones por ocupaciones

Si dejamos de lado las razones “institucionales y de gestión”, en los profesionales las cuestiones “económicas” adquieren mucho peso al igual que lo que ocurre con los estudiantes. Sin embargo, entre los empresarios, comerciantes y autónomos la de las “características personales” tiene una magnitud importante que no se registra en otras categorías. En el caso de los empleados, “las políticas públicas y de gestión”, probablemente vinculadas con el mercado laboral, ocupan una parte importante de su atención. La categoría “amas de casa y jubilados” es la única donde las razones conectadas a lo “institucional y de gestión” no están en primer lugar y son superadas por las cuestiones “de gestión y económicas”. Esto puede deberse a que todas las referencias de los encuestados al tema de las jubilaciones fueron incluidas por nosotros en la categoría “económicas”; además el debate sobre el 82% móvil aún está en la arena pública y la incorporación de personas al régimen jubilatorio puede haber ampliado el reclamo de derechos de seguridad social entre las personas de mayor edad (cuadro N° 2).

Cuadro N° 2. Razones por ocupaciones, en porcentaje.

	Prof. Doc. Univ. Invest	Técnicos	Empresario Comerciante autónomo	Estudiantes sec y univ.	Empleados administ.	Ama de casa Jubilados	Artistas	Desocup.	NS/NC
Institucionales y económicas	13,79	0,00	15,00	8,33	6,06	9,09	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas y económicas	1,72	0,00	10,00	4,17	6,06	9,09	0,00	0,00	0,00
Institucionales y políticas públicas	3,45	0,00	5,00	8,33	3,03	4,55	0,00	0,00	0,00
Institucionales y de gestión	29,31	60,00	25,00	29,17	39,39	27,27	100,00	66,67	100,00
Políticas públicas y de gestión	6,90	0,00	0,00	8,33	18,18	0,00	0,00	33,33	0,00
Institucionales y características personales	3,45	20,00	20,00	0,00	3,03	4,55	0,00	0,00	0,00
Institucionales y referencias directas a la ley de serv.au.	6,90	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Características personales y otras	8,62	20,00	5,00	0,00	6,06	9,09	0,00	0,00	0,00
De gestión y económicas	24,14	0,00	20,00	25,00	12,12	31,82	0,00	0,00	0,00
Otras	1,72	0,00	0,00	12,50	6,06	4,55	0,00	0,00	0,00
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

Razones por voto a Presidente en 2011

Varios de los encuestados mencionaron haber votado a Elisa Carrió en las últimas elecciones presidenciales. Muchos de ellos señalaron como su mayor preocupación y razón para participar en la marcha, la cuestión de lo “institucional y de gestión” y en menor proporción lo “institucional y económico”. Este hecho se corresponde con el tipo de campaña presidencial de Elisa Carrió, que giró en torno de un discurso fuertemente institucionalista que llevó como propuesta un nuevo “contrato moral”, y definió como su estrategia la “defensa institucional con todos, alianza electoral a hoy con nadie y con corruptos en ningún caso. Ni hoy, ni mañana ni nunca” (Carrió, 2011). Respecto de aquellos encuestados que

Cuadro N° 3. Razones por voto, en porcentaje.

	Carrió	Binner	CFK	No votó anuló	Alfon-sín	Duhal-de	Altami-ra	Rodríguez Saá	Ns/Nc
Institucionales y económicas	13,04	8,11	0,00	15,00	20,00	0,00	0,00	28,57	3,70
Políticas públicas y económicas	0,00	2,70	11,11	0,00	12,00	5,56	0,00	14,29	3,70
Institucionales y políticas públicas	4,35	5,41	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,70
Institucionales y de gestión	60,87	35,14	44,44	25,00	28,00	22,22	50,00	14,29	25,93
Políticas públicas y de gestión	0,00	2,70	22,22	5,00	0,00	11,11	50,00	0,00	22,22
Institucionales y características personales	4,35	2,70	0,00	10,00	0,00	11,11	0,00	28,57	3,70
Institucionales y referencias directas a la ley de serv. audiovisuales	0,00	2,70	0,00	5,00	4,00	11,11	0,00	0,00	0,00
Características personales y otras	4,35	5,41	0,00	0,00	8,00	27,78	0,00	0,00	3,70
De gestión y económicas	8,70	35,14	11,11	20,00	16,00	11,11	0,00	14,29	29,63
Otras	4,35	0,00	11,11	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,70
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

mencionaron haber votado a Hermes Binner, señalaron en igual proporción las razones vinculadas con lo “institucional y de gestión”, así como la “de gestión y económicas”. Por lo que resalta que aquellas personas que votaron a Binner y participaron en la marcha, tienen una fuerte preocupación por la gestión de gobierno. Podemos vincular esto al hecho de que Binner es una figura pública referenciada por su capacidad de gestionar, ya que ha sido Intendente de la ciudad de Rosario desde 1995 hasta 2003, y a su vez, ha sido Gobernador de la provincia de Santa Fe (2007-2011) cuando la provincia tuvo un alto crecimiento económico. En cuanto a aquellas personas que votaron a Ricardo Alfonsín encontramos cierta dispersión respecto de las razones que mencionaron, las que más se destacaron fueron las de “políticas públicas y de gestión” pero también las “institucionales y económicas”, las “de gestión y económicas”, las de

“políticas públicas e institucionales” e incluso en menor proporción las de “características personales y otras”. Lo que llama la atención es que repasando los *spots* publicitarios (televisivos) de Ricardo Alfonsín transmitidos durante la campaña electoral, se enuncian muchas de las frases que luego encontramos durante el desarrollo del 8N. Así en algunos *spots* se dice “podemos vivir, sin miedo, sin robo y sin asalto”, en otro “vamos por el desarrollo, el empleo, la educación y la salud pública para todos”, en un *spot* que confronta con la por entonces Presidenta de la Nación y candidata a su segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner, “[...] no le creo nada, no creo que se respetara la independencia de los jueces”, “cuando uno se cree dueño de la verdad...”, “le aviso que no va a haber reforma constitucional, ni re-reelección indefinida”, “no vamos a permitir la presión sobre los medios de comunicación”.

Llama la atención, o aparece a modo de cierta curiosidad, que entre aquellas personas que votaron al candidato Eduardo Duhalde la razón principal para participar en la marcha sea “características personales de la Presidenta”. En tanto, entre quienes votaron a Cristina Fernández se destacan en primer lugar los motivos “institucionales y de gestión”, seguidos por el de “políticas públicas y de gestión” y en tercer lugar la “de gestión y económica”. Esta tendencia se repite en la categoría “No Sabe/No Contesta” (Ns/Nc) lo cual nos permite sugerir que en ese grupo se encontrarían algunos votantes de la actual Presidenta que prefirieron no hacer manifiesta su última elección electoral. En este caso podría estar operando la conocida teoría de la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1995) según la cual las personas tienden a evitar las opiniones conflictivas por miedo al aislamiento, situación que se acentuaría en una movilización como la analizada, donde el tono opositor adquiriría una fuerza notable (**cuadro N° 3**).

Lo que podemos deducir de los análisis anteriores es que el voto es un aspecto significativo comparable al de razones al momento de reflexionar acerca de la asistencia de las personas en la marcha del 8 de noviembre. De allí que decidimos cruzar no sólo “Voto por razones” sino “Voto por región” (**cuadro N° 4**).

Para Capital y Conurbano bonaerense, la tendencia es bastante similar pues en ambas regiones el candidato Hermes Binner se erige como la primera elección de los encuestados mientras que Elisa Carrió se ubica en segundo lugar. Podemos instalar como hipótesis que en estas regiones las razones de tipo “institucionales y de gestión” predominaron acorde con las características de los candidatos elegidos mayoritariamente. Es importante recordar que en las elecciones presidenciales de 2011 Hermes Binner se ubicó en segundo lugar con casi el 17% de los votos mientras que Elisa Carrió obtuvo menos del 2% de los sufragios efectivos, en tanto entre los encuestados alcanzó entre el 9,52 y 15,95%. Si a esta situación sumamos la participación de Ricardo Alfonsín podemos observar como los candidatos de la oposición priman entre las opciones elegidas, cuestión que mantiene correspondencia con el tono opositor de la manifestación. Por otro lado, quienes no votaron o anulaban y quienes se ubican en la categoría Ns/Nc representan una parte muy importante de la muestra (más de un cuarto del total en Capital Federal y casi el 37% en el Conurbano Bonaerense). Finalmente queda destacar el peso importante que tienen los votantes de Cristina Fernández de Kirchner en el Conurbano Bonaerense mientras que en la Capital el valor se reduce notablemente. Estos datos contrastan

Cuadro N° 4. Voto por región, en porcentaje.

	Región			
	Tucumán	Conurbano bonaerense	Cap. Fed.	La Rioja
Carrió	9,52	15,79	15,96	0,00
Binner	19,05	21,05	24,47	13,33
CFK	0,00	13,16	4,26	0,00
No votó, anuló	0,00	15,79	11,70	20,00
Alfonsín	28,57	7,89	12,77	26,67
Duhalde	19,05	5,26	11,70	6,67
Altamira	0,00	0,00	2,13	0,00
Rodriguez Saá	4,76	0,00	2,13	26,67
Ns/Nc	19,05	21,05	14,89	6,67
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

con los difundidos por varios medios de comunicación que enunciaban que entre el 30 y 37% de los manifestantes habían declarado haber votado por Cristina Fernández.

En el caso de Tucumán se registra la primacía de Alfonsín seguida en igual porcentaje por Binner y Duhalde. Carrió y Rodríguez Saá fueron referidos en porcentajes muy bajos pero la presencia del candidato puntano ya demuestra una cierta influencia regional que se refuerza en el caso de La Rioja donde el mencionado político obtuvo la primera mayoría de las respuestas junto con Alfonsín.

Razones por lugar

Respecto de este cruce, hay algunas diferencias que vale la pena destacar: a) En el Conurbano bonaerense tiene especial importancia la variable “políticas públicas y de gestión” con 15,79% frente a una menor significación de la misma en los demás lugares; b) Cabe señalar la importancia que tiene para La Rioja la variable “Institucionales y económicas” (33,33%) que dobla con creces los valores del Conurbano bonaerense y Tucumán, quizá debido a la oposición que se manifiesta en esa provincia a la megaminería; c) También se destaca en La Rioja la variable “Institucionales y características personales” que podría denotar un rechazo no sólo a la Presidenta sino también al Gobernador; d) Como contrapartida en La Rioja también se destaca que la variable “de gestión y económicas” es menor que en las demás regiones quizás porque está compensada por “Institucionales y económicas” (**cuadro N° 5**).

Cuadro N° 5. Razones por lugar, en porcentaje.

	Lugar			
	Tucumán	Conurbano bon.	Cap. Fed.	La Rioja
Institucionales y económicas	14,29	13,16	4,26	33,33
Políticas públicas y económicas	9,52	2,63	5,32	0,00
Institucionales y políticas públicas	9,52	2,63	3,19	6,67
Institucionales y de gestión	19,05	31,58	39,36	20,00
Políticas públicas y de gestión	9,52	15,79	4,26	6,67
Institucionales y características personales	4,76	5,26	3,19	20,00
Institucionales y referencias directas a la ley de serv. audiovisuales	4,76	0,00	4,26	0,00
Características personales y otras	4,76	7,89	7,45	0,00
De gestión y económicas	23,81	15,79	24,47	6,67
Otras	0,00	5,26	4,26	6,67
Total	100	100	100	100

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

Edad por cómo se enteró

Al respecto de “cómo se enteró de la convocatoria” lo que pudimos observar es que las redes sociales jugaron un papel fundamental. La mayoría de los encuestados, sin distinguir su edad, se habían enterado a través de espacios como Facebook, emails y blogs. Sin embargo, mientras que para las personas más jóvenes este medio fue el más señalado, para las personas mayores de 50 años, este canal tuvo un rol menos destacado. A su vez también puede observarse que para los más jóvenes el entorno familiar y la escuela constituyeron

Cuadro N° 6. Cómo se enteró por Edad, en porcentaje.

	Edad			
	Hasta 20	21-30	31 a 50	más de 50
Medios gráficos o audiovisuales (diarios, TV, radio)	0,00	12,50	20,37	20,59
Redes sociales (Facebook; email; etc.,)	85,71	71,88	70,37	50,00
Personal, boca a boca	0,00	12,50	9,26	23,53
Casualidades (venía caminando..., pasaba)	0,00	3,13	0,00	0,00
Por miembros de la familia o escuela	14,29	0,00	0,00	5,88
Carteles, afiches, propagandas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ns/Nc	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

Cuadro N° 7. Edad por posibilidades de logro, en porcentaje.

Posibilidad logro de demanda	Edad			
	Hasta 20	21 a 30	31 a 50	Más de 50
Si	64,29	50,00	55,56	60,29
No	35,71	50,00	44,44	39,71
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Encuestas realizadas por GER/GEMSAL el 8 noviembre de 2012.

una manera de enterarse y un estímulo a participar, mientras que no tuvieron ninguna influencia los medios gráficos y los audiovisuales. En contraposición, entre las personas mayores de 30 años se destacó el hecho de que se enteraron a través de estos medios. Por otro lado, para los mayores de 50 años el “boca a boca” también constituyó una forma importante de difusión (**cuadro N° 6**).

Edad por posibilidades de logro

Encontramos curiosamente que las personas más jóvenes y las más grandes, fueron las más optimistas, en la medida que esperaban que sus demandas fueran escuchadas. En menor medida la expectativa de logro se registra en la edad que va entre “31 y 50 años”. Mientras que las personas que tienen entre “21 y 30 años” se reparten por igual entre optimistas y escépticos (**cuadro N° 7**).

Algunas reflexiones a modo de conclusión

El fenómeno social del 8 de noviembre no se puede conceptualizar fácilmente con las herramientas que hemos utilizado para caracterizar otras marchas muy diferentes entre sí como “las rebeliones” del 19-20, marchas y asambleas posteriores de 2001-2002 (Giarracca, et al, 2007), o las marchas que acompañaron los reclamos “del campo” en 2008 (Giarracca y Teubal, 2010). Si bien guardan ciertos “parecidos de familia” entre sí (estética de la protesta, algunas consignas), la particularidad del 8 de noviembre amerita cierta atención.

Por un lado, los contextos sociopolíticos del caso del “19 y 20” guardan distancias abismales con el del 2012, y en las protestas del campo esas condiciones (la relación con el paro del campo) están explícitas y claras. En efecto, en 2008, las poblaciones urbanas no salieron porque las corporaciones agrarias lo hubiesen pedido sino por propia convicción, manifestando el apoyo al reclamo a un “campo trabajador que ganaba mucho dinero trabajando”. Es decir, la identificación con un sector empresarial nacional, territorializado con el que mantenían más conexiones de lo que el gobierno suponía (véase Giarracca, 2010), se “mostraba”, no se ocultaba ni se disimulaba. El objetivo era volver atrás con la famosa Resolución 125 (retenciones móviles a las exportaciones agrarias) y no se registraron en las entrevistas la variedad de demandas a un gobierno

-que tal cual ahora y con la misma figura- acababa de ganar las elecciones con amplio margen.

En 2012 los contextos están atravesados por complejos discursos de todo tipo: el mediático, sobre todo el de la empresa afectada por la ley de Medios 26.522 como explicamos en el apartado correspondiente; el “contradiscursos” que generaban los medios audiovisuales oficialistas (reprochados como “propaganda” e irritantes para una porción de la población); la situación económica con las medidas que afectan a ahorristas en dólares, al mercado inmobiliario y una alta inflación negada por las instituciones gubernamentales (véase apartado de condiciones “Económicas”). Pero además han intervenido los partidos políticos frente a la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara un nuevo mandato para la Presidenta. Las voces de estos partidos, sin excepción ni siquiera la del Partido Obrero, se expresan en los canales del grupo empresarial en claro enfrentamiento con el Gobierno. Estas condiciones habilitaron mayoritariamente la acción colectiva de sectores medios permeables históricamente a un discurso liberal (o neoliberal) que rechaza todo aquello que considera “populismo” influido, seguramente, por la propaganda antipopular de muchas décadas. En efecto, la mayoría mediática alude al concepto de “populismo” (utilizado en distinto sentido por el intelectual Ernesto Laclau) como forma de desvalorizar al gobierno. Asimismo levantan la tradicional idea de “república”, “democracia republicana” que aleja al país de los gobiernos latinoamericanos como el de Rafael Correa, Hugo Chávez, etc. y lo acerca a las anheladas democracias europeas (actualmente en profundas crisis)¹².

En nuestro relevamiento, las razones por las que asistió a la marcha están concentradas en las “institucionales” con combinaciones muy relacionadas a “gestión” y “políticas públicas”; se pudo encontrar una asociación significativa entre estas consignas y aquellas generadas por la ex candidata a presidenta, Elisa Carrió. En efecto, y como decimos en este texto y es importante recordarlo aquí, Elisa Carrió en la campaña electoral e incluso durante todo sus tiempos televisivos, enarbolaba un discurso fuertemente institucionalista que llevó como propuesta un nuevo “contrato moral”, y definió como su estrategia la “defensa institucional con todos, alianza electoral a hoy con nadie y con corruptos en ningún caso. Ni hoy, ni mañana ni nunca”. No es muy diferente a los discursos de los radicales, de Hermes Binner y de la mayoría de los programas periodísticos televisivos.

El interrogante que cabe hacerse es por qué este tipo de discurso ha prendido tanto en estas poblaciones que salieron en todo el país y que una década atrás ponían bajo sospecha a toda la clase política y se mostraban indignadas con los discursos de los miembros de la Alianza que habían seducido a su electorado con consignas muy parecidas (recuérdese a Graciela Fernández Meijide y su postura “moralista”, “ética” frente al gobierno corrupto de Carlos Menem).¹³

¹² Nosotros diferenciamos los populismos de posguerra con fuertes contenidos igualitaristas y sobre todo “decolonizadores”, en el sentido de Aníbal Quijano, de estos intentos del siglo XXI en América latina. Sin embargo es una disquisición muy fina para quienes les molesta cualquier política heterodoxa en materia macroeconómica o el personalismo latinoamericano (aunque aceptan el de los países del Norte).

¹³ Fernández Meijide frente a una pregunta de *La Nación* (12/9/1999) acerca de cómo encara la falta

A pesar del voluntarismo previo de estos personajes, la Alianza y sus funcionarios terminaron envueltos en situaciones de corrupción, escándalos y como uno de los gobiernos más nefastos de la última etapa democrática, por la masacre perpetrada en el período. Es decir, este tipo de valores sirven como discursos de campañas electorales pero no funcionan dentro de las democracias del capitalismo, y mucho menos en tiempos neoliberales. Pero parte de la población argentina vuelve a tenerles fe, ¿por qué?

Una primera reflexión a modo de hipótesis es que estos discursos de “la república perdida” reenvían a la época agroexportadora con democracias limitadas pero grandes rentas que ponían al país entre los más prósperos del mundo o a democracias más inclusivas con los sectores medios afianzados pero con una sociedad que aún ignoraba los derechos políticos de las clases bajas de origen criollo; hacía muy poco que habían conquistado los derechos como inmigrantes o descendientes de éstos como para ocuparse de los criollos subalternizados y los pueblos originarios. Sin duda fue el peronismo quien subvirtió este estado de cosas, ubicando a la clase obrera, a los “cabecitas negras”, “descamisados” como actor privilegiado de la política. Y precisamente desde allí, muchas veces en nuestra historia las clases medias sienten la necesidad de recuperar protagonismo y recurren al viejo recuerdo de “la república perdida”. Idea que funciona como articuladora con otras nociones que son las enunciadas por los partidos de raigambre liberal (terminar con la corrupción, división de poderes, jueces impolutos, etc.) Recordemos que el peronismo surge de un líder muy crítico a las ideas liberales, empeñado en un capitalismo redistributivo (su famoso cincuenta/cincuenta) que se basaba sobre otros paradigmas que provenían del país de vocación industrializadora con autonomía de los mercados externos y una postura soberana frente a las potencias hegemónicas de cada época. Es decir, propuestas con cierto sentido decolonial que disputaban con las ideas liberales europeizantes.

Si bien no nos encontramos ni en momentos en que sea posible estar más cerca de la anhelada “república” de los partidos de raíz liberal, ni de los gobiernos nacionales y populares con protagonismos de los sectores subalternos, consideramos que en estas marchas y en las respuestas gubernamentales, circulan estos imaginarios (o “relatos” como se los denomina en estos tiempos). En efecto, junto a los discursos de Elisa Carrió y Ricardo Alfonsín se alinean economistas ortodoxos que festejaron y festejan el neoliberalismo; grupos económicos con historias de desposesión de los activos del Estado; y una nefasta lista de personajes no ajenos a los gobiernos dictatoriales, todos personajes muy alejados de la utopía republicana. Del mismo modo, el populismo tan odiado por los sectores medios y que le reprochan a este Gobierno, poco tiene de los componentes distributivos y decoloniales que supo haber en América latina con Lázaro Cárdenas en México o Juan Perón en la Argentina.

Es como si en la política tanto la institucional como “la de calle” (de estos tiempos, la marcha en análisis) se jugaran imaginarios colectivos más que debates

de credibilidad de los políticos responde “como lo encara Chacho Alvarez: tratando de ser lo más coherente posible, demostrando que lo que hacemos tiene que ver con nuestro discurso. Lo que decimos está pegado a nuestros actos, podemos caminar por la calle y seguimos siendo nosotros. Estoy convencida de que la política, finalmente, instalará un tipo especial de ética.”

actualizados al siglo XXI para un país que no superó la matriz de dominación colonial del poder, del saber y del ser (Quijano, 2000).

Bibliografía

- Castro García, María Celeste; Comelli, María y Palmisano, Tomás (2010) “Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral 2009” en Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (coord.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Giarracca, Norma (coord.) (2001) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en interior del país*. Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Giarracca, Norma (2010) “El conflicto agrario 2008-2009: los debates necesarios” en Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (coord.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín (2011) “Estructura, concentración y transformaciones en los medios del Cono Sur latinoamericano” en *Comunicar Revista Científica de Educomunicación* (Andalucía: Grupo Comunicar) Vol. XVIII, Nº 36.
- Noelle-Neumann, Elisabeth (1995) *La espiral del silencio: opinión pública nuestra piel social*. Buenos Aires: Paidós.
- Quijano, Aníbal (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.

Otras fuentes

- AFSCA (2012) *Ley de Servicios de comunicación audiovisual. Motivos de la adecuación* (Buenos Aires: AFSCA). Disponible en <http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2012/11/AFSCA-Estado-de-situaci%C3%B3n-de-los-grupos-de-medios.pdf>
- Becerra, Martín (2009) “Las cuentas pendientes de los medios” en *La Nación*. Buenos Aires 10 de octubre.
- Becerra, Martín (2012) “Avances cruciales y un cierto abuso del Estado” en *Miradas al Sur* (Buenos Aires), 8 de enero.
- Carrío, Elisa (2011) *Mensaje en Conferencia de Prensa*, 03 de abril. Disponible en http://www.elisacarrío.com.ar/index.asp?seccion=visor_noticia&id=386&descripcion=Sala%20de%20Prensa%20/%20Notas%20de%20Opinion
- Carta Abierta (2012) *Carta Abierta/ 12* (Buenos Aires). Disponible en <http://www.cartabierta.org.ar/nueva/index.php/cartas/carta-abierta-12>
- Eisler, Nicolás (2012) “Los caceleros analizaron el 8N” en *Tiempo Argentino*. Buenos Aires, 15 de noviembre.
- El Guardián (2012) *Cómo y quienes preparan el 8N*. Buenos Aires: Editorial Apache, 1 de noviembre.
- Grupo de Política (2012) “Quiénes son los grupos que agitan la movilización opositora” en *Tiempo Argentino*. Buenos Aires, 4 de noviembre
- Rodríguez Niell, Paz (2012) “La variada agenda de los que piden otra Constitución” en *La Nación*. Buenos Aires, 2 de septiembre.
- Zaiat, Alfredo (2012) “Por qué, cuántos y quiénes compraron” en *Página 12*. Buenos Aires, 4 de noviembre.
- Informes de Campo: Cristina Giarracca; Ana Isabel Rivas; Claudia Illanes y Carlos Ruiz (2012) ; Claudia Timoner (2012)

¿Reconstrucción del Modelo Industrialista Sustitutivo de Importaciones?

*Jaime Héctor Saiegh**

La historia argentina reciente permite identificar, dos grandes estrategias para enfrentar la restricción externa o la escasez “crónica” de dólares. Una, industrialista, mercadointernista y que pretende reemplazar con producción nacional parte de las importaciones. Esta estrategia está asociada con un alto nivel de empleo y salarios y utiliza la regulación estatal de la economía para convivir con la escasez de divisas.

La otra es la que cree firmemente en la libertad de los mercados. La falta de dólares se resuelve, finalmente, con endeudamiento externo, privatizaciones de empresas públicas e inversiones extranjeras.

Desde los años '30 a la fecha, tanto por necesidad como por elección explícita, se optó por el modelo industrialista sustitutivo de importaciones, excepto claro, los programas del 2 de abril de 1976 y el llamado plan de Convertibilidad o los que, al amparo de dicha escasez, fueron impuestos por los organismos internacionales de crédito.

Es en este contexto, vinculado con la aludida contradicción, que deben inscribirse las reformas económicas aplicadas desde 2003. Dicho de otra manera, “el modelo”, tiene lógica económica y sustento teórico. Se trata de la Reconstrucción del Modelo Industrialista Sustitutivo de Importaciones, con sustento teórico sobre los argumentos keynesianos y estructuralistas.

Palabras clave: Modelo económico - Restricción externa - Sustitución de importaciones - Deuda externa - Marcelo Diamand

* Economista UNSAM y Universidad Arturo Jauretche. El autor agradece los valiosos comentarios de Daniel Novak y Pablo Tonelli.

Reconstruction of Industrialist Import substitution model?

Argentinian recent history let us identify two main strategies to face external restriction or “chronic” scarcity of dollars. One of them, industrialist, regarding internal market, and which intends to replace imports with national production. This strategy is associated with high employment and salary levels, and uses state regulation of economy to live together with currency shortages.

The other strategy strongly believes in market freedom. The lack of dollars is eventually solved with external indebtedness, privatization of public enterprises and foreign investment.

From the thirties on, due to need or explicit choice, the Industrialist Import substitution model was predominant, except for the program of 2nd April 1976, the convertibility plan and those imposed by international credit organizations

In this context, related to such contradiction, we must include the economic reforms applied in 2003. In other words, “the model” has economical logic and theoretical support. It is the reconstruction of Industrialist Import substitution model, with theoretical support on Keynesian and structuralist arguments.

Key words: Economic model - External restriction – Import substitution – External debt – Marcelo Diamand.

Fecha de recepción: octubre de 2012

Fecha de aceptación: noviembre de 2012

Presentación

La escasez de dólares ha sido uno de los problemas centrales de la economía argentina desde 1930 en adelante. En efecto, en la Argentina coexisten dos sectores productores de bienes bastante diferentes. El agropecuario, muy eficiente y competitivo en el nivel mundial, que produce alimentos que exceden el consumo interno y, por ende, exporta y provee de dólares a la economía argentina. No obstante, el empleo que genera es insuficiente para ocupar la totalidad de la Población Económicamente Activa.

El sector industrial es clave para la creación de empleo. No obstante, con el tipo de cambio que hace competitivo al sector primario, genera un balance comercial externo negativo. Así, dado ese nivel de tipo de cambio, el balance comercial argentino es la suma del superávit del sector agropecuario más el déficit del sector industrial¹.

En términos dinámicos, cuando la economía argentina crece, en particular cuando lo hacen el empleo y los salarios, se agudiza la escasez de dólares. En efecto, más empleo y mayores salarios significan mayor demanda de alimentos y menores ventas al exterior. Del mismo modo, más insumos importados, materias primas para el sector industrial y máquinas para producir. *Así, crecer consume dólares y agudiza su escasez.*

Cuando los dólares se acaban deviene el “ajuste”. La escasez de divisas se resuelve con la devaluación del dólar. Es decir, con precios de los alimentos y bienes industriales más altos y, por ende, menores salarios reales y menor nivel de empleo. La caída del consumo interno mejora el saldo de la balanza comercial externa y el ciclo vuelve a empezar.

La historia argentina reciente permite identificar, al menos, dos grandes estrategias para enfrentar la “restricción externa”² o la escasez de dólares. Una, industrialista, que pretende reemplazar con producción nacional parte de las importaciones, asociada con un mayor nivel de empleo y salarios y que tiende a usar la regulación estatal de la economía para convivir con la escasez de divisas.

La otra estrategia es la que cree firmemente en la libertad de los mercados. La falta de dólares se resuelve, finalmente, con endeudamiento externo, privatizaciones de empresas públicas e inversiones extranjeras.

¹ Esta tesis no es nueva. Fue presentada por primera vez por Marcelo Diamand. Ver (1972), (1973) y (1986).

² También este concepto está tomado de Marcelo Diamand.

Desde los años ‘30 a la fecha, tanto por necesidad como por elección explícita se optó por el modelo industrialista sustitutivo de importaciones. Excepto claro, los programas del 2 de abril de 1976 y el llamado plan de Convertibilidad. Estos optaron por enfrentar la escasez de divisas mediante el endeudamiento externo³.

Es en este contexto, vinculado con la restricción externa, en el que deben inscribirse las reformas económicas implementadas desde 2003 a la fecha. Dicho de otra manera, “el modelo”, implementado desde esa fecha hasta el presente, tiene lógica económica y sustento teórico. Se trata de la **Reconstrucción del Modelo Industrialista Sustitutivo de Importaciones** y con sustento teórico sobre los argumentos keynesianos y estructuralistas.

El presente documento intenta describir cómo, desde 2003 a la fecha, se viene desarmando el modelo de Convertibilidad, enrolado en la estrategia de “mercados” y, quizá, de manera no explícita o desordenada, se viene reconstruyendo el modelo industrialista sustitutivo de importaciones.

Hasta donde se conoce, no existe ningún documento oficial u oficioso que presente de un modo claro en qué consiste, desde el punto de vista de la teoría económica, el “Modelo”.

Las presentes líneas tienen por objeto tratar de llenar ese vacío. Es decir, presentar lo que el autor entiende cómo, de manera lógica y sectorial, se fue desarmando el “modelo de mercado” y cómo se fue reconstruyendo el “modelo industrialista”. Además, y fundamentalmente, cómo funciona y en qué consiste el “modelo”. En cada caso se lo presentará en contraposición de “modelo de mercado”, o según se conoció en la Argentina el modelo de convertibilidad.

Quizá, señalar que se ha adoptado un modelo “viejo” suena a crítica a la política económica vigente⁴. Por lo contrario, la otra tesis que se sustenta en estas líneas, es que el modelo industrialista, que parecía inviable en el pasado, hoy, ante los cambios en el escenario económico internacional, tiene una mayor cuota de viabilidad, no sólo económica sino fundamentalmente política.

Este documento se organiza de la siguiente manera: En primer lugar trataremos de ir señalando las “reformas” implementadas durante esta década, sus fundamentos y sus efectos económicos. En segundo lugar señalaremos las principales fortalezas y debilidades del “Modelo”.

³ Y todos los planes de estabilización vinculados con el FMI desde 1958 a la fecha.

⁴ No hay nada más viejo en la teoría económica que los argumentos neoclásicos que le dan sustento a los modelos de mercado.

1. La lógica económica y los objetivos de las reformas implementadas desde 2003 en adelante.

1.1 De la Deuda Externa como fuente de financiamiento a la política de Desendeudamiento

La “restricción externa” se originaba, en el pasado reciente argentino, principalmente, en tres factores: i) la forma –ya señalada- que adoptaba el crecimiento de la economía argentina vinculada con el consumo de dólares, ii) el deterioro de los términos del intercambio con el exterior. Es decir, los precios de las materias primas (las exportaciones argentinas) crecían menos que los precios de los bienes manufacturados y maquinarias (las importaciones argentinas) y iii) la acumulación de deuda externa, originada en los modelos de mercado, que implicaba un gasto adicional de dólares para el pago tanto por sus servicios de intereses como por el capital⁵.

Tanto el plan del 2 de abril de 1976 como el de Convertibilidad de la década de los '90, se alinearon en una estrategia de mercado y enfrentaron la restricción externa mediante el endeudamiento externo. Así, las divisas que no entraban por las exportaciones, se lograban con el ingreso de préstamos desde el exterior o por privatizaciones de empresas públicas. La sostenibilidad de dichos modelos dependía del flujo constante de préstamos del exterior, con el propósito de financiar el déficit comercial externo más los pagos originados en el endeudamiento externo creciente. No casualmente dichos modelos se agotaron o colapsaron, cuando se agotó la capacidad de endeudamiento⁶.

Para esta estrategia, resultaba clave hacer todo lo necesario con el propósito de seducir al capital y/o prestamistas internacionales. En este sentido, esta política amistosa con los mercados financieros internacionales fue el eje central de la política de apertura de la economía, tanto durante la segunda parte de la década de los '70, como durante toda la década de los '90. Cuando más amistosa, mayor era la capacidad de endeudamiento público y menor tasa de interés que tenía que pagar el estado y/o el sector privado local, por los créditos que recibía desde el exterior. El riesgo país se transformó en la variable relevante como indicador de la salud del modelo. Este indicador mide la sobretasa de interés que debía pagar la deuda pública del Gobierno argentino por

⁵ Tradicionalmente, cuando se agotaban las reservas, los gobiernos nacionales debían apelar a las únicas fuentes que proveían divisas: el FMI y los Organismos Multilaterales de Crédito. Éstos condicionaban la provisión de préstamos a la implementación de políticas de mercado.

⁶ Más precisamente cuando los “mercados externos” evaluaron que la capacidad de repago de la economía argentina se había agotado. Tanto en 1982 como a fines de 2001 la Argentina entró en cesación de pagos externos.

encima de la tasa que pagaba el gobierno de EUA. Cuanto menor riesgo país mayor era la capacidad de endeudamiento y menor el costo financiero asociado.

No obstante, ser “amigable” con los mercados financieros fue insuficiente para garantizar un flujo de ingresos de dólares a la economía argentina. La necesidad de dólares requirió simultáneamente que la política del Gobierno nacional fuese funcional a la política económica. No casualmente la dictadura militar se asoció a la Doctrina de la Seguridad Nacional mientras que la Convertibilidad practicó las “relaciones carnales” con Estados Unidos.

1.1.1. La cesación de pagos en 2002 y el canje de la deuda en 2005

El colapso de la convertibilidad, hacia fines de 2001, originó, a principios de 2002, la declaración formal de cesación de pagos del Gobierno argentino. En ese entonces, la deuda pública (tanto en pesos como en dólares) se ubicaba en el equivalente de 144.000 millones de dólares. A esta cifra cabría agregarle el costo de la salida de la convertibilidad que sumó deuda por 47.000 millones de dólares adicionales⁷. Por tal motivo, en ese entonces, la Argentina no era sujeto de crédito voluntario, ni en pesos ni en dólares a tasas ni siquiera altas. No obstante, el elevado grado de recesión y desempleo de entonces⁸ generaban un importante superávit comercial externo. Además, si bien el Gobierno nacional no podía acceder al crédito externo, tampoco tenía que pagar capital ni servicio por la deuda en *default*. A partir de ese momento, la economía argentina, comenzó a funcionar “al contado” mientras que el Banco Central de la República Argentina comenzó a recuperar y acumular reservas internacionales⁹.

Desde 2003 y en particular antes de 2005, el Gobierno nacional, definió un conjunto de políticas diametralmente opuestas a la política de “friendly markets”. En los hechos, el gobierno en ese momento, decidió “vivir con lo nuestro”¹⁰, no depender del endeudamiento externo como fuente de divisas y apartarse de la estrategia de mercados. Así no sólo decidió apartarse de las reglas de mercado, sino que comenzó len-

⁷ Ver, Ramiro Castiñeira (2012)

⁸ El colapso del modelo de Convertibilidad terminó con un brutal ajuste. El precio del dólar se cuadruplicó y el desempleo alcanzó al 23%. Para un panorama más amplio ver: Saiegh, Jaime (2007)

⁹ Como ya señalamos la devaluación de principios de 2002 implicó un ajuste salvaje. Dicho ajuste -como se señaló precedentemente- “resolvió” transitoriamente la restricción externa. Ver Saiegh, Jaime (2007).

¹⁰ Ver Aldo Ferrer.(1983)

tamente la reconstrucción del modelo industrialista. La señal más clara y contundente de dicha decisión fue la estrategia definida acerca de la deuda heredada en cesación de pagos.

No obstante, cabe aclarar que esta política también fue posible por el cambio en el ciclo mundial de los precios de las materias primas. En efecto, cesó el deterioro de los términos del intercambio y comenzó el ciclo contrario. Los precios de los alimentos comenzaron a crecer de manera sostenida con respecto a los industriales.

Es decir, no sólo el Gobierno nacional decidió no alinearse con los mercados, como eje principal de política, sino que el mercado internacional generó las condiciones para que dicha decisión fuese viable. A este cambio de escenario los críticos del Gobierno nacional, lo denominan “viento de cola”. No obstante, el viento de cola hubiese habilitado también la opción de mercado¹¹.

A partir de ese entonces (2003) comenzó sin prisa pero sin pausa la política de Desendeudamiento que consiste, básicamente, en no depender de la colocación de deuda en los mercados internacionales. Obviamente esto implica ir cancelando con recursos propios los vencimientos de la deuda heredada. Así, no hay necesidad de seducir a los mercados financieros locales e internacionales

Claramente el objetivo era no tener que condicionar la política económica interna a la lógica de los “mercados libres” y, simultáneamente, reducir, en el futuro, el impacto de la deuda en la disponibilidad de dólares.

Los resultados son elocuentes, de una deuda pública equivalente al 164,4% del PIB en 2002 se llegó a otra menor al 10 % del PIB¹² a fines de 2011. Esta reducción se logró mediante quitas y refinanciación de la deuda vieja, pagos de deuda¹³, nacionalización de las AFJP y, por último, la inconvertibilidad de la moneda argentina.

Hacia 2005, el Gobierno nacional decidió explícitamente apartarse de la “economía de mercado” o “*friendly markets*”. Ese año ofreció a los acreedores por la deuda en cesación de pagos declarada a principios

¹¹ En condiciones “normales”, una estrategia de mercado habría dejado reevaluar la moneda en lugar de mantener la paridad y acumular reservas. Dicha reevaluación en un contexto de economía abierta a la competencia externa hubiese tenido el mismo efecto que la desindustrialización y el desempleo asociadas con la convertibilidad y el plan del 2 de abril de 1976.

¹² Fuente. Sec de Finanzas. Ministerio de Economía de la Nación. El dato de 2011 alude a la “deuda externa exigible”, es decir en dólares, en manos de particulares, neta de acreencias de agencias u organismos públicos del Gobierno nacional.

¹³ Un buen ejemplo es el pago de la deuda total con el FMI.

de 2002, un Canje de bonos. El ofrecimiento fue canjear los títulos vencidos e impagos desde fines de 2001, por otros cuyos vencimientos llegaban hasta 2033. Además, incluía una quita o rebaja de la deuda nominal del orden del 65%. Es decir, la oferta del Gobierno, para salir de la cesación de pagos heredada, consistía en pagar sólo el 35% y a muy largo plazo.

Tradicionalmente este tipo de canjes se suponían viables o aceptables para el conjunto de acreedores locales e internacionales si contaba con el apoyo del FMI. Éste acordaba con el gobierno deudor un “conjunto de políticas” del tipo “*friendly markets*” y avalaba explícitamente la oferta del deudor. El gobierno argentino no solicitó ni contó con el apoyo ni con el acuerdo del FMI. Esta definición fue una clara señal acerca de cual era la estrategia económica que había decidido.

No había precedentes históricos modernos sobre un canje de deuda sin el acuerdo con el FMI. Más aun, la mayoría de los economistas ortodoxos suponían que el canje debería fracasar, es decir, no iba a ser aceptado por la mayoría de los acreedores. Por lo contrario entre el canje de 2005, junto con el complementario de 2010, prácticamente se liquidó la deuda vieja¹⁴. Así, se cumplió la primera etapa del desendeudamiento y la Deuda Pública pasó en 2006 a un 64,0% del PIB.

1.1.2. La estatización de las AFJP

Desde su creación, las AFJP, invirtieron sus recursos principalmente en bonos de la deuda pública. En 2002, técnicamente hablando, habían perdido la mayor parte de los recursos que administraban¹⁵. En 2005 cuando se negociaba el canje de la deuda en cesación de pagos, las AFJP, eran titulares de 32.000 millones de dólares¹⁶. Obviamente aceptaron el canje de deuda ofrecido por el gobierno, parte del cual, se diseñó a su medida para disimular la pérdida de los ahorros que administraban¹⁷.

¹⁴ Quedó afuera algo así como el 7% de la deuda en manos de los “fondos Buitre” y otros acreedores

¹⁵ La deuda en cesación de pagos se “cotizaba” en el mercado secundario en torno del 30% de su valor. Es decir las AFJP habían perdido el 70% de los activos que administraban.

¹⁶ Ver Castiñeira, R. (2012)

¹⁷ Se trató de contabilidad creativa. En efecto, antes del canje de la deuda de 2005 los bonos públicos se cotizaban al 30% del valor de mercado, es decir las AFJP’s habían perdido el 70% de los ahorros de los aportantes. No obstante, por normas de valoración “heredadas” de la época de la Convertibilidad, los contabilizaban al 100% de su valor nominal. En ese contexto “solicitaron” al gobierno que el canje contemplara bonos que en términos de mercado y reales reflejen la quita pero no en términos nominales. Así, contablemente, mantenían el valor de los activos. No obstante, cla-

No obstante, tanto durante el canje como posteriormente, se comportaban ante el Gobierno nacional como un acreedor más. En 2008 el Gobierno nacional estatizó la administración de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones. A los efectos de la política de desendeudamiento implicó que, una parte significativa de la deuda¹⁸ pasó a ser casi un asiento contable entre la administración nacional y una de sus Dependencias (ANSES). En los hechos, implicó una reducción de lo que podemos llamar “deuda pública exigible”, es decir la deuda pública en manos de particulares, o, lo que es parecido, la deuda que requiere su pago directa o indirectamente mediante recursos públicos. En este sentido, las deudas del Gobierno nacional que constituyen activos de las ex AFPJ (ahora ANSES), se renuevan de manera automática.

De esta manera la deuda en poder de “privados” se reduce al 22,5% del PIB.

1.1.3. La inconvertibilidad del peso nacional y su impacto en la deuda externa.

No obstante, dentro de dicho 22,5% del PIB, hay deuda en pesos y en dólares en manos de privados. En un contexto de mercado de cambios de libre acceso, como el que regía hasta octubre de 2011, los que cobraban deuda pública en pesos podrían convertir de inmediato dichos recursos en dólares. Desde esa perspectiva, para el Estado y, en particular vinculado con la restricción externa, era casi indiferente tener deuda en pesos o en dólares. Es decir, si bien el gobierno podía pagar cada deuda en sus respectivas monedas, el que recibía pesos podía convertirlos casi de inmediato en dólares al tipo de cambio oficial. De esa manera el concepto de “deuda externa” y “deuda pública” eran casi sinónimos.

A partir de octubre de 2011 y perfeccionado en los meses siguientes, el gobierno decretó la “inconvertibilidad interna del peso”¹⁹, es decir los tenedores de pesos no pueden comprar dólares para atesoramiento ni “dólares cable” para transferir al exterior. Más allá de otros efectos, el particular sobre la deuda pública no es menor. En efecto, los acreedores en pesos quedaron fuera de la posibilidad de convertir sus acreencias en dólares. En este sentido la necesidad de dólares para atender

ramente, no es lo mismo un bono que venció en 2002 frente a otro cuyo pago se reallará 30 años después. El Gobierno nacional aceptó dicha solicitud simplemente porque necesitaba que “entren al canje” de la deuda.

¹⁸ La deuda estatizada puede estimarse en 32.000/35.000 millones de dólares.

¹⁹ Se lo denominó “cepo cambiario”. Técnicamente es “control de cambios” y rigió como modelo normal en las economías emergentes durante más de 50 años.

los servicios de capital e intereses de la deuda pública se redujo en el porcentaje de la deuda nominada dólares. En números la deuda externa (es decir la deuda pública en dólares) se redujo en un 28 por ciento.

Así, la información disponible originada en el Ministerio de Economía de la Nación indica que la deuda en dólares, en manos de privados, hacia fines del primer trimestre de 2012, equivale al 9,6% del PIB.

1.2. Del tipo de cambio único al sistema de tipos de cambio múltiple

Tanto el programa del 2 de abril de 1976 como el plan de Convertibilidad tuvieron como eje central la fijación de un tipo de cambio único, de libre acceso, en un contexto de apertura de la economía a la competencia externa de bienes y servicios, junto con la liberalización de los flujos financieros con el exterior.

En una economía abierta a la competencia externa, los precios domésticos de los bienes transables (tanto exportables como la producción local sujeta a la competencia importada) tienden a reproducir los precios relativos internacionales. En este sentido sobrevive a dicha competencia externa aquel sector y/ o empresa local que puede competir con éxito frente a los productos importados²⁰. No casualmente una de las debilidades de ambos modelos de mercado fue la incapacidad de generar un alto índice de empleo, aun en el cenit de su implementación.

Básicamente los precios domésticos de los bienes exportables (por ejemplo los agropecuarios) se determinan tomando los precios internacionales y se pesifican mediante el tipo de cambio efectivo. Los bienes "industriales" se comportan de manera similar aunque, la pesificación se ajusta por el tipo de cambio nominal más los derechos de importación aplicables a cada producto y los gastos de importación asociados con ellos.

Es decir, tipo de cambio único y apertura comercial externa son la garantía de que los precios domésticos reflejen los valores reales y relativos internacionales. Del mismo modo, los precios internos en pesos no pueden superar los precios internacionales pesificados por el tipo de cambio efectivo. De lo contrario si los precios locales son superiores a los importados, la competencia externa no sólo reemplaza la producción local sino también el empleo asociado con el sector o empresa desplazada.

Hacia la década de los '70, Marcelo Diamand²¹ sostuvo que una de las claves para el desarrollo de la industria local (y por ende, la generación

²⁰ Para un mejor análisis acerca del particular ver Canitrot, Adolfo. (1976)

²¹ Ver Diamand, Marcelo (1971, 1973, 1986).

de empleo) estaba vinculada con la política cambiaria. En este sentido sostenía que el sector industrial nacional requería un tratamiento cambiario distinto del de la producción pampeana con el propósito de que pudiera ser competitiva frente a la competencia externa y, a la vez, generar exportaciones adicionales para neutralizar el crónico déficit sectorial de su balanza comercial. Proponía, en definitiva, que el tipo de cambio se ajustase a la productividad de cada sector. Más alto para el sector industrial y menor para el agropecuario. Claramente, Diamand se apartaba de la lógica ortodoxa y se ubicaba en una concepción estructuralista.

1.2.1 Los derechos de exportación y la formación de los precios internos.

A partir de 2002 el Gobierno nacional recuperó el instrumento legislado por el Código Aduanero Nacional denominado **Derechos de exportación**²², señalados peyorativamente por el sector agropecuario y los economistas ortodoxos “retenciones a la exportación”. Se trata de impuestos a las exportaciones que se pueden aplicar a todos los productos que se venden al exterior.

A partir de su implementación se generó un sistema de **Tipos de Cambio Múltiples** con la lógica señalada por Marcelo Diamand. De esta manera cada producto exportable recibía el tipo de cambio nominal menos el derecho de exportación. Así el tipo de cambio efectivo (tipo de cambio nominal menos el derecho de exportación) dejó de ser el mismo (o “único”) para todos los bienes transables²³.

Así, aun cuando formalmente existía (y existe) un mercado único de cambios, la aplicación de los derechos de exportación implicaron tantos tipos de cambio efectivos como retenciones diferenciales asociadas

²² Curiosamente, durante todo la década de los '90, sólo se gravó al grano de soja con derechos de exportación del orden del 3,5%. El propósito explícito fue inducir a la industrialización local del grano con el propósito de desarrollar la industria aceitera. El efecto esta a la vista. La industria local de aceite se ubica como una de las más importantes y competitivas del mundo. Queda una pregunta: ¿por qué sólo se promovió a la industria aceitera cuya ubicación geográfica está predominantemente en Córdoba?

²³ La ratificación y ampliación posterior de esta diferenciación cambiaria a partir de 2003 ya era una señal clara de que el nuevo gobierno tenía la firme intención de apartarse de las reglas ortodoxas de mercado.

²⁴ El tipo de cambio múltiple no es nuevo en la Argentina. Entre 1973 y 1975 existían dos mercados de cambios. Comercial y financiero. Los bienes agropecuarios se exportaban por el mercado comercial mucho menor que el financiero. En tanto las exportaciones industriales lo hacían por un mix de ambos. Así los primeros tenían un tipo de cambio de \$1.000 y los industriales 1.303. Del mismo modo durante el período 1945 a 1955 a través del IAPI, se instrumentaron en los hechos tipos de cambio múltiples a

con cada uno de los productos exportables.²⁴

Actualmente, como regla general, todos los productos están gravados con un 5% de derechos de exportación excepto los de origen agropecuarios cuyas alícuotas van, actualmente, del 20 al 35 por ciento.

Claramente se pasó de un tipo de cambio único, aplicable a todos los productos, a un sistema de tipos de cambio múltiples donde el tipo de cambio efectivo aplicable al sector industrial se ubica en el 95% del tipo de cambio nominal; para el sector agropecuario, los valores van desde un 80% al 65 por ciento²⁵.

Las implicancias del sistema de tipos de cambio múltiples obviamente no son neutrales al interior de la economía. En efecto, las señales de precios que reciben los productores de bienes transables locales ya no son el reflejo directo de los precios internacionales. Por lo contrario hay claramente una promoción del sector industrial (y de su nivel de empleo), en particular de las exportaciones industriales en detrimento de las primarias. Del mismo modo, la ventaja cambiaria para el sector industrial le permite competir en mejores condiciones frente a las importaciones.

1.2.2. La transferencia de ingresos originada en la aplicación de los derechos de exportación y la rentabilidad del sector agropecuario.

Los derechos de exportación reducen los precios internos de los bienes gravados. Así la totalidad de la producción agropecuaria gravada, ve reducir sus ingresos en el porcentaje del derecho de exportación aplicable. No obstante los precios mayoristas agropecuarios son únicos ya sea que el producto se destine al consumo interno o a la exportación. Por ende tanto los consumidores locales como el Estado nacional se benefician por la aplicación de los derechos.

La distribución de esta transferencia de ingresos se vincula con el destino de la producción. El Estado nacional percibe parte de esos ingresos en función del porcentaje de la producción destinado a la exportación y los consumidores locales por el porcentaje remanente destinado al consumo interno.

Estimativamente la merma de ingresos del sector agropecuario por

través de los precios que se fijaban para la compra de bienes agropecuarios por parte del estado para su posterior exportación. En 1967, durante el gobierno de Onganía Krieger Vasena se devaluó la moneda y se fijó un derecho de exportación de casi 40 por ciento.

²⁵ La única excepción la constituyen los productos lácteos que tributan cero de derecho de exportación.

aplicación de los derechos de exportación al sector productor y exportador de alimentos puede estimarse entre 12 y 15.000 millones de dólares anuales. La mayor parte de dicha disminución es una transferencia de ingresos en favor del Estado nacional (que aparece contablemente como recaudación de impuestos) y el resto a favor de los consumidores (en la forma de menores precios que los que surgirían de la vigencia de un mercado único y libre de cambios). Representan entre el 3 y el 4% del PIB.

No obstante aun así el sector agroexportador mejoró sustantivamente su cuadro de rentabilidad.

En efecto, si tomamos el caso del principal bien exportable agrícola, el grano de soja y sus subproductos, en números, la situación comparativa evolucionó de la siguiente manera: a mediados de 2000 la tonelada de soja valía 160 dólares. En 2012 se cotizaba, a principios de octubre, a 560 dólares. Como el derecho de exportación aplicable al grano de soja es del 35%, le quedan, actualmente, al productor aproximadamente²⁶ 356 dólares y, la diferencia, por aplicación de los derechos de 204 dólares por tonelada, se distribuyen una parte como ingresos del Estado nacional y el resto en la forma de rebajas de precios para el consumidor.

En este caso, como la soja y sus subproductos se exportan en un 97 %, el 97 % de esos 204 dólares los recibe el Estado como impuestos y el 3 % el consumidor local, en la forma de menores precios.

Obviamente la distribución entre el Estado y los consumidores cambia en función del destino de la producción. En el caso del trigo donde se consume un tercio de la producción local y el resto se exporta, el Estado solo recibe el 67% de la “rebaja de precios” y el consumidor el resto.

Cabe aclarar que el consumidor local debe pagar precios más caros por los alimentos (de 160 dólares a 356) pero menores que los que hubiese pagado si continuaba el modelo de tipo de cambio único.

Por su parte el productor vio aumentar sus precios desde los 160 a los 356 dólares.

El incremento de 400 dólares por tonelada de soja se repartió de la siguiente manera: 196 dólares le quedaron al productor (recibe “sólo” 356 dólares en 2012 contra los 160 en 2000) mientras que entre el Estado y los consumidores locales reciben en conjunto 204 dólares.

El pasaje de recibir 160 dólares por tonelada sin impuestos a la exportación a 356 ya deducidos los impuestos implicó un fuerte incremento en

²⁶ Este precio es el que paga el exportador. El productor recibe este precio menos los costos de flete y gastos de exportación.

la rentabilidad agropecuaria. Claramente lo evidencian las variaciones de precios de los campos aptos para la agricultura. Las diferentes estimaciones del sector privado señalan que el campo que se vendía en 2000 a 4.000 dólares la h, en 2011 tenía un precio de 15.000 dólares. En este sentido prácticamente todas las teorías económicas señalan que el precio de un activo, tanto real como financiero, está vinculado con su rentabilidad esperada. Si nos guiamos por dicho indicador, la rentabilidad en dólares de la producción agropecuaria, desde 2000 a la fecha, se debería haber incrementado significativamente.

1.3. De la economía abierta a la competencia externa al proteccionismo de la producción local

Hasta 2007/8 el “modelo” mantuvo abierta la economía a la competencia externa originada en los productos importados. Hasta ese momento el sector industrial (y el nivel de empleo vinculado) tenía la protección que surgía del valor en términos reales del tipo de cambio. Es decir, el “dólar alto” más los derechos de importación, eran suficiente garantía para la adecuada protección de la industria y el trabajo nacional frente a las importaciones.

No obstante ya hacia 2010 dicha protección “cambiaría” tendió a diluirse^{27 28}. A partir de ese momento el Gobierno nacional comenzó a utilizar formas “no explícitas”²⁹ de prohibición y o restricción a las importaciones³⁰.

Finalmente el cuadro actual de situación es más o menos el siguiente. i) Restricción casi total a la importación de bienes que se producen localmente (protección “infinita” en algunos sectores ii) algo similares sobre los bienes de consumo no imprescindibles iii) presión política

²⁷ De acuerdo con los datos del BCRA, el tipo de cambio real multilateral sobre la base 2001=100, en 2008 era 200. En 2012 sólo 150. Es decir según el BCRA el dólar en términos reales de 2012 es 50% superior al de 2001.

²⁸ Claramente el gobierno nacional desde 2007/8 en adelante utilizó el tipo de cambio nominal para amortiguar la tasa de inflación. Como se verá más adelante es una de las cuestiones importantes a considerar para mantener en el tiempo el “modelo”.

²⁹ Dado que la Argentina suscribió todos los acuerdos internacionales vinculados con el libre comercio internacional, una protección “explícita” tiene riesgos originados en represalias y sanciones que prevé la OMC. En este sentido el Gobierno nacional optó por formas no explícitas para evitar los riesgos de sanciones de dichos acuerdos internacionales.

³⁰ Una de las claves del modelo industrialista sustitutivo de importaciones fue la protección explícita de la industria nacional. Prácticamente, excepto, los dos períodos mencionados de apertura externa, desde los años '30 en adelante el proteccionismo industrial fue la base para el desarrollo industrial argentino. Incluso, curiosamente se implementaron en el '82, durante la gestión de Roberto Alemann.

para que la industria local avance en programas e inversiones tendientes a sustituir importaciones o compensar con incrementos en las exportaciones.

Los efectos del proteccionismo selectivo o no explícito, son los siguientes:

- a. Las restricciones a las importaciones vigentes implican eliminar al competidor externo y reducir la competencia a los productores locales los cuales tienen la misma regla salarial. En este sentido el sector industrial, que transforma materias primas importadas, en bienes para la venta en el mercado interno, tiene la “ventaja” de costos internacionales de las materias primas no producidas localmente y precios de venta que superan a los precios internacionales. Esta política claramente induce la industrialización sustitutiva de importaciones, genera mayor rentabilidad en el sector industrial y abre nuevas oportunidades de inversión local.
- b. No obstante lo señalado el proteccionismo en un contexto de dólar “atrasado” tiene implicancias en términos de la formación interna de precios. En efecto, la falta de competencia externa en un contexto de oferta local concentrada habilita que dichos sectores transfieran a precios la totalidad de los aumentos de costos o directamente aumenten el margen de ganancia. La competencia externa tiene costos y beneficios. Uno de los beneficios es el disciplinamiento de los formadores de precios que, en este caso, desaparece. En tal sentido el “control” de los precios en dicho contexto de oferta concentrada, tiende a reducirse a los controles “administrativos” que obviamente son menos eficientes que los de mercado. Dicho de otra manera, el proteccionismo mejora la balanza comercial, el empleo y promueve las inversiones en el sector industrial. No obstante elimina el único control de “mercado” sobre las formas de oferta oligopólicas. Por ende el “control administrativo” debería reemplazar la falta de competencia externa, generalmente con menor eficiencia.

1.4. La inconvertibilidad del peso nacional.

Hacia fines de 2008 el Gobierno nacional enfrentó una fuerte demanda de dólares. En ese momento la respuesta oficial fue manejar la demanda de dolarización de portafolios con instrumentos de mercado. En efecto, el BCRA vendió dólares, aceleró la devaluación del peso y permitió una fuerte suba de la tasa de interés en pesos. En tal sentido, esta política, contribuyó -no exclusivamente- a generar el primer año recesivo desde 2003.

En 2011 se presentó el mismo cuadro de situación aunque con una

paridad cambiaría mucho menor. En ese contexto la respuesta del Gobierno fue, claramente, alineada con la regulación de los mercados inherentes al modelo de industrialización sustitutivo.

En efecto, a partir de octubre de 2011 y perfeccionado en los meses siguientes, el Gobierno nacional decretó en los hechos la inconvertibilidad del peso nacional. Es decir, eliminó la opción que tenían los tenedores de pesos de comprar dólares billete o cable (transferencia al exterior). Este instrumento más la reforma de la Carta Orgánica del BCRA completaron el modelo regulatorio asociado con el modelo de industrialización sustitutivo. Claramente, las actuales “instituciones” económicas son, en la práctica, similares a las correspondientes a los períodos 1945/55 y 1973/75.

1.4.1. La separación del mercado cambiario del monetario y la pesificación de la economía

En una economía bimonetaria y dolarizada como la argentina, la función de la tasa de interés en pesos es distinta de lo que sugieren los modelos económicos teóricos tradicionales. En efecto, en condiciones de mercado libre, los agentes económicos ahorran en pesos de manera limitada, en tanto la tasa de interés cubre la devaluación esperada.

En 2011 el BCRA intentó implementar políticas keynesianas expansivas y convalidó una caída importante de la tasa de interés en pesos. En ese contexto, los tenedores de pesos respondieron con racionalidad bimonetaria. Es decir, demandaron masivamente dólares. Así, el intento de implementar políticas keynesianas expansivas concluyó con efectos inversos. Tal dolarización masiva implicó una fuerte caída de la demanda agregada de bienes y servicios. Los dólares comprados al BCRA terminaron fuera del circuito económico formal y se tradujeron en una caída en la demanda agregada.

La inconvertibilidad del peso dispuesta por el Gobierno nacional eliminó la opción de dolarización señalada. Así, una política de tasas negativas frente a la inflación esperada le deja al tenedor de pesos sólo la posibilidad de ahorrar a tasas negativas o, de lo contrario, demandar bienes y servicios³¹.

Los primeros resultados son elocuentes. Hasta octubre de 2011 los depósitos a plazo fijo crecían a un ritmo menor que la tasa de inflación. Desde esa fecha hasta el presente la tasa de incremento se ubica en más del 52% anual. Es decir, los pesos que no se pudieron dolarizar

³¹ Este modelo de mercado monetario funciona de manera similar al del modelo teórico de una economía keynesiana cerrada.

terminaron en la forma de ahorro a tasa de interés. Incluso en un contexto de tasas de interés en pesos negativas frente a la inflación esperada.

Visto retrospectivamente el Banco Central recuperó, aunque parcialmente, la capacidad de hacer políticas monetarias keynesianas.

1.4.2. La fuga de capitales

La dolarización de los activos en pesos, ya sea que terminen en cajas de seguridad o fuera del país, implican no sólo fuga de capitales sino principalmente reducir el ahorro interno disponible para financiar la inversión productiva³². Del mismo modo, agudizan la “restricción externa”.

La información disponible señala que la fuga de capitales tiende a tener relación con la tasa de ahorro interna³³. Así en el período de libertad de mercados, en la década pasada, el atesoramiento de activos en moneda extranjera por parte de residentes (o fuga de capitales) se ubicó, en valores actuales en el orden de los 9.025 millones de dólares anuales (1,9% del PIB). Entre 2004 y 2011 significaron alrededor de 13.300 millones (2,8% del PIB). Sólo en el trimestre anterior a la declaración de la inconvertibilidad del peso, la fuga se ubicó en 8.443 millones de dólares. Es decir del orden del 7 % del PIB trimestral.

En el trimestre julio- septiembre de 2012, los datos oficiales indican que la fuga se redujo a cero. En tal sentido, y desde el punto de vista de la política económica, la aludida decisión puede considerarse un éxito³⁴.

1.4.3 La inconvertibilidad parcial de la deuda pública

En condiciones de mercado libre de cambios, la deuda pública, tanto en pesos como en dólares, es, desde el punto de vista de la demanda de dólares, casi indistinta.

En efecto, los acreedores del Estado en pesos, pueden convertir de manera inmediata dichos pesos en dólares. Así el concepto “deuda pública” puede asimilarse a “deuda externa” ya que, ambas implican demanda de dólares.

La inconvertibilidad de la moneda nacional separa ambos conceptos.

³² En promedio la tasa interna de ahorro del período fue del 27%. Si le descontamos la fuga de capitales en 2011 del 4,2% del PIB, claramente, la disponibilidad del ahorro para financiar la inversión se reduce significativamente. Ver Castiñeira, R.(2012)

³³ Ver Castiñeira, R (2012).

³⁴ No obstante tuvo costos económicos de corto plazo. En efecto se perdieron más de la mitad de los depósitos en dólares, se complicó el mercado inmobiliario y contribuyó a aumentar las críticas a la política económica.

En particular la deuda en pesos no puede convertirse a dólares. En este sentido, la aludida decisión, implica reducir la deuda externa en un 28% ya que dicho porcentaje es la participación de la deuda en pesos sobre el total de deuda pública.

Así la deuda externa se redujo en el orden de los 17.000 millones de dólares.

1.5. La regulación del crédito

Tanto en una economía abierta y desregulada como en una industrialista con intensas regulaciones públicas, el crédito a por lo menos mediano plazo y tasas de interés razonables, es esencial para estimular la inversión productiva pública y privada.

En los países centrales el financiamiento de la inversión depende del mercado de capitales y en menor medida del sistema bancario. En la Argentina el mercado de capitales es casi inexistente y el sistema bancario no cuenta con ahorros a mediano plazo para financiar la inversión. Incluso la poca disponibilidad de crédito se destina a financiar consumo y no inversión.

De ahí que la inversión depende principalmente de capitales propios de las empresas o los que surgen y dependen del excedente de cada una.

Las regulaciones públicas como las descriptas precedentemente no contribuyen a resolver el problema. Dicho de otra manera, en el contexto descrito se requiere mucho tiempo y políticas consistentes³⁵ para desarrollar formas de ahorro en pesos tales que induzcan el ahorro a largo plazo y eviten la dolarización de los portafolios privados.

No obstante una forma (no de "mercado") de utilizar la poca capacidad prestable del sistema puede vincularse con el sistema de nacionalización de los depósitos³⁶. Este instrumento permitía que el Estado definiera el destino y el costo del crédito.

En este contexto puede inscribirse la Reforma de la carta orgánica del BCRA. Se trata de un primer paso hacia el direccionamiento del crédito y regulación de su costo. Es decir la reciente reforma es más relevante desde lo señalado que desde el punto de vista de la liberalización de las restricciones para financiar al Estado. Es decir la reforma delega en el Directorio de la autoridad monetaria la posibilidad de direccionar los

³⁵ Para lograr ahorro en pesos a largo plazo se requiere, por lo menos, que existan formas de ahorro cuyo "rendimiento" supere a la devaluación del tipo de cambio y a la vez a la inflación.

³⁶ Vigentes, con variantes institucionales, entre el '45-'55 y el '73-'75.

créditos y fijar su costo. Es decir, como el “mercado” no resuelve la cuestión del financiamiento de la inversión, la regulación apunta a reemplazarla³⁷.

Así, se entiende que la primera medida de orientación crediticia apunta a financiar a tasas muy negativas proyectos de inversión. Claramente es dable esperar que a medida que pase el tiempo el BCRA avance en mayor direccionamiento del crédito.

2. Fortalezas y debilidades del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones

2.1. La restricción externa y la capacidad exportadora del sector industrial

Conceptualmente la debilidad central de la economía argentina no ha cambiado. Sigue siendo la disponibilidad de dólares para financiar las importaciones. Esta restricción al crecimiento económico argentino y a la definición independiente de las políticas públicas es inherente a la estructura productiva argentina y aplicable tanto a este “Modelo” como al de Mercado.

No obstante sí se han modificado dos de los tres factores que la originan: el deterioro de los términos del intercambio y el endeudamiento externo. El primero producto de cambios internacionales. El segundo resultado de las políticas desde el 2003 en adelante.

En efecto, el fortísimo incremento de los precios de las exportaciones agrícolas argentinas en la última década no sólo implica un cambio cuantitativo sino cualitativo. La evolución de los precios internacionales ha cambiado de signo en los últimos años en favor de los alimentos y no parecería que se modifique en los próximos³⁸. En segundo término, la deuda externa, desde el punto de vista cuantitativo (los dólares necesarios para su pago) y cualitativo (las condicionalidades inherentes a “seducir” a los mercados internacionales para lograr financiamiento) ha dejado de ser un problema. Vencimientos de tan sólo 1 ó 2% del PIB son absolutamente administrables frente a niveles del 6/8% del PIB. Así “vivir con lo nuestro” es posible³⁹.

³⁷ En una economía “keynesiana” el monto de la inversión interna se define a partir de la curva de Eficiencia Marginal del Capital frente al nivel de tasa de interés. Claramente la línea de financiamiento a pymes a tasas negativas de interés se entiende desde esta perspectiva. .

³⁸ China ha incorporado en la última década 300 millones de consumidores y debería incrementarlos aún más. Además, los cereales se destinan a la producción de biocombustibles. En este contexto mientras el petróleo se mantenga en los niveles actuales o superiores es difícil suponer una reducción importante en los precios.

³⁹ Esto no significa que, en determinados casos, no sea conveniente recurrir al crédito

Es decir, en este contexto internacional y local, están dadas las condiciones necesarias pero no suficientes para sostener el "modelo" en el largo plazo desde el punto de vista de la restricción externa.

Sigue existiendo la tercera causa que origina la restricción externa, que es la incapacidad del sector industrial para generar gran parte de las divisas que requiere para su crecimiento, es decir revertir o, por lo menos, reducir de manera significativa el balance comercial externo negativo del sector industrial local que se ubica actualmente en el orden de los 30.000 millones de dólares.

Claramente, la política de sustitución de importaciones y la presión pública sobre las empresas industriales para inducir mayores exportaciones colaboran en este sentido. No obstante, la resolución del déficit estructural de dicho sector requiere: i) sostener como política de largo plazo el sistema de tipos de cambio múltiples y ii) simultáneamente un tipo de cambio efectivo y real alto para dicho sector. Ambas condiciones, en el largo plazo, permitirían resolver la cuestión externa e independizarse de la "sojadedependencia" y de la restricción externa.

Dicho en pocas palabras, para sostener en el tiempo el "modelo", se requiere que el Gobierno nacional mejore de manera permanente y sostenga en el tiempo un tipo de cambio efectivo y real más alto que el actual para el sector industrial. En los últimos meses, hay alguna evidencia empírica de que el BCRA está intentando revertir esta situación o, por lo menos, evitar que empeore⁴⁰.

No obstante, mejorar el tipo de cambio real -es decir que el dólar aumente más rápido que los precios internos- no es fácil ni exento de conflictos. Recuperar el tipo de cambio real implica, para el Gobierno, un claro conflicto de objetivos. En particular, porque acelerar la devaluación del tipo de cambio nominal puede afectar tanto a la tasa de inflación como al poder adquisitivo de los salarios. Ambas cuestiones son, en lo inmediato, tan o más importante que el retraso cambiario para el Gobierno nacional.

No obstante hay otras opciones para amortiguar dicho conflicto. En efecto, existe la alternativa de mejorar el tipo de cambio efectivo del sector industrial por la vía fiscal. El Gobierno nacional podría, por ejemplo, eliminar los derechos de exportación que se le aplican al sector industrial (5%) e incrementar los reintegros y/o reembolsos a la exportación industrial.

externo. Por lo contrario ser "sujeto de crédito" en el nivel internacional es recomendable. Lo que no lo es ser "dependiente" del crédito internacional.

⁴⁰ Desde agosto/setiembre de 2012 la devaluación nominal del tipo de cambio administrada ha comenzado a acelerarse.

Esto puede colaborar en el corto plazo pero indudablemente no resuelve la cuestión esencial⁴¹.

Otra opción, es apelar a instrumentos utilizados anteriormente que son consistentes con el resto del “modelo”. Así, en el pasado, la cuestión cambiaria se resolvió creando un mercado de cambios adicional al existente, con un valor más alto, donde se liquidaban las divisas de las importaciones y exportaciones de servicios, en particular los turísticos, y un porcentaje de las exportaciones industriales. Obviamente el BCRA también debería intervenir en este mercado pero, a diferencia del presente, compraría el excedente de divisas en el actual mercado único y libre de cambios y parte de ellas las vendería en el otro mercado. De esta manera se desestimula el turismo⁴² al exterior, se habilita la posibilidad de mejorar la paridad cambiaria para el sector industrial sin alterar el tipo de cambio efectivo al sector agropecuario, y el estado se apropia de una importante renta financiera al comprar dólares baratos y venderlos mas caros^{43 44}.

2.2. La inversión productiva

No hay crecimiento económico sin inversión. Pocos economistas no estarían de acuerdo con esta frase. No obstante en un modelo protegido de la competencia externa, regulado y con restricciones a la remisión de divisas al exterior, el comportamiento de las decisiones de inversión no es igual para todos los sectores ni mucho menos similar a la de un modelo de mercado. En tal sentido cabe revisar los determinantes de la inversión y la compatibilidad con el resto del modelo.

Claramente este modelo supone que la generación de ahorro interno es capaz de financiar la inversión necesaria para sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

⁴¹ En el corto plazo no hay muchas maneras fáciles de mejorar la paridad cambiaria real sin afectar la capacidad de compra de los salarios reales. Obviamente una manera es una “devaluación compensada parcialmente”, es decir aumentar el tipo de cambio mas rápido que los precios pero capturar vía derechos de exportación el aumento para el sector primario exportador. Obviamente hay serias limitaciones políticas al respecto.

⁴² Claramente hoy la economía en su conjunto está subsidiando al turismo de los argentinos al exterior. Lo más grave es que se estimula el consumo de las divisas que se han transformado en un bien escaso y estratégico.

⁴³ En los papeles parece una solución fácil de implementar. No obstante desde el punto de vista práctico es algo similar a aumentar las retenciones agrícolas y poner un impuesto al turismo de los argentinos al exterior.

⁴⁴ Quiero ser preciso en este punto. No se está proponiendo un mercado cambiario para adquirir divisas para atesoramiento, sólo se trata de encarecer el turismo al exterior y mejorar la paridad efectiva del sector industrial sin alterar los precios internos de los bienes salario.

La evidencia empírica reciente dice que el ahorro local alcanzó entre 2004 y 2011 al 27,7 del PIB frente al 17,6 %⁴⁵ durante la década de los '90. En tanto el ahorro disponible es, porcentualmente, también mayor. En particular por la reducción de los pagos originados en la deuda externa y la posible reducción de la fuga de capitales a partir de la decisión de declarar la inconvertibilidad parcial del peso.

Queda, por ende, evaluar los distintos comportamientos sectoriales, en el marco de este modelo, acerca de los determinantes de las decisiones de inversión. Se trata en última instancia de analizar qué conductas y parámetros se requieren para que dicho incremento de ahorro se destine a ampliar la capacidad productiva⁴⁶.

El sector pyme, “mercado internista” e industrial sustitutivo de importaciones, protegido de la competencia externa y con las ventajas del tipo de cambio diferencial, tiene indudables oportunidades de inversión. Además, como ya se mencionó, cuenta para su financiamiento con el subsidio implícito en los créditos dirigidos por el BCRA que son posibles a partir de la reforma de su carta orgánica.

En tanto, el sector industrial multinacional y/o nacional transnacionalizado, tiende a un comportamiento diferente. Claramente demanda, normalmente, la libre disponibilidad de sus ganancias para transferir al exterior. En tal sentido las restricciones a la transferencia de utilidades al exterior, si se mantienen en el tiempo, pueden alterar su conducta inversora⁴⁷.

Por otra parte, dicho sector, tiende a tomar decisiones de inversión a la manera “keynesiana”, es decir se compara el rendimiento esperado de las eventuales inversiones con el costo de mediano plazo del dinero. En este caso, es de la tasa de interés en dólares. A falta de crédito interno en esa moneda, se utiliza como parámetro los rendimientos esperados (o TIR) de los bonos públicos emitidos en dólares como indi-

⁴⁵ Ver Ramiro Castiñeira (2012), “Dos décadas de dolarización”, *Econométrica*, 3/10/2012.

⁴⁶ El punto no es menor. En efecto un modelo que sustenta su dinamismo sobre el incremento del consumo interno no tiene más alternativa que ampliar permanentemente la oferta interna de bienes y servicios. De lo contrario tiende a agudizar la demanda de divisas por importaciones.

⁴⁷ Si bien actualmente el BCRA no vende divisas para remitir al exterior, está disponible el mecanismo de “contado con liqui” que permite que se remitan utilidades al exterior. Obviamente el tipo de cambio implícito es significativamente más alto y no parecería que este “mercado” soporte masivas remisiones de dólares al exterior sin la intervención vendedora del BCRA. Estimativamente, las utilidades susceptibles de ser remitidas al exterior serían del orden de 3 a 5.000 millones de dólares en condiciones normales.

cador, piso, para decidir inversiones. Claramente rendimientos de los bonos soberanos en dólares superiores al 12% no contribuyen a la generación de nuevos proyectos de inversión.

Si bien el Gobierno nacional tiene prácticamente decidido prescindir del endeudamiento externo, la aludida metodología de decisiones de inversión, explican, entre otras cuestiones, porqué el Gobierno nacional intenta que la paridad de los bonos públicos no se deteriore demasiado.

Por último una restricción vigente para todos los sectores es el acceso a líneas de crédito comerciales externas para la compra de bienes de capital del exterior. Tal restricción se vincula no sólo con la tasa de riesgo país, sino con la falta de acuerdo con el Club de París.

En otros términos, una parte significativa de las decisiones de inversión requieren que el Gobierno resuelva algunas cuestiones pendientes. Ha manifestado expresamente su decisión de hacerlo en muchos casos. En este sentido son clave para los determinantes del monto de la inversión productiva.

2.3. La eficiencia regulatoria

Las regulaciones públicas pueden lograr mejores resultados en términos de empleo y salarios que el mercado libre. No obstante, implícitamente, estamos suponiendo una regulación eficiente, despersonalizada y con reglas de juego conocidas. Así por ejemplo, la protección de algún sector industrial puede lograr buenos resultados en términos de inversión en tanto y en cuanto se sostenga en el tiempo y sean conocidas por las empresas. *Las regulaciones espasmódicas, poco claras y cambiantes pueden incluso ser peores que los mercados libres desde el punto de vista señalado.*

2.4. La puja distributiva y la inflación

La economía argentina tiene un índice de inflación demasiado alto. Claramente en los últimos años se utilizó el tipo de cambio para evitar que la inflación se espiralice. Por lo señalado en los puntos precedentes, el retraso cambiario como instrumento antinflacionario se ha agotado.

No obstante las causas de la inflación de los últimos años no son las tradicionales de los manuales de texto. En efecto, el “inicio” de este tipo de inflación está vinculado con los cambios en los mercados internacionales que, si bien por un lado hacen viable al “modelo”, por el otro gatillaron el comienzo de este tipo de inflación.

En efecto, hasta 2006/07 la tasa de inflación estaba vinculada con el pasaje de la devaluación de 2002 a precios⁴⁸. A partir de entonces comenzó una fuerte recuperación de los precios de los alimentos que la Argentina exporta. La estrategia del Gobierno nacional, inicialmente, se limitó a incrementar los derechos de exportación y, en menor medida, subsidiar el consumo interno de los mismos. No obstante, dado un tipo de cambio fijo, los aumentos de precios internacionales tienden rápidamente a trasladarse a los precios internos. Las paritarias libres viabilizaron su pasaje a costos y luego a precios nuevamente.

En este contexto, la política monetaria, se tornó pasiva con el propósito de mantener la expansión del consumo y la inversión productiva.

Claramente esta inflación es típica del modelo de economía cerrada similar a la verificada en los '60 y '70. Quizá, la diferencia principal es que, su origen fue el aumento de los precios internacionales o, si se prefiere, inflación "importada".

En este contexto, la falta de competencia externa a la producción interna de bienes tiene ventajas y desventajas. Hemos expuesto la mayoría de sus ventajas. No obstante su principal desventaja, consiste en que no hay límite a los precios locales excepto la elasticidad precio de la demanda⁴⁹. En este sentido, las negociaciones salariales son menos condicionadas. Es decir, la industria no sometida a la competencia externa, tiene mayor posibilidad para trasladar a precios los aumentos nominales de salarios de la misma manera que aumentar sus márgenes de ganancias.

Así, las "causas" de la inflación actual en la Argentina son complejas y muy lejos de limitarse a explicaciones monetaristas y monocausales. Claramente hay presiones inflacionarias ligadas con la modalidad de la fijación de precios y salarios (puja distributiva), potenciadas por la falta de competencia externa, más la suma de una moderada devaluación sumada al incremento de los precios internacionales de los alimentos. En este contexto, la política monetaria pasiva sólo tiende a "convalidar" las variaciones en los precios.

2.4.1. La experiencia antiinflacionaria

En nuestra opinión el Gobierno nacional se ha limitado a convivir con la inflación y sólo apunta a evitar el riesgo de su espiralización. En principio, el Gobierno supondría que una política monetaria restrictiva para

⁴⁸ Saiegh (2007).

⁴⁹ Esto es particularmente relevante en una economía como la argentina que evidencia una gran concentración de la oferta.

reducir la tasa de inflación⁵⁰, tendría fuertes costos en términos de actividad y salarios. Dicho de otra manera el “costo político” originado en una política antiinflacionaria sería superior al costo de “administrar” la tasa de inflación.

Caben en este contexto dos reflexiones. Hasta ahora la inflación interna no afectó la capacidad de crecimiento de la economía argentina. El efecto principal es generar malhumor político en gran parte del pueblo. En menor medida es, en parte, responsable del atraso cambiario. Así las cosas, la política antiinflacionaria debería volver al centro de la escena no sólo por cuestiones económicas sino principalmente por cuestiones que hacen a la viabilidad política del modelo.

Sin intentar abordar detalladamente el problema cabe recordar que la Argentina tiene una enorme experiencia en cuanto a políticas antiinflacionarias. Tanto en economías cerradas a la competencia externa cuanto a las abiertas. Hay por lo menos tres experiencias relativamente exitosas en el pasado y que, no casualmente, a pesar de tener sustentos ideológicos distintos, coincidieron en utilizar los mismos instrumentos.

Caben recordar el Plan Gelbard del '73, el Austral del '86 y el Plan de Convertibilidad de los '90. Estos planes de una u otra manera utilizaron tres instrumentos simultáneamente⁵¹ para reducir la tasa de inflación: i) compromiso de sostener el tipo de cambio nominal fijo ii) acuerdos y/o control de precios y salarios y iii) compromisos en cuanto a emisión de dinero.

Dicho de otra manera, se abordó la política antiinflacionaria sobre la base de apuntar simultánea y respectivamente a: i) evitar el impacto de la inflación cambiaria ii) congelar o reducir la puja distributiva y iii) evitar tanto el exceso de demanda de origen monetario cuanto las expectativas de los agentes económicos vinculados con la emisión de dinero. Claramente, muy lejos, del simplismo monetarista.

No obstante, queda pendiente cómo administrar la volatilidad de los precios internacionales y su impacto interno.

Octubre 2012

⁵⁰ Aludimos a las recomendaciones de fijar “metas de inflación” como instrumento principal antiinflacionario. A la larga una política monetaria restrictiva reducirá significativamente la tasa de inflación. No obstante, el “precio” a pagar en términos de actividad económica interna sería inaceptable para el Gobierno nacional.

⁵¹ Cabe recordar que el plan de convertibilidad congeló por 90 días precios y salarios.

Bibliografía

- Castiñeira, Ramiro. (2012). *Econométrica*. Informes semanales entre agosto y octubre de 2012.
- Canitrot, Adolfo. (1979) "La disciplina como objetivo de la política económica: Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976". CEDES.
- Diamand, Marcelo (1972). "La estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio". *Desarrollo Económico*. Nº 12.
- Diamand, Marcelo (1973). *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia*. Paidós. Buenos Aires.
- Diamand, Marcelo (1986). "Paradigma clásico y estructura económica desequilibrada". **Realidad Económica**. Nº 68
- Ferrer, Aldo. (1983) *Vivir con lo nuestro*. Fondo de Cultura Económica.
- Saiegh, Jaime (2007). "Recuperación Económica. Ajuste de precios relativos y tasa de inflación. Argentina 2003-2006"- BID- Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Producción avícola primaria en Entre Ríos, Argentina

*Rubén A. Pietroboni**

*Leandro Lepratte**

*Rafael Blanc**

*Daniel Hegglin**

*Walter Cettour**

*Leonardo Rubl**

El trabajo tiene como principal objetivo relevar y analizar la evolución del sistema complejo de la producción primaria aviar en la provincia de Entre Ríos. Se estudiaron, desde una perspectiva convergente de la economía del conocimiento y la sociología de la tecnología (Thomas, 2008; Dagnino y Thomas, 2010; Lepratte, Thomas y Yoguel, 2012), los cambios producidos en sus estructuras a partir de incentivos internos, y también la habilidad del sistema para producir cambios internos derivados de incentivos externos.

Una de las características de la avicultura es la integración del proceso productivo a partir de empresas núcleo o frigoríficos, figura que en algún momento permitió el afianzamiento de productores en el medio rural. Debido a las escalas productivas que se plantean actualmente y a las cada vez más exigentes especificaciones en las instalaciones de crianza, parte de los productores se ven amenazados con el consecuente impacto negativo en el desarrollo regional. A través del análisis de la trama, tomándola como un sistema complejo, se verifica la debilidad de los integrados y su respectiva vulnerabilidad.

El artículo será publicado con los gráficos en el sitio web de Realidad Económica.

Palabras clave: Producción aviar - Productores integrales - Cadenas globales - Desarrollo regional - Producción integrada

* Grupo de Investigación en Desarrollo, Innovación y Competitividad - GIDIC- Facultad Regional Concepción del Uruguay - Universidad Tecnológica Nacional. (rubenpietroboni@yahoo.com.ar, gidic@frcu.utn.edu.ar)

Primary poultry production in Entre Ríos, Argentina

This article has as its main purpose to gather information and analyze the evolution of the complex system of poultry industry in the Argentinian state of Entre Ríos. It studies, from the convergent perspective of knowledge economics and the sociology of technology (Thomas, 2008; 2010; Dagnino y Thomas, 2000; Lepratte, Thomas y Yoguel, 2012), the changes which took place in their structures from internal incentives, and the ability of the system to produce internal changes as a result of external incentives.

One of the characteristic of poultry is the integration of the productive process from core industries, which once made possible the consolidation of rural producers. Since the current scales of production and the increasing strict specification in the breeding facilities, some of the producers may feel threatened by the possibility of a negative impact on regional developments. Through an analysis of the scheme, regarded as a complex system, it would be possible to confirm the weaknesses and vulnerabilities of the integrated producers.

Key words: Poultry industry - Integrated producers - Global chains - Regional development - Integrated production

Fecha de recepción: noviembre de 2012

Fecha de aceptación: noviembre de 2012

Inicios de la avicultura en Entre Ríos

La avicultura en la República Argentina y más precisamente en Entre Ríos puede reconocer sus inicios en las prácticas llevadas a cabo por los inmigrantes europeos, -franceses, suizos, alemanes e italianos principalmente- que arribaron al territorio en la segunda mitad del siglo XIX, afincándose en dos zonas, una sobre la costa del Río Uruguay, donde fundaron la Villa San José y que ocupa los actuales departamentos Colón y Uruguay y la otra en el departamento Paraná, principalmente en Crespo.

Los productores avícolas no contaban con apoyo alguno de parte del Estado ni de instituciones u organismos técnicos ni sanitarios, y trataban de seguir las normas que legaron sus antepasados.

Recién en el siglo XX desde el Estado nacional se acude en procura de promover la avicultura, visualizándola como una actividad económica de futuro. En los años 1914 y 1915 el gobierno nacional convoca a especialistas españoles que realizan una extensa gira, dando conferencias y organizando cursillos.

Entrada la década de 1930 los Estados provincial y nacional comienzan a generar acciones para apoyar la avicultura. Durante el gobierno del Dr. Eduardo Tibiletti el gobierno provincial apoya financieramente la creación del Frigorífico San José, como ente autárquico, cuyos administradores fueron los colonos.

Esta planta, que se inaugura en 1937, no solamente procesaba sino también ofrecía la posibilidad de almacenar las aves y huevos en dos antecámaras y catorce cámaras, cambiando radicalmente no solamente el producto, ahora faenado y desplumado, sino también la forma de comercialización. El complejo además contaba con un aserradero para la fabricación de cajones que se ocupaban en el proceso. (Guionet, 2000)

En la misma época se inician las acciones tendientes a crear en las afueras de la ciudad de Colón la Escuela Nacional de Avicultura, que pretendía brindar recursos humanos formados para desarrollar el sector. (Anuario KRAFT, 1940).

Se inició así una *coordinación débil* dando lugar a posibilidades de nuevas asociaciones y desarrollo de la red. Esto establece un primer grado de incremento de la convergencia de la red, aún muy débil en la delimitación de sus fronteras; con presencia de procesos de coordinación en términos de complementariedad y con escaso grado de alineamiento respecto a un actor o actores específicos. Los productores primarios eran en su totalidad independientes, dueños de sus instalacio-

nes y con la libertad de comercializar su producción en forma autónoma o agrupada.

Primeras intervenciones de empresas multinacionales

Hacia 1940, el Ministerio de Agricultura de la República Argentina reconocía que para la avicultura “su comercialización podría adquirir un mayor volumen si nuestra producción fuese más amplia y los productos reuniesen las condiciones que exigen los del exterior” (Ministerio de Agricultura, Informes de Sector 1940).

En la década de 1940 comienza a conformarse una segunda etapa de intentos de nuevas convergencias para la conformación de una red tecnoeconómica de carne aviar. El proceso, que cobra relevancia, fue dinamizado por proyectos de alineación. Una unidad productiva de la multinacional Swift comienza sus actividades en Concepción del Uruguay en 1944, instalando plantas de incubación, alimento, faena y frigorífico. Con la llegada del Swift la dinámica de la red tecnoeconómica de carne aviar ingresa en un fase de alineación de otros actores e intermediarios que la complejizan. Nuevas traducciones intentan imponerse y constituir una nueva red tecnoeconómica. El proceso de alineación busca “disciplinar” gradualmente a los granjeros independientes e imponer otras rutinas de crianza, especialmente establece nuevos procesos en la red bajo procedimientos de industrialización con tecnología incorporada para incubación y faena. Swift introduce nuevos artefactos (no humanos – no máquinas) a la red: los *broilers* (el pollo parrillero), lo que implica el pasaje del animal multipropósito al unipropósito, orientado a la producción de carne aviar. El poder, componente sociopolítico de la red, se evidencia en la aparición de nuevos actores, una pequeña burguesía local que invierte en las actividades del sector, adhiere a esta nueva traducción y, por ende, comienzan a cambiar los patrones de interacción de la red hacia un mayor alineamiento, con un actor – red central “el frigorífico” que alinea a la actividad de incubación y faena a las granjas (aún independientes) que deben proveer y recibir sus servicios. Son los inicios de lo que sería luego la implementación del patrón de integración vertical. En el sistema sociotécnico de producción e innovación (SSIP) se estaba dando, un proceso de cambio tecnológico, la dinámica sociotécnica del mismo manifestaba cambios endógenos en los patrones de interacción tecnoeconómica y socio-política de la cría de aves y venta del pollo vivo sin faenar, hacia una cuasi-integración con granjas de cría aún independientes pero que progresivamente iban alineando su actividad a los de la empresa procesadora de carne aviar.

Swift si bien buscó asociar al grupo de pequeños productores de Concepción del Uruguay y Colón para garantizar disponibilidad de aves trabajaba faenando, en un altísimo porcentaje la producción de granjeros de la zona que traían sus aves en jaulas, no existiendo ninguna uniformidad (estandarización) en términos de genética, edad o tamaño de los animales. El producto final eran aves faenadas, desplumadas pero no evisceradas, que se colocaban en cajones de madera y congelaban para su posterior venta.

Paralelamente en la costa del Paraná de la provincia de Entre Ríos otro núcleo importante de colonos comienza también a impulsar la actividad avícola. Hacia 1942, un empresario local (Eichhorn) comienza a producir huevos fértiles en su granja y aves en su planta de incubación. En 1946, Sagemüller instala la primera fábrica de alimentos balanceados de la provincia con la marca propia: Vitagerm y en 1955 inaugura el Frigorífico Crespo S.A.

Hacia mediados de 1950, se da otro momento importante en la reconfiguración de la red tecnoeconómica de producción de carne aviar de la Argentina. El polo científico – tecnológico de la red (cuyos nodos no son nacionales) comienza a establecer un rol clave en su configuración y en su rol de alineamiento y coordinación del polo de producción, no sólo en la Argentina sino también en el nivel mundial (en la escala que se entendía por aquel entonces). En 1959 se importan desde Estados Unidos los primeros lotes de padres de las nuevas líneas genéticas de híbridos para la producción, pura y exclusivamente de “parrilleros de doble pechuga”. Se instalan en 1961, para la explotación de estas líneas dos grandes firmas de capitales extranjeros, Jorju S.A., con la línea de reproductoras Thompson y Arbor Acres Argentina. En 1962 comienzan a producirse las aves reproductoras de la línea Cobb.

Entrada la década de los '60 en ambos polos se producen grandes novedades, en 1962 en el frigorífico Swift de Concepción del Uruguay se comienza con la incubación, crianza y faena de pollos parrilleros de genética Thompson, esbozándose los primeros trazos de lo que serían los procesos de integración internos y externos de las empresas procesadoras avícolas.

Esta multinacional cuenta con incubación, planta de alimentos balanceados y nuclea alrededor de una decena de emprendedores y empresarios locales que le garantizan una provisión constante de aves para faenar, sin dejar de atender a los productores independientes, tal como lo venía haciendo hasta el momento.

En 1963 la familia Marsó, tradicionales colonos del departamento Colón, decide comenzar con la crianza de pollos parrilleros, al año siguiente empiezan a funcionar la planta de faena de la Cooperativa

CEDAL, posteriormente FEPASA, Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas Sociedad Anónima y la del FAPU, Frigorífico Avícola de Productores Unidos, como así también la firma SUPER S.A. haciéndose cargo del “Frigorífico Itapé”, todas en Concepción del Uruguay que surgían como asociaciones de granjeros locales. Estos fueron desprendimientos en base al *know how* de la experiencia adquirida por el grupo de la pequeña burguesía local que durante una década aproximadamente se constituyó en proveedor (como granjeros) del Swift.

A su vez, no solamente se incubaban, criaban y faenaban aves, sino que surge una gama de empresas ligadas con la producción avícola. En 1963 las nuevas incubadoras ya se fabricaban en la Argentina en Quilmes, donde el Ing. A. Franken desarrolló la marca Famagro, que cubrieron la demanda argentina, encontrándose hoy cinco en funcionamiento y exportándose a Sur y Centro América.

Por aquel entonces el esquema de producción carecía de fuertes niveles de integración, si bien el proceso de alineación y coordinación de la red se volvía más complejo y con efectos sistémico respecto de décadas anteriores.

Esta etapa trae aparejada nuevas técnicas de producción y es así como la crianza en baterías se ve modificada por nuevos tipos de construcción de galpones de crianza que requieren mayor ventilación, dado que el proceso de crecimiento de las nuevas razas importadas es más acelerado y las nuevas mezclas balanceadas de alimentos suma como exigencia mayor densidad de aves por metro cuadrado. Estos cambios trajeron aparejadas mayores rentabilidades para los productores, que derivó en un crecimiento explosivo de la avicultura. Entre los años 1962-1964, se incorporaron o intentaron incorporarse al sector una buena cantidad de personas con espíritu emprendedor e interés especulativo financiero.

Este crecimiento aleatorio de la avicultura de carne trajo aparejado una sobreoferta, provocando en el año 1966 una brusca caída de los precios que no alcanzaban a cubrir los costos de producción, motivo por el cual muchos establecimientos se vieron en dificultades para comercializar sus productos y al no contar con suficiente capital para soportar la crisis, además de la falta de apoyo crediticio, hizo que varios de los productores más pequeños dejaran de producir provocando un receso momentáneo en la industria avícola y su red asociada (Dávalos, 1994; Palacios, 2003).

Además, desembarca en la provincia la multinacional Cargill, con sus plantas de eviscerado “La China” y “Alinsa S.A.” de alimentos balanceados, ambas ubicadas en Concepción del Uruguay. En el departamento Colón la firma Noelma comienza con la comercialización de pollos.

Con la llegada de Cargill se actualizaron los aspectos productivos y empresariales. El producto muestra nuevos parámetros de calidad y presentación y se afirma el concepto de integrar en una misma empresa todos los eslabones del proceso productivo, planteándose entonces una integración interna de la empresa y lo que podemos llamar integración externa. Vale decir, la incorporación de una nueva figura que relaciona la empresa núcleo, empresa que realiza la faena, con los granjeros que realizan la crianza.

Esta aparición de la figura del “granjero integrado” fue fundamental para el desarrollo y crecimiento del sector a lo largo de los últimos años del siglo XX y hasta la actualidad. El efecto sobre la red tecnoeconómica de carne aviar provocado por esta nueva racionalidad productiva, conforma la tendencia de los efectos *past dependence* generados desde los inicios de la construcción de la misma. El “modelo de integración”, ha sido estudiado por numerosos estudiosos norteamericanos de la sociología rural, quienes lo denominan el “modelo sureño de producción”, que fue ideado inicialmente en el sector avícola norteamericano y se ha trasladado vía procesos de traducción y transducción en escala global como racionalidad productiva en el campo de la agroindustria (Douglas, 2010)

El avicultor integrado se convirtió en “herramienta” fundamental para el crecimiento de la producción por dos razones principales, su aporte de inversión de capital fijo y su participación en la transformación del pollo recién salido de las nacedoras en un pollo apto para faena. Desde la perspectiva del propietario de una granja, éste se convierte en un prestador de “servicios” que no enfrenta riesgo de mercado, dado que todo lo que produzca lo venderá, pero sí el riesgo productivo, si falla en el proceso de engorde deberá asumir los costos, pues su retribución está en función de variables como índice de conversión, mortandad y peso de pollos entregados.

En la década de los '80 se producen importantes inversiones en las empresas avícolas de Entre Ríos; “Las Camelias” en 1982 instala su planta de alimentos balanceados, en 1983 compra la planta de faena “La Delfina” de Colón, en 1985 abre su centro logístico y de comercialización en Buenos Aires y todo este proceso de crecimiento se consolida con la apertura de una avanzada planta de faena sobre la costa del río Uruguay.

Reafirmando el crecimiento de la avicultura en la provincia de la mano de capitales nacionales la empresa Granja “Tres Arroyos S.A.” se hace cargo de la planta “La China” y su fábrica de alimentos asociada “Pienosos”, ambas propiedad de Cargill hasta ese momento.

Surgen también múltiples firmas proveedoras de la avicultura, algunas de ellas con fuerte actividad de innovación y desarrollo como el caso de Inmuner y Faeve, dedicadas a la sanidad aviar, y Nutrer que desarrolla y comercializa núcleos vitamínicos para alimentos balanceados.

Como ya se dijo, los granjeros o productores primarios pasaron de tener un estatus independiente a una relación, que si bien no siempre era satisfactoria con las empresas núcleo, les permitió afrontar las crisis de los demás sectores productivos agropecuarios; la figura de la integración con la industria avícola es parte de una estrategia más amplia del granjero cuya función es la de proveerse un ingreso fijo. (Posada, 1998)

Actualidad y tendencias

Ya en los '90 el próximo punto de avance de la red implicó aumentar la escala y volcarse fuertemente a la reconversión tecnológica, no sólo en las plantas de faena y procesado, sino también, y fundamentalmente, en las granjas de crianza.

El tipo de cambio no favorable para la exportación y características propias de la gestión de la mayoría de las empresas de capitales locales, casi sin conexiones comerciales con otros mercados, ni alianzas estratégicas que faciliten el acceso al mercado externo, hicieron que esta expansión desembocara en un proceso de concentración que expulsó a los productores más pequeños.

La última gran crisis se produjo en el año 2000, cuando a problemas de rentabilidad de la producción se le sumó el ingreso de productos de origen brasileño. La movilización de todos los actores de la red, en términos sociopolíticos, hizo que se acordaran con el Brasil pautas comerciales que permitieron la estabilización.

A partir del 2002, las nuevas condiciones macroeconómicas de la etapa posdevaluación, asociadas con un incremento constante en el consumo de carne de aves y la condición de país libre de influenza aviar de la Argentina, permitieron un nuevo proceso de expansión nacional e internacional del sector.

Actualmente, la mayoría de las empresas se centran sobre dos grandes componentes productivos: el aseguramiento genético y el agregado de valor con cortes especiales para el mercado externo, cocidos, precocidos y productos elaborados. De esta forma se establece el estilo sociotécnico del sistema de innovación y producción de carne aviar en escala global: desarrollo genético y las innovaciones incrementales en términos de *credence food* (Gereffi, 2010).

Los grupos que controlan el mercado mundial de genética avícola establecen una estructura oligopólica en la dinámica de la red tecnoeconómica, generando fuertes barreras de entrada al mercado.

De tal forma, aun contando con el conocimiento sobre las tecnologías de hibridación por parte de países compradores, como el Brasil, se plantea como “inviabile” invertir en esta actividad dadas las elevadas inversiones requeridas asociadas con los riesgos y las fuertes barreras de entrada, tanto de conocimiento científico y tecnológico acumulado dentro de las empresas como del patrimonio de sus bancos genéticos. De esta forma, el proceso de irreversibilidad de la red tecnoeconómica ha establecido una dependencia directa del polo de producción (Argentina) respecto al polo científico – tecnológico (Estados Unidos y otros países desarrollados).

La concentración progresiva de las firmas del polo científico-tecnológico es también otro proceso a analizar en futuros estudios. Esa concentración evidencia también la dependencia hacia empresas multinacionales como Tyson Food que además de la actividad de cría y procesamiento adquirió la línea genética Cobb. O en el caso de las líneas genéticas Arbor Acres y Ross que dependen de la firma Aviagen que es propiedad privada del EW GROUP con sede en Alemania.

Lo descripto anteriormente hace que las firmas procesadoras argentinas dependan “indirectamente” de los procesos de ampliación y dominación de las cadenas globales de producción de agroalimentos dinamizadas por estos grandes actores-red (Gereffi, 2010), proceso que se evidencia no sólo en nuestro país, sino en la escala global.

Respecto de los productores primarios se pueden caracterizar en dos grandes grupos (Domínguez, 2007).

Las granjas que son explotaciones de tipo **familiar poco capitalizados-minifundistas**, especializados en la avicultura, productores con pocas hectáreas de tierra, con baja rentabilidad, y por lo tanto con problemas de inversión en equipamientos e instalaciones. Este tipo de explotaciones agropecuarias cumplen funciones en forma simultánea de producción, consumo y también de acumulación, lo que le ha conferido -al menos hasta ahora- una lógica de producción-reproducción que consiste en preservar el patrimonio familiar, el conocimiento sobre el manejo que se transmite entre las distintas generaciones y acumular medios de producción, equipos e instalaciones para la crianza, en generaciones sucesivas, que posibiliten asegurar un nivel de vida aceptable para el grupo familiar y sostener la actividad productiva.

Por otra parte, las **granjas familiares capitalizadas**, compuestas por productores agropecuarios diversificados que incorporan la avicultura, y

que poseen buenas instalaciones y equipos, emplean mano de obra familiar no remunerada y, accesoriamente para algunas actividades, mano de obra asalariada.

En este contexto de concentración, los granjeros más pequeños, con menos recursos económicos y financieros, y por ende menor capacidad para incorporar tecnología y adaptar infraestructura son “descartados” en forma cada vez más acelerada por el sistema, que los tiende a reemplazar por granjas altamente automatizadas propiedad de las empresas núcleo.

Análisis del sistema productor de carne aviar como sistema complejo

El sector avícola que abasteció el mercado interno, así como también el externo, ha recorrido en la última década un camino de crecimiento en su producción. El consumo de carne aviar más que duplicó su nivel de 2003, este sector se transformó de importador neto en exportador, ocupando el sexto puesto mundial. Las exportaciones, por su parte, crecieron un 37% anual, al pasar de US\$ 49 millones en 2003 a US\$ 445 millones en 2010, incrementando a 60 los destinos, cuando en 2003 eran sólo 28. Se prevé que la industria avícola duplicará su producción y aumentará casi cuatro veces sus ventas al exterior para 2020. Actualmente, el sector emplea 150.000 personas en forma directa e indirecta (Ministerio de Industria de la República Argentina, 2011).

Dentro del panorama de la producción de carne nacional Entre Ríos juega un papel fundamental como el mayor productor con el 44,52% de las aves faenadas, haciendo relevante su estudio para comprender el funcionamiento del sector en el nivel nacional.

Este crecimiento mundial y fundamentalmente nacional se da en un contexto de marcada concentración de las actividades productivas cada vez en menos actores y más fuertes.

En el nivel mundial las líneas genéticas en 1980 eran 27 y en la actualidad son 4, de las cuales 2 representan el 90 % de la producción.

En cuanto a la producción de carne en EUA en 1970 existían 220 empresas y en la actualidad sólo son 38, de las cuales las 6 más importantes controlan el 62 % de la producción. En la Argentina se dan guarismos similares, las seis empresas más importantes producen el 55 % del total.

Teniendo en cuenta la cantidad de roles presentes en el sistema de producción de carne aviar, la dinámica y movilidad entre agentes que se crean y destruyen, comparten y compiten por funciones, y son afecta-

dos por el comportamiento de agentes que a veces no pertenecen a su entorno, podemos denominar a la red tecnoeconómica de producción de esta carne un sistema complejo.

Se estudió la estructura de la red, en la cual se determinaron *hubs*, nodos aislados, densidad, cantidad de caminos que pasan por un nodo entre otros indicadores. Los denominados *Hubs* son los nodos altamente conectados, también se denominan los núcleos o centros de la red, son de gran importancia por su papel de comandancia en la red permitiendo o no el flujo de información de diferentes agentes (Erbes et al, 2006; Foster, 2004).

El Sistema de Producción de Carne Aviar está integrado verticalmente. Con un gran poder de las empresas núcleo que integran actividades aguas abajo y aguas arriba a fin de obtener mejores costos y ventajas competitivas (Williamson, 1981). Los componentes más relevantes son descriptos a continuación:

Genética y Producción de Abuelos: las líneas genéticas que se crían en el nivel nacional proceden de empresas extranjeras entre ellas se pueden nombrar las dos principales Aviagen International Group (Escocia) y Tyson Foods Incorporate (EUA) (Ruhl, 2010; Aparecida Santini, 2006). Las mismas poseen las llamadas líneas puras genéticamente y se compran por su buena conversión de alimento carne, ciclos cortos de engorde y características del animal como tamaño de la pechuga o patas.

Incubación y Reproducción: una vez importados los abuelos de las empresas productoras se procede a su crianza en granjas especializadas, aisladas de otros animales domésticos y silvestres, a fin de evitar su posible contaminación con enfermedades. De estos abuelos nacerán los padres que serán el eslabón intermedio de la cadena, ellos son ubicados en zonas cercanas a las áreas de cría. Luego de estos padres nacerán los hijos que son los pollos que van al consumidor final. Cabe destacar que tanto los abuelos, como los padres y los hijos son propiedad de las empresas de faena (Ruhl, 2010; Aparecida Santini, 2006).

Farmacéutica: representada por empresas de gran porte y presencia internacional como son Bayer (Alemania), Fort Dodge (Estados Unidos), Pfizer (Estados Unidos). También se encuentran competidores sudamericanos como Formil Química (Brasil) y Laboratorios Inmuner (Argentina) de menor tamaño (Aparecida Santini, 2006).

Producción de alimentos: este eslabón pertenece a las empresas faenadoras o núcleos que producen el alimento balanceado que luego es enviado al eslabón de engorde y reproductoras. También existe un aporte importante de empresas químicas que aportan diferentes mate-

riales, como aminoácidos, estabilizantes y hormonas entre otros productos (Ruhl, 2010; Domínguez, 2007).

Engorde o Integrados: este proceso es realizado por contratistas integrados, granjeros de diversos tamaños de cría, dependiendo de la magnitud y cantidad de galpones con que cuenten. Ellos reciben de la empresa faenadora los pollos BB con un contrato que le da la exclusividad de criar solo para esa empresa, además les entregan alimento balanceado y vacunas. El 95 % de los productores primarios son integrados.

Faena o empresa núcleo: este sector es el que ejerce la comandancia e integra aguas abajo la producción de carne. Está representada por frigoríficos de capitales nacionales, entre los que se pueden nombrar Granja Tres Arroyos, Soychú, Las Camelias, Noelma, Fepasa.

Comercialización: los centros de faena la realizan con diferentes destinos. Los productos para exportación se envían por medio de contenedores, los destinados al mercado nacional tienen variados canales de venta (Ruhl, 2010).

Metodología

Para la realización del trabajo, se partió de una matriz de relaciones entre empresas e instituciones. La misma se confeccionó sobre la base de entrevistas a personas relevantes de la actividad avícola (representantes de frigoríficos, integrados, veterinarios y empleados de instituciones entre otros) además se recurrió a datos secundarios publicados por cámaras, gobierno y revistas especializadas en la temática a fin de

Tabla N° 1. Distribución de frecuencia de los nodos por su tipo de red

Tipo	Frecuencia	Porcentaje
Empresa Núcleo	21	1,1
Empresa Proveedora	60	3,1
Empresa Cliente	9	0,5
Institución Pública	8	0,4
Institución Privada	14	0,7
Institución Educativa	11	0,6
Institución Científica	4	0,2
Integrados	1804	93,5
Total	1931	100,0

obtener las relaciones entre los nodos. La matriz es cuadrada (mismos nodos filas que columna) y simétrica (el mismo valor en columna fila para dos nodos que en fila columna). En el caso de que existiera relación entre dos empresas se colocó un 1 y en caso contrario un 0. Esta matriz fue importada al programa UCINET para ser analizada. El tamaño final de la matriz fue de 1931x1931, con la siguiente composición de nodos por tipo que muestra la **tabla N° 1**.

El atributo empresa núcleo representa a las empresas que realizan el procesamiento de las aves (frigoríficos), las empresas proveedoras son las que proveen a éstas insumos, excepto los integrados, que tienen un tratamiento individualizado. Los integrados representan a los criadores de pollos los cuales son dueños de galpones en los cuales los pollos BB pasan su periodo de desarrollo, crecimiento y engorde. Si bien la matriz tiene un grado notable de avance aún no es definitiva y se actualiza continuamente. Otro atributo que se agregó a los nodos de la matriz, además del tipo de actor, fue el del tipo de aporte a la red, la distribución de frecuencias y categorías se muestran en la **tabla N° 2**

Con el *software* libre UCINET se calcularon tres variables para cada nodo y una para toda la red, consideradas de interés para el análisis del presente trabajo:

Densidad (Density): nos muestra el valor en porcentaje de conectividad de la red. Es una medida expresada en porcentaje del cociente entre el número de relaciones existentes sobre la cantidad de relaciones posibles.

Tabla N° 2. Distribución de frecuencia de los nodos de la red, basado en su aporte.

Aporte	Frecuencia	Porcentaje
Conocimiento	30	1,6
Productos	1878	97,3
Servicios	7	0,4
Logística	5	0,3
Cooperación	2	0,1
Control de calidad, inocuidad o certificación	6	0,3
Financiamiento	3	0,2
Total	1931	100,0

Grado de centralidad (Degree Centrality): representa el número de conexiones directas a un nodo. A mayor número de conexiones directas mayor centralidad en la red.

Grado de intermediación (Betweenness): consideran todos los posibles caminos geodésicos (rutas más cortas que un nodo debe seguir para llegar a otros nodos) entre todos los pares posibles. La medida de intermediación de un nodo se obtiene al contar las veces que éste aparece en los caminos (geodésicos) que conectan a todos los pares de nodos de la red. Es una medida importante al momento de analizar por donde circula la información en una red.

Los valores de las variables junto con los atributos de cada nodo se cargaron en una base de datos que fue procesada con el programa SPSS a fin de hacer el análisis estadístico de los mismos. Las gráficas de las diferentes redes fueron realizadas con el *software* para gráfico de redes NETDRAW.

Resultados

La densidad de la red es de 0,0014 y el número de conexiones presentes es de 5.248, si tenemos en cuenta que en una red de comunicación perfecta el número sería 1 y cuanto más cercano a 0 más imperfecta o centralizada es la comunicación nos enfrentamos a una red con nodos que centralizan la comunicación. Haciendo alusión al tipo de red estamos analizando una red descentralizada, la misma se caracteriza por presentar muchos *hubs* conectados entre sí como un conjunto de redes unidas por sus *hubs*.

En la **tabla N° 3** se muestran las principales estadísticas para las variables calculadas para cada nodo de red.

En el caso de la del grado de centralidad se ve que hay un elevado rango de 337, hay una gran distancia entre la media y el máximo de la distribución. Por su parte la desviación típica es muy elevada 5,8 veces

Tabla N° 3. Principales estadísticas de las variables analizadas.

	Grado de centralidad	Grado de intermediación
Media	2,720	2.306,750
Desviación típica	15,974	25.920,494
Mínimo	1,000	0,000
Máximo	337,000	524.467,000

Tabla N° 4. Media de centralidad por tipo de agente

Tipo	Grado de centralidad (Media)
Empresa Núcleo	110
Empresa Proveedorora	6
Empresa Cliente	10
Institución Pública	23
Institución Privada	19
Institución Educativa	10
Institución Científica	29
Integrado	1

la media. Situaciones similares se pueden comprobar con el grado de intermediación y el eigenvector las dos variables tienen amplios rangos, desviaciones típicas elevadas respecto de sus medias. Esto nos da junto con la densidad una idea de que la red se encuentra centralizada en actores con mucho peso en la comunicación a los que denominaremos *hubs*.

Como puede apreciarse en el **gráfico N°1***, realizado con *software* NETDRAW, hay presencia de nodos con muchas conexiones y otros que se encuentran conectados con sólo uno o dos más. Por lo cual podemos afirmar que la red está centralizada en algunos pocos nodos los cuales tienen mucha importancia en el manejo de la información.

En la **tabla N° 4** se muestra la media de centralidad de acuerdo con el tipo de agente en la red.

Se observa la supremacía en cantidad de conexiones de la empresa núcleo superando en más de tres veces a la categoría siguiente. Esto demuestra su centralidad en la red y su influencia sobre los demás nodos de la red. En lo más bajo de la distribución se encuentran las empresas proveedoras y los integrados, lo cual demuestra que tienen un escaso poder en el manejo de la comunicación.

En el **gráfico N° 2*** se puede ver la importancia de las empresas núcleo (diamantes) la cual sería más visible aun si agregáramos los integrados pertenecientes a cada una de ellas. Permite también observar los actores centrales y sus interrelaciones.

La **tabla N° 5** muestra nuevamente la enorme importancia de la empresa núcleo en el flujo de información de la red, seguida por las instituciones científicas y las instituciones públicas. Luego por la institución

* Ver gráficos N° 1, N° 2 y N° 3, en el sitio web www.iade.org.ar

Tabla N° 5. Media de intermediación por tipo de agente

Tipo	Grado de intermediación (Media)
Empresa Núcleo	163.271
Empresa Proveedora	2.264
Empresa Cliente	5.961
Institución Pública	39.045
Institución Privada	27.990
Institución Educativa	296
Institución Científica	42.892
Integrado	0

privada, la empresa cliente y proveedora. Nuevamente se ve el escaso papel que juegan la institución educativa y los integrados en este caso en los caminos de la información. Los integrados son nodos aislados ya que los insumos como alimentos, pollos BB, y tecnología son suministrados por la empresa núcleo a la cual pertenecen y al no estar unidos entre sí los lleva a una situación de debilidad importante en este indicador.

Análisis Hubs principales

A fin de obtener una visión más detallada de los *hubs* o nodos concentradores se hará un análisis de los 31 nodos más importantes, en principio se analizará por tipo de agente.

En la **tabla N° 6** se volcó la información que se observa en el **gráfico N° 3***, discriminando el tipo de agente que aparece, como los principales nodos concentradores de la trama de carne aviar.

Tabla N° 6. *Hubs* principales por tipo de agente

Tipo	Frecuencia	Porcentaje
Empresa Núcleo	11	35,5
Empresa Proveedora	4	12,9
Empresa Cliente	1	3,2
Institución Pública	5	16,1
Institución Privada	6	19,4
Institución Científica	4	12,9
Total	31	100,0

* Ver gráfico N° 3 en el sitio www.iade.org.ar

Como se ve las empresas núcleo llevan la delantera con un 35,5 % del total, seguido por la institución privada con un 19,4 por ciento. La institución pública le sigue con el 16,1% de los casos, las empresas proveedoras de las empresas núcleo tienen el 12,9% de participación, seguida por las instituciones científicas, y por último por las empresas clientes con sólo un 3,2 por ciento. Como era de esperar los integrados no aparecen en esta tabla por ser nodos casi aislados.

Conclusiones

Diversos interrogantes surgen del análisis de la dinámica sociotécnica de la trama productora de carne aviar de la Argentina en general y de Entre Ríos en particular, sus problemas de dependencia del polo científico-tecnológico localizado en países desarrollados, el futuro de los productores primarios, el rol de los grandes *hubs* productores y comercializadores en el nivel internacional como Tyson Food (EUA) o Brasil Food que evidencian un permanente desarrollo concentrador en los mercados bajo el modelo de cadenas globales de valor.

En modo exploratorio, el sistema de producción de carne aviar, en su polo de producción de la Argentina, puede caracterizarse como red burocrática cuyos atributos son: un régimen tecnológico tipo Mark II (Erbes y otros, 2006), con origen de tecnologías en sectores maduros, la apropiabilidad en base a bienes estándares, conocimientos genéricos y específicos del sector, y el principal foco tecnológico de la actividad centrado sobre la reducción de costos en la red. Un régimen de conocimiento netamente jerárquico y un régimen de competencia de carácter oligopólico con barreras elevadas por costos fijos y alta concentración.

La red se encuentra fuertemente centralizada, con *hubs* o nodos dominantes, principalmente las empresas núcleo y muchos nodos aislados. Esto lleva a la fragilidad de los nodos aislados en cuanto al poder de negociación en la red. Se demuestra una situación de extrema debilidad por parte de los integrados, los cuales tienen escasa vinculación con los demás nodos de la red y entre sí mismos, reforzada esta característica en patrones culturales con escasa tendencia al asociativismo.

La articulación de la producción agropecuaria familiar a complejos agroindustriales es una modalidad particular de participación de ésta en relaciones de producción capitalistas; los trabajos de Whatmore et al (1987), Mooney (1988) y Davis (1980) engloban a la agricultura de contrato entre los mecanismos a través de los cuales el capital penetra en las unidades familiares de producción sin apropiarse de las mismas y las vuelve crecientemente subordinadas. Este proceso que se fue dando históricamente en la provincia de Entre Ríos con los granjeros

avícolas originales, pequeños productores independientes, transformándolos en “integrados”, tendencia que se acelera y acentúa actualmente, cuando el sistema expulsa a los más pequeños y débiles por su imposibilidad de satisfacer las demandas de incorporación de tecnología y ampliación de escala.

Parte de esta producción es reemplazada por granjas automatizadas propiedad de las empresas núcleo que contratan, ahora como empleados, a una pequeñísima parte de los antiguos granjeros.

Dicho proceso tiene implicancias económicas y sociales en el contexto regional, incidiendo en la tenencia de la tierra de los granjeros dueños de pequeñas parcelas, en la profundización del traslado de la población rural a las ciudades y a la subordinación de pequeños y medianos agricultores familiares a las agroindustrias.

Bibliografía

- Aldana, M. (2006) *Redes Complejas*, noviembre, Centro de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Antonelli, C. (2008) *Localised technological change. Towards the economics of complexity*. Londres y Nueva York: Routledge.
- Aparecida Santini, G. (2006) “Dinâmica tecnológica da cadeia de frango de corte no Brasil: análise dos segmentos de insumos e processamento” tesis doctoral de la Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.
- Barletta, F.; Pereira, M. y Yoguel G. (2011). Schumpeterian, Keynesian, and Endowment Efficiency: some evidence on the export behaviour of Argentinian manufacturing firms. Paper presentado en Congreso Annual Globelics 2011, Buenos Aires, Argentina.
- Cimoli, M.; Porcile, G. y Rovira, S. (2010). Structural change and the BOP-constraint: why did Latin America fail to converge?, en *Cambridge Journal of Economics*, 34 (2): 389-411.
- Davis, J. (1980), Capitalist agricultural development and the exploitation of the propertied laborer. en Buttel, F. and Newby, H. (Eds.) *The Rural Sociology of advanced societies*, Montclair NJ: Allanheld, Osmun & Co, 133-153.
- Dagnino, R. (ed.) (2010) “Tecnología social. Ferramenta para construir outra sociedade”, Campinas, SP, Komedí.
- Domínguez, N. (2007) El complejo avícola entrerriano y las relaciones en su interior.
- Erbes, A.; Robert, V.; Yoguel, G.; Borello, J. y Lebedinsky, V. (2006) Regímenes tecnológico, de conocimiento y competencia en diferentes formas organizacionales: la dinámica entre difusión y apropiación. *Desarrollo Económico* N° 181, vol. 46, abril-junio.

- Foster, J. (2005). From simplistic to complex systems in economics, en: *Journal of Economics*, 29: 873-892.
- Gereffi, G;(2010), Global Value Chains and Agrifood Standards: Challenges and Possibilities for Smallholders in Developing Countries. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 109, N° 31, pp. 12326-12331.
- Guionet, H, (2000) *La Colonia San José*, Ed. Pasco
- KRAFT, (1940) Ed. KRAFT Ltda., Anuario Tomo IV.
- Lepratte, L.; Blanc, R.; Pietroboni, R. y Hegglin, D. (2012), Sistemas sociotécnicos de producción e innovación. Análisis de la dinámica del sector de producción de carne aviar en Argentina, Anales XVII Reunión Anual REDPY-MES.
- Lepratte, L.; Thomas, H. y Yoguel, G. (2011). Sistemas Sociotécnicos, innovación y desarrollo. WP 1-2011 GIDIC UTN FRCU. http://mpru.ub.unimuenchen.de/33559/1/Working_Paper_2011_Lepratte_UTN_FRCU.pdf
- Metcalf, J. S., Foster, J. y Ramlogan, R. (2005). Adaptive economic growth, Cambridge Journal of Economics, vol. 29.
- Ministerio de Agricultura, Almanaque Edición de 1940.
- Mooney, P. (1988), *My own boss?: Class, rationality, and the family farm*, Westview Press, Colorado, United State.
- Palacios, E. P. (2003). El complejo agroindustrial avícola argentino. Reconversión y perspectiva de inserción en el mercado regional e internacional. Tesis de Maestría en Integración Latinoamericana. UNLP. La Plata.
- Posada, M (1998), "Agricultura, industria y contratos: una interpretación para el caso argentino". *Revista Agroalimentaria*, N° 7, diciembre, pp.83-94.
- Ruhl, L. (2010) Estrategias competitivas de la industria avícola de la Costa Del Río Uruguay, tesis de maestría, Facultad de Ciencias Económicas, UCU, Maestría en Administración y Dirección de Empresas y Negocios.
- Thomas, H. y Fressoli, M. (2010). En búsqueda de una metodología para investigar tecnologías sociales.
- Yoguel, G. y Robert V. (2010). Capacities, Processes and Feedbacks, The Complex Dynamics of Development, en: *Seoul Journal of Economics*, 23 (2), pp. 187-237.
- Whatmore, S.; Munton, R.; Little, J. y Marsden, T. (1987), Towards a typology of farm businesses in contemporary British agriculture. *Sociologia Ruralis*, Vol. 27, pp. 21-37.
- Williamson, O. (1981): The economics of organizations: The transaction cost approach. *The American Journal of Sociology*, vol. 87, N°. 3: 548-577.

Interpretaciones

En torno del Grito de Alcorta y apuntes sobre la conflictividad agraria pampeana en el siglo XX*

*Eduardo Azcuay Ameghino ***

En este artículo nos proponemos revisar y discutir diferentes aspectos de las líneas interpretativas que se han desplegado en torno del estudio del Grito de Alcorta, en tanto la máxima expresión de la conflictividad chacarera característica del viejo arrendamiento. Sobre esta base, se incorporan posteriormente al análisis otros momentos y desarrollos que jalonan la historia de los antagonismos y disputas que se desplegaron en el agro pampeano durante la segunda mitad del siglo XX, en línea con los cambios socioeconómicos que se sucedieron en la región y el país.

Como producto de ellos se fue consolidando un nuevo escenario, constituido sobre la base estructural de las formas más actuales de la conflictividad chacarera. Entre sus rasgos más relevantes se cuentan la superexplotación de los asalariados agrícolas, el mantenimiento de una alta concentración de la propiedad de la tierra y la apropiación vía renta de una parte relevante del plusvalor agrario; el avance de la monopolización del uso del suelo por cada vez menos empresas favorecidas por los beneficios de escala; y la consiguiente concentración del capital, la producción y el ingreso que drena los recursos de la pequeña hacia la gran explotación, reduciendo el espacio económico y social que sostiene la existencia de la producción de base familiar.

Palabras clave: Conflictividad - Chacareros - Renta del suelo - Concentración del capital - Políticas públicas.

* Este texto es un desarrollo de conceptos parcialmente adelantados en la Mesa Redonda "A cien años del Grito de Alcorta", organizada por la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti. Centro Cultural de la Cooperación, septiembre de 2012.

** Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Debates and interpretations concerning Alcorta's Yell and notes on the pampa's agrarian conflict in the 20th century

In this article we propose to check and discuss different aspects of the interpretive lines spread concerning to Alcorta's Yell, as the maximum expression of the typical farmer conflict of the old leasing time. On this base, we incorporate to the analysis other moments and developments that mark the history of the antagonisms and disputes in the pampa's agriculture during the second half of the 20th century, in line with the socioeconomic changes that happened in the region and the country.

As a result, a new scene become established, constituted on the structural base of the most current forms of the farmer conflict. Among its more relevant features we can mention the superexploitation of the agricultural employees; the maintenance of a high concentration of the land property and the appropriation in concept of rents of a relevant part of the agrarian plusvalue; the advance of the monopolization of the soil use by less companies favoured by the large scales; and the consequent concentration of capital, production, and incomes that transfers the resources of the small farms towards the great exploitation, reducing the economic and social space that supports the existence of the production of familiar base.

Key words: Conflictivity - Farmers - Soil rent - Concentration of capital - Public policies.

Fecha de recepción: noviembre de 2012

Fecha de aceptación: noviembre de 2012

Introducción

Una aproximación a los estudios disponibles en la literatura académica sobre la temática del conflicto social en el mundo rural pampeano a lo largo del siglo XX, permite comprobar tanto la centralidad y relevancia otorgada a las luchas chacareras durante la década de 1910, como la relativa escasez de obras dedicadas a investigar las disputas agrarias ocurridas en el resto de la centuria (Giarracca, 1999), y en especial durante los '90 -salvo el caso de las Mujeres Agropecuarias en Lucha-, cuando bajo la influencia del modelo neoliberal se agudizó el proceso de concentración del capital, la tierra y la producción en detrimento de la producción familiar y la pequeña producción capitalista (Cloquell y Azcuy Ameghino, 2005).

Cabe señalar, sin embargo, que durante la última década, luego del “Argentinazo” de 2001, y en el marco de la continuidad de las tendencias concentradoras y el desplazamiento de los sujetos sociales económicamente más débiles, se nota cierta reactivación de la investigación asociada con la conflictividad emergente de los mencionados procesos, la que resultaría fuertemente estimulada por la rebelión fiscal agraria que conmovió al país durante 2008.

En consonancia con lo señalado, nos proponemos revisar y discutir diferentes aspectos de las líneas interpretativas que se han desplegado en torno del estudio del Grito de Alcorta, incorporando posteriormente al análisis otros momentos y desarrollos de la conflictividad rural. En este sentido se plantearán algunos interrogantes acerca de las posibles razones de la mencionada insuficiencia de la bibliografía especializada, en la perspectiva de indagar si se trató de la expresión de cierta falta de significación histórica del fenómeno concernido, o de que esta problemática, por razones a establecer, no habría logrado concitar el interés de los investigadores.

Al respecto, llama la atención que la investigación sobre cien años de antagonismos y luchas escenificadas en la región pampeana se presenta en la oferta académica local mayormente circunscripta a la historia de las primeras dos o tres décadas del siglo, como queda puesto de manifiesto, por ejemplo, en el lugar marginal que ocupa el “conflicto agrario” -acotado en lo fundamental a Alcorta- en una de las pocas obras relativamente recientes dedicada a revisar la historia rural argentina (Barsky y Gelman, 2001).

El Grito de Alcorta

Es verdad, y vale destacarlo cuando se han cumplido cien años de aquellos sucesos, que las luchas englobadas bajo la denominación de

“Grito de Alcorta” constituyen (por cierto que merecidamente) la principal referencia disponible a la hora de convocar a la conflictividad social que tuvo por escenario la pampa húmeda durante el siglo XX. Desde los trabajos clásicos que han estudiado exhaustivamente el tema desde una perspectiva cercana a los intereses de los promotores de la rebelión, a las elaboraciones posteriores que propusieron revisiones y lecturas alternativas en cuanto a los móviles de la huelga y la caracterización socioeconómica de sus participantes, los estudios disponibles coinciden en destacar la significación histórica del gran paro agrario de 1912.

Algunos abordajes se han caracterizado por enfatizar distintos aspectos explicativos, aunque generalmente concurrentes. Así se ha resalta-do la estrecha dependencia de la producción rural pampeana respecto al comercio internacional en virtud de la combinación de vastas llanuras fértiles y una población que, aun con los importantes flujos de inmigración que asimilaba anualmente, constituía un débil mercado interno para los principales granos, como el trigo, maíz, avena y lino. De esta manera, el nivel de precios vigentes en el incipiente mercado mundial -y su caída en virtud de las complicaciones político militares ocurridas en la década (Solberg, 1975: 245)- habría condicionado fuertemente la situación económica de los campesinos y su determinación de lanzarse a la lucha.

Sin desconocer este punto, también se ha remarcado el papel cumplido por la pésima cosecha de maíz de 1910/11 con la consiguiente extrema agudización del endeudamiento, en circunstancias que la gran cosecha del año siguiente deprimió los precios percibidos por el cereal, dificultando la recuperación de las economías chacareras.

Más allá del énfasis puesto en algún factor particular como determinante jerarquizado de la disputa, otras obras han resaltado la heterogeneidad de las determinaciones concurrentes al desencadenamiento de la huelga, privilegiando la perspectiva de observar cómo se desplegaba la lucha por el excedente agrario y cuáles eran los principales obstáculos que trababan la acumulación y el desarrollo de la gran mayoría de los chacareros.

A título de ejemplo mencionamos la opinión de Pucciarelli, al señalar que entre los aspectos del problema “el pago de arrendamientos es uno de ellos, pero no el único ni el más importante en algunas etapas”; y en este sentido “la naturaleza misma del movimiento de Alcorta, su composición, su programa y las reacciones que produjo en diversos sectores, denuncian con tanta claridad la explotación progresiva de los terratenientes por la vía del arrendamiento como la existencia de una complicada estructura de explotación, donde participan desde el pequeño

capital usurario hasta el gran capital comercial y financiero, pasando por el Estado” (Pucciarelli, 1986: 119).⁵

En esta dirección ha resultado también muy influyente el trabajo de Arcondo, quien caracteriza el momento del estallido de Alcorta como “una situación límite en la que coinciden elevados cánones de renta de la tierra -más del 30% de la cosecha bruta, esto es casi el 50% de la cosecha neta- con una baja circunstancial del precio del maíz y el arrastre del endeudamiento producido por la mala cosecha del año agrícola precedente” (Arcondo, 1980: 381).⁶

Sesgando estas perspectivas analíticas hacia una visión que tiende a oscurecer las asimetrías socioeconómicas y bajar el tono de la conflictividad inherente a la naturaleza del capitalismo dependiente que se consolidaba a comienzos del siglo XX (Azcuay Ameghino, 2011),⁷ desde mediados de los '80 y, especialmente, durante los '90, cobró fuerza -y se “renovó”- la orientación interpretativa que enfatiza que “los posibles compradores o arrendatarios (por lo común inmigrantes recién llegados) tenían movilidad; si un terrateniente pretendía cobrarles rentas exorbitantes podían realizar otras negociaciones con bastante facilidad. En ningún momento la concentración de la propiedad agraria fue tan elevada como para dar a los terratenientes el goce de un poder oligopólico sobre todo el país” (Díaz Alejandro, 1983: 50).⁸

De este modo, bajo la apariencia de superar las “visiones tradicionales”¹, cobraron fuerza explicaciones que criticaron y desecharon “la vieja tesis de Bejarano, Scobie y tantos otros sobre la falta de acceso del inmigrante a la tierra”, planteando que “el modelo tradicional de interpretación del desarrollo agrario... tiende a confundir un cierto ideal con lo posible, atribuyendo las desviaciones de la realidad respecto del ideal a la incapacidad, irracionalidad, o mala voluntad de los actores -y siguiendo una tradición argentina, al Estado principalmente entre ellos-, y no a las condiciones concretas del proceso” (Míguez, 1986: 97-98).

Como puede observarse, se trata de un cuestionamiento que apunta directamente a impugnar la centralidad de la contradicción entre chacareros² arrendatarios y terratenientes como sustrato del conflicto rural, lo

¹ Efectivamente, desde algunas líneas historiográficas que alcanzaron relevancia durante el período posdictatorial y en los '90, se propuso priorizar, en ciertos casos en forma tramposamente conciente, la oposición tradición-renovación (al margen de clases e intereses) por sobre la que enfrenta a los diferentes matices y variantes de la historia oficial con las contrahistorias emergentes de las perspectivas popular nacionales, en el seno de las cuales, ahora sí, naturalmente se manifiestan perspectivas clásicas y aportes renovadores.

² Sobre nuestra caracterización del concepto de chacarero, ver: Azcuay Ameghino, 2012.

cual excede largamente el análisis de los sucesos de Alcorta, ya que introduce un debate que atraviesa buena parte de la historia agraria pampeana (Sábato, 1993). Al respecto es interesante comprobar que dicho tipo de argumentaciones expresa posturas que tienen una rica tradición en la Argentina, hallándose estrechamente entrelazadas con el punto de vista de los grandes latifundistas: “El acceso a la tierra en el siglo pasado era sumamente fácil, por cuanto el elemento escaso era la mano de obra y no la tierra (...) los inmigrantes se fueron transformando en propietarios en una alta proporción a lo largo de este siglo”. En suma, “el sistema de acceso a la tierra que existe en la Argentina, y que diferencia al país nítidamente de otros del continente e incluso de Europa, es positivo para el desarrollo económico y social argentino” (Zemborain, 1973: 60).

Más allá de su fuerte contenido apologético, tan consistente con los intereses de la cúpula terrateniente, estas explicaciones no logran controvertir el hecho comprobado del peso creciente de los arrendamientos en vísperas del estallido, y como, en consecuencia, “la clave está en la renta” (Ansaldi, 1986: 1-20)

Así lo señalaba hace más de cincuenta años Grela, dando muestra que nos hallamos frente a *polémicas de largo aliento*: algunos autores “atribuyeron el origen de la rebelión campesina a la mala cosecha de 1911, al cierre de los créditos por parte de los comerciantes de campaña y al alto precio de los arrendamientos. El planteo es un tanto superficial; creo que el origen habría que buscarlo en causas sociales y políticas más profundas, como pueden serlo la pésima distribución de la tierra pública, el latifundio y la mala colonización llevada a cabo en el país con miras a beneficiar a la oligarquía...” (Grela, 1958: 19).

Lejos de ignorar los factores puntuales que detonaron la huelga chacarera, cuyo estudio ocupa buena parte de la obra citada, esta tendencia interpretativa apunta a jerarquizar aquellos elementos estructurales, de fondo, cuya eficacia determinante suele emerger imbricada en aspectos fundamentales de los hechos coyunturales. Inmersa en esta perspectiva, remarcamos la explicación propuesta por Boglich -precursor del análisis marxista sobre los problemas agrarios-, quien tras señalar algunas ventajas que obtenían los productores al explotar la tierra “en una forma capitalista”, enfatizaba especialmente que esta situación “también tenía su reverso, pues se hallaba sometido al terrateniente o al capitalismo colonizador mediante su contrato de arrendamiento o de locación, de formas feudalistas” (Boglich, 1937: 203).

Indisociable del tipo y alcances del desarrollo del capitalismo que ya dominaba en el campo pampeano, los chacareros no sólo hallaban en los contratos de arrendamiento en vigencia la imposición del pago de

arriendos generalmente superiores a lo que hubiera sido una auténtica renta del suelo (Azcuay Ameghino, 2004), sino también una profunda carencia de libertad de trabajo y comercio, al verse en muchos casos *obligados* a utilizar las estructuras mercantiles, de crédito, aprovisionamiento y servicios, impuestas por los dueños y administradores de la tierra. De esta forma, durante la vigencia del “viejo arrendamiento” la conflictividad chacarera tendió a concentrarse en la lucha por “la obtención del contrato libre y la anulación del viejo contrato de formas feudales, que significaba la libertad de comerciar en el campo con los agricultores (libertad capitalista naturalmente), el reinado de la libre concurrencia y la libre competencia” (Boglich, 1937: 205). Ya se tratara de hostilidades abiertas o latentes, masivas o individuales (Palacio, 2004), buena parte de sus contenidos se asociaban con las restricciones a la libertad de acción de los chacareros como organizadores de la producción agrícola, de manera que “la lucha por las libertades capitalistas es una lucha por la abolición de las trabas u obstáculos a la acumulación y, en consecuencia, por la expansión del capitalismo” (Ansaldi, 1993: 86).

Establecida esta caracterización como guía interpretativa para el análisis de la lucha de Alcorta, valoramos los estudios, algunos ya mencionados, que reflejan razonablemente la variedad de circunstancias que se hallaban sobre la base de aquellos sucesos, resaltando la participación de una diversidad de actores económicos, sociales y políticos, muchos de los cuales suelen quedar oscurecidos cuando se presenta una explicación unilateralmente polarizada. Aun así, es de hacer notar que la bibliografía disponible no arroja en el plano del análisis político e ideológico -y menos aún en la perspectiva de indagar los mecanismos y fundamentos de la acción colectiva desplegada por los campesinos arrendatarios- resultados comparables a los obtenidos en el nivel del estudio socioeconómico.

Hay por cierto excepciones, comenzando por el propio Grela, que aportó una interesante descripción del papel de los distintos actores político-gremiales y de cómo su accionar fue construyendo el conflicto y marcando las tendencias de su desenvolvimiento. De esta manera quedó puesto de relieve el papel de los colonos inmigrantes de orientación anarquista y socialista -forjada en sus países de origen, especialmente Italia y España- que gestaron y organizaron la huelga agraria desde sus Centros de Estudios Sociales, así como desde pequeños sindicatos de estibadores y braceros. También se registró la participación de adherentes a la UCR y de otras banderías, algunos de los cuales se afiliaron en 1918 al recién fundado partido Socialista Internacional, luego Comunista. Así, junto con las presiones ejercidas por terratenientes y empresas colonizadoras, en momentos de precios bajos, endeu-

damiento y amenaza de ruina generalizada, es posible observar cómo a partir de “la prédica permanente de los más combativos trabajadores” (Grela, 1985: 23), como Antonio Noguera y Francisco Bulzani -y con el decisivo aporte del abogado Francisco Netri-, se fue construyendo la trama de acciones que llevaron a la decisión final de lanzar y sostener la huelga.

No se trató sin duda de un proceso fácil ni lineal, pero las dificultades que enfrentó el desarrollo de la acción colectiva, y que se superaron en los hechos, dan la medida de la fuerza de las causas que impulsaban la necesidad de luchar. Entre dichas restricciones, junto con las inherentes a la debilidad de las organizaciones políticas más contestatarias frente al orden establecido, se destaca la incipiencia de la construcción de las identidades colectivas de los chacareros, y con ella la inmadurez de la subcultura del pequeño productor agrario, todo lo cual entorpecía la conectividad identitaria y las certezas necesarias para el mejor despliegue de la movilización. Igualmente pesaban factores como la condición de inmigrantes de la mayoría de los campesinos, las tendencias pequeño burguesas al individualismo -reforzadas por el aislamiento de la vida en las chacras-, los recelos entre extranjeros y criollos, el peso de la prolongada herencia precapitalista que agudizaba la opresión de los propietarios de las condiciones de producción sobre los productores directos, y la amenazante presencia estatal (recordar la Ley de Residencia) que aseguraba la hegemonía terrateniente.

En otro plano de análisis vale destacar que en abril de 1912 (la rebelión campesina se inició en junio) se aplicó por primera vez la flamante ley Sáenz Peña en la provincia de Santa Fe, arrojando el triunfo de la Unión Cívica Radical seguida por el recién creado partido de Lisandro de la Torre, con la consecuente derrota electoral de las fuerzas políticas tradicionales de la provincia, afines con los pilares del régimen instaurado por el roquismo. Simultáneamente, bajo el estímulo de la situación crítica de los chacareros se fueron formando nuevos actores gremiales: la Liga Agraria de La Pampa, una organización denominada “Campesinos Unidos”, la Liga Agraria de Firmat, y la todavía vigente Federación Agraria Argentina (Girbal de Blacha, 1988: 36-40). Estas organizaciones se sumaban a las ya existentes, que respondían a los intereses de terratenientes y grandes hacendados, como la Sociedad Rural de Rosario. Por último, también los partidos políticos, dinamizados por el reciente ejercicio electoral, influyeron sobre los protagonistas del enfrentamiento rural, destacándose en relación con la construcción de los hechos puntuales que motorizaron la acción colectiva “el papel organizador desempeñado por maestros rurales y por agricultores de clara filiación socialista” (Ansaldi, 1991: 12).

Junto con este tipo de protagonistas, otros heterogéneos actores sumaron su influencia en el desarrollo del conflicto, entre ellos la Sociedad Italiana de Alcorta y la Iglesia Católica, debiendo destacarse el papel de José y Pascual Netri, curas párrocos respectivamente de Alcorta y Máximo Paz, hermanos de Francisco y partidarios activos de la huelga. También varios comerciantes de ramos generales, cuya suerte dependía del cobro de las deudas que mantenían con ellos los chacareros, participaron de la protesta -o directamente la impulsaron, como en el caso de Ángel Bujarrabal-, contribuyendo con el aporte de sitios de reunión, ayuda económica y otros *recursos* imprescindibles para sostener la lucha. Ésta fue igualmente estimulada por una represión tan intensa como prematura, de la que resultaron efectos opuestos a los deseados en virtud del accionar de policías para los que “no había más ley que las órdenes que les impartía el gobierno de la provincia, el caudillo del pueblo y los terratenientes” (Grela, 1985: 57).

Como se desprende de lo expuesto, la eficacia de algunas de las observaciones emergentes del análisis de la literatura referida al conflicto agrario de principios del siglo XX supera largamente el hecho histórico puntual de Alcorta, proyectándose como una referencia para los estudios de las luchas protagonizadas por los diferentes tipos de productores de la región pampeana. En este sentido, cabe remarcar los beneficios que reporta al trabajo de investigación -y a la elaboración de explicaciones consistentes- articular e integrar las determinaciones provenientes de los factores estructurales, la influencia del contexto inmediato y la acción social de los individuos, en especial en los planos específicos de la política y la ideología.

Después de Alcorta: continuidades y cambios en la conflictividad agraria

Si bien existen numerosos y en muchos casos sólidos trabajos sobre diversos aspectos de la problemática socioeconómica, se cuentan sin embargo escasos estudios sobre los antagonismos y disputas focalizadas en el campo: “ausentes del ‘territorio’ de los historiadores, caso de amnesia de la memoria colectiva, los movimientos sociales agrarios... merecen y necesitan ocupar su lugar en uno y en otra” (Ansaldi, 1993: 12).

Al respecto, en un plano preliminar de análisis, las opciones planteadas parecen apuntar a que efectivamente se trata de una curiosa y multifacética “amnesia de la memoria colectiva”, o bien dicho bajo perfil de los estudios sobre la conflictividad agraria obedece a una falta de significación real de las luchas, lo cual podría explicar también cierta universalización del grito de Alcorta de 1912 como “el” conflicto.

Al respecto, mi visión del problema tiende a reunir ambas posibilidades e incorporar otras explicaciones. Es verdad que resulta inocultable, tal como se refleja en la agenda de investigaciones -especialmente antes de 2001-, cierta falta de interés por indagar los tópicos de los antagonismos económicos y políticos en la pampa húmeda, lo que en alguna medida puede expresar preferencias y elecciones de temas y problemas de estudio en línea con posturas ideológicas conservadoras, poco afectas a la ventilación de las luchas y protestas sociales. Pero, por otro lado, también es cierto que no se registraron en dicho territorio experiencias de la envergadura, por citar un par de ejemplos, de las protagonizadas por el *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* en el Brasil, o por la *Federación Nacional Campesina* en el Paraguay.

Al respecto cabe remarcar que la conflictividad propia de los chacareos -campesinos capitalizados con posibilidades de acumulación- no se asemeja en muchos de sus aspectos a la mayoría de los casos de productores de base familiar observables en América latina, ni tampoco a la problemática del campesinado de tipo tradicional disperso en otras regiones de nuestro país (Tsakoumagkos, Soverna, Craviotti, 2000), lo cual puede contribuir a dificultar su identificación. En estas circunstancias, si se observa el paisaje social agrario a partir de modelos de referencia inadecuados y/o sin considerar los reajustes que va determinando el transcurso del tiempo, se suele no encontrar lo que, como derivación de esas eventualmente anacrónicas perspectivas analíticas, "se debería encontrar" (por ejemplo, rebeliones campesinas por la tierra para las concepciones más arcaizantes; o huelgas obreras por reivindicaciones anticapitalistas para quienes imaginan un capitalismo *avant la lettre*); limitándose así las posibilidades de conocer los antagonismos concretos y específicos emergentes de la estructura y organización del trabajo vigentes en el agro pampeano.

Con la mirada sobre este objetivo y ubicados en una perspectiva histórica de análisis, tenemos en cuenta, entre las determinaciones más relevantes, la evolución de los procesos de producción, la incorporación tecnológica, los cambios en el balance de las diferentes relaciones de producción y distribución, y el papel del Estado y las políticas públicas. Asimismo, retomando y ampliando argumentos expuestos por Ansaldi (Ansaldi, 1991), partimos de la premisa de que distintos sujetos sociales, en virtud del sistema de contradicciones específicas en que se desenvuelven, tienden a dar lugar a acciones colectivas de diferente naturaleza.

Así, durante la primera mitad del siglo XX hasta mediados de los '40, se identifican dos tipos principales -que no eran por cierto los únicos- de conflictividad: *la chacarera*, que en el caso de los arrendatarios los

enfrentaba con terratenientes y empresas de colonización, y en conjunto con diversos agentes del comercio, el transporte y la usura; y *la obrera rural* (inclusiva de semiproletarios y campesinos pobres), confrontando con terratenientes-capitalistas, chacareros ricos, acopiadores, empresarios contratistas de maquinaria agrícola, etc. La prioridad de estos antagonismos resulta consistente e indisoluble con el afianzamiento de la etapa fundacional del capitalismo -cuando *la única* libertad del proletariado es la de (mal) vender su fuerza de trabajo- y con las ya explicitadas restricciones a la libre empresa de los productores de base familiar.

Si bien a partir especialmente de Alcorta se irían logrando avances en la lucha por las libertades capitalistas -como las mejoras formales en los contratos de arriendo sancionadas por la ley 11.170 de 1921- y en la organización y lucha de los obreros rurales, serían las políticas instrumentadas a partir de 1943, y profundizadas por el peronismo, las que marcarían el fin de la época del viejo arrendamiento, y la maduración del capitalismo en el campo pampeano. Caracterización, cabe remarcarlo, asentada más sobre el plano de las relaciones de producción, la política y las conquistas gremiales -de chacareros y obreros-, que en el de la débil intensificación de la inversión de capital y a su vez consistente con el desarrollo de la industrialización sustitutiva y la activa intervención del Estado en la economía.

Durante estos años los conflictos agrarios, *al desperfilarse en relación con algunas de sus formas hasta entonces tradicionales*, comenzaron en algunos casos a perder visualización para amplias franjas de la sociedad, lo cual no dejaría de reflejarse en el pensamiento académico. Sin embargo, las reformas obtenidas y su procesamiento e instrumentación práctica aparejaron picos de disputas y oposiciones, como las anudadas alrededor de la promulgación del Estatuto del Peón, extensión del sindicalismo y desarrollo de la autoridad estatal en materia laboral; la rebaja, congelamiento y prórroga de los arrendamientos con prohibición de desalojos; así como en el crecimiento de la hostilidad terrateniente agudizada por algunas sonoras expropiaciones y la política de redistribución industrialista de la renta agraria (Lattuada, 1986: 81-89).

De este modo, el influjo de las políticas peronistas sobre los sujetos y las relaciones sociales rurales excitó viejas contradicciones al tiempo que en cierta medida contribuyó al inicio de una paulatina y parcial resignificación de algunos de sus aspectos. Así, las expresiones características de los antagonismos durante las primeras décadas del siglo XX fueron sufriendo algunas mutaciones, redefiniéndose en parte bajo la influencia de los cambios producidos en el régimen de tenencia de la

tierra con el agotamiento del sistema tradicional de arriendos, la consolidación de las libertades capitalistas en el medio rural y la tendencia a la propietarización de una parte de los antiguos arrendatarios.

En este sentido, cabe tener en cuenta que “el cambio en la forma de organización social tradicional del modelo productivo, al eliminar algunas causas de enfrentamientos, probablemente atenúe los conflictos y divisiones de los distintos movimientos corporativos entre sí” (Sábato, 1981: 99). Lo cual más que aliviar las contradicciones inherentes al capitalismo agrario, les agrega nuevas -y potencia antiguas- formas de expresión, consiguientes a la creciente centralidad del Estado en la regulación de la economía³. Por eso, si bien los cambios mencionados dieron lugar a juicios que enfatizaron que “con posterioridad al golpe de estado de 1943 la relación de fuerzas en la Argentina comienza a cambiar y el período dorado de los terratenientes se acaba para siempre”⁴, nuestra interpretación apunta a realzar que las transformaciones ocurridas más que poner punto final a la influencia terrateniente la acotan y redefinen. Circunstancias en las cuales la clave es no confundir el fin del período del “viejo arrendamiento” con el de sus principales beneficiarios, toda vez que la propiedad privada latifundista del suelo y la correspondiente renta continuaron ocupando -hasta la actualidad- un lugar destacado en la economía agropecuaria y el poder en el país (Basualdo, 1996; Azcuy Ameghino, 2007).

En este contexto, elevada a un plano relevante por los choques con un gobierno que por primera vez en la historia les resultaba ajeno, la conflictividad terrateniente comenzó a manifestarse con mayor intensidad, coexistiendo con la emergente de los productores familiares y de los asalariados. El crecimiento y complejización de la economía, la industrialización y los reacomodamientos en la cúpula de las clases dominantes locales, las nuevas necesidades de la administración del Estado -del cual en cierta proporción nunca dejarían de participar-, entre otros factores, determinaron que aun concretada la revancha oligárquica en 1955, los grandes propietarios -a menudo también grandes capitalistas- continuarán registrando un tono de antagonismo, eventualmente agudizado ante iniciativas puntuales, con los diferentes gobiernos y políticas públicas que se irían sucediendo. Así, por ejemplo, durante la dictadu-

³ “La consecuencia es que los grandes protagonistas del conflicto pasan a ser las entidades y el Estado en una constante tensión. No es extraña a este hecho la renovada adhesión a los principios liberales de las entidades, con excepción de la Federación Agraria”. Martínez Nogueira, 1988: 304.

⁴ Flichman, 1986: 161. Vale señalar que pese a la caracterización transcrita, Flichman reconoce de hecho que el desplazamiento de los grandes propietarios de tierras y ganados fue sólo relativo; por ejemplo al referirse al revanchismo del golpe militar de 1955, “en el que los sectores terratenientes tuvieron destacada participación”.

ra militar del general Onganía, ante la posibilidad de que se aplicara -en palabras de la Sociedad Rural- “el sistema impositivo denominado a la renta potencial de la tierra o el de alguna de sus variantes conocidas”, se produjo un fuerte rechazo motorizado por dicha corporación junto a CRA y CARBAP (Margenat, 1973: 17), manteniéndose esta tensión entre 1968 y 1970.

Por entonces también se registraron importantes episodios de conflictividad chacarera estimulados por la liquidación en 1967 -mediante la ley 17.253 o “ley Raggio”- del régimen de prórrogas de los arrendamientos; y también por las retenciones impuestas a las exportaciones de granos por el ministro Krieger Vasena, a pesar que se hallaban largamente compensadas por la gran devaluación del peso operada simultáneamente. Asimismo, durante las décadas de los '50 y los '60 se produjeron diversas manifestaciones de la conflictividad obrera rural, alrededor especialmente de las luchas por fuentes de trabajo y/o por mejoras salariales (Mascali, 1986).

Posteriormente, en el marco del gran auge de luchas populares que se sucedían desde fines de los '60, la cúpula terrateniente operó contra las políticas que entre 1973 y 1974 promovieron la sanción del *impuesto a la renta normal potencial* de la tierra (Giberti, 2002), aunado con la difusión de un anteproyecto de Ley Agraria, cuyo punto central, “por el que se buscaba forzar a los propietarios rurales a elevar la productividad de las tierras bajo explotación, establecía la pérdida del derecho de dominio por mantener la tierra inculta o irracionalmente trabajada” (Torre, 1983: 111). A pesar de que no atacaba frontalmente la propiedad latifundista del suelo, la iniciativa encendió luces de alarma entre los grandes terratenientes y otros propietarios que por diversas razones se sumaron a las inquietudes de aquéllos (Giberti, 2003; Gresores y Muro de Nadal, 2008), quienes reaccionaron con manifiesta hostilidad: “la ofensiva contra la Ley Agraria fue tremenda y generalizada. En una asamblea realizada en Chacabuco se dijo que llevaría ‘la disolución al campo argentino’ porque es un ‘instrumento para la subversión’ (...) la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas sostuvieron en forma conjunta que sorprende que en un momento en que es necesario aunar voluntades en defensa de nuestro ser nacional, el secretario de Agricultura introduzca factores de perturbación en la familia argentina” (Flichman, 1986: 168). Cabe recordar que las iniciativas reformistas impulsadas entonces por Giberti desde la Secretaría de Agricultura serían las últimas en su tipo, sin que hayan vuelto a ser materia de debate para los gobiernos que se han ido sucediendo hasta la actualidad.

En el período que incluye estas y otras manifestaciones de conflictividad⁵, y en general durante la segunda mitad del siglo XX, cada vez más las protestas emergentes de los diferentes sujetos sociales titulares de explotaciones y propietarios de tierras se produjeron y canalizaron mediante el encuadre en las organizaciones corporativas -las que actuaron generalmente con independencia entre sí, en tanto lo habitual fue la defensa sectorial de sus asociados-, con un papel destacado de la Federación Agraria, explicable por la mayor vulnerabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas rurales referenciadas en dicha gremial.

Por otra parte, a tono con el papel del Estado y el régimen de acumulación asociado con la industrialización sustitutiva, la mayor parte de esta acción colectiva, ya fuera que se originara en los efectos de caídas de los precios internacionales, en problemas estructurales del agro y/o en las consecuencias de determinadas políticas públicas, tendió a dirigirse prioritariamente -a diferencia de lo que apuntáramos para las primeras décadas- contra los respectivos gobiernos de turno. Lo cual sugiere una pérdida relativa de intensidad de las pugnas intrasector -o su parcial invisibilización-, por ejemplo entre chacareros y terratenientes; circunstancia que *no debe confundirse* con la atenuación de las contradicciones y profundas diferencias de perspectivas, puntos de vista, intereses y programas reivindicativos correspondientes a cada uno de los muy disímiles y asimétricos posicionamientos de los sujetos sociales en la estructura de clases del sector agropecuario.

En la medida que la explicación propuesta es sin duda políticamente delicada, cabe reiterar algunas determinaciones que indujeron un cierto cambio de escenario en el desarrollo de la cuestión agraria pampeana, como la liquidación del viejo arrendamiento, seguida del avance de la explotación bajo la tenencia en propiedad y la consolidación en los '70 de nuevas formas de alquiler del suelo mediante el contrato accidental. Escenario en el cual la contradicción entre la antigua mayoría arrendataria de los chacareros y los dueños de la tierra (sin olvidar la nueva conflictividad inherente al pequeño productor que dependía ahora de un precario contrato de palabra y en principio sólo a un año) iría siendo reemplazada en su carácter de principal por las consecuencias que comenzaba a aparejar la lenta, pero progresiva, tendencia a la concentración del capital puesto en juego en la producción agropecuaria, especialmente a partir de 1976, cuyos efectos serían bien refleja-

⁵ Aunque fuera del territorio de referencia de estas notas, cabe recordar las luchas que protagonizaron hacia comienzos de los '70 el campesinado y los colonos de la región del NEA, donde cumplieron un papel organizativo destacado las Ligas Agrarias, historia que ha dado origen a una importante literatura.

dos por la desaparición de numerosas Pymes registrada por el censo de 1988.

Por otra parte, recuperando interrogantes planteados al comienzo de estas notas, y problematizando la hipótesis anterior, hacia fines de los '80 se planteó que "la poca presencia de movimientos sociales que sean expresión de esos desplazamientos es otro factor que hace necesario evaluar mejor la magnitud del desplazamiento de pequeños productores" (Murmis, 1988: 331). Sin negar la indicada debilidad de las manifestaciones de protesta frente a la nueva amenaza que confrontaba al mundo chacarero -la cual probablemente demoró un cierto tiempo en ser identificada como tal-, debe advertirse que dichas expresiones se hallaron condicionadas y limitadas por la violencia inusitada del golpe militar y el largo período posterior de represión a toda forma de manifestación pública de la conflictividad, cuyos efectos en algunos casos, sobrevivieron más allá de finalizada la dictadura. Lo cual vale puntualmente para la expresión de las contradicciones que afectaban a chacareros y asalariados, ya que la cúpula agraria -que se contaba entre los sostenes políticos del "proceso" militar- no se privó de testimoniar sus diferencias con aquellos aspectos del devenir económico que contrariaron sus intereses. Así, en 1980, el presidente de la Sociedad Rural expresaba sus críticas a "la actual paridad cambiaria, la presión impositiva, una desfavorable relación insumo/producto, los abrumadores costos de comercialización y financieros, todo lo que, en definitiva, vulnera la rentabilidad del sector hasta límites críticos" (Rapoport, 2000: 856).

Más allá de estas discrepancias al interior del régimen dictatorial, y acallado hasta cierto punto el accionar de los actores políticos y gremiales representativos de la pequeña y mediana producción -mucho más afectada que la propiedad terrateniente y el gran capital rural por la política económica de Martínez de Hoz-, fue abriéndose el período signado por la restauración del régimen democrático, dentro del cual se observan dos etapas, divididas por la puesta en marcha del programa económico neoliberal del gobierno de Menem.

Luego de la importante cosecha correspondiente a la campaña 1984/85, comenzó una fuerte caída de los precios internacionales de los granos que redujo sustancialmente la producción y deprimió los ingresos de los diferentes tipos de productores, contexto en el cual, junto a otras expresiones de disconformismo, tuvo lugar una importante movilización de protesta convocada por CRA, la que sería conocida como "el camionetazo". Posteriormente, al instrumentarse el Plan Primavera -que desdobló el tipo de cambio estableciendo un diferencial de alrededor del 20%-, las cuatro entidades gremiales del agro manifestaron fuertes críticas ante una medida que gravitaba -proporcionalmente al volu-

men de las asimétricas espaldas económicas de cada agente- sobre la menguada rentabilidad agraria en forma similar a un impuesto a las exportaciones.

De esta manera, hacia fines de la década de 1980 resultaba cada vez más evidente que las entidades gremiales, sin perjuicio de las diferencias de intereses e identidades entre sus representados, iban desarrollando una percepción compartida frente a un conjunto de problemas ante los cuales el sector agropecuario resultaría vulnerable. Como expresión de ello, sus quejas “referidas a las transferencias de recursos por la expropiación de la renta son constantes, de la misma manera que la común posición con respecto a las políticas de precios y las retenciones. Estas percepciones, denuncias y posiciones explican la frecuente concertación de acciones frente al Estado, homogeneizando sus reclamos *a pesar de las distancias en otros planos*” (Martínez Nogueira, 1988: 304).

Por ser bien conocida la evolución del agro pampeano durante la convertibilidad, sólo remarcaremos que los '90 se caracterizaron por la coincidencia de las cosechas récord -basadas sobre el aumento de los rindes y la ampliación de la superficie cultivada- con una profunda crisis social en el nivel de la mayoría de las explotaciones agropecuarias, que no se encontraron en condiciones de competir bajo las reglas impuestas por la macroeconomía neoliberal, agravadas por la ausencia de instituciones -como la desmantelada Junta de Granos- y políticas de sostén (Giberti, 2003).

De esta manera, se terminó de consolidar un nuevo escenario económico, donde se profundizaron tendencias y situaciones que constituyeron -y aún lo hacen⁶- la *base estructural de las formas más actuales de la conflictividad chacarera* (incluidas las modulaciones emergentes de la pequeña producción capitalista y de la mayoría de los contratistas de maquinaria, sometidos a una competencia feroz para permanecer en el mercado de los servicios). Entre ellas, el mantenimiento de una alta concentración de la propiedad de la tierra, base de la apropiación vía renta de una parte relevante del plusvalor agrario; el avance de la monopolización del uso del suelo por cada vez menos empresas favorecidas por los beneficios de escala; y la consiguiente concentración del capital, la producción y el ingreso que drena los recursos de la pequeña hacia la gran explotación, reduciendo el espacio económico y social que sostiene su existencia (Cloquell y otros, 2007: 183).

Frente a estas condiciones, la beligerancia se manifestó plena, profunda y reiterada, con episodios de acción colectiva que se contaron

⁶ Sobre los aspectos de continuidad socioeconómica posteriores a la caída de la convertibilidad, ver: Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 2012.

entre los primeros que pusieron en cuestión el programa menemista, como el tractorazo de 1993 (Teubal y Giarracca, 1993), y el paro de diez días de duración -con cortes de ruta y piquetes- lanzado en agosto de 1994 por la Federación Agraria, CRA y CONINAGRO (Azcuay Ameghino, 2009). En mayo de 1995, la desesperación de Lucy de Cornelis para evitar la pérdida de su chacra hipotecada dio origen a un nuevo movimiento social, “Las Mujeres Agropecuarias en Lucha”⁷, que de allí en más se constituirían en batalladoras permanentes contra los remates de campos y maquinarias de los productores endeudados.

El desarrollo de la conflictividad chacarera, sólo momentáneamente atemperada por el repunte del precio de los granos en 1996 y 1997, volvería a manifestarse con intensidad creciente durante los últimos cuatro años de vigencia de la convertibilidad, cuando se multiplicaron los cortes de ruta, concentraciones, tractorazos, paros y otras expresiones de rechazo, que tuvieron como eje de la movilización a los pequeños y medianos productores. La persistencia y profundidad de estas protestas permiten afirmar que, salvando las debidas distancias y diferencias, la década de 1990 probablemente comparta con la de 1910 el constituir uno de los períodos de mayor intensidad en materia de luchas en la región pampeana.

Más allá de estas explicaciones, y profundizando el análisis en torno de hechos como los reseñados, es posible identificar el modo como se fueron constituyendo y expresando los *dos frentes principales* en torno de los cuales se desplegaron las disputas agrarias característica de las últimas décadas del siglo XX. El primero de ellos es el compuesto por las reacciones ante determinadas políticas públicas *caracterizadas por su indiferenciación respecto al modo de interpelar al conjunto* de los sujetos sociales, las cuales por dicha razón tienden a reunir coyunturalmente a los diferentes tipos de productores y sus gremiales, contribuyendo a forjar el concepto y la imagen de un “campo” aligerado de contradicciones internas, socialmente plano y homogéneo.

Exactamente lo contrario de lo que ocurre en el segundo frente, donde el factor vertebrador es la evidencia de que los “concentradores” -en todas sus expresiones- se van beneficiando mediante la absorción de recursos y espacios socioproductivos involuntariamente transferidos, en particular, por la producción familiar chacarera, y en general -como se comprobaría en 1988 y 2002- por las explotaciones de hasta 200 hectáreas.

En este escenario no resulta difícil identificar la especificidad y núcleo duro de la conflictividad chacarera en tanto aquella que se despliega

⁷ Entre una ya importante bibliografía sobre este tema, destacamos el trabajo precursor de: Giarracca y Teubal, 1997.

como reacción y defensa frente a los efectos liquidacionistas de la concentración económica, tanto en términos del despliegue de tendencias estructurales de larga duración emergentes del régimen de producción vigente, como de políticas macroeconómicas y sectoriales que puntualmente, por acción u omisión, agudizan y potencian la crisis de la pequeña y mediana producción agraria. Al plantearlo de esta manera, aludiendo a políticas puntuales, dejamos señalado que en este segundo frente, donde *el choque es esencialmente intrasectorial*, queda expuesto y abierto el espacio para que el efecto de determinadas iniciativas gubernamentales (construidas a partir de reconocer las contradicciones que vinculan a concentradores y concentrados) pueda articularse con los intereses de la mayoría de pequeños y medianos productores, quienes posiblemente tenderán a apoyar todas aquellas medidas que, afectando el proceso concentrador, contribuyan a su permanencia en el sector.

Es en estas circunstancias cuando se hace evidente que “el campo” no existe, quedando expuesto el hecho de que las políticas iguales (similares derechos de exportación, impuesto inmobiliario no progresivo, arrendamientos ilimitados, etc.) aplicadas sobre sujetos desiguales, aunque eventual y coyunturalmente recojan la protesta de todos -creando la ilusión de un campo sin clases sociales, ni pugnas internas-, resultan en última instancia favorables a quienes disponen del poder económico de soportarlas⁸, y con ello de la capacidad de apropiarse de los recursos productivos de los actores que van quedando en el camino.

En este sentido, especificar y diferenciar adecuadamente -sin ignorar las superposiciones y aspectos secundarios que comparten- la conflictividad terrateniente (disparada por cualquier amenaza a la maximización de la renta), la del gran capital concentrador (frente a iniciativas que restrinjan en alguna medida su acumulación y expansión), y la chacarera (articulada alrededor de la lucha por la supervivencia y progreso de la producción de base familiar), es una condición ineludible para enriquecer la percepción de la historia de los antagonismos y disputas que se desplegaron en el agro pampeano durante la segunda mitad del siglo XX⁹.

⁸ Sin duda los desacuerdos de la cúpula agraria con determinados aspectos de las políticas económicas y sectoriales -por ejemplo, de Krieger Vasena, Martínez de Hoz o Cavallo- no debe ocultar que se trata de diferencias al interior del Estado en tanto expresión e instrumento de las clases dirigentes de la sociedad.

⁹ Aun cuando no ha sido materia de estas notas, es necesario enfatizar que las labores agropecuarias, y en particular el proceso de agriculturización, han ido de la mano de la superexplotación de los asalariados rurales (productivísimos hacedores “invisibles” de

Finalmente, más allá de la “amnesia colectiva” o su eventual falta de significación -posibilidades que utilizamos como disparador de estas notas-, resulta indudable que el estudio del problema de los antagonismos y disputas en el medio rural, que se manifestaron de manera persistente bajo múltiples modalidades e intensidades, mejora sus resultados al pensarse articulado con los contenidos y formas que va adoptando la “cuestión agraria” en la región núcleo de la agricultura argentina. Para lo cual resulta clave profundizar la investigación y afinación conceptual de la evolución de los procesos de producción y de las modificaciones en la estructura socioeconómica, al igual que la diversidad y contradicciones que van caracterizando a los sujetos sociales, sus específicos intereses y pliegos reivindicativos, y los modos de representación y organización mediante las cuales se expresan.

las grandes cosechas), cuya específica conflictividad -estratégicamente decisiva en un agro capitalista- se ha venido manteniendo, como fenómeno colectivo, en un plano predominante de latencia, con escasas manifestaciones de lucha abierta. Lo cual, entre otros factores explicativos, se vincula con la progresiva vigencia de formas de producción que determinan su aislamiento, inestabilidad y dispersión en vastas y diversas geografías; al igual que con la proximidad laboral respecto a sus patrones; y con la ineficacia política y organizativa de su burocrática organización sindical. Al respecto, ver: Villulla, 2010.

Bibliografía

- Ansaldi, Waldo (1986). “Revueltas agrarias pampeanas”. En: AA.VV. *Los trabajadores de la pampa*. Cuadernos de Historia Popular, Bs. As., pp. 1-20.
- Ansaldi, Waldo (1991). “Hipótesis sobre los conflictos agrarios pampeanos”. *Revista Ruralia* N° 2, p. 12.
- Ansaldi, Waldo (1993). “La pampa es ancha y ajena. La lucha por las libertades capitalistas”. En: M. Bonaudo y A. Pucciarelli. *La problemática agraria, nuevas aproximaciones*. CEAL, Bs. As.
- Ansaldi, Waldo (1993). *La conflictividad obrero-rural en la región pampeana, 1900-1937*. CEAL, Bs. As.
- Arcondo, Aníbal (1980). “El conflicto agrario argentino de 1912. Ensayo de interpretación”. *Desarrollo Económico* N° 79, Bs. As, p. 381.
- Azcuy Ameghino, Eduardo (2004). “Renta y arriendo: problemas de economía e historia”. En: *Trincheras en la Historia*. Imago Mundi, Bs. As..
- Azcuy Ameghino, Eduardo (2007). “Prueba a nombrar de memoria cinco empresas que estén explotando campos... Propiedad y renta de la tierra en Argentina a comienzos del siglo XXI”. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios* N° 26/27.

- Azcuy Ameghino, Eduardo (2009). "La protesta social durante la convertibilidad: el caso del 'paro agrario' de 1994 en la pampa húmeda". *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios* N° 30.
- Azcuy Ameghino, Eduardo (2011). *Una historia casi agraria. Hipótesis y problemas para una agenda de investigación sobre los orígenes y desarrollo del capitalismo en Argentina*. Ediciones del PIEA, Bs. As.
- Azcuy Ameghino, Eduardo (2012). "De la percepción empírica a la conceptualización: elementos para pensar teóricamente la estructura social de las explotaciones agrarias pampeanas". En: AAVV. *Estudios Agrarios y Agroindustriales*. Imago Mundi.
- Azcuy Ameghino, Eduardo y Martínez Dougnac, Gabriela (2012). "Evolución de la producción agrícola, estructura socioeconómica y acción colectiva en la pampa húmeda argentina, 1991-2010". *Revista Alasru* N° 7, México.
- Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2001). *Historia del agro argentino*. Mondadori, Bs. As.
- Basualdo, Eduardo (1996). "Los grupos de sociedades en el agro pampeano". *Desarrollo Económico* N° 143.
- Boglich, José (1937). *La cuestión agraria*. Editorial Claridad, Bs. As, p. 203.
- Cloquell, Silvia (coordinadora) (2007). *Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura*. Homo Sapiens, Rosario.
- Cloquell, Silvia y Azcuy Ameghino, Eduardo (2005). "Las reformas neoliberales y las transformaciones en la estructura social agraria pampeana (1991-2001)". *Revista Alasru* N° 1, México.
- Díaz Alejandro, Carlos (1983). *Ensayos sobre la historia económica argentina*. Amorrortu, Bs. As.
- Flichman, Guillermo (1986). *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino*. Siglo XXI, Bs. As.
- Giarracca, Norma (1999). "Las ciencias sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX". En: N. Giarracca (Comp). *Estudios rurales*. La Colmena, Bs. As, p. 7-40.
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (1997). "El Movimiento de Mujeres en Lucha". **Realidad Económica** N° 150.
- Giberti, Horacio (2002). "CARBAP y el impuesto sobre la renta normal potencial". *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios* N° 16.
- Giberti, Horacio (2003). "Cambiantes posiciones de la SRA, CRA y la CGT respecto al proyecto de Ley Agraria". *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios* N° 19, Bs. As.
- Giberti, Horacio (2003). "Modernizado e insatisfactorio sector agropecuario". **Realidad Económica** N° 200, Bs As.
- Girbal de Blacha, Noemí (1988). *Estado, chacareros y terratenientes: políticas agrarias y relaciones de poder*. CEAL, Bs. As, pp. 36-40.

- Grela, Plácido (1958). *El grito de Alcorta. Historia de la rebelión campesina de 1912*. Ed. Tierra Nuestra, Rosario, p. 19.
- Grela, Plácido (1985). *El grito de Alcorta*. Centro Editor, Bs. As, p. 23.
- Gresores, Gabriela y Muro de Nadal, Mercedes (2008). "Las reacciones de las corporaciones de terratenientes frente a políticas 'productivistas'". En: G. Gresores (comp.). *Organizaciones rurales y política agraria en la Argentina*. Imago Mundi, Bs. As.
- Lattuada, Mario (1986). *La política agraria peronista, 1943-1983*. Centro Editor, Bs. As.
- Margenat, Nidia (1973). Las organizaciones corporativas del sector agrario y su posición frente a la renta potencial. Cuadernos de CICOSO, Serie Estudios 5, Bs. As.
- Martínez Nogueira, Roberto (1988). "Las organizaciones corporativas del sector agropecuario". En: AAVV. *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*. FCE, Bs. As.
- Mascali, Humberto (1986). *Desocupación y conflictos laborales en el campo argentino (1940-1965)*. Biblioteca Política, Bs. As, pp. 82-105.
- Míguez, Eduardo José (1986). *La expansión agraria de la pampa húmeda (1850-1914). Tendencias recientes de su análisis histórico*. Anuario IHES, p. 97-98.
- Murmis, Miguel (1988). "Sobre expansión capitalista y heterogeneidad social". En: AAVV. *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*. Fondo de Cultura Económica, Bs. As.
- Palacio, Juan Manuel (2004). *La paz del trigo*. Edhasa, Bs. As.
- Pucciarelli, Alfredo R. (1986). *El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930*. Hyspamérica, Bs. As.
- Rapoport, Mario y colaboradores (2000). *Historia económica, política y social de la Argentina*. Ediciones Macchi, Bs. As.
- Sábato, Hilda (1993). "Estructura productiva e ineficiencia del agro pampeano, 1850-1950: un siglo de historia en debate". En: M. Bonaudo y A. Pucciarelli. *La problemática agraria, nuevas aproximaciones*. CEDAL, Bs. As.
- Sábato, Jorge (1981). *La pampa pródiga: claves de su frustración*. CISEA, Bs. As.
- Solberg, Carl (1975). "Descontento rural y política agraria en la Argentina, 1912-1930". En: M. Giménez Zapiola. *El régimen oligárquico*. Amorrortu, Bs. As, p. 247.
- Teubal, Miguel y Giarracca, Norma (1993). "El día que la Plaza de Mayo se vistió de campo". **Realidad Económica** N° 118, Bs. As.
- Torre, Juan Carlos (1983). *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*. CEAL, Bs. As,
- Tsakoumagkos, Pedro, Soverna, Susana, Craviotti, Clara (2000). *Campesinos y pequeños productores*. SAGPyA-Proinder, Bs. As.

Villulla, Juan Manuel (2010). "El proletariado agrícola de la pampa sojera y las condiciones históricas de su invisibilidad social". En: D. Fernández y J.M.Villulla. *Sobre la tierra. Problemas del desarrollo agrario pampeano*. FCE, Bs. As.

Zemborain, Saturnino (1973). *La verdad sobre la propiedad de la tierra en Argentina*. Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, Bs. As, p. 60.

El litio en la Argentina: oportunidades y desafíos de un recurso estratégico*

*Julio Sevares ***
*Juan Pablo Krzemien****

El litio se ha convertido en un mineral estratégico porque su utilización permitirá el ingreso de la industria automotriz en la era del vehículo eléctrico, sustituyendo al petróleo.

Las mayores reservas explotables del mineral se encuentran en el denominado “triángulo del litio” del cual la Argentina forma parte, junto con Bolivia y Chile.

En este trabajo se busca demostrar la posibilidad de que nuestro país se convierta no solo en un proveedor primario de este valioso recurso, sino que a partir de su industrialización se generen desarrollos tecnológicos, una producción de mayor valor agregado y una demanda de mano de obra más extensa y calificada.

Con este objetivo se evalúan las reservas del mineral en la Argentina y la región, las políticas de las potencias y de los países latinoamericanos en torno del litio, la necesidad de desarrollar una política científico-tecnológica, la importancia de la sostenibilidad de la industria del litio (el impacto ambiental y la necesidad de integrar a las comunidades en la explotación del recurso) y el marco legal que regula esta actividad.

Palabras clave: Triángulo del litio - Recursos estratégicos - Política científico-tecnológica - Agotamiento del petróleo - Vehículos eléctricos - Comunidades aborígenes

* Este artículo está basado sobre la Tesis de Graduación de Juan Pablo Krzemien, dirigida por Julio Sevares.

** Economista, profesor universitario y periodista.

*** Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Lithium in Argentina: opportunities and challenges of an strategic resource

Lithium has become a strategic mineral because its utilization will allow the automotive industry to enter the electric vehicle era, by substituting oil.

The largest exploitable reserves of this mineral are found in the “lithium triangle”, composed by Argentina, Bolivia and Chile.

This paper seeks to demonstrate not only the possibility that our country could become a primary supplier of this valuable resource, but also that its industrialization could generate technological development, a higher value-added production and a more extended and skilled labor force.

With this objective, we will evaluate the mineral reserves in Argentina and South American region, the policies of the main powers and Latin American countries around lithium, the need to develop a science and technological policy, the importance of the sustainability of lithium industry (environmental impact and integration of the communities), and the legal framework of this activity.

Keywords: Strategic resources - Electric vehicles - Lithium ion batteries -Lithium triangle - Science and technology policy

Fecha de recepción: junio de 2012

Fecha de aceptación: agosto de 2012

Introducción

El litio se ha convertido en un mineral estratégico porque su utilización permitirá el ingreso de la industria automotriz en la era del vehículo eléctrico, sustituyendo al petróleo.

Las mayores reservas explotables del mineral se encuentran en el denominado “triángulo del litio” del cual la Argentina forma parte, junto con Bolivia y Chile.

Sin embargo, este preciado recurso no recibe en nuestro país el tratamiento que su valor demanda. Su explotación se encuadra dentro del Régimen General Minero, por lo que recibe el mismo tratamiento que cualquier otro mineral y, debido a la federalización de los recursos naturales, su explotación está en manos de las provincias que lo atesoran, Jujuy, Salta y Catamarca.

Esta legislación flexible y el promisorio desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos en los próximos años está atrayendo a las principales empresas automotrices, que asociadas con mineras trasnacionales están adjudicándose los principales yacimientos para la explotación del recurso.

Sin embargo, también existen iniciativas orientadas a la protección del recurso y a alcanzar el desarrollo de productos de mayor valor agregado tecnológico. En el nivel provincial cabe resaltar las activas políticas de Jujuy y en el institucional sobresalen las investigaciones de diversas universidades y organismos públicos para avanzar en la fabricación de baterías.

El aspecto medioambiental es una de las principales preocupaciones en cualquier proceso que involucre la extracción de un mineral. Sin embargo, en el caso de nuestra región, el litio se obtiene por un proceso considerablemente menos contaminante y más económico que en otras partes del mundo.

El volumen y calidad de las reservas de litio y las posibilidades crecientes que proporciona ponen de manifiesto la necesidad de una política nacional para la explotación y transformación del mineral.

El litio en el centro de un nuevo paradigma energético

Agotamiento del petróleo

Para comprender por qué el litio es considerado un recurso estratégico es indispensable entender que estamos entrando en una etapa de transición, entre la era del petróleo abundante y barato y la era de las energías renovables y nuevas tecnologías. Hay dos razones funda-

mentales que volverán inviable el modelo energético actual, centrado sobre la explotación de hidrocarburos. En primer lugar, el agotamiento del petróleo, con las consecuencias económicas y políticas que esto acarreará. En segundo lugar, el calentamiento global, que afectará a todos los habitantes del planeta.

Cambio climático

Después de más de 200 años de consumo de energía en el mundo, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), de las cuales el petróleo representa una parte importante, aumentaron cerca de 20 veces.

El agotamiento del petróleo y el cambio climático, forzarán a la mayoría de los países a reducir tanto su demanda de petróleo en respuesta a una cada vez menor oferta, como sus emisiones de dióxido de carbono para evitar el calentamiento global.

La importancia estratégica del litio

Un punto clave en la estrategia para alcanzar estos objetivos es la transición de la industria automotriz global a la propulsión eléctrica. Dado que las emisiones de CO₂ correspondientes al transporte representan alrededor del 30% del total¹, la sustitución de minerales combustibles por energía eléctrica tendría un impacto ambiental muy grande. Asimismo, la electrificación global del transporte se ha convertido en una prioridad para muchos gobiernos que buscan reducir su dependencia del petróleo y diversificar sus fuentes de energía.

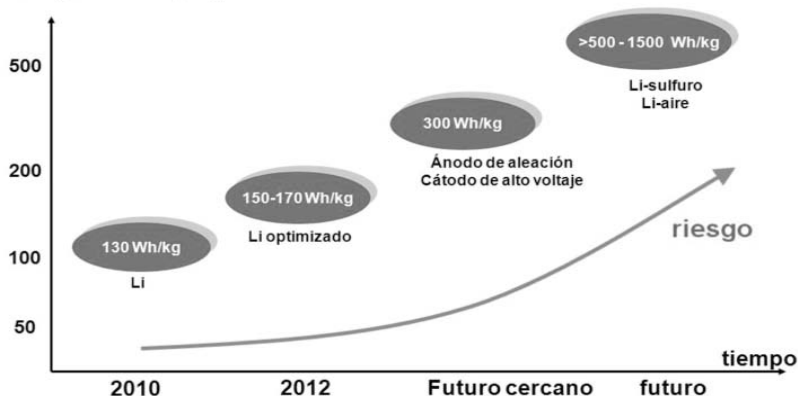
El factor que venía frenando esta transición era la falta de un medio que pudiera almacenar suficiente energía eléctrica para asegurar niveles de potencia, autonomía y tiempo de recarga razonable. Las nuevas tecnologías en baterías de litio han dejado atrás estas limitaciones, reemplazando antiguos materiales como Nickel-Cadmio (NiCd), Nickel-metal-hidruro (Ni-MH). La principal ventaja de la nueva tecnología de baterías de ion-litio es su alta densidad de energía, que le permite una mayor capacidad de almacenamiento de energía por unidad de peso, reduciendo considerablemente el peso total de estas baterías en relación con aquellas producidas a partir de NiCd o NiMH.

La nueva tecnología de baterías ion-litio, en su forma más avanzada, tiene la mitad de peso que sus antecesoras (baterías de níquel) y almacenan el triple de energía, generando el doble de potencia, lo que ha posibilitado la construcción de algunos modelos de vehículos con 450

¹ Altamira, Pablo (2011) "Oportunidades para el Centro Innovación del Litio", disponible en: http://www.centroenergia.cl/cil/nivel1/Pablo_Altamira-SQM.pptx

Gráfico N° 1

Rango efectivo [km]



Evolución de la tecnología de baterías de Litio. Disponible en http://www.centroenergia.cl/cil/nivel1/C_Harting_CHEMETALL-Workshop_Chartnig.ppt

km de autonomía, capaces de desarrollar una velocidad de hasta 100 km por hora (**gráfico N° 1**).

Demanda primaria de litio

El uso del litio ha experimentado un significativo crecimiento en los últimos 20 años. Según la empresa SQM, la demanda global creció en un promedio de 5,6% anual durante dicho período. Del total de la demanda el 80% es consumido en la forma de químicos de litio, mientras el 20% es consumido en la forma de concentrados².

Después de que en 2005 los precios del carbonato de litio experimentaran un brusco aumento, en torno del 90%, a causa de la escasez en el mercado producida por el incremento de la demanda en las aplicaciones de baterías, problemas de producción en el Salar de Atacama y el propio impacto del ciclo económico mundial que elevó el precio de todos los minerales, en 2006 el valor del carbonato de litio tendió a estabilizarse por sobre los 6.000 US\$/t.

En el año 2008 la demanda por litio alcanzó un crecimiento en torno del 2% con respecto a 2007, lo que representó una caída del crecimiento en comparación con los promedios históricos, resultado de la

² Altamira, Pablo (2011) "Oportunidades para el Centro Innovación del Litio", disponible en: http://www.centroenergia.cl/cil/nivel1/Pablo_Altamira-SQM.ppt

desaceleración económica que el mundo empezó a vivir a partir de la segunda mitad del año.

Después de años de crecimiento sostenido, la demanda cayó un 23% en 2009 afectada por la crisis económica mundial, sin embargo hubo una importante recuperación en 2010.

SQM estima que la demanda mundial de litio crecerá 6,3% en el período 2010-2030, alcanzando 240 kMT-LCE (mil MT-LCE) en 2020 y 440 kMT-LCE en 2030. Este crecimiento global estará impulsado principalmente por la demanda de baterías para autos a propulsión eléctrica, que se espera crezca a un promedio anual del 40% en 2010-2020, y del 12% en 2020-2030, alcanzando 40 KMT-LCE (2020) y 130 KMT-LCE (2030).

De esta manera hoy nos encontramos con que el carbonato de litio se comercializa a un valor de alrededor de 6.000 US\$/t, con una demanda total de 125-130 kMT-LCE². De acuerdo con estos cálculos, la empresa SQM determinó que se trata de un mercado de aproximadamente US\$ 600 millones³.

Recursos y reservas de litio a nivel internacional

Diferencia entre recursos y reservas

Antes de analizar las reservas internacionales de litio, es necesario tener en claro que se trata de un recurso natural no renovable. Igualmente importante es distinguir la diferencia entre los "recursos" de un bien y las "reservas" de dicho bien, ya que ambos términos suelen ser empleados indistintamente por muchos analistas, lo que puede conducir a confusiones y malas interpretaciones de las verdaderas cantidades de litio de que dispone un país.

Recursos y reservas mundiales de litio

Existe un consenso entre los distintos analistas respecto a la distribución mundial de este recurso de acuerdo con la fuente de la cual proceden. Todos confirman que las reservas en salmueras representan un 60% del total, en minerales alcanzan un 26%, y en arcillas menos del 10 por ciento.

Sin embargo, hay una importante divergencia acerca de qué porcentaje del total de recursos de cada país es económicamente viable para su industrialización en gran escala. Es decir, a qué valor ascienden las reservas de litio de cada país.

³ Altamira, Pablo (2011) "Oportunidades para el Centro Innovación del Litio", disponible en: http://www.centroenergia.cl/cil/nivel1/Pablo_Altamira-SQM.pptx

El geólogo Keith Evans estima que el total de las reservas mundiales accesibles es de 30 millones de toneladas métricas (Mtm) de litio. Del total, 6,9 Mtm corresponden a Chile, 5,5 Mtm a Bolivia, y 2,5 Mtm a la Argentina. Es decir que estos tres países de Sudamérica concentran el 50% del total de las reservas mundiales y prácticamente el 90% del total de las reservas en salmueras continentales⁴ (gráfico disponible en <http://www.chemetallithium.com>).

Otros analistas consideran que las reservas sudamericanas son aún más relevantes, resaltando que Evans contabiliza como reservas, recursos cuya explotación es económicamente inviable, como es el caso de EUA. Esto es señalado por William Tahill⁵, cuya principal crítica a la medición de Evans es el amplio espectro de depósitos considerados, dado que muchos de ellos carecen de viabilidad económica, sobre todo, frente a los depósitos de salmueras de Sudamérica y de China.

Adicionalmente, las reservas correspondientes al Salar de Uyuni, en Bolivia, se encuentran desactualizadas en las mediciones de Evans. El Servicio Geológico de EUA en su reporte del año 2011, si bien los contabiliza como un recurso y no como una reserva, sostiene que Bolivia concentra 9 Mtm de litio.

De esta manera, si tomamos en cuenta que la única fuente de litio que podrá ser empleada en la fabricación de baterías de Ion litio son las salmueras continentales, la posición dominante de Sudamérica, particularmente de Bolivia, en las reservas de litio mundiales es evidente (**gráfico N° 2**).

Capacidad de producción global

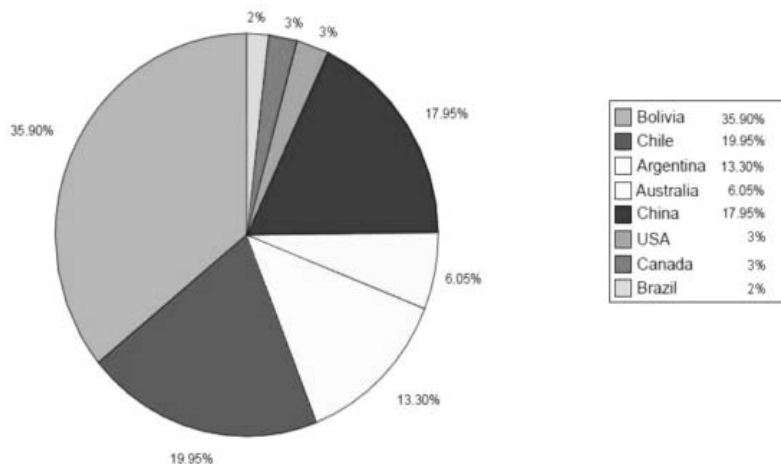
La capacidad global de producción de litio en 2011 giró en torno de las 150.000 – 160.000 toneladas métricas (tm). Del total de la producción, 44% está concentrada en Chile; 23% en Australia, 13% en la Argentina; 12% en China; 2% en Estados Unidos y el restante 6% en otros países. Esto significa que incluso sin tomar en cuenta el potencial de Bolivia, la región sudamericana concentra el 60% de la producción mundial. Asimismo, puede observarse que la Argentina se ha convertido en el tercer productor mundial.

Por otra parte, la perspectiva de crecimiento de la demanda ha incentivado la exploración y prospección de nuevos yacimientos, tanto a partir de salmueras como de minerales. De los 50 proyectos a partir de sal-

⁴ Evans, Keith (2008), "An abundance of lithium", p.13. Disponible en: http://www.che.ncsu.edu/ILEET/phevs/lithium-availability/An_Abundance_of_Lithium.pdf

⁵ Tahil, William (2007), "the trouble with lithium", p.4.

Gráfico N° 2



Disponible

<http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/refs/nuclear/TroubleLithium.pdf>

en:

mueras, 18 se encuentran en la Argentina, 13 en EUA, 6 en Chile, 6 en Canadá, y una menor participación en otros países⁶. Por este motivo se espera que la participación argentina en la producción total de litio se incremente en los próximos años.

El triángulo del litio

Se denominó con este nombre a la región comprendida por los salares de Atacama en Chile, de Uyuni en Bolivia, y las de Hombre Muerto, Rincón y Olaroz en la Argentina. Esto se debe a que entre estos salares concentran el 65% de las reservas mundiales de litio y el 60% de la producción global. Adicionalmente, las reservas de la región se concentran en salmueras continentales, por lo que su extracción se realiza por medio de un proceso más simple, económicamente menos costoso y ambientalmente menos contaminante que en otras partes del mundo. Otro factor favorable es el clima seco de la región, ideal para alcanzar altas tasas de evaporación y reducir los tiempos de producción. En el caso del desierto de Atacama, se trata de uno de los lugares más secos de la tierra.

⁶ Desormeaux, Daniela (2011) "Perspectivas globales del litio". Disponible en: http://www.signumbox.com/central/Perspectivas%20Globales%20de%20Litio%20-%20_%20Desormeaux%20.pdf

Dado que la única fuente de litio económicamente viable y suficientemente pura para ser empleado en las baterías de los vehículos eléctricos (VE) son precisamente las salmueras continentales, y que estos tres países concentran el 90% del total de las reservas mundiales de este recurso, la región también ha sido bautizada como la “Arabia Saudita del litio”⁷.

Sin embargo, no se trata de una región uniforme, sino que cada uno de los salares dentro del triángulo presenta distintas concentraciones y grados de pureza, así como condiciones geográficas y atmosféricas diferentes.

Además, cada país cuenta con una legislación minera y ambiental diferente, que orienta su explotación hacia distintos objetivos.

Por este motivo se analizarán, de acuerdo con el Estado al que pertenezcan, los principales salares de la región.

Chile

Salar de Atacama

En Chile se conocen aproximadamente 60 salares y lagunas salinas con recursos de litio, siendo el Salar de Atacama el de mayor superficie. Está ubicado en la II Región del país a 2.300 metros sobre el nivel del mar y alcanza una superficie de alrededor de 3.000 km². Las concentraciones de litio en el Salar de Atacama son las más altas entre los salares conocidos, con un promedio de 1.500 partes por millón (ppm). Dadas estas características, constituye la reserva de litio de mejor calidad del planeta.

Por otra parte, gracias a las características climáticas del desierto de Atacama, este Salar presenta también las mayores tasas de evaporación del mundo, alcanzando los 3.700 mm/año, lo que disminuye los costos de procesamiento notablemente.

En términos absolutos, el Salar de Atacama es el segundo en tamaño de depósitos de Litio, siendo superado por el Salar de Uyuni, de Bolivia, pero presenta una notable ventaja económica en la recuperación de los contenidos de litio.

Bolivia

Salar de Uyuni

Este es el salar más grande del planeta, abarcando una extensión de 9.000 km². Hoy es reconocido como la mayor reserva de litio del mundo

⁷ <http://www.forbes.com/forbes/2008/1124/034.html>

con 9 millones de toneladas, aunque durante años se le asignó un valor de reservas de 5,5 millones. No obstante, presenta algunas limitaciones, sobre todo desde el punto de vista cualitativo. En primer lugar, sus concentraciones de litio son bajas, con un promedio de 350 ppm. La tasa de evaporación es de 1.500 mm/año, esto significa que el proceso de evaporación de las salmueras en las piscinas será más lento. Finalmente, el Salar de Uyuni presenta altas tasas de magnesio en la salmuera, 22 veces mayores en relación con las de litio. Esta es la principal impureza que debe separarse en el proceso de producción del litio, por lo que el mismo se encarece.

En la actualidad, el gobierno boliviano está haciendo variados esfuerzos para atraer capitales extranjeros que le permitan explotar el Salar de Uyuni, con la prerrogativa de que el Estado sea el controlador del negocio. Con este objetivo la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009, puso en manos del Estado el control de los recursos naturales. De ese modo, se busca que el metal no sea exportado sino procesado en el país bajo el modelo de una empresa pública.

El presidente Morales anunció la explotación de los recursos evaporíticos de Bolivia a través de un proyecto 100% estatal. A través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) comenzó un programa para reevaluar los recursos de litio del salar, ella planea realizar la explotación del Salar de Uyuni en 3 etapas invirtiendo alrededor de 900 millones de dólares.

La posibilidad de que el Salar de Uyuni entre al mercado productor de litio ha sido ampliamente seguida por la prensa internacional, sobre todo respecto de si se asocia o no con empresas privadas, ya que actualmente Bolivia no cuenta con infraestructura, tecnología ni tampoco con las inversiones necesarias como para trascender en el nivel internacional.

La Argentina

En el caso de la Argentina, a diferencia de Chile y Bolivia, las reservas no se encuentran en un solo salar, sino que tres de ellos, el de Rincón, Hombre Muerto y Olaroz, concentran la mayor parte de las reservas del país, complementadas por varios salares menores. Cuantitativamente, la Argentina es de los tres países del triángulo el que posee las menores reservas, sin embargo éstas presentan una calidad excepcional.

Salar del Hombre Muerto

Este salar está ubicado en la provincia de Catamarca, a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar. Posee una tasa de evaporación de 2.775 mm/año. Su contenido de litio es relativamente pequeño comparado

con el Salar de Atacama, con concentraciones promedio de litio de 692 ppm. Sin embargo presenta muy poca concentración de impurezas, en particular un excepcionalmente bajo ratio de magnesio/litio de sólo 1.37/1. Las reservas probables se estiman en 850.000 t de litio a 70 m de profundidad.

Luego de las fallidas negociaciones de un acuerdo con el gobierno boliviano por el desarrollo del Salar de Uyuni⁸ en 1995 la compañía FMC negoció los derechos por el Salar de Hombre Muerto en la Argentina. La producción comenzó en 1998 y actualmente la producción anual está en torno a las 12.000 t de carbonato de litio y 6.000 t de cloruro de litio.

Salar del Rincón

Es el proyecto de mayor altitud, ubicado en la provincia de Salta, a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar, a escasos metros de la frontera con Chile. Más importante aún, es el salar con mayores reservas de la Argentina, con un total de 1.860.000 tm. Sus concentraciones son, sin embargo, menores que las de Hombre Muerto alcanzando en promedio los 397 ppm. Asimismo, la tasa de magnesio presente es casi 6 veces la de Hombre Muerto (8.6/1), por lo que el proceso de producción es más costoso. La tasa de evaporación bordea los 2.600 mm/año.

En este salar se montó, con instalaciones de más de 3.000 m², la planta productora de carbonato de litio más grande del mundo, fabricada con un diseño 100% argentino⁹. Allí se industrializará el mineral, incorporándole valor agregado para la producción de carbonatos de litio. En este proyecto se invirtieron hasta el momento 300 millones de pesos y se esperan inversiones por 1.200 millones más.

El proyecto del Salar del Rincón, tiene prevista su primera producción para el año 2012 pero todavía en pequeña escala. El operador ADY Resources, que compromete capitales argentinos y australianos, está trabajando en el Salar del Rincón desde el año 2005 y el objetivo final es la producción de Carbonato de Litio de Grado Batería. Hay planes de expansión con inversiones importantes que incrementarán la producción hasta 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el corto plazo y 30.000 toneladas anuales en el mediano plazo.

⁸ Consultar el artículo: "Litio, sueños y pesadillas plagados de imprecisiones". Disponible en: <http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/39409-litio-suenos-y-pesadillas-plagados-de-imprecisiones.html>

⁹ Artículo "Litio: inauguraron planta productora en salar del rincón". Publicado en revista minera. Disponible en: <http://revistaminera.wordpress.com/2011/03/18/argentina-inauguran-planta-de-extraccion-de-litio/>

Salar de Olaroz

Se encuentra en la provincia de Jujuy en el departamento de Susques. Este es un salar mucho más pequeño que el de Rincón, pero con una alta concentración de litio en torno de las 900ppm. Sus reservas se estiman en 300.000 tm. La cercanía del Salar de Olaroz al puerto de Chile es visto por los fabricantes de baterías de Ion Litio y VE asiáticos como una ventaja comparativa respecto de otros salares, por ejemplo el de Uyuni en Bolivia, por las facilidades para su exportación.

Por este motivo, se están desarrollando dos grandes proyectos en la región de Susques. El primero de ellos, está siendo financiado por una Inversión conjunta de la subsidiaria de la automotriz Toyota (Toyota tsusho) y la empresa minera australiana Orocobre. La automotriz japonesa consiguió que el gobierno de su país respaldara este acuerdo mediante préstamos baratos, concretando uno de los primeros acuerdos globales de recursos naturales en la era del auto eléctrico¹⁰. La inversión final del proyecto se estima en 400 millones de pesos. La firma australiana estima un potencial de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio (unos US\$ 72 millones, a valores de hoy) y 36.000 toneladas anuales de potasio.

De manera similar al caso anterior, se han instalado en Susques la compañía de capitales mayoritariamente canadienses Lithium Americas, en asociación con la autopartista Magna (que le compró la marca Opiel a Volkswagen) y el coloso japonés Mitsubishi.

Estas alianzas estratégicas evidencian que la búsqueda de litio de alta calidad para las baterías de los autos híbridos y eléctricos está poniendo en marcha una carrera por la materia prima tal como lo hicieron los combustibles fósiles en el siglo pasado. Estas inversiones les darían a las compañías japonesas la propiedad sobre algunas reservas de litio, en lugar de dejarlas a merced de unos cuantos productores si el suministro escasea en los próximos años.

Políticas de las potencias y los países latinoamericanos

Políticas de las potencias

En el tablero de la geopolítica mundial la disputa global por minerales estratégicos direccionará los movimientos de los grandes consumidores de minerales hacia las principales reservas del planeta. En el caso del litio en la Argentina, el pacto Toyota-Orocobre en el Salar de Olaroz señala cómo la búsqueda de litio de alta calidad para las baterías de los

¹⁰ Consultar el artículo: " Toyota participará de la extracción de litio en Jujuy". Disponible en: <http://www.petrolnews.net/noticia.php?&r=12868>

Recuadro Nº 1. El caso de Afganistán

En el año 2010 el tablero de la industria internacional del litio fue sacudido por un anuncio del gobierno afgano que daba a conocer el descubrimiento de un enorme yacimiento mineral que los geólogos estadounidenses y el Pentágono valoraron en un billón de dólares¹¹.

Las versiones más sólidas señalan que en el año 2004 en plena invasión del ejército norteamericano en Afganistán, geólogos estadounidenses descubrieron un informe realizado por expertos rusos en la década de los '80. Éste evidenciaba que el suelo afgano escondía importantes reservas de oro, cobre, hierro, cobalto y lo que aseguran es la mayor reserva de litio del planeta. Si el hallazgo es tan grande como afirman, podría cambiar radicalmente la realidad política y económica del país, cuya economía se basa actualmente sobre la producción del opio y en el narcotráfico, complementada por la asistencia económica de Estados Unidos y otros países desarrollados.

Sin embargo, fuera de dicho anuncio y del supuesto instalado en los medios internacionales, no hay cifras concretas sobre las reservas de litio con que contaría este país. Además, más allá de la euforia que despierta este anuncio, la explotación de la mina y la creación de una industria es una tarea que podría demorar varios años, ya que Afganistán no está habituado a crear una infraestructura de este tipo. Por si esto fuera poco, los depósitos de litio fueron encontrados en la provincia de Ghazni, que en gran parte está controlada por el régimen talibán, lo que parece garantizar enfrentamientos armados en torno del control de este recurso.

A raíz del comienzo de la retirada del ejército de los EUA, el anuncio de estas importantes reservas minerales y el creciente interés de países como China e India por los recursos afganos, parece estar llevándose a cabo una reconfiguración económica, política y de influencias externas en el país¹². Sin embargo, no están dadas las condiciones para que en el corto plazo Afganistán se convierta en un lugar apropiado para desarrollar una industria

autos híbridos y eléctricos está poniendo en marcha una carrera por la materia prima tal como lo hicieron los combustibles fósiles en el siglo pasado.

Los descubrimientos de nuevos yacimientos y grandes reservas de minerales estratégicos orientarán el desplazamiento de intereses geopolíticos de un país a otro, o de una región a otra. En este sentido, Tahil

¹¹ Caño, Antonio: "El hallazgo de enormes yacimientos minerales abre otra era en Afganistán". Diario *El País* Internacional. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2010/06/15/actualidad/1276552802_850215.html

¹² Martínez de Rituerto, Ricardo: "La Carrera por los tesoros de Afganistán", Diario *El País* Internacional. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/31/actualidad/1320084432_089252.html

afirma que “si el mundo cambia los combustibles por la propulsión basada sobre baterías Li Ion, Sudamérica se convertirá en el nuevo Medio Oriente. Bolivia se transformará en un foco de atención como Arabia Saudita nunca lo fue. EUA volverá a ser dependiente de fuentes externas para el abastecimiento de minerales estratégicos críticos”¹³.

Mónica Bruckmann considera que la disputa global por el litio, debido al crecimiento abrupto y sustentado de su demanda como consecuencia de una innovación tecnológica en la producción de baterías recargables, tenderá a crear nuevas tensiones en la región andina de América del Sur, ya que los intereses en juego son colosales. En este sentido, prevé que debido a la dependencia de EUA para abastecer su demanda respecto de este recurso estratégico, puede esperarse una presión creciente de la potencia del norte sobre la gestión del litio en Bolivia.

La estrategia de las potencias hegemónicas incluye una acción articulada y compleja para derribar las barreras políticas y económicas que permitan un dominio de largo plazo sobre estos recursos. Esta dinámica no se reduce al ámbito comercial y por tanto al consumo de la producción mundial, sino que se desdobra necesariamente en una política de gestión y de dominio de las reservas mundiales. La mayoría de los contratos de exploración y explotación de recursos minerales que se firman entre las empresas mineras (gran parte de las cuales son de capital estadounidense, europeo y chino) y los países latinoamericanos, tienen un marco regulatorio que garantiza a las primeras períodos de operación largos, que van de 20 a 40 años. Adicionalmente, la estrategia que están implementando las empresas automotrices más avanzadas en el desarrollo de vehículos eléctricos es la inversión conjunta con compañías mineras de menor tamaño para asegurarse el abastecimiento de carbonato de litio de alta calidad que utilizarán para las baterías de sus vehículos. Muchas de estas operaciones están eligiendo nuestro país como destino para radicar sus inversiones bajo esta modalidad.

Tal es el caso de la explotación de la compañía automotriz japonesa Toyota con la minera australiana Orocobre en el Salar de Olaroz, de la canadiense Lithium Americas y la automotriz Mitsubishi en el Salar de Cauchari o de la Sino-canadiense Lithium One en conjunto con la productora de litio coreana KORES (**cuadro N° 1**).

¹³ Tahil, William (2007), “The trouble with lithium”, p.4

Cuadro N° 1

Compañía Minera	País de origen	Socio	Yacimiento
Footprint Minerals Company	EUA		Salar de Hombre Muerto
The Sientient Group	Australia		Salar del Rincón
Admiralty Resources	Australia		Salar del Rincón
Orocobre Ltd.	Australia	Toyota Tsusho (Japón)	Salar de Olaroz
Lithium Americas	Canadá	Magna International & Mitsubishi Corp. (Japón)	Salar de Cauchari
Lithium One	Canadá-China	Korea Resources Corp (KORES)	Sal de Vida

Respuesta de los países sudamericanos

Frente al pensamiento estratégico de las potencias, América latina necesita también desarrollar un pensamiento estratégico que sea capaz de articular una política, no para la apropiación de los recursos naturales de otras regiones sino para defender la soberanía de sus propias riquezas naturales. Se trata de crear instrumentos analíticos para la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas de los países y regiones productoras de materias primas, que permita una gestión económica más eficiente de sus propios recursos.

Para Mónica Bruckmann, una de las principales amenazas para los proyectos hegemónicos que buscan dominar los recursos naturales de la región, es la capacidad creciente de América latina para recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales y minerales estratégicos. Esta soberanía asume un sentido más profundo cuando se desdobra en soberanía política, económica e inclusive en relación con sus visiones de futuro y modelos de desarrollo. Esto se evidencia, en el nivel nacional, en la reforma constitucional llevada a cabo en Bolivia y en la ley sancionada en la provincia argentina de Jujuy, que han asignado al litio el carácter de recurso estratégico, con la prerrogativa de que el recurso debe ser industrializado en su territorio, para beneficio de sus comunidades y en respeto al entorno ambiental.

En el nivel regional, también se ha analizado la posibilidad de formar entre los países del triángulo del litio un frente común que actúe en defensa de sus intereses en torno al futuro de este mineral, una suerte de OPEP del litio, en analogía a la organización que agrupa a los países productores de petróleo. Esta alternativa parece estar siendo considerada más seriamente por parte de los gobiernos de la Argentina y Bolivia, mientras que en Chile el debate gira en torno de la conveniencia o no de la liberalización del recurso, aunque comienzan a aparecer voces a favor de esta posibilidad.

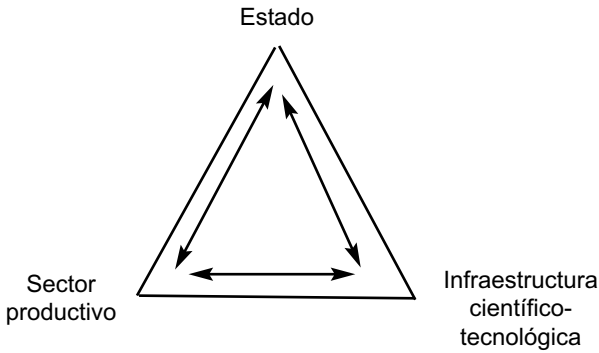
En la Argentina se han alzado voces tanto a favor como en contra de una iniciativa de estas características. Uno de los principales defensores de la misma es Rodolfo Tecchi, director de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia argentino, quien manifestó que *"dado que en un futuro cercano y con una producción plena, Bolivia, la Argentina y Chile van a manejar el mercado del litio, podrían hacerlo en una suerte de OPEP"*. El funcionario enfatizó que *"se podrían establecer mecanismos de control de la oferta de carbonato de litio, evitando distorsiones por sobreproducción, que impliquen bajas en el precio internacional"*. En sentido opuesto se manifestó el presidente de la cámara minera de Salta, Facundo Huidobro, quien considera que *"la idea es demasiado apresurada"* y que *"primero hay que afianzar la inversión"*. Por último, el empresario Sergio Echebarrena, presidente de la Cámara argentina de proveedores de la industria petroenergética, mostró una visión más estratégica respecto de la gestión del recurso, señalando que *"tener el recurso y tratar de aumentar las regalías es una mirada. Creo que no se trata de pertenecer a una OPEP del litio sino de ser parte de los que tienen la tecnología y de cómo utilizar el recurso para generar la industria"*. El empresario estimó que *"la industria argentina está en condiciones de incorporarse a la cadena de valor, para que el litio no salga a granel y sin escalas sino en forma de baterías"*.

Como puede observarse, los países de la región, especialmente la Argentina y Bolivia, están analizando distintas posibilidades para tener un mayor control sobre este recurso. Sin embargo, deben tener cuidado de no desalentar las inversiones en la producción. Además, es necesario que elaboren un plan estratégico para maximizar los beneficios que la explotación del litio deje en sus países.

Desarrollo de una política científico – tecnológica

Es indispensable crear un sistema de Investigación y Desarrollo local, capaz de interactuar eficazmente con el aparato productivo. Para conseguir esto, los sectores capaces de implementar los cambios socioe-

Gráfico N° 3



conómicos y las transformaciones institucionales necesarias, deben alcanzar un consenso interno en favor de una estrategia de desarrollo. Es esencial fortalecer al Estado, y al mismo tiempo brindar condiciones a las empresas nacionales para que puedan competir internacionalmente.

Para lograr este objetivo es necesario elaborar una estrategia nacional de desarrollo que estimule a los empresarios a invertir, priorice las exportaciones y los sectores económicos con un alto valor agregado per cápita, que generen bienes intensivos en tecnología y conocimiento (**gráfico N° 3**).

Sector Estado

Hasta mediados del año 2010, el litio era concebido tanto por los gobiernos provinciales como por las autoridades nacionales, como un mineral más. Existía un verdadero desconocimiento respecto de sus características, los procesos para su extracción y producción. Tan sólo se sabía que estaba despertando gran interés por parte de muchos de los principales países, sobre todo del continente asiático, por lo que su valor se había incrementado considerablemente en los últimos años. También trascendía la noción de que la región sudamericana compuesta por la Argentina, Chile y Bolivia concentraba las mayores reservas de este mineral, pero la visión que predominaba entre las provincias que atesoraban este recurso era competitiva y de desconfianza respecto a las otras provincias y los países vecinos.

Mientras los habitantes de estas regiones transitaban entre la ilusión por la posibilidad de que se generen nuevas fuentes de trabajo y la des-

confianza de repetir viejas historias, donde lo único que quedó en sus comunidades fue pobreza y contaminación, los gobiernos de las provincias del Noroeste Argentino competían por capitalizar las inversiones que no podían o no deseaban radicarse en Bolivia y Chile.

Sin embargo, algunos funcionarios como Rodolfo Tecchi, hoy titular de la cartera de Educación, Ciencia y Tecnología de Jujuy y referente gubernamental en la temática plantearon un enfoque más profundo respecto a la explotación del litio: “si se repitieran las conductas que se siguieron con la explotación otros recursos naturales, no llegará el desarrollo al nivel local. Si lo único que queda de la explotación del litio son las regalías mineras y unos pocos puestos de trabajo, va a ser preferible preservar los salares para alguna otra actividad futura”¹⁴.

Hoy la dirigencia argentina en su conjunto ha tomado conciencia de la importancia estratégica del litio. Desde los distintos ministerios provinciales y nacionales comenzaron a examinarse los desafíos científico-tecnológicos, industriales y ambientales que plantean la explotación y el aprovechamiento integral del litio en la Argentina, con el fin de generar desarrollos productivos locales y nacionales.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao afirmó que “estamos hablando de desarrollar un trabajo en torno del aprovechamiento de manera de llegar a obtener el mayor valor agregado posible. Contamos con los recursos y creemos que la inversión es posible. Por lo tanto, le debemos a la sociedad el trabajo de hacer un diagnóstico apropiado para poder arribar a una decisión que represente un beneficio para todos. Por lo que hemos visto hasta el momento, la perspectiva que se abre es histórica”¹⁵.

Debido a que nuestro país se rige por un régimen legislativo federal, corresponde a cada provincia la gestión de sus recursos. Por este motivo, cada una de ellas adopta las políticas que considera más apropiadas para la explotación del recurso y establece las vinculaciones con el exterior.

La provincia que ha dado los pasos más decididos por impulsar cambios que favorezcan al desarrollo de la industria del litio es Jujuy.

¹⁴ Artículo “Preparan la primera batería de litio para notebooks y autos con “ADN” 100% argentino”. Publicado en el portal iprofesional.com. Disponible en: <http://negocios.iprofesional.com/notas/131576-Del-salar-a-la-bateria-nacional-todo-listo-para-la-llegada-del-litio-argentino-a-las-notebooks-y-los-autos-electricos>

¹⁵ Artículo “Litio: la perspectiva que se abre es histórica dijo el ministro Lino Barañao” publicado el 29/4/2011 en el diario *El libertario* de Jujuy. Disponible en: <http://www.elliibertario.com/2011/04/29/litio-la-perspectiva-que-se-abre-es-historica-dijo-el-ministro-lino-baranao>

Mediante la sanción de un decreto, posteriormente ratificado por el poder legislativo, la provincia otorgó al litio el estatus de “recurso estratégico”, lo que conlleva varios puntos. En primer lugar implica que el litio debe ser susceptible de valor agregado, por lo que no va a poder ser extraído como *commodity* o materia prima¹⁶.

En segundo lugar y para asegurar que se cumpla la primera condición, los proyectos de exploración y explotación minera de litio serán aprobados o rechazados por resolución conjunta del Ministerio de la Producción y la Secretaría General de la Gobernación, previa intervención de la Dirección de Minería y recomendación favorable del Comité de Expertos que se creará para este propósito. Este comité de expertos será coordinado por el Ministerio de la Producción y estará integrado por expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), nominados por la Legislatura; de la Secretaría de Gestión Ambiental y la Dirección Provincial de Minería.

En tercer lugar, se creó la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), mediante la cual se buscará apuntalar la industrialización de las riquezas naturales de la provincia. Se le adjudican amplísimas atribuciones en aspectos que van desde la investigación de yacimientos hasta la comercialización, generación de energías limpias, industrialización y transporte de la riqueza del subsuelo. Sin embargo, aún existen dudas respecto a los recursos económicos para su funcionamiento y para llevar a cabo las importantes inversiones en infraestructura y servicios que se le encomiendan.

A partir de los avances en los ámbitos de investigación y desarrollo de tecnologías asociadas con las baterías de litio y la voluntad de las provincias que poseen el recurso por obtener de su explotación el mayor valor agregado posible, se anunció la futura conformación de un grupo de trabajo interministerial para la promoción del aprovechamiento integral del litio. Estará presidido por la Dra. Ruth Ladenheim, viceministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y tendrá entre sus funciones el identificar, diseñar y promover planes, acciones e instrumentos adecuados para promover la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de la capacidad industrial para el aprovechamiento integral y sustentable del litio.

Parece haber una fuerte decisión por parte del gobierno nacional por lograr un proyecto integral que vincule al sector científico con el pro-

¹⁶ Artículo “En Jujuy, el litio es un recurso estratégico” publicado el 3/3/2011 en el sitio del diario *El Libertario*. Disponible en: <http://www.ellibertario.com/2011/03/03/en-jujuy-el-litio-es-un-recurso-estrategico/>

ductivo y que en el desarrollo productivo las regiones que poseen el recurso jueguen un papel relevante. En palabras de Alberto Lamagna, gerente de la Unidad de Investigación y Aplicaciones no nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) “lo más difícil de este proyecto es que se pongan de acuerdo los socios y conseguir recursos humanos para la segunda etapa. Para hacer el prototipo de batería para la industria, no veo problema. Pero para la etapa de mediano y largo plazo hay que generar recursos humanos de alta calidad científica que después se vuelquen a la tecnología en la región”¹⁷.

Sector científico-tecnológico

Los principales centros de I+D relacionados con las tecnologías de baterías de litio se encuentran en La Plata y Córdoba. Fue a partir de la iniciativa propuesta por estos científicos que se decidió en el nivel gubernamental emprender el proceso de industrialización del litio.

- Universidad Nacional de La Plata: desarrollo de prototipos de baterías de litio e integración en vehículo eléctrico con cero emisiones de CO₂

En el año 2009, un grupo de Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) comenzaron a desarrollar baterías de litio para ser utilizadas en vehículos eléctricos. Dos de los científicos a cargo del proyecto son Guillermo Garaventa y Arnaldo Visintín.

Esta ambiciosa iniciativa es uno de los seis proyectos de investigación “en áreas estratégicas” que resultó seleccionado por la UNLP.

El objetivo de los científicos es desarrollar dichas baterías para hacer funcionar el primer vehículo eléctrico que construirán en nuestro país. La idea es poner en marcha el vehículo por las calles de la ciudad a fines del año 2012. “Estimamos que para fines de 2012 los platenses podrán ver el primer prototipo de coche eléctrico desarrollado en el país con baterías de litio. La contaminación producida será cero al igual que los ruidos”¹⁸.

¹⁷ Artículo “Para un experto de la CNEA, en Jujuy deberían fabricarse baterías de litio” publicado el 1/5/2011 en el sitio *Jujuy al día*. Disponible en: <http://www.jujuyaldia.com.ar/01/05/2011/para-un-experto-de-la-cnea-en-jujuy-deberian-fabricarse-baterias-de-litio>

¹⁸ Artículo “Científicos platenses desarrollarán el primer auto eléctrico construido en el país” publicado el 11/10/2011 en el portal *Toma mate y avivate*. Disponible en: <http://www.tomamateyavivate.com.ar/tecnologia-argentina/cientificos-platenses-desarrollaran-el-primer-auto-electrico-construido-en-el-pais/>

Según indicó Visintín “en la Universidad se va a construir la batería y quizás el motor del vehículo que va a incorporar la batería de litio y la idea es que podamos contar en algún momento con un automóvil eléctrico donde aplicar estas baterías”.

Con el financiamiento de la Universidad Nacional de La Plata, se comprometieron a desarrollar tres cosas. En primer lugar, los primeros prototipos de baterías de litio de la Argentina, que serán muy pequeños. A su vez, se armarán baterías con celdas compradas, para hacer funcionar el coche eléctrico. En tercer lugar, desarrollarán el *software* necesario para el control de las baterías, dado que las diferentes aplicaciones como dispositivos electrónicos de baja potencia, vehículos eléctricos y vehículos híbridos, están sujetas a procesos de carga y descarga de diferentes tipos.

El objetivo de los expertos de la UNLP es proveer a la Argentina de este desarrollo para que luego las fábricas de autos puedan contar con la opción de implementar el uso de estas baterías

- Córdoba: desarrollo de tecnología para las baterías de litio

La provincia mediterránea es el otro gran centro de investigación y desarrollo de baterías de litio en el país. El grupo de trabajo está integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, liderados por Daniel Barraco, que trabaja en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el proyecto de desarrollo de baterías de litio, la Universidad de Córdoba trabaja específicamente en la parte electrónica donde posee amplia experiencia y personal altamente capacitado.

Sector Productivo

Independientemente de los prototipos desarrollados en los polos científicos nacionales, distintas empresas han fabricado en el país diversos productos que emplean baterías de litio y están trabajando en ambiciosos proyectos. Uno de los más interesantes es el Rod-On, desarrollado por la compañía argentina de automotores Bravo Motor Company, un pequeño vehículo eléctrico pensado para utilizarse en un sistema de alquiler temporario para facilitar los desplazamientos dentro de grandes ciudades. Se trata de un vehículo para dos personas, similar al modelo Smart de Mercedes Benz, que tendrá una autonomía de 60 kilómetros y una velocidad máxima de 60 km/h. La idea es que sólo pueda ser utilizado dentro de un radio urbano, fuera de las autopistas, y que los usuarios puedan alquilarlo de manera temporaria en un punto de la ciudad y devolverlo cerca de su lugar de destino. Cada usuario

pagará de acuerdo con el tiempo que utilice el vehículo y en cada estación de entrega y devolución habrá puestos para la recarga de baterías.

- Proyecto nacional de desarrollo de baterías de litio

Se han producido una importante cantidad de avances en torno de la producción e industrialización del litio tanto en el sector Estado, como en los sectores Productivo y Científico-Tecnológico. Sin embargo, estos esfuerzos aislados deben ser coordinados y orientarse en el sentido de una política nacional de desarrollo de productos de alta tecnología de litio, que se enriquezca con estos avances y a la vez los incentive y los encauce hacia el objetivo final común.

A partir de la iniciativa de los científicos que trabajan en el país con la tecnología para baterías de litio, quienes determinaron que se contaba en el nivel nacional con todos los elementos del triángulo del litio, se procedió a la diagramación de un proyecto nacional integrador, que evidencia que una verdadera interrelación entre los distintos sectores está empezando a concretarse.

Sostenibilidad de la industria del litio

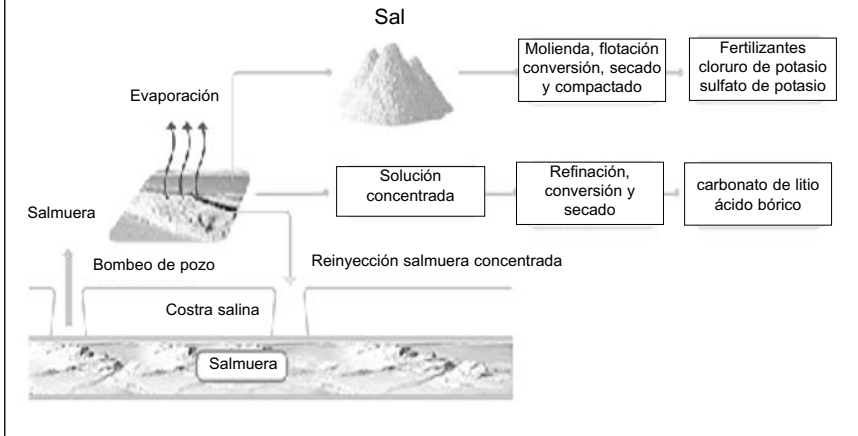
Hay dos áreas prioritarias, en primer lugar, el impacto ambiental de la actividad de extracción y producción de derivados de litio, abordando los impactos y beneficios ambientales, económicos, sociales y de salud de la minería a través de todo el ciclo de vida de los minerales, incluyendo la seguridad y salud de los trabajadores. En segundo lugar la integración de las comunidades de las regiones mineras, que implica fomentar la participación de todos los involucrados incluyendo las comunidades locales.

Impacto ambiental

La extracción del Litio de los salares se hace por bombeo de la salmuera y su posterior evaporación a cielo abierto.

- Se trata de un proceso que lleva varias etapas (**gráfico N° 4**):
- Se extrae la salmuera con una bomba
- Se la conduce por tuberías hasta grandes piletas
- Allí sigue sus diferentes puntos de evaporación por efecto del sol
- En cada estadio se precipitan materiales hasta llegar al punto en el que se logra la mayor concentración de litio
- Entonces se separa este metal del agua que quedó sin evaporar

Gráfico N°4



- Se pasa a su elaboración en planta, donde se lo termina en forma de polvo

En el proceso de extracción y recuperación de las sales, una amplia área es perturbada, se producen modificaciones por la construcción de instalaciones como plantas procesadoras, estanques y carreteras.

Sin embargo, la extracción de litio es percibida como una actividad considerablemente más amigable con el entorno que las técnicas mineras convencionales que borran la cima de las montañas, precisan grandes fletes de vehículos para extraer y transportar el mineral y consumen grandes cantidades de agua.

Ciertamente, hay algunas implicaciones que no deben pasarse por alto. En primer lugar, grandes cantidades de agua son tomadas del sistema. En segundo lugar, el balance hidrológico del sistema es extensamente alterado. Finalmente, puede haber un flujo de residuos que deben ser gestionados.

Las consecuencias de una insuficiente gestión ambiental en el proceso de explotación pueden derivar en un daño potencialmente irreversible para el medio ambiente, en la pérdida de hábitat en áreas sensibles y en la pérdida de turismo. Además de los problemas directos, generados por la actividad, se presenta un tema no menor que es la competencia por un recurso escaso como es el agua ya que de ella dependen otros usuarios en la región como son las comunidades aborígenes y los mineros aguas arriba.

Debe tenerse en cuenta que puede transcurrir un largo período hasta que se perciba el potencial impacto a largo plazo como resultado de

residuos de la minería en el agua subterránea y aún más largos períodos hasta que el sistema se recupere.

De esta manera, conociendo los impactos directos e indirectos que la actividad puede tener en los salares, se deben crear las condiciones para construir mecanismos de gestión social de los recursos naturales, lo que seguramente permitirá también disminuir enormemente la tensión creada por las prácticas de violencia y expulsión de las poblaciones locales, generalmente indígenas, de los territorios productores de recursos naturales. Un ejemplo en este sentido es el procedimiento de control y gestión ambiental previsto por la provincia de Jujuy para la explotación del litio en su territorio.

Implicancias ambientales de la declaración del litio como recurso estratégico de Jujuy

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 7.592/11 (y su posterior conversión en ley), se declara a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico de la provincia.

De acuerdo con el nuevo decreto, además de la aprobación del estudio de impacto ambiental, proyectos de exploración y niveles de explotación, ahora requieren de una evaluación por un Comité de Expertos, y tras una recomendación positiva por parte de esa comisión, la aprobación de la resolución conjunta del Ministerio de Producción y la Secretaría General de la Gobernación. El Comité de Expertos estará integrado por siete personas: el ministro de Producción, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Universidad Nacional de Jujuy, uno de la Secretaría de Gestión Ambiental, dos representantes de la Legislatura de Jujuy y uno de la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos.

Con esta medida, la provincia busca preservar un recurso natural no renovable que debe constituirse en una fuente generadora de valor agregado local y de participación e inclusión laboral de los jujeños, que implique un crecimiento sustentable en el desarrollo socioeconómico.

El gobierno nacional debe alentar que se implementen acciones equivalentes en las otras provincias poseedoras del recurso, para alentar una explotación íntegra y sustentable del recurso.

Comunidades de las regiones mineras y su participación

Muchas regiones donde se realiza la explotación del litio son tierras donde comunidades aborígenes desarrollan su vida y sus actividades de subsistencia. Esta situación es reconocida tanto por el Art. 169 de la

OIT suscripto por nuestro país, así como por el artículo 75 inc. 17 incorporado en la última reforma constitucional, que obliga a integrar a los pueblos indígenas a cualquier iniciativa que se pretenda desarrollar en los territorios que habitan, así como asegurar su acceso a los recursos naturales de los que actualmente disponen. Sin embargo estos derechos son ignorados por las empresas que no están dispuestas a perder ganancias. El Estado tiene el mandato de defender a estos pueblos.

El convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional vinculante, al que nuestro país ha suscripto y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Los principales objetivos del mismo son la identificación de los pueblos que habitan en el territorio nacional, bregar por la no discriminación de estas comunidades, el reconocimiento de su cultura y, la piedra angular del convenio, el principio de consulta y participación de las comunidades en los procesos productivos que se implementen en las áreas donde habitan.

Este compromiso va de la mano del reconocimiento de la preexistencia de las poblaciones indígenas que se ha incorporado en la reforma constitucional de 1994 (Art. 75 inc. 17) y de respetar su derecho a la identidad social y cultural, adoptando acciones concretas para proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad.

Se debe considerar a todo gobierno que las desatienda como discriminador de los pueblos indígenas, por falta de actividad, por ausencia de acciones positivas, por omisión en el reconocimiento de sus derechos y de lo que es de su legítima propiedad, según las normas constitucionales mencionadas.

Sin embargo, y a pesar de las disposiciones legales que los amparan, las comunidades aborígenes no son consultadas por las empresas a la hora de realizar emprendimientos mineros en las zonas donde habitan o que afectan los recursos que estos precisan para realizar sus actividades productivas o de subsistencia.

Por este motivo se oponen fervientemente a toda actividad minera a gran escala, incluida la del litio.

Entre sus exigencias demandan la entrega de títulos de territorios comunitarios, acceso de agua en cantidad y calidad para las comunidades, no seguir con la autorización de cateos mineros, identificar y proteger las cuencas hídricas subterráneas y superficiales, para que estén disponibles para las comunidades.

Marco legal que regula la minería del litio en los países del triángulo del litio

El marco legal de una actividad productiva reconoce los principales actores, sus prácticas, regula los derechos y obligaciones, y establece los límites de cada uno de ellos. En otras palabras, plantea cuáles serán las reglas de juego de esa actividad económica.

De esta manera, al analizar la legislación minera implementada en los tres países integrantes del triángulo, podemos determinar si el marco legal vigente en nuestro país es el adecuado para alcanzar el objetivo nacional de lograr un aprovechamiento integral del litio, a través de su industrialización.

Marco legal chileno para la explotación del litio

Chile actualmente mantiene al recurso como un mineral estratégico no concesionable. Esta decisión política data de fines de la década de los '70, cuando decidió proteger el mineral por la posibilidad de aplicarlo en ojivas nucleares y por su potencial uso en centrales nucleares. Por esta razón cualquier acto jurídico relacionado con el litio tiene que ser autorizado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Sobre la base de que esta normativa no afectó las concesiones de litio anteriores a 1979, hoy se realizan explotaciones en el Salar de Atacama. Sin embargo, esas concesiones se limitan a las áreas que ya están arrendadas, en las que se puede trabajar libremente. Por este motivo, se ha limitado la cantidad de mineral que puede extraer cada una de las compañías a través de contratos de arrendamiento. Estos contratos son criticados debido a la falta de transparencia en la información. Asimismo, se cuestiona la monopolización del mercado por parte de estas compañías, que pueden manipular la oferta de litio y los precios.

La Dra. Ángela Hernández, abogada especializada en la legislación minera de los países sudamericanos, sostiene que "Chile se encuentra ante el problema de tener un mineral que no es concesionable, en un momento mundial muy especial con respecto a la oferta de litio y se plantea qué hacer frente a esta situación". La abogada considera que la posibilidad de modificar la legislación es muy difícil. Por este motivo, una solución serían los contratos de arriendo y otra la licitación de contratos de arriendo pero con indemnizaciones a terceros. Otra de las figuras que tiene Chile son los contratos especiales de operación petrolera, pero también existiría la negociación de terceros.

Marco legal boliviano para la explotación del litio

La Constitución boliviana reconoce la integralidad del territorio indígena y el derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales de estos territorios, así como el derecho a consulta y participación de los pueblos indígenas en la gestión de la explotación de los recursos naturales. De esta manera busca crear las condiciones para construir mecanismos de gestión social de los recursos naturales.

Otro aspecto importante en esta nueva constitución es la visión estratégica en relación con los recursos naturales, entre los que se incluye el litio. La declaración constitucional de soberanía sobre los recursos naturales se coloca como elemento central para regular la administración y la gestión del Estado sobre la extracción e industrialización de los mismos. Se incluyen artículos específicos sobre la participación mínima del Estado en la propiedad de las empresas o proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, sobre la necesidad de regular el pago de *royalties* por la extracción de minerales, así como la protección de los registros y patentes del patrimonio genético.

Según estos lineamientos, en 2008 se declaró al Salar de Uyuni como una reserva estratégica bajo el control del Estado, y se creó en el seno de la COMIBOL la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, un ente ejecutor de la exploración, explotación, industrialización y comercialización de recursos evaporíticos, entre los que se cuenta el litio.

Marco legal que regula la actividad del litio en la Argentina

En el caso de la Argentina el litio tiene el mismo tratamiento que cualquier otro mineral, con lo cual se le aplica el régimen general minero. La particularidad de nuestro país es que al tratarse de un régimen federal, el titular de los recursos naturales son las provincias, quienes negocian directamente con las empresas. Las tres provincias donde se ha encontrado litio en gran cantidad son Catamarca, Salta y Jujuy, y todas ellas tienen la idea de desarrollar el recurso a largo plazo.

Sin embargo, Jujuy es la única provincia que tiene una normativa especial con respecto al litio, la cual dispuso que todos los proyectos deben someterse a la aprobación por parte del CONICET, y posteriormente, ser avalados por un grupo interdisciplinario de expertos. En 2011 se declaró al litio como un mineral estratégico en esta provincia, por lo que debe ser protegido. En este sentido, todos los proyectos anteriores a la fecha de este dictamen continúan existiendo pero deben adaptarse a las nuevas normativas.

Asimismo se creó una empresa estatal a través de un decreto de necesidad y urgencia, denominada JEMSE, la cual se encargará de diversas tareas que van desde la investigación de yacimientos hasta la comercialización, generación de energías limpias, industrialización y transporte de la riqueza del subsuelo.

Independientemente del caso jujeño, la legislación minera aplicada en nuestro país responde a un modelo de inserción en la economía internacional como proveedor primario de minerales para las economías desarrolladas.

Contexto político-económico internacional en que fue sancionado

Las directrices económicas y preceptos impartidos desde los centros de poder mundial, que bregaban por la liberalización del comercio y las inversiones tuvieron su correlato en la legislación minera, que fue un elemento central en el proceso neoliberal de apertura de mercados, legalizando la inserción de las economías periféricas como proveedoras de recursos naturales para las economías centrales.

En el continente latinoamericano las tendencias iban en esa dirección. Los objetivos declarados eran aumentar la eficiencia en el manejo de los recursos, agilizar los trámites y movimientos, y descentralizar el control por parte del Estado en favor del mercado¹⁹. Quienes no se subieron al tren de estas transformaciones se quedarían aislados del mundo.

En línea con esa corriente, la Argentina modificó su ley para atraer inversiones.

Principales puntos de la legislación actual: ganadores y perdedores

Puede evidenciarse accediendo al contenido de estas leyes que los principios perseguidos no eran más que una declaración de buena voluntad, y en realidad lo que se establecía era una desregulación absoluta y una serie de beneficios y exenciones para facilitar a las empresas transnacionales la extracción indiscriminada de los recursos minerales de nuestros territorios.

La *Ley de Inversiones Mineras* establece regalías insignificantes para las provincias, constituyendo un obstáculo para el crecimiento de los

¹⁹ Chaparro, Eduardo (2009) "Legislación y política regulatoria en América latina: perspectiva regional sobre enfoques políticos en materia de otorgamiento de licencias para minas de litio". Disponible en: <http://media.eclac.cl/presentaciones/conferencias2010/litio/10.11/PRESENTACIONES/2.CHAPARRO.ppt>

fondos que recibe el fisco por la extracción de sus recursos naturales no renovables, que deberían ser aprovechados para generar oportunidades de desarrollo²⁰.

El sector minero ha contado con una ingeniería legal que le ha permitido un incremento exponencial de sus activos y ganancias, sin que esto se traduzca en mayores recursos para el Estado y, en definitiva, para la comunidad local.

Queda claro que la estructura legal vigente responde a un modelo económico que nunca tuvo por fin el desarrollo económico y social de las comunidades, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad en el tiempo de la actividad minera. Menos aún en generar encadenamientos productivos para el agregado de valor tecnológico al producto final exportado.

La regulación fue hecha a medida de los intereses de las empresas transnacionales, para las cuales todos estos factores significaban costos adicionales y una mayor autonomía local.

Una legislación diferente para un modelo económico diferente

Según Monica Bruckmann, la gestión social, económica y científica de los recursos naturales asume un rol fundamental en el proceso civilizatorio de la humanidad y en la restructuración del capitalismo mundial, que desarrolla diferentes estrategias desde el centro, desde las potencias emergentes y desde los países productores de materias primas²¹.

La estrategia concebida desde la lógica neoliberal consistió en la subordinación de los intereses nacionales a favor de los de los países centrales. De acuerdo con este criterio, el Estado cedió terreno ante las decisiones de los “mercados” en la búsqueda de mayor eficiencia en la extracción, pero al costo del estancamiento económico local y la degradación ambiental y social.

Por este motivo, debe implementarse, desde un enfoque neodesarrollista sustentable, un nuevo marco legal a partir de la visión estratégica de los recursos naturales, que regule la administración del Estado sobre la extracción e industrialización de los mismos, asegurando al mismo tiempo las condiciones para la gestión social de los recursos naturales.

²⁰ Artículo “El radicalismo impulsa un nuevo marco legal para la minería”, publicado el 11/04/2011 en el sitio del diario *Jujuy al día*. Disponible en: <http://www.jujuyaldia.com.ar/06/04/2011/el-radicalismo-impulsa-un-nuevo-marco-legal-para-la-mineria>

²¹ Bruckmann, Monica “Recursos naturales y la geopolítica de la integración Sudamericana”, p. 7.

Rol del Estado

Las provincias que poseen reservas de litio deben asignarle el valor de Recurso Estratégico, lo que implica que su explotación no se limite a la producción primaria y exportación como *commodity*, sino que deben realizarse todos los esfuerzos para que su extracción se convierta en la etapa primaria para el posterior desarrollo de una industria de tecnología de punta, en este caso el de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía.

Debe acompañar esta declaración la creación de una entidad estatal que procure articular los intereses nacionales económicos, sociales y ambientales, con los privados y se encargue de supervisar el normal desarrollo de estas actividades. Debe estar compuesto por una comisión interdisciplinaria para asegurar que todos los involucrados tengan voz en las decisiones, como también para prevenir las connivencias.

Desarrollo socioeconómico

Contrariamente a lo propuesto por el enfoque neoliberal, debe considerarse a la generación de empleo, la distribución de la riqueza y una política de salario mínimo como fundamentales para una estrategia de desarrollo y no como factores que limitan la competitividad. La misma debe buscarse mediante el fortalecimiento del mercado interno como plataforma, el agregado de valor al producto final exportable, así como por el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Un aumento de las regalías que las empresas deben abonar para la exportación de los derivados del litio y su correcta canalización responde a todos estos objetivos, ya que además de la mencionada recaudación de recursos, alienta el desarrollo de procesos para la industrialización del litio en nuestro país, a la vez que contrarresta el efecto de la llamada "enfermedad holandesa" que se produce por la acumulación de divisas mediante actividades primarias que empujan el tipo de cambio a valores que vuelven poco competitivo el sector industrial.

Impacto ambiental

El ecosistema del que se extrae el litio es muy frágil y de él dependen otras actividades económicas y sociales, por lo que debe asegurarse el cumplimiento de estrictos estándares de control y mitigación para asegurar que tanto la actividad asociada con el litio como las demás puedan extenderse en el tiempo. Se deben crear las condiciones para construir mecanismos de gestión social de los recursos naturales, lo que seguramente permitirá también disminuir enormemente la tensión creada por las prácticas de violencia y expulsión de las poblaciones locales,

generalmente indígenas, de los territorios productores de recursos naturales²².

Integración de las comunidades aborígenes

Muchas regiones donde se realiza la explotación del Litio son tierras en las cuales comunidades aborígenes desarrollan su vida y sus actividades de subsistencia. Esta situación es reconocida tanto por el art. 169 de la OIT, suscripto por nuestro país, así como por el art. 75 inc. 17 incorporado en la última reforma constitucional, que obliga a integrar a los pueblos indígenas a cualquier iniciativa que se pretenda desarrollar en los territorios que habitan, así como asegurar su acceso a los recursos naturales de los que actualmente disponen. Sin embargo estos derechos son ignorados por las empresas que no están dispuestas a perder ganancias. El Estado tiene el mandato de defender a estos pueblos.

Relación del Estado nacional con los provinciales

Dado que desde la reforma constitucional de 1994 corresponde a cada provincia la gestión de los recursos que se encuentran en su territorio, cada una de ellas adhiere a las leyes nacionales de minería, medio ambiente e inversiones, y sobre esta base tienen la autonomía de aplicar las políticas que consideran necesarias. Sin embargo, el Estado nacional debe coordinar los intereses y las políticas de las distintas provincias integrándolas en el proyecto de desarrollo nacional.

²² Bruckmann, Mónica "Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana", p. 5.

Galera de corrección

RICARDO ARONSKIND, ROBERTO DOMECCQ, KARINA FORCINITO Y MARTÍN SCHORR

Daniel Azpiazu, siempre así

Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, 2012

El libro que acaban de presentar la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es un homenaje necesario a un hombre imprescindible.

La publicación presenta un prólogo escrito por Eduardo Rinesi, quien reconoce la labor de Daniel Azpiazu en la formación de investigadores y de centros de producción de ideas potencialmente transformadoras de la realidad.

Las páginas siguientes devuelven la imagen de Daniel a través del prisma de cuatro colegas: los dos primeros amigos, discípulos y comprometidos continuadores del legado; los dos últimos, pares con los cuales compartió experiencias y desafíos.

Martín Schorr nos habla primero de la persona y luego de la obra. Al leer se está en presencia de un pensador a contracorriente, un gran formador de investigadores, un propulsor del trabajo en equipo, un promotor de la constitución y sostenimiento de centros de investigación.

Una larga lista de cualidades llena las primeras páginas del texto: humildad, solidaridad, camaradería, sentido del humor, capacidad de escucha y comprensión. La obra es analizada y presentada según las áreas temáticas que abordó el maestro comenzando por la trayectoria de la industria, la importancia de la promoción industrial y sus efectos en el sector, la concentración y las características del poder económico en la industria y en el conjunto de la economía.

Karina Forcinito pone de relieve que Azpiazu trabaja sobre una perspectiva teórica propia que articula diversas tradiciones y enfoques -tales como el marxismo, el estructuralismo latinoamericano, la escuela de la dependencia y los aportes neoricardianos de Joan Robinson y Michel Kalecki, entre otros- puestos en conjunción con un sistemático y riguroso trabajo con las estadísticas que configuran la realidad en los niveles micro, meso y macroeconómico. La segunda parte del capítulo esboza los principales aportes del autor al esclarecimiento de la masiva política de privatizaciones operada en el país en la década de los noventa.

Ricardo Aronskind hace una semblanza del hombre, del académico y del especialista que fue Daniel en relación con su tiempo para explicar, básicamente, el distanciamiento que existe entre los pensadores críticos y el Estado. En el escrito discurren la historia del país y de la universidad, haciendo eje en el efecto de las dictaduras primero y del neoliberalismo después; para concluir que “el perfil productivo que brotaba de las fuerzas económicas y políticas de una sociedad en involución no requería del tipo de acción, de producción, de inversión, que Azpiazu proponía. El país industrial, integrado y equitativo de Azpiazu no encajaba con las diversas fracciones sociales que fueron configurando las políticas económicas en la Argentina contemporánea”.

Roberto Domecq rescata al estudioso que elige trabajar el problema del crecimiento industrial -en última instancia el de la naturaleza del desarrollo nacional- como un problema social, económico y cultural. Domecq rescata los aportes de dos obras del último tiempo de Azpiazu donde se pueden ver las modificaciones en la estructura industrial, en la inserción internacional del sector manufacturero, en la relación capital-trabajo, en la concentración y en la extranjerización y las consecuencias que este patrón de crecimiento tiene en la estructura social argentina. Domecq enfatiza la “profunda preocupación por la justicia” y la “seria inquietud por la ética social del desarrollo” que movían a Azpiazu.

El libro es una buena manera de tener presente la obra, una invitación a acercarse para quienes no la conocen, un inventario de investigaciones sobre la industria para los aprendices de investigadores en la temática, un reencuentro con un viejo amigo para muchos.



Todos los escritos que componen el libro dan una idea de Daniel y su trabajo; aunque ambos exceden las páginas y se propagan en cada uno de los que lo conocimos y escuchamos sus carcajadas a modo de conjura de las derrotas.

Marisa Duarte*

Diciembre de 2012

* Prosecretaria del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico IADE. Docente en la carrera de Sociología de la UBA. Licenciada en Sociología, UBA. Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Consultora IICA/PROsap.

CARLO VERCELLONE

Capitalismo cognitivo.

Renta, saber y valor en la época posfordista

Buenos Aires, Prometeo, 2011

Prólogo*

Este libro de Carlo Vercellone es una recopilación y sistematización de diversos artículos publicados por el autor en la primera década del siglo XXI, en el marco de sus aportes a la discusión sobre el surgimiento del Capitalismo Cognitivo, debate que surge en la academia francesa y que tiene como principales exponentes a Yann Moulier Boutang, Mauricio Lazzarato, Antonella Corsani, Jean-Marie Monnier, Patrick Dieuaide y Bernard Paulré. Estos autores comenzaron a trabajar desde 2001 con un programa de investigación sobre la hipótesis de un capitalismo cognitivo como salida de la crisis del capitalismo industrial y publicaron sus trabajos en reconocidas revistas como *Multitudes*, *Posse*, *Historical Materialism*, *European Journal of Economic And Social System*.

La idea del nacimiento de un capitalismo cognitivo se puede adjudicar al economista Enzo Rullani, uno de los primeros en expresar “la necesidad de unir la producción de valor económico a la producción de conocimiento” en su texto clásico del año 2000 “*El capitalismo cognitivo ¿un déjà vu?*”. Se trata de uno de los trabajos pioneros donde se subraya que el trabajo genera conocimiento y a su vez, el conocimiento, genera valor. En idioma español buena parte de los textos iniciales de la teorización de estos autores aparecieron compilados en 2004 en el libro *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva* de la editorial madrileña Traficantes de sueños. Allí colaboró también Vercellone, quien además compiló otros dos libros al respecto, *Sommes nous sortis du capitalisme industriel?* publicado por La Dispute en París en 2003 y *Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finaza nell'epoca posfordista*, publicado por Manifestolibri en Roma en 2006, algunos de cuyos artículos presentamos por primera vez en español en esta obra. En América Latina, *Cambio histórico mundial, conocimiento y desarrollo* de Alejandro Dabat y Miguel Ángel Rivera Ríos, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, es otra obra que compila en 2007 trabajos de los autores franceses y de colegas mexicanos. En la Argentina este es uno de los primeros libros que busca sistematizar los aportes de un autor profundo pero menos conocido en el ámbito local que muchos de sus interlocutores, como Toni Negri, Paolo Virno o Maurizio Lazzarato.

* Este prólogo se ofrece como material de discusión, previo a la visita de Carlo Vercellone en 2013.

Carlo Vercellone conoce estos temas en primera persona dada su experiencia política y académica en la Italia de los años setenta, donde colaboró con los principales exponentes del marxismo autonomista y luego en los años ochenta a partir de su trabajo en la academia francesa, de la que forma parte hace más de veinte años. Su tesis de doctorado *Acumulación primitiva de capital, industrialización y relación salarial: una aplicación al caso italiano (1961-1980)*, es el punto de partida para una teorización profunda y sistemática sobre los temas que ha venido trabajando a lo largo de toda su vida política e intelectual, que lleva adelante desde su despacho en el laboratorio Matisse del Centro de Economía de la Sorbona (CES) de la Universidad Paris I.

En la línea trazada por Negri y Virno, desde finales de los setenta y en sus trabajos en *Futuro Anterior*, Vercellone trabaja con “la hipótesis del *General Intellect*”. Las temáticas del trabajo inmaterial y del *generall intellect* también lo acercan a la obra de André Gorz pero Vercellone le incorpora desarrollos propios muy relevantes porque los vincula con la división del trabajo y la creación de una “intelectualidad difusa”. Vercellone realiza un rastreo de la obra de los clásicos de la Economía Política y de Marx y plantea la superación en el siglo XXI del concepto de división del trabajo que desde Adam Smith en adelante ha caracterizado al capitalismo, sobre todo al industrial. Vercellone sostiene la emergencia de una división *cognitiva* del trabajo que difiere sustantivamente de la propia del capitalismo industrial, en cuya base se encuentra justamente el pasaje del capitalismo industrial hacia un nuevo tipo de capitalismo, el capitalismo cognitivo, caracterizado por la valorización del conocimiento más que de la fuerza de trabajo tradicional. Con ello no quiere decir que se pueda observar en la presente realidad del capitalismo el denominado “fin del trabajo” o una especie de predominio cuantitativo de las actividades intelectuales por sobre el trabajo material y penoso que ha caracterizado al capitalismo desde sus orígenes. Se trata más bien de una hegemonía al interior de los procesos de trabajo y de las cadenas de valor de los trabajos con elevado contenido intelectual, que condicionan la aplicación del trabajo tradicional y por tanto, dan origen a formas novedosas de valorización del capital.

Lo novedoso del capitalismo cognitivo consiste sobre todo en su capacidad de movilizar en forma cooperativa el potencial del trabajo intelectual de toda la sociedad como nunca antes en la historia del capitalismo. El *General Intellect*, el saber social general usado como fuerza productiva, da lugar a nuevos desarrollos y nuevas tipos de desigualdades en un capitalismo donde se superponen trabajos calificados, trabajos precarizados y desempleo en una configuración difícil de desentrañar donde, por un lado, se reconoce la potencia creativa de la multitud y por otro lado, se cercena dicho potencial con la captura y puesta al servicio del capital de dicha creatividad.

El capitalismo cognitivo y la superación del predominio de la lógica del capitalismo industrial.

Vercellone reconoce el carácter no neutral y conflictivo de la ciencia y la tecnología y de las posibles contradicciones de una economía basada en el conocimiento. Por eso sostiene la idea de un “capitalismo cognitivo”: “capitalismo”

por la permanencia de la variable fundamental del sistema capitalista, a saber, la extracción del plusvalor y “cognitivo” a raíz de la nueva naturaleza del trabajo y de la estructura de la propiedad sobre la cual se funda el proceso de valorización. Por ello insiste en estudiar el trabajo junto a los cambios en la regulación de la propiedad intelectual. (Lebert y Vercellone, 2006a: 22). Asimismo, el rol del conocimiento en esta nueva etapa del capitalismo, sostiene el economista italiano, debe analizarse en un sentido diferente al de la economía neoclásica sobre el Capital Humano o de los teóricos de la sociedad de la información como David y Foray. Aunque los primeros diferencian el conocimiento de la información, no hacen suficiente hincapié en el hecho de que el conocimiento se funda sobre la capacidad cognitiva de interpretar y movilizar la información. Los segundos no caen en este error pero desconocen que dicha interpretación debe realizarse en el marco de la relación capital-trabajo. Vercellone se diferencia también de las teorizaciones que refieren a un “pasaje del fordismo al posfordismo”, especialmente de la Escuela Francesa de la Regulación. La gran transformación trata más bien de una crisis del capitalismo industrial más que de un tipo de régimen de acumulación como el señalado Fordismo. El conocimiento influye en las formas de la competencia y en la división internacional del trabajo de modo tal que se puede hablar del capitalismo cognitivo como un nuevo “sistema histórico de acumulación”, que viene a suceder temporal y espacialmente al capitalismo mercantil y al capitalismo industrial (Dieuaide, Paulré, Vercellone, 2003).

En el capitalismo industrial el conocimiento estaba caracterizado por una fuerte regulación de la producción de conocimientos y de la transferencia de tecnología a nivel de los estados nacionales. Sus rasgos centrales quedaban evidenciados por un tipo especial de relación capital trabajo, donde se evidenciaba una separación mas o menos estricta entre trabajo manual y trabajo intelectual, y por la incorporación del saber de dos maneras, por medio del trabajo vivo-determinado a su vez por el nivel general de la formación de la fuerza de trabajo, por un lado, y a través del capital fijo o como bienes inmateriales bajo la forma de investigación y desarrollo, por el otro. (Lebert y Vercellone, 2006:22-23). Como señalaba Marx, la productividad pasaba por una dimensión puramente cuantitativa asociada a la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario como norma de creación del valor. El desarrollo del capitalismo industrial iba de la mano de la expropiación progresiva del saber obrero y de su incorporación en un sistema de producción cada vez más complejo. En la fase de ejecución el trabajo intelectual tenía cada vez menos lugar y se procuraba mensurar y codificar el conocimiento, que se concentraba entre los encargados de la concepción del trabajo y no en sus realizadores. Existía, por cierto, una cooperación mutua y secuencial en el proceso de producción, sin las cuales este era imposible, lo que daba cuenta de lo que Marx denominaba “subsunción real”. Pero si bien esto daba cuenta del carácter de la explotación del trabajo, la producción de conocimiento pasaba por fuera del trabajo colectivo propiamente dicho y se fundaba en la investigación tanto básica como aplicada, la primera ligada a la educación superior universitaria y la segunda a los centros de investigación y desarrollo de las grandes empresas. La regulación de la propiedad intelectual otorgaba el monopolio parcial de los derechos sobre las inven-

ciones si estas representaban una novedad y tenían una aplicación práctica a nivel de la industria (Lebert y Vercellone, 2006:23-28).

Estas características se van a ver alteradas por una serie de factores que se hicieron sentir fuertemente desde finales de la década de los años sesenta, a saber, el rechazo a la organización científica del trabajo, la expansión de los servicios del Estado de Bienestar para reducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo e invertir las caídas de las tasas de ganancias y, fundamentalmente, dice Vercellone, por la constitución de una “intelectualidad difusa” como resultado de la democratización de la enseñanza y de la elevación del nivel general de la formación (Vercellone, 1999 y 2006a). Vercellone destaca que, contrariamente a lo que suele señalarse, no son las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) las que permiten este pasaje sino la “producción colectiva del hombre por el hombre” lo que produce la amplificación del rol del saber en la economía. Contra las tesis que sostienen la idea del “fin del trabajo” y de su rol central en el proceso de creación de riqueza Vercellone subraya que “la transformación consiste sobre todo en un cambio paradigmático de la noción de trabajo productivo, donde el *saber social general* se presenta como *fuerza productiva inmediata*” (La traducción es nuestra) (Vercellone, 2006b:197) El trabajo vivo produce ya no solamente a partir de la mediación de la máquina sino también en tanto relación social que encarna un saber que no necesita de la dirección del capital para ser efectiva. Todo esto permite hablar de una transición desde el capitalismo industrial hacia un capitalismo cognitivo.

En el capitalismo cognitivo, el predominio del trabajo inmaterial o intelectual rompe con la estricta separación entre trabajo manual e intelectual, lo que implica un pasaje de la prescripción de la cooperación mutua del taylorismo a la cooperación comunicante y a la gestión del saber, así como también cierta “prescripción de la subjetividad”. El lugar central del saber genera un nuevo régimen “de innovación permanente” que reconoce una división cognitiva del trabajo que depende de la naturaleza del bloque de saberes que son movilizados en el proceso de producción. El crecimiento de la competitividad estructural de un territorio dependerá, según Vercellone, de su “capacidad de movilizar en forma cooperativa el potencial del trabajo intelectual presente en la sociedad” (La traducción es nuestra) (Vercellone, 2006b:197) El reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual justamente desconoce las lógicas sobre las cuales el saber cooperativo se incrementa y daría lugar a las primeras contradicciones en el marco del capitalismo cognitivo al limitar los alcances de la potencia de la nueva intelectualidad difusa de la cual depende crecientemente el desarrollo económico.

Precisamente por esto, las políticas de desarrollo, dice Vercellone, deberían acomodarse a los tiempos del capitalismo cognitivo, donde la economía se basa en la difusión del saber y la producción de conocimiento se transforma en la principal forma de valorización del capital: Los denominados países en desarrollo han tendido a importar “con la idea de desarrollo, el conjunto de categorías que conciernen a la riqueza, las necesidades, la productividad, la relación con la naturaleza y los saberes elaborados por la economía política en Occidente en el marco específico del capitalismo industrial.” (Vercellone, C., 2004:64). Según Vercellone, no se toma nota de los cambios ocurridos a nivel del capitalismo

global en el siglo XXI si el concepto de desarrollo se sigue confundiendo con el de crecimiento industrial.

Trabajo vivo, creación de conocimiento y valor

Como podemos ver, el capitalismo en esta nueva etapa se trata no sólo de una economía basada en el conocimiento sino sobre todo de una organización económica enraizada en las leyes de la acumulación del capital, donde se enfatiza la nueva naturaleza de la conflictiva relación capital-trabajo. (Vercellone C., 2006a). Vercellone recupera el trabajo de Marx a partir de su crítica a la división del trabajo más que a partir de sus teorizaciones sobre las leyes de la competencia, o de las tendencias implícitas en la acumulación del capital. Vercellone remite a la distinción planteada en las *Teorías de la Plusvalía* y en el Capítulo VI inédito sobre la “subsunción formal” y la “subsunción real” en el capitalismo. En este sentido, Vercellone se diferencia de otros autores del marxismo postobrerista como Negri y Virno ya que para él, el análisis del progreso técnico como expresión de relaciones de fuerzas concernientes al conocimiento esta presente en *toda* la obra de Marx, y no sólo “especialmente” en los Grundrisse: “...El análisis del progreso técnico como expresión de una relación de fuerza concerniente al saber está omnipresente en la obra de Marx y permite una lectura alternativa de algunos aspectos cruciales de su pensamiento” (Vercellone, 2006a: 42).

Para Virno, Marx subestima la potencia del trabajo vivo al reducir el *general intellect* al saber objetivado en las máquinas: “Marx concibe el “intelecto general” como capacidad científica objetivada, como sistema de máquinas. Este aspecto es importante, pero no es suficiente. Habría que considerar el aspecto por el cual el intelecto general, más que encarnarse (o mejor, *aferrarse*) al sistema de máquinas, existe como atributo del trabajo vivo. El General Intellect se presenta hoy antes que nada como comunicación, abstracción, autorreflexión de sujetos vivos”. (Virno, 2003:64). Más aún, señala Virno, parece necesario que el General Intellect no se cristalice como capital fijo y sea identificado con capacidad comunicativa de los individuos, o en sus propios términos: “...no coagule en capital fijo, sino que se derramen en la interacción comunicativa en forma de paradigmas epistémicos, performances dialógicas, juegos lingüísticos”, (Virno, 2003:64-65). Precisamente en esto, señala Virno, consiste la “cooperación” en Marx. Pero para Vercellone Marx pone en el centro de su análisis la posibilidad de desarrollo de un sector libre y socializado de educación para la formación de una “intelectualidad difusa”, esto es, la posibilidad de un conflicto alrededor del control de los poderes intelectuales de la producción. Precisamente porque pone acento sobre la relación entre conocimiento y poder que estructura la evolución de la división técnica y social del trabajo, dice Vercellone, la obra de Marx constituye una de las primeras críticas a la idea de división del trabajo de Adam Smith. La polarización del saber y la escisión entre competencias manuales e intelectuales no son consideradas una consecuencia necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas. El capital “endogeneiza” el progreso técnico subordinando el proceso de trabajo -la producción de valores de uso- al proceso de valorización-producción de valor de cambio y medio de

extracción del plusvalor. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia aplicada la producción funciona en paralelo con la expropiación de conocimientos de los trabajadores. (Vercellone C., 2006a: 41).

Para Vercellone la dinámica conflictiva saber/poder ocupa un lugar central en la explicación de la tendencia al aumento de la composición orgánica del capital, que más que conducir a una caída de la tasa de ganancia y a la sobreacumulación- como sostiene el marxismo clásico- lleva a otra forma de crisis estructural, de tipo cualitativo más que cuantitativo, consistente en “el derrocamiento de la relación de subordinación del saber vivo incorporado en la fuerza de trabajo por el saber muerto incorporado en el capital fijo.” (Vercellone, 2006a: 42). Dicha tendencia podría denominarse, según Vercellone como una “caída tendencial del control del capital sobre la división del trabajo”.

Esta tendencia está presente en toda la obra de Marx, aunque especialmente en el *Fragmento sobre las máquinas* de los *Grundrisse*. Allí señala como el trabajo intelectual y científico se vuelve dominante y el saber deviene la principal fuerza productiva, dando lugar a “un siglo XXI post-smithiano”. Vercellone defiende una periodización del capitalismo que recupera los conceptos clásicos de “subsunción formal” y “subsunción real” del *Capítulo VI inédito* de *El capital* y los vincula con la noción de “General Intellect” de los *Grundrisse*: “Las nociones de subsunción formal, subsunción real y General Intellect son utilizadas por Marx para calificar, en una larga sucesión lógico-histórica, los mecanismos de subordinación del proceso de trabajo de parte del capital (y del tipo de conflicto y de crisis que genera) profundamente diversa” (Vercellone, 2006a: 43).

En la etapa de la “subsunción formal”, la forma en que el capital subordina a la división del trabajo se distingue “sólo formalmente” de los modos de producción anteriores. El capital somete por medio de relaciones monetarias o mercantiles a un proceso de trabajo preexistente y los mecanismos de cooperación entre los trabajadores no requieren los mecanismos de dirección capitalista, como por ejemplo en el *putting out system*. La contradicción entre la dependencia monetaria en la esfera de la circulación y la autonomía en la esfera de la producción genera las condiciones para la de-socialización de la economía (cercamientos, leyes de pobres, etc.) descrita por Karl Polanyi entre la transición del feudalismo al capitalismo y la Primera Revolución Industrial. Vercellone retoma las enseñanzas de Fernand Braudel y sus seguidores, como Giovanni Arrighi, para relacionar sus análisis teóricos con los ciclos de larga duración del capitalismo. En esencia, el capitalismo precede y va más allá de la revolución industrial y por lo tanto, del capitalismo industrial.

Con la Primera Revolución industrial aparece la “subsunción real” del trabajo al capital, que se basa en una serie de tendencias como la separación del trabajo manual del intelectual, la polarización del saber y la parcelación del trabajo que determina la organización del trabajo propia del capitalismo industrial. (Vercellone, 2006a: 47). Todo ello se apoya sobre la norma social que hace del trabajo inmediato la principal unidad de medida y la fuente de la riqueza derivada de la fuerza productiva del trabajo humano. Antes de la revolución industrial la distinción entre trabajo y no trabajo era casi inexistente en un universo donde dominaba la poliaactividad o la polivalencia del individuo. El trabajo era actividad en general y no estaba medida su eficacia por el cronómetro.

Con el sistema de fábrica el tiempo de trabajo emerge como factor socialmente central, la esencia de la transformación económica y cultural del trabajo determinada por la revolución industrial, que deviene cada vez más abstracto, como señalaba Negri en *Marx más allá de Marx*. La subsunción se vuelve real cuando se impone al interior del proceso de producción, no sólo exteriormente, tanto a nivel de la división técnica, endogeneizando la exigencia de control de la fuerza de trabajo, como de la división social del trabajo, a través de la generalización de relación salarial y de valor de cambio y de la determinación de las condiciones de existencia del asalariado. La democratización de la enseñanza y la difusión del saber puso en crisis la primera dimensión de la subsunción real. Leer la estructura del capital en un momento dado entre la primera revolución industrial y el fordismo significa para Vercellone reconstruir la lucha incesante de los asalariados por reapropiarse del saber y la emancipación de la constrictión económica de la relación salarial. (Vercellone, 2006a: 47-48)

La preeminencia del "General Intellect" significa para Vercellone la superación de la subsunción real del trabajo al capital. La crítica de la división del trabajo se encuentra presente en toda la obra de Marx por más que en el Libro I de *El Capital*, cuando se analiza el pasaje de la *cooperación simple*, la *manufactura* y la *gran industria*, ponga el acento más en la anarquía del mercado que en los conflictos generados por la división del trabajo¹. Vercellone destaca que Marx subraya en este Libro I la lucha por la reducción de la jornada legal de trabajo está ligada a una lucha más general por la socialización del acceso al conocimiento, que es diametralmente opuesta a la dinámica de la subsunción real. Vercellone afirma que en este sentido es legítimo pensar que para Marx el desarrollo de una escolarización de masas podría haber permitido a los asalariados acumular un saber tecnológico teórico y práctico adecuado al nivel de la división del trabajo y al mismo tiempo, emprender su superación. El Estado ha provisto la educación pública en el siglo XX no sólo para socializar parte del costo de reproducción de la fuerza de trabajo sino en respuesta a esta dinámica conflictiva. Según Vercellone la educación de masas y el desarrollo de una intelectualidad difusa pusieron en el centro de la crisis del fordismo al sistema educativo y fue un elemento esencial de la hipótesis de Marx sobre el General Intellect. (Vercellone, 2006a: 50).²

Si bien en los *Grundrisse* Marx anuncia el advenimiento de una economía fundada sobre la difusión y el rol motor del saber señala que la subsunción real reduce el trabajo del obrero en una "simple abstracción de actividad". La lógica de la subsunción real podía, sin embargo, haber creado las condiciones para una reapropiación colectiva del saber en la medida que el trabajo vivo pueda reconvertir parte del plusvalor en tiempo libre. La reducción del tiempo directo de trabajo necesario para la producción puede permitir la liberación de tiempo libre, condición fundamental para un trabajo emancipado. Para Vercellone eso

¹ Vercellone resalta que incluso en *La Ideología Alemana* se señalaba al comunismo como un proceso histórico tendiente a la supresión de la división del trabajo.

² Vercellone señala que Marx en *Teorías sobre la plusvalía*, selección de capítulos escrita entre 1859 y 1863, poco después de los *Grundrisse (1850-1859)*, le dedica a Hodgkin un comentario que puede ser pensado como un apoyo al sentido y al rol del General Intellect esbozado previamente.

depende del grado de socialización de la enseñanza, que favorezca la metamorfosis del trabajo parcelizado del fordismo por el trabajo inmaterial y polivalente, y que tiene su inicio con la nueva fase de la división del trabajo donde el saber social general, el conocimiento, se ha transformado en fuerza productiva inmediata, poniendo en crisis la relación de dominio del trabajo muerto sobre el trabajo vivo. (Vercellone, 2006a: 51-52). El predominio del General Intellect y la división cognitiva del trabajo darían lugar, justamente, a la superación de la etapa de la subsunción real propia del capitalismo industrial.

Sobre la crisis de la ley del valor y devenir renta de la ganancia

Todo esto tiene como consecuencia principal la crisis de la ley del valor, fundada sobre la medida del tiempo de trabajo inmediato más que en el trabajo en tanto expresión del saber social general, de un *valor saber* donde el principal capital fijo es el hombre, donde reside el saber acumulado de la sociedad y donde la tradicional oposición entre trabajo y no trabajo pierde fundamento. Esto es una fuente de contradicciones al interior del capitalismo cognitivo en la medida que el capital intenta mantener la vigencia de la ley del valor de manera forzosa. Sin embargo, para ello ya no puede echar mano de una profundización de la lógica smithiana de la división del trabajo, que opone concepción a ejecución, porque este tipo de expropiación no puede efectuarse sino “al precio de una disminución del nivel general de formación de la mano de obra, nivel que es reconocido como la fuente de riqueza de las naciones y de la competitividad de la empresa” (Vercellone, 2006a: 55). Es por ello que el capital, para dar respuesta a este problema recurre a nuevos métodos, como las distintas formas de precarización del trabajo, que permiten mantener el control de una fuerza de trabajo potencialmente autónoma: “El capital no sólo ha devenido de nuevo dependiente del saber de los asalariados sino que debe obtener una movilización e implicación activa del conjunto de los conocimientos y tiempos de vida de dichos asalariados. La prescripción de la subjetividad, con el objeto de lograr la interiorización de los objetivos de la empresa, la presión del cliente, pero también -y sobre todo- la constricción pura y simple ligada a la precariedad, son las principales vías halladas por el capital para intentar responder a este problema inédito, procurando asegurar el control de una fuerza de trabajo cada vez más autónoma respecto a él mismo” (Vercellone, 2009: 85).

Vercellone reconoce el carácter social y colectivo del progreso técnico que permite el pasaje a una nueva división del trabajo y no de los análisis que lo derivan de algún tipo de determinismo tecnológico. El conocimiento no es ningún tipo de capital, como en las teorías el Capital Humano ni es un factor de producción suplementario además del capital y el trabajo, como asume por ejemplo Rullani: “La oposición tradicional trabajo muerto/trabajo vivo, propia del capitalismo industrial, cede el paso a una nueva forma de antagonismo, aquella entre el saber muerto del capital y el “saber vivo” del trabajo” (Vercellone, 2006a: 55)

En su intento por mantener la vigencia de la lógica del capitalismo industrial el capital sólo puede recurrir a la proliferación de derechos de propiedad intelectual

tual que, al tiempo que reportan beneficios para el capital al corto plazo, bloquean la propia potencia del saber y la fuente última de las ganancias. El agotamiento de la ley del valor como criterio para hacer del trabajo abstracto el instrumento de control sobre el trabajo y de los incrementos de productividad que caracterizaban al capitalismo industrial y la dimensión cognitiva del trabajo muestran que tanto los beneficios, como las rentas, se basan en mecanismos de apropiación del valor exteriores a la organización de la producción y que remiten a la sociedad toda.

Esto viene acompañado del auge de la renta como dimensión fundamental del análisis del capitalismo actual. No sólo en función del auge del capital financiero en tanto que capital ficticio sino también como indicador de la crisis de la ley del valor en el capitalismo industrial. La determinación del valor se apoyaba en una supuesta correspondencia entre valores y precios cuya pertinencia fue criticada por Negri desde 1978. Vercellone no sólo suscribe a esta idea de la crisis de la ley del valor sino que rastrea la génesis del concepto de renta capitalista y encuentra que incluso la ganancia capitalista ha adoptado la forma de la renta. En la etapa actual, la imposibilidad de determinar salarios, beneficios y rentas, los componentes del valor de la economía política clásica, o más bien la confusión entre estas categorías, se superpone con la proliferación de diferentes formas de renta, en tanto derecho a la apropiación del valor creado afuera de la producción propiamente dicha.

Vercellone señala que en el libro III de *El Capital*, Marx esboza una teoría del devenir renta de la ganancia, que se relaciona con la mencionada hipótesis del General Intellect. En la economía política, salarios, beneficios y rentas son las tres grandes categorías de la distribución del producto social propias del capitalismo que, al igual que éste, dice Vercellone, tienen un carácter histórico y por lo tanto evolucionan a lo largo del tiempo. Es así como el salario pasó de ser entendido como la retribución al trabajador equivalente al tiempo de trabajo socialmente necesario presente en sus medios de subsistencia, más el trabajo excedente o plusvalor a ser pensado como la apropiación gratuita por parte del capital, no sólo de este exceso sino “del *surplus* generado por la cooperación social del trabajo” que “ya no se encuentra aprisionada dentro de la fábrica sino que se extiende al conjunto de la sociedad.” (Vercellone C., 2009: 72). En relación a las otras dos categorías, según Vercellone, en el capitalismo industrial podemos encontrar una oposición clara entre la renta y la ganancia. Tradicionalmente, al menos desde Ricardo en adelante, la renta es considerada una herencia precapitalista y un obstáculo a la acumulación del capital. Según la Economía Política, un capitalismo “genuino” debería ser un capitalismo “sin renta”, que se opone a la categoría de ganancia, verdadero acicate de la acumulación del capital. Sin embargo, destaca Vercellone, en el capitalismo cognitivo asistimos cada vez más a una vocación rentista no sólo por la hegemonía parasitaria del capital financiero sino en el propio capital “productivo” o industrial.

La ganancia es la remuneración del capital, que suele ser proporcional a la masa de capitales invertidos y que tiene como fuente en última instancia a la plusvalía generada por los asalariados. La ganancia aparentemente³ cumpliría

³ Señala Vercellone: “En el capitalismo industrial y de la subsunción real del proceso de

una función positiva en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la acumulación de capital. La renta, en cambio, no cumple ninguna función en el proceso de producción pero sin embargo da derecho a una porción del valor desde una posición de exterioridad. El capitalista industrial aparece como una figura opuesta a la del rentista en la medida que está implicado directamente en una relación de producción. Sin embargo, esto cambia en el capitalismo cognitivo, donde el capital extrae plusvalor sin cumplir ninguna función productiva directa. Vercellone analiza esto en función de los desarrollos de Marx sobre la renta en el tomo III de *El Capital*, donde considera el devenir renta de la ganancia, y la tesis del General Intellect. En *El capital* Marx diferencia el “interés” derivado de la propiedad del capital de la “ganancia”, en tanto se trata de una remuneración por la “gestión” o actividad directiva del empresario sobre la organización del trabajo⁴. Mientras el interés tiene un carácter pasivo la ganancia tiene un carácter activo (aunque dicha función luego será representado más acabadamente en el capitalismo industrial por la figura de los gerentes que por la del propio capitalista). En el capitalismo cognitivo aun las funciones gerenciales devienen superfluas a partir de una cooperación autónoma respecto del capital que surge a partir de la intelectualidad difusa: “En definitiva, la ganancia surge de una simple apropiación de trabajo gratuito operada, como en la renta, sin desempeñar alguna función real en el proceso de producción” (Vercellone, 2009: 80) Hoy asistimos a una confusión de la renta con la ganancia así como una proliferación de distintas formas de renta. La ganancia, por lo tanto, puede considerarse una renta “tanto como lo es la remuneración de la tierra, puesto que el propietario del capital puede perfectamente proveer los medios de producción sin ponerse él mismo a trabajar” (Vercellone, 2009: 75)

En el capitalismo cognitivo el antagonismo entre capital y trabajo adquiere cada vez más la forma de un antagonismo entre las instituciones de lo común, esto es, sobre la educación, la salud, la seguridad social, la investigación científica, y todos los elementos que permiten la existencia de esa intelectualidad difusa sobre la que se apoya la economía fundada en el conocimiento. Mientras tanto el capital se despliega bajo la forma de renta, sean éstas financieras, tecnológicas o inmobiliarias, parasitando toda la riqueza generada por el General Intellect.

trabajo en el capital ha sido, precisamente, la capacidad de garantizar simultáneamente esas dos funciones lo que hacía del capitalista, según Marx, un agente de la producción, dando al mando del capital sobre la cooperación del trabajo la apariencia de una condición objetiva y necesaria de la dirección del proceso de trabajo. Por este motivo, la ganancia podía aparecer como una categoría de la distribución dentro del proceso de producción, contrariamente a la renta, que era considerada una pura relación de distribución”. (Vercellone, 2009:76-77)

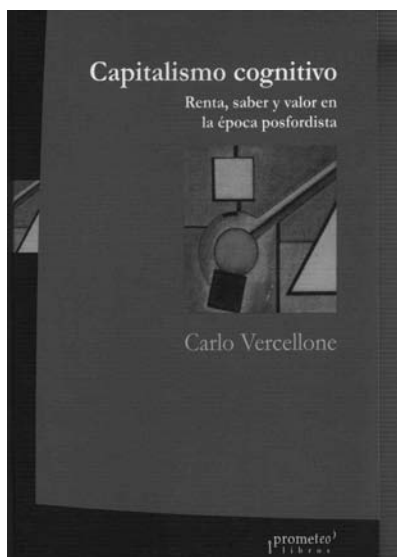
⁴ La difusión de la renta financiera desde finales del siglo XIX con el auge de las sociedades por acciones encuentra un *impasse* en el período keynesiano 1930-1978 donde la distribución se centra en los salarios y beneficios, que eran determinables según los acuerdos institucionales de la negociación colectiva.

La no neutralidad del conocimiento y las opciones alternativas en una economía basada en el saber

En suma, la presente es una crisis de carácter estructural entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción en el seno del capitalismo cognitivo, entre los bloqueos desplegados por el capital en su intento de capturar rentas de todo tipo con las condiciones necesarias para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. El papel motor de la economía no está en manos de los laboratorios privados de investigación y desarrollo sino en “las producciones colectivas *del hombre y para el hombre*, aseguradas tradicionalmente por las instituciones comunes del *welfare state* según una lógica no mercantil” (Vercellone, 2009: 91). Ante la estrategia neoliberal de privatización y expropiación rentista de lo común Vercellone propone la reapropiación democrática de las instituciones del welfare y “*un modelo alternativo de desarrollo basado en la centralidad de las producciones del hombre por el hombre*” (Vercellone, 2009: 92) y, en términos políticos inmediatos a nivel europeo, una resocialización de la moneda que la ponga al servicio de la expansión de lo común a través de un Ingreso Social Garantizado Universal. Esta propuesta es coherente con la necesidad de repensar la noción de trabajo productivo, en la medida que éste pueda, al desdibujarse las fronteras entre trabajo y no trabajo, producir riqueza y por lo tanto permitir un ingreso. (Vercellone, 2009: 97).

Vercellone señala que el capitalismo ya no puede, retomando a André Gorz, “extraer beneficios de sus potencialidades sino a condición de rebasarse a otra forma económica” (Gorz, 2003: 84), en función de la crisis de la ley del valor y de la tesis del devenir renta de la ganancia. Para Vercellone la referencia a Gorz -tanto por sus interpretaciones tempranas sobre la automatización y la crisis de la relación salarial así como por el desarrollo de la división del trabajo como una relación de saber y poder- es ineludible en el desarrollo de la hipótesis del capitalismo cognitivo. (Vercellone, 2008)

Nos parece que el aporte de Carlo Vercellone para interpretar las consecuencias del desarrollo del capitalismo cognitivo es interesante en numerosos sentidos. En primer lugar inscribe las nuevas características del capitalismo en el marco de las transformaciones de los procesos de trabajo, sin olvidar que es éste quien en última instancia es el generador de valor y riqueza en las sociedades capitalistas. En segundo lugar, porque rescata la obra de



Marx de manera integral y sin caer en un reduccionismo economicista ni sociológico, recuperando conceptos centrales como los de “plusvalor” y “composición orgánica del capital” pero *aggiornandolos* a los tiempos de la economía actual. Su referencia a los clásicos de la economía política no pretende forzar los conceptos y argumentos clásicos para que encuadren con la compleja realidad del siglo XXI sino a tratar de ver cómo estas enormes transformaciones pueden ser mejor comprendidas desde una mirada que no pierda de perspectiva el carácter social e histórico del capitalismo. En tercer lugar, su aporte se inscribe en el marco de una teorización que considera la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pero sin caer en el determinismo tecnológico propio de los enfoques económicos y sociales que se ocupan del cambio tecnológico. Finalmente, porque su trabajo académico es inseparable de su compromiso político por una transformación de la sociedad en un sentido superador de las relaciones sociales que caracterizan el capitalismo de hoy y de siempre.

Pablo Míguez

Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
pablofmiguez@yahoo.com.ar

Bibliografía

- Lebert, D., Vercellone, C. (2006), Il ruolo della conoscenza nella dinamica di lungo periodo del capitalismo, in Vercellone, C. (dir), *Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell'epoca postfordista*, Roma, Manifestolibri, pp. 19-37.
- Vercellone, C. (2004), “Las políticas de desarrollo en tiempos del capitalismo cognitivo” en Corsani, A.; Moulier Boutang, Y.; Lazzarato, M. y otros (2004): *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*, Traficantes de Sueños, Madrid, pp. 63-70.
- Vercellone, C. (2006a), Elementi per una lettura marxiana dell'ipotesi del capitalismo cognitivo, in Vercellone, C. (dir), *Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell'epoca postfordista*, Roma, Manifestolibri, pp.39-58.
- Vercellone, C. (2006b), Mutazione del concetto di lavoro produttivo e nuove norme di distribuzione, in Vercellone C. (dir), *Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell'epoca postfordista*, Roma, Manifestolibri, pp. 189-208.
- Vercellone, C. (2008): La thèse du capitalisme cognitif: une mise en perspective historique et théorique in Colletis et Paulré (coord.): *Les nouveaux horizons du capitalisme. Pouvoirs, valeurs temps*, Économica, Paris, pp. 71-95.
- Vercellone, C. (2008): “L'analyse “gorzienne” de l'évolution du capitalisme” en Fourel, Christophe (2008): *André Gorz. Un penseur pour le XXI siècle*, La Découverte, Paris
- Vercellone, C. (2009): “Crisis de la ley del valor y devenir renta de la ganancia. Apuntes sobre la crisis sistémica del capitalismo cognitivo”, en *La gran crisis de la economía global*, Edición Traficantes de Sueños, Madrid, pp. 63-98.
- Virno, Paolo (2003): *Gramática de la multitud*, Ed. Colihue, Buenos Aires.



Instituto
Argentino para
el Desarrollo
Económico

actividades realizadas

1. Reuniones semanales de Análisis de Coyuntura, organizadas por el Grupo de Estudios del IADE

2. Actividades conjuntas APYME-IADE

Charlas -debate

1° DE MARZO DE 2012

Argentina frente a la crisis mundial

Juan Carlos Amigo

Economista de APYME. Director de Realidad Económica.

29 DE MARZO DE 2012

Hacia dónde va el gobierno

Horacio Rovelli

Asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Miembro del Consejo Directivo del IADE.

31 DE MAYO DE 2012

Experiencias de desarrollo de las PYMES

Rubén Bozgo

Docente de la Universidad Nacional de Luján. Ex Director Ejecutivo de Fundación Banco Credicoop

28 DE JUNIO DE 2012

¿Tiene importancia el dólar para las PYMES?

Sergio Carpenter.

Lic. en Economía. Presidente del IADE

José María Cardo

Lic. en Economía. Secretario del IADE

26 DE JULIO DE 2012

Reflexiones sobre el Régimen Tributario Argentino

Julio Jardel

Contador público. Integrante de "Afirmación Profesional" lista de docentes y graduados (FCE-UBA)

Enrique Jardel

Contador Público. Consultor de Pymes. Miembro del Consejo Directivo del IADE

3. Actividades de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios "Ing. Horacio Giberti"

coorganizadas entre la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil,
Departamento de Geografía e Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras
UBA - Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" - IADE

18 DE ABRIL DE 2012

*Mesa-Debate***Cooperativismo agrario**Panelistas: *Mario Lattuada - Carlos César Basañes*Coordinadora: *Edith Scheinkerman de Obschatko*

16 DE MAYO DE 2012

*Mesa - Debate***Problemática actual y perspectivas del trabajo rural**Panelistas *Alejandro Senyuk - Orlando Uviedo*Coordinador *Guillermo Neiman*

27 DE JUNIO DE 2012

*Segunda Jornada-Debate***La problemática agraria en la Argentina. La crisis mundial y su impacto en el agro argentino***Mesa debate***Crisis internacional actual y repercusiones en el sector agropecuario mundial**Panelistas: *Atilio Borón - Julio Sevares*Coordinador: *Carlos León**Mesa debate***Tendencias productivas del agro global y local y el rol de las políticas públicas**Panelistas: *Ernesto Liboreiro - José Pierrri.*Coordinador *Daniel Slutzky***Exposición de cierre***Alejandro Rofman**Presidente Honorario del LADE. Investigador del CONICET. Economista del Plan Fénix y**Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos*

11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

*Mesa redonda***A cien años del Grito de Alcorta. Trascendencia y proyección de la histórica huelga chacarera**Panelistas: *Eduardo Azcuy Ameghino -**Daniel Martinelli - Juan Antonio Pivetta*Coordinadora: *Cristina Begnis*

15 DE NOVIEMBRE DE 2012

*Presentación libro digital***Estructura social agraria y agroindustrial del nordeste de la Argentina**Autor: **Lic. Daniel Slutzky**Comentaristas: *Mg. Silvia Gorenstein y Lic. Pedro Castillo***4. Actividad coorganizada entre el Departamento de Geografía e Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras UBA - Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" - IADE**

31 DE OCTUBRE DE 2012

*Mesa debate***Hacia una política integral de suelo y vivienda**

Panelistas: *Valeria Mutuberría Lazarini -
María Florencia Rodríguez - Luis Baer - Juan Duarte*
 Coordinadores: *Flora Losada – Luis Domínguez Roca*

**5. Charlas - debate mensuales sobre
coyuntura económica en diversas entidades sociales****6. Invitados del exterior**

18 DE SEPTIEMBRE DE 2012

*Charla***Una visión del Chile de hoy**

Juan Carlos Arriagada
 Coordinador de Solidaridad y de la Brigada Memoria Popular,
 presidente de la ONG Espacio y fomento de Chile.

3 DE OCTUBRE DE 2012

*Charla***Genealogía de la arquitectura financiera
internacional 1850-2000**

Oscar Ugarteche
 Economista peruano residente en México
 Investigador principal del Instituto de Investigaciones Económicas
 de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y presidente de ALAI.

8. Participación en

12, 13, 14 y 15 DE JUNIO DE 2012

**I Congreso Latinoamericano de Ecología Urbana. “Desafíos
y escenarios de desarrollo para las ciudades latinoameri-
canas”. I Curso Internacional de Ecología Urbana**

23, 24 y 25 DE AGOSTO DE 2012

**V Jornadas de Economía Crítica “La crisis Global como cri-
sis del pensamiento económico”.**

4, 5 y 6 DE OCTUBRE DE 2012

**VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos
Humanos. “Argentina y América latina. Dilemas de una
nueva etapa económica, política y social.”**

25 y 26 DE OCTUBRE DE 2012

**XIII Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales
del Plan Fénix . VI Jornadas Nacionales de Investigadores
en Economías Regionales. “Economía Social y Solidaria:
Experiencias, saberes y prácticas”**

Canto I

El agua fue el origen;
mares y vientos emplearon sus manos
para ceñir nuestro destino.
Somos de carne líquida, somos arroyos
tormentosos y calmos,
somos el curso por donde navegan
proas de muchos dioses
Estamos hechos de algas escurridizas, de lluvias guarecidas por los
poros, de un salobre clamor,
de playas solitarias y remotas.
Somos la continuidad de la tormenta,
la furia de aquel rayo que se volvió un anfibio,
la ola mayor, el cielo en su quejumbre,
y siglos que tuvieron que secarse
para llegar aquí,
donde tú y yo, sudorosos y hambrientos,
soltamos agua con sabor a ternura,
un documento que habla por sí mismo
y es la infinita construcción del mundo
en un abrazo.

Roberto Díaz

Roberto Díaz nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 23 de julio de 1938. Escritor, poeta, periodista, traductor de habla inglesa y autor de canciones, fue subdirector del diario *La Ciudad* de Avellaneda hasta el año 2003, columnista del diario *La Capital* de Mar del Plata y de *Prensa Libre* de San José de Costa Rica. Fue premiado en varias oportunidades: Primer Premio del concurso "Carabela de oro" en Barcelona, España; Premio Internacional de prensa "Rigoberto Cabezas" en San José de Costa Rica; menciones especiales de los Premios Municipal y Nacional de Poesía y Premio al Mejor Columnista en temas de interés general en 1998 por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Como autor de canciones ha obtenido el premio "Carlos Gardel" otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; el Primer Premio de letras de Tango "De Boedo al mundo", de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo; el Tercer Premio en el Certamen de la Canción de SADAIC y el Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes en el género "Milonga". Sus temas han sido grabados, entre otros intérpretes por Roberto Goyeneche, Néstor Fabián, Reynaldo Martín, Carlos Rossi, Raúl Lavié y el Mexicano Oscar Chávez. En el año 2005 fue nominado al Premio "Reina Sofía" en España por su trayectoria poética. En 2010 recibió el premio "Santa Clara de Asís" por su carrera profesional dentro del periodismo y el premio "Sur" a su trayectoria literaria. Su ciudad natal, Avellaneda, lo nombró "vecino distinguido" y la Legislatura porteña le confirió el título de "personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" en el año 2007. Escribió varios libros de poesía (dos de ellos editados en España), uno de crónicas periodísticas otro de historias deportivas y dos novelas *Un hurón en las calles* (2010) y *El muerto que vos matas* (2011). Tradujo numerosos volúmenes en el país y en España, y entre sus últimos trabajos para ediciones Andrómeda figura la edición de Poemas de H.P. Lovecraft y los Sonetos de William Shakespeare.